

Acción Nacional

El apetito y las responsabilidades del triunfo

Soledad Loaeza



EL COLEGIO DE MÉXICO

ACCIÓN NACIONAL,
EL APETITO Y LAS
RESPONSABILIDADES DEL TRIUNFO

ACCIÓN NACIONAL,
EL APETITO Y LAS
RESPONSABILIDADES DEL TRIUNFO

Soledad Loaeza



EL COLEGIO DE MÉXICO

324.272

L7958a

Loaeza, Soledad, 1950-

Acción Nacional : el apetito y las responsabilidades del triunfo / Soledad Loaeza -- 1a. ed. -- México, D.F. : El Colegio de México, Centro de Estudios Internacionales, 2010.

308 p. ; 22 cm

ISBN 978-607-462-077-1

1. Partido Acción Nacional (México) -- Historia. 2. Partidos políticos -- México. 3. Cultura política -- México. 4. Democracia -- México. I. t.

Open access edition funded by the National Endowment for the Humanities/Andrew W. Mellon Foundation Humanities Open Book Program.



The text of this book is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

Primera edición, 2010

DR © EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C.

Camino al Ajusco 20
Pedregal de Santa Teresa
10740 México, D.F.
www.colmex.mx

ISBN 978-607-462-077-1

Impreso en México

ÍNDICE GENERAL

A TÍTULO PERSONAL	9
PRÓLOGO	13
I. EL FIN DEL CONSENSO AUTORITARIO Y LA FORMACIÓN DE UNA DERECHA SECULARIZADA	17
II. EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: LA OPOSICIÓN LEAL EN MÉXICO	53
III. LA DEMOCRACIA CRISTIANA Y LA MODERNIZACIÓN DEL PARTIDO, 1957-1965	85
IV. LA INCERTIDUMBRE EN LA TRANSICIÓN: EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA AVERSIÓN AL RIESGO	125
V. EN LA ANTESALA DEL PODER: 1994-2000	157
VI. LOS COSTOS DEL TRIUNFO, 2000-2006	197
VII. EL ESTILO PERSONAL DE VICENTE FOX Y LOS LÍMITES DE LA AUTORIDAD PRESIDENCIAL	243
VIII. EL SURGIMIENTO DE UN ELECTORADO DE DERECHA	279
IX. LA DERROTA A MEDIO CAMINO: LAS ELECCIONES FEDERALES DE 2009	293

A TÍTULO PERSONAL

Este libro es una colección de artículos que, a excepción del segundo que data de 1974, han sido escritos en los diez años que han transcurrido desde que publiqué *El Partido Acción Nacional: la larga marcha, 1939-1994*. Entonces pensé que podría cerrar ese capítulo de mi trabajo profesional y mirar en otra dirección. Los cambios políticos que ha experimentado nuestro país en las últimas dos décadas generan de continuo diversos y apasionantes temas de estudio para los especialistas en ciencia política. Sin embargo, mi intención se vio derrotada por el papel que tuvo el PAN en el proceso de democratización, primero, y después, en la accidentada consolidación democrática. En la última década, el atractivo del partido como objeto de estudio aumentó: sus triunfos electorales se multiplicaron, al igual que sus posiciones en la estructura de poder; además, ganó la Presidencia de la República en dos ocasiones. Se abrieron nuevas vetas de interés para el estudio de las organizaciones partidistas y del sistema político en conjunto. Se me impuso de nuevo la curiosidad por la transformación del PAN que impulsaban las cambiantes circunstancias del país.

Además del interés profesional por entender la evolución de las instituciones políticas, tuve otras razones para dedicar mi atención a Acción Nacional. Siempre he creído que los temas de investigación tienen algo de autobiográfico: una experiencia traumática, la lectura de un texto decisivo, la influencia de un maestro. En mi caso, la curiosidad por Acción Nacional fue inicialmente provocada por Rafael Segovia: cuando era yo su estudiante a principios de los años setenta, me sugirió que analizara el PAN. Su propuesta encontró una poderosa referencia en mi historia familiar. Mi padre, Enrique M. Loaeza Garay, fue miembro del grupo fundador del partido, uno de los “jóvenes en el umbral de la vida pública”, que Gómez Morín menciona en su discurso inaugural como promotores del proyecto. El origen social, la trayectoria personal, las razones que lo llevaron ahí son típicas de

los panistas de entonces. Miembro de una familia de profesionistas de origen juarista que miró con azoro el ascenso de los revolucionarios, en 1939 mi padre era un joven abogado que trabajaba en uno de los grandes bufetes de la época, formaba una familia numerosa y todavía estaba dispuesto a dedicar parte de su tiempo a combatir el autoritarismo gubernamental. Era egresado del colegio francés Morelos y de la Escuela Libre de Derecho, y había participado en el vasconcelismo. En 1929, durante una manifestación a favor de la autonomía universitaria, en avenida Juárez, frente a lo que era el cine Regis, un “matón de Calles”—escuché contar muchas veces— lo hirió gravemente con un balazo en el pulmón derecho; mi padre estuvo a punto de perder la vida, pero, como escribe Alejandro Gómez Arias en sus memorias, “no le tocaba”.

Al igual que muchos de los universitarios que se sumaron a la causa de Gómez Morín, mi padre le profesaba una gran admiración y siempre se refirió a él como su maestro. La relación entre ambos mantuvo ese tono, fincada de origen en afinidades intelectuales que de manera obligada se tradujeron en coincidencias políticas. Los autores de preferencia de mi padre eran los mismos franceses y españoles que poblaban las bibliotecas de quienes respondieron al llamado de Gómez Morín, reunidos por una sensibilidad común: Henri Bergson, Paul Valéry, François Mauriac, Jacques Maritain, Benito Pérez Galdós, Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset; además, mi padre estaba suscrito a la *Revue des Deux Mondes*, repasaba regularmente la lectura del *Quijote*, leía con devoción a los modernistas mexicanos y reverenciaba a Ramón López Velarde.

Enrique M. Loaeza Garay llegó al PAN por la vía de la Universidad Nacional, donde empezó a impartir clases durante el rectorado de Gómez Morín; en cambio, la gran mayoría de los jóvenes panistas de entonces provenía de organizaciones católicas. De hecho, en esos años mi padre no era un hombre religioso; más bien un agnóstico cuyas creencias —o descreencias— lo distanciaban de muchos otros panistas. A mediados de 1947 abandonó sus actividades en el partido porque fue designado por el presidente Miguel Alemán, representante de México ante la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, en Mon-

treal, donde permaneció hasta 1961. En los primeros años de ausencia del país mantuvo el contacto con su maestro Gómez Morín, pero como lo revelan las cartas que intercambiaron hasta 1953, de manera inevitable la relación se enfrió. Pese a este alejamiento, crecí en un medio muy próximo al partido. En mi infancia, el dentista, el pediatra, el otorrinolaringólogo, las mejores amigas de mi mamá, mis compañeros de juego en el Club Vanguardias eran panistas o pertenecían a familias vinculadas con el partido; y los domingos electorales, los amigos nos llamaban para que ayudáramos a preparar y a repartir las tortas para los representantes del partido en las casillas de votación.

Las preferencias políticas no se transmiten genéticamente, por fortuna; y no obstante el medio social y las trayectorias paralelas que reconozco entre muchos panistas y yo misma, nunca he sido simpatizante ni miembro de ese partido. No me identifico con el antiestatismo que es su imagen de marca; tampoco comparto su conservadurismo en materia de actitudes y comportamientos sociales, y me escandalizan los intentos de imponer la autoridad de la Iglesia católica a la sociedad moderna. En cambio, respeto la experiencia del PAN en la difícil construcción de la democracia mexicana, su empecinado combate contra la hegemonía del PRI y en defensa de la pluralidad política, que adoptó muy pronto como derivado de la condición de minoría a que estuvo condenado por décadas.

Mi padre murió en 1974; de mi trabajo sobre Acción Nacional sólo conoció el artículo que incluyo en este volumen que publiqué ese año, y con el que, por cierto, estuvo en desacuerdo. Objetó la categorización del partido como una oposición leal y le irritó la insistencia en la función legitimadora del PAN. No lo discutimos más allá de su disgusto; cuando leyó el texto era un hombre cansado y enfermo, y no podía atreverme a contradecirlo. De todas formas sé que estaba contento de mi fortuito encuentro con un episodio de su pasado que vivió intensamente, como se viven las primeras experiencias de compromiso político, y cuya huella se mantuvo fresca a lo largo de su vida.

Dedico este libro a Enrique M. Loaeza Garay, con quien tengo una deuda entrañable.

PRÓLOGO

El título de este libro está inspirado en el discurso que pronunció Manuel Gómez Morín en el frontón México el 14 de septiembre de 1939. Ahí, el fundador de Acción Nacional afirmó que los organizadores del nuevo partido no tenían “el apetito de un triunfo próximo” y tampoco estaban preparados “para las responsabilidades de ese triunfo”. A setenta años de distancia y después de muchas victorias electorales, no hay duda de que el poder ha despertado el apetito de los panistas, pero todavía no parecen estar preparados para el triunfo, como si la victoria les hubiera generado más dilemas y conflictos que certezas y estabilidad, y bloqueara su capacidad para asumir las responsabilidades que acarrea. Durante los años de hegemonía del PRI, el PAN se debatía entre participar o abstenerse; el triunfo ayudó a que superara este dilema, pero las transformaciones que el poder le dictaba al partido, le plantearon nuevas interrogantes que no siempre ha sabido aceptar con naturalidad o con éxito. En los últimos diez años, los panistas parecen sumergidos en un dilema existencial que se deriva de una ambivalencia extraña para cualquier otro partido político: ambicionan un poder que les repugna, sobre todo cuando lo contrastan con la época en que la hegemonía del PRI santificaba sus intenciones y sus acciones.

Los triunfos de Acción Nacional en las últimas décadas se explican porque, contrariamente a lo que se esperarí de un partido conservador, ha mostrado una notable disposición para adaptarse a las transformaciones sociales y a la transición institucional. Los trabajos aquí reunidos se ofrecen como una recapitulación de las funciones que ha desempeñado el PAN en distintos momentos: el partido *tribunicio* de los años de la hegemonía priista, en la década de los ochenta se convirtió en el partido electorero, vehículo privilegiado de la protesta anti-autoritaria, y en los noventa era un partido *normal* con todos los privilegios y los costos que acompañan esa posición.

El volumen se inicia con un artículo inédito sobre los cambios en la cultura política que, a mi manera de ver, integraron el contexto general en el que se fue gestando el movimiento de la sociedad que en dos décadas llevó a Acción Nacional al poder, y que fue el disparador de la transición mexicana, antes que leyes y códigos electorales. A Carlos Castillo Peraza le gustaba decir que la transición había sido una victoria cultural del PAN; el partido fue uno de los participantes en ese proceso, pero sólo la convicción partidista puede sostener que su influencia fue determinante. El fin del autoritarismo priista fue resultado de la convergencia de procesos amplios como la descentralización económica, la urbanización y la modernización de las actitudes sociales. Paradójicamente, el alcance del cambio social escapa a la visión del panismo actual, a pesar de que es el fundamento de su ascenso al poder.

En ese marco de referencia general se sitúa la transformación del partido que entre 1970 y 1980 dejó de ser un factor de estabilización del autoritarismo, para convertirse en una fuerza desestabilizadora. El artículo "La oposición leal", publicado en 1974, sostiene que en los años duros de la hegemonía priista, el PAN representaba a una minoría en un sistema político que admitía la existencia de válvulas de escape que, a su vez, le permitían liberar protestas y tensiones, sin que se alteraran los equilibrios básicos. Le sigue la exploración de las relaciones entre la Democracia Cristiana y la modernización del PAN; este artículo analiza las razones de que en la coyuntura favorable de finales de los cincuenta, el partido haya pospuesto tres décadas la afiliación a una vigorosa corriente internacional, que hoy día le ofrece un apoyo considerable. Los artículos que figuran como capítulos IV, V y VI, examinan la relación entre Acción Nacional y los cambios en el sistema político durante la transición, en el periodo inmediatamente anterior a la victoria y una vez en el poder. El séptimo texto está dedicado al análisis del estilo personal del primer presidente panista, Vicente Fox, y a las consecuencias de este tipo de liderazgo sobre el partido y sobre la institución presidencial. El siguiente estudia la emergencia de un electorado de derecha, como uno de los efectos de la llegada al poder de Acción Nacional; este proceso ilustra la relación dinámica entre partido y sociedad, pues si, como se planteó antes, los cambios de

los años ochenta en el partido fueron inducidos por una sociedad moderna, a principios del siglo XXI la relación entre ambos se había invertido, de suerte que el PAN reforzaba su influencia en la sociedad con la formación de un electorado afín. El último artículo intenta explicar los resultados de la elección federal de julio de 2009. Cada artículo puede leerse por separado.

Hasta hace unos cuanto años los trabajos de investigación académica sobre el PAN eran una excepción; había muy poco aparte de la tesis de maestría de 1971 para la Universidad de Oxford de Blanca Torres sobre el partido en Yucatán, y el libro de Donald Mabry sobre el PAN como una alternativa católica, publicado dos años después. Ahora, en cambio, el número de publicaciones periodísticas, académicas e incluso de escándalo sobre el partido de Manuel Gómez Morín y de Efraín González Luna, crece día con día. Entre los autores más serios destacan Carlos Arriola, Tania Hernández Vicencio, Alonso Lujambio, Yemile Mizrahi, Abraham Nuncio y José Reveles Vázquez. En los últimos años también han aparecido numerosos artículos y documentos de trabajo sobre la experiencia del PAN en los estados: Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro. Los panistas también han enriquecido la bibliografía sobre su partido: María Elena Álvarez de Vicencio, Luis H. Álvarez, Carlos Castillo Peraza, Juan José Rodríguez Pratts, se han sumado al esfuerzo de preservar la memoria del PAN que emprendió Luis Calderón Vega en los años sesenta.

Mi trabajo sobre Acción Nacional se ha beneficiado de estas contribuciones y de la generosidad de panistas de todas las generaciones que a lo largo de muchos años han compartido conmigo su experiencia; con ellos he rebotado ideas y he discutido su visión del partido; con los más antiguos, la marginalidad del PAN, con los más recientes, su llegada al poder. Entre ellos agradezco en particular la buena disposición de María Elena Álvarez de Vicencio, Luis H. Álvarez, Francisco Barrio, Bernardo Bátiz, José Ángel Conchello, René Creel, Felipe Calderón, Diego Fernández de Cevallos, Juan Manuel Gómez Morín, Mauricio Gómez Morín, Juan Landerreche, Gustavo Madero, Pablo Emilio Madero, Germán Martínez, Eugenio Ortiz Gallegos, Rafael Preciado Hernández, Gerardo Priego, Josefina Vázquez, Raúl Velasco

Zimbrón. Carlos Castillo Peraza fue un interlocutor pródigo con sus ideas y sus juicios, siempre estimulante y apasionado. Con mis amigas Margarita Lascuráin de Murra y Elsa Rodríguez aprendí lo que han dado a su partido las panistas de a pie.

I

EL FIN DEL CONSENSO AUTORITARIO Y LA FORMACIÓN DE UNA DERECHA SECULARIZADA*

A finales del siglo xx las fuerzas políticas que la historia identificaba con el conservadurismo y la tradición se apropiaron de la bandera del cambio y llevaron a la Presidencia de la República a Vicente Fox. La imagen del Partido Acción Nacional, PAN, ha estado asociada desde su fundación en 1939 con los enemigos de la Revolución. Sin embargo, en la elección presidencial del año 2000 el candidato panista supo captar el descontento de quienes veían el Partido Revolucionario Institucional, PRI, como un anacronismo en un mundo donde los regímenes autoritarios habían sido arrollados por una amplia ola democratizadora.

Más que un reacomodo de fuerzas políticas, el triunfo del PAN en 2000 es el resultado de una profunda transformación de la cultura política mexicana que fue pilar del consenso autoritario durante la mayor parte del siglo. Esa cultura empezó a formarse desde el triunfo de los liberales en el siglo XIX, se nutrió de la experiencia revolucionaria, del nacionalismo del xx y de la hegemonía del PRI. No obstante, a partir de los años sesenta enfrentó serios desafíos, entre ellos el que lanzó el movimiento estudiantil de 1968 que, al rechazar la supuesta unanimidad política que prometía el nacionalismo, puso de relieve la legitimidad de las demandas de participación de una sociedad políticamente plural. El presidencialismo exacerbado de los años 1970-1982, los conflictos y las variadas reacciones de protesta nacidos de los desajustes entre el sistema político y la sociedad, nutrieron corrientes de opinión que exigían el respeto a los principios de la democracia liberal que habían sido letra muerta en la Constitución. Las dos últimas décadas del siglo fueron un periodo de maduración de estos cambios culturales. Su impulso venció la previsible resistencia de los tres últi-

* Texto actualizado en 2009. Una primera versión con el título “Conservadurismo y derecha en México a finales del siglo xx” fue entregada para su publicación como capítulo de la obra *Conservadurismos mexicanos*, editada por Enrique Florescano.

mos gobiernos del PRI —Miguel de la Madrid (1982-1988), quien trató tímidamente de detenerlos, y de Carlos Salinas (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000) que, en cambio, intentaron ponerse a la cabeza de esas transformaciones.

Los orígenes de la cultura política autoritaria y del consenso que generó se remontan al siglo XIX y al triunfo de los liberales en 1867. Su convicción de que el Estado debía formar a la nación fue el referente del intervencionismo estatal que con tanto éxito desarrollaron los gobiernos de la posrevolución, hasta que la crisis financiera de 1982 dañó severamente sus fundamentos. El fin de la hegemonía del PRI y el desarrollo del multipartidismo sellaron la liquidación de la visión jacobina del Estado, que había sido el legado del liberalismo conservador de la generación de Justo Sierra, y que fue desplazada por el ideal de la *ciudadanización* de la sociedad política que guió la democratización. Este proceso de cambio cultural significó la transformación del jacobinismo revolucionario en apenas uno de los componentes del pluralismo político, que se apoya en dos supuestos básicos: el poder del voto y la legitimidad de la oposición.

Desde esta perspectiva la democratización significó una discontinuidad mucho más profunda que la que sugieren las reformas institucionales, porque fue impulsada por cambios en actitudes, ideas y valores referidos al poder y a la política, a la historia y al Estado; por ejemplo, durante la mayor parte del siglo, para la mayoría de los mexicanos la extensión de la autoridad del Estado estuvo estrechamente asociada con la realización del ideal democrático; sin embargo, a partir de los años ochenta fueron cada vez más los que pensaban que el Estado era el principal obstáculo para la democracia.

El propósito de este artículo es identificar el impacto de los valores de la democracia liberal en la erosión de la cultura política autoritaria y en la formación de una cultura de derecha secularizada en México al comenzar el siglo XXI. Se trata de descubrir, si las hay, las continuidades con el pasado, así como las transformaciones que les dieron nuevo contenido.

La primera parte examina el surgimiento de la antinomia estatismo/antiestatismo como eje ordenador de las fuerzas y preferencias políticas.

Aunque este antagonismo no era nuevo, la expropiación de la banca que decretó el presidente López Portillo el 1° de septiembre de 1982 polarizó las diferencias y minó la presunta unanimidad en que se fundaba el Estado posrevolucionario. La segunda parte revisa la contribución del debate intelectual de los años ochenta y noventa a la difusión de los principios de la democracia pluralista. Después se analiza cómo la decisión expropiatoria llevó a las izquierdas a la restauración de las tradiciones del Estado interventor; en cambio, galvanizó a los enemigos del estatismo en una movilización electoralista que nació como una rebelión de las élites locales contra el poder federal.

En un primer acercamiento el resultado de las transformaciones de la cultura política es un espectro ideológico complejo y cambiante, en el que los perfiles de las identidades políticas se sobreponen, como siluetas en una fotografía fuera de foco. Esta confusión deriva de la naturaleza misma del liberalismo político que, más allá del compromiso con las instituciones democráticas y los principios de igualdad y libertad individual, admite la diversidad. De manera que se puede ser demócrata y religioso a la vez, defender valores sociales tradicionales, pero también la limpieza electoral y el pluralismo. Gracias a las posibilidades del liberalismo político, el Partido Acción Nacional llegó al poder en el año 2000 como representante de demócratas, católicos, tradicionalistas, liberales y simplemente inconformes.

EL FIN DE LA PATRIA JACOBINA

Una de las herencias perdurables de 1789, ahí adonde llegó el mensaje liberador de la Revolución francesa, fue la distinción entre izquierda y derecha como representantes del progreso y de la tradición, respectivamente. En México este antagonismo nació al mismo tiempo que llegaron las ideas de igualdad y libertad, y durante el siglo XIX fue el eje de la persistente inestabilidad que concluyó cuando los liberales, que se veían a sí mismos como el partido del cambio, triunfaron sobre los conservadores.

No obstante, la Revolución francesa no imprimió su huella más profunda en los partidos mexicanos, sino en la filosofía de la historia y

en las nociones del poder que retomaron liberales mexicanos que, como Ignacio M. Altamirano y Justo Sierra, vieron en ella una “fuente de ejemplos” a seguir, el “punto de partida en una era política en la cual se inserta el México independiente” y el “parteaguas entre el antiguo régimen y las nuevas formas de organización política fundadas en el ejercicio de las libertades fundamentales”.¹ Normalmente entendemos la política jacobina sólo desde la perspectiva del anticlericalismo; sin embargo, esta vertiente de la Revolución francesa alcanzaba muchos otros temas, pues atribuía al Estado funciones de orden sociológico y cultural derivadas de un propósito fundamental: crear la nación.²

Este objetivo es una de las continuidades más notables entre los liberales de finales del XIX y los revolucionarios que llegaron al poder en 1921. Unos y otros veían en el Estado nacional la clave de la modernidad política. La figura de Justo Sierra y su firme convicción de que la organización de la educación debía ser una empresa nacional³ ilustran esta determinación que le atribuía al Estado el monopolio de la organización social. Producir una nación consiste en moldear el imaginario colectivo mediante la educación, pero también en formar representaciones eficaces del interés general y en imponer reglas de funcionamiento a las relaciones entre el poder y la sociedad.⁴ Lo primero llevó a Sierra a escribir una versión oficial de la historia, según la cual el desarrollo nacional había sido un ascendente proceso lineal hacia el progreso, al que, si acaso, se habían opuesto apenas unas cuantas minorías insignificantes.⁵ Esta versión fue retomada por los gobiernos posrevolucio-

¹ Nicole Giron, “Ignacio M. Altamirano y la Revolución francesa: una recuperación liberal”, en Solange Alberro, Alicia Hernández Chávez y Elías Trabulse (coords.), *La Revolución francesa en México*, México, El Colegio de México-Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 1992, pp. 201-214, p. 202.

² Pierre Rosanvallon, *L'État en France de 1789 a nos jours*, París, Éditions du Seuil, 1992, p. 99.

³ Andrés Lira González, “La revolución francesa en la obra de Justo Sierra”, en Alberro, Hernández Chávez y Trabulse (coords.), *La Revolución francesa...*, *op. cit.*, pp. 179-199.

⁴ Rosanvallon, *op. cit.*, p. 108.

⁵ Soledad Loaeza, *Clases medias y política en México: la querrela escolar, 1959-1963*, México, El Colegio de México, 1988.

narios no sólo para la enseñanza de la historia, sino para construir el Estado. Lo segundo inspiró en el siglo xx la política jacobina: una organización del poder cuya clave era la centralización que alcanzó su máxima expresión en un sistema político articulado en torno a tres ejes fundamentales: el Estado federal, la Presidencia de la República y el partido oficial.⁶

La centralización del poder se justificaba con el argumento de que el interés supremo de la nación debía imponerse a los intereses particulares. Más todavía, porque el Estado que la representaba era el agente fundamental de la modernización. El proyecto de transformación de la sociedad que se plantearon los revolucionarios de 1917 era tan ambicioso que no sólo era el Estado el único capaz de llevarlo a cabo, sino que necesitaba el apoyo casi unánime de la sociedad y un margen de autonomía en el que no había espacio para la participación independiente y tampoco para las oposiciones.

Los primeros cuestionamientos serios en relación con el alcance legítimo de la autoridad del Estado y con el margen de su autonomía de acción se plantearon en 1968. El movimiento estudiantil demandaba el cumplimiento de la ley y el respeto al ejercicio de las libertades individuales garantizadas por la Constitución: “Contra el Estado, su Constitución”.⁷ La expropiación bancaria profundizó dramáticamente esos cuestionamientos.

⁶ El Partido Nacional Revolucionario, PNR, fundado en 1929, fue el primer partido oficial, así llamado porque fue desde entonces un instrumento del Estado. Su desarrollo, alcance y capacidad de organización dependían exclusivamente de los recursos públicos, financieros o policiacos. Su sucesor, el Partido de la Revolución Mexicana, PRM, creado por decreto presidencial en 1938, era muy distinto del PNR en términos de programa, objetivos y representatividad, así como por su organización corporativa; sin embargo, mantuvo e incluso profundizó sus lazos de dependencia con el Estado y por ende su calidad de *oficial*. Por su parte, el PRI, que se fundó en 1946, tiene notables diferencias con sus antecesores, pero era también un partido *oficial* por las razones arriba anotadas.

⁷ “La crítica del 68 al orden político no llevaba implícita la crítica de su Constitución, sino el deseo de mostrar el abismo que había entre los principios constitucionales y el funcionamiento efectivo del sistema político mexicano”. Sergio Zermeno, *México una democracia utópica. El movimiento estudiantil del 68*, México, Siglo XXI Editores, 1978, pp. 13-19.

A casi treinta años de distancia de esa decisión determinante en la historia política y económica del país, persisten los desacuerdos respecto a las motivaciones reales de la medida y a su conveniencia para el largo plazo.⁸ En el contexto de la época, esta medida aparece como una decisión esencialmente anacrónica. En 1978 en China, Deng Xiaoping dio los primeros pasos hacia la liberalización económica en China; en 1979 la Reserva Federal de Estados Unidos adoptó como prioridad el control de la inflación y lanzó una política monetarista sin concesiones; Margaret Thatcher llegó al poder en Gran Bretaña con el mandato de poner fin al poder sindical y combatir el estancamiento económico, y en 1980 llegó a la Casa Blanca Ronald Reagan. Thatcher y Reagan emprendieron una agresiva política de desregulación económica, inspirada en la idea de que la función central del gobierno era liberar la energía individual, las habilidades y la iniciativa empresarial en un marco institucional caracterizado por derechos de propiedad fuertes, libre mercado y libre comercio. Estas reformas partían de la convicción de que la defensa de los valores democráticos exigía reducir el intervencionismo estatal a su mínima expresión. El neoliberalismo que se puso entonces en marcha tuvo un alcance sin precedentes y modificó la faz de las economías, nacionales e internacional.⁹

En *Mis tiempos*, el libro que publicó José López Portillo en 1984 a guisa de memorias,¹⁰ el ex presidente hace un recorrido de sus reacciones y reflexiones a lo largo de los complicados meses de febrero a agosto de 1982, cuando sintió el acoso de los empresarios que demandaban participar en el diseño de las decisiones de política financiera y del gobierno de Estados Unidos que, según sostiene, se oponía a la política mexicana de apoyo a los revolucionarios en Nicaragua y El Salvador, y en represalia ejercía presiones sobre el peso. En el recuento del ex pre-

⁸ Véase Gustavo del Ángel-Mobarak, Carlos Bazdresch Parada y Francisco Suárez Dávila (comps.), *Cuando el Estado se hizo banquero. Consecuencias de la nacionalización bancaria en México*, México, Fondo de Cultura Económica, 2005.

⁹ David Harvey, *A brief history of neoliberalism*, Oxford, Inglaterra, y Nueva York, Oxford University Press, 2005.

¹⁰ José López Portillo, *Mis tiempos: biografía y testimonio político*, México, Fernández Editores, 1988, 2 tomos, t. II, p. 1166.

sidente reaparecen los enemigos *históricos* del interés nacional: los empresarios (“los banqueros agazapados”) y Washington. En cambio, está seguro de contar con la solidaridad emocionada de los obreros “una de las glorias como presidente”.¹¹ En estas líneas la referencia al supuesto apoyo del pueblo en la lucha contra los poderosos nos remite al socorrido recurso retórico del PRI, que suplía la falta de legitimidad electoral con el discurso de la patria jacobina sitiada por la ambición y la codicia de los ricos. Una y otra vez, López Portillo apela a los esquemas simplificados del pasado revolucionario. En abril escribe: “Pero todavía no puedo romper lanzas con ellos [los empresarios]. Y que no me arrinconen porque tomo medidas extremas y movilizo mayorías”.¹²

Sus reflexiones sobre la expropiación bancaria ponen al descubierto la intención esencialmente política de esa medida financiera, que aparece entonces como un último esfuerzo de frenar el derrumbe del consenso en torno al Estado transformador:

Lo coyuntural, lo urgente, había deteriorado tanto la situación, que teníamos que tomar la decisión estructural correctiva aunque fuera en el último momento; pero sí expresaba el propósito político, la voluntad soberana de mantener la línea revolucionaria y dotar al Estado de mejores instrumentos para manejar la situación económica desde una posición política más sólida [...] Seguir haciendo la Revolución desde las instituciones, aprovechando la dinámica de los artículos 27 y 28 constitucionales. Teníamos proyecto nacional, insisto, nacional.¹³

La expropiación de la banca dividió a la élite política y administrativa, a los intelectuales y a las clases medias, y la amplia fractura

¹¹ Por momentos, la explicación revela ansiedad, rencor y deseo de venganza contra los empresarios. El 2 de agosto de 1982 escribe: “Todo se me desvanece. Un último año seco, duro, doloroso, amargo. De angustia histórica, la tremenda angustia histórica y la consideración, la casi conmiseración de los que me quieren, igualmente dolorosa. Pero todavía tengo fuerza y voy a golpear”. López Portillo, *op. cit.*, t. II, p. 1126.

¹² *Ibid.*, p. 1202.

¹³ *Ibid.*, p. 1235.

que provocó tuvo el efecto de secularizar definitivamente a la derecha mexicana, pues se sobrepuso a los desacuerdos a propósito del papel de la Iglesia y de la religión católicas que fueron durante el siglo XIX y buena parte del XX el eje de definición de esta identidad, a la que dio nuevo contenido.

Las antinomias Estado/sociedad o Estado/mercado generaron nuevos temas en torno a los cuales se alinearon corrientes de opinión, preferencias y partidos políticos. Las identidades de izquierda y derecha desarrollaron nuevos perfiles a partir de posiciones respecto al mercado, los individuos, los derechos humanos, la protección de las minorías, la diferencia entre lo público y lo privado, la globalización y las relaciones con el exterior. De esta novedosa complejidad política derivaron instituciones y reglas del juego que durante los años ochenta y noventa pusieron fin a la tradicional primacía del Estado en la organización de la sociedad.

Este proceso reveló, primero, y alimentó, después, la existencia de una cultura política que no respondía más a las nociones, símbolos y creencias asociadas con la tradición del Estado transformador. En los años ochenta ganó impulso en México el antiestatismo y con él las reivindicaciones de los derechos del individuo o de la sociedad, así como las demandas de participación mediante el voto y la organización independientes. Esta corriente se nutrió también de un momento intelectual en el que el repudio al socialismo real y a la política soviética de dominación legitimó la crítica a todas las experiencias revolucionarias, mientras que el neoliberalismo empezaba a abrirse camino como referente de un nuevo consenso internacional de economía política. En México aparecieron nuevos análisis de la Revolución de 1910, que, desde la perspectiva marxista, liberal o católica, cuestionaban la validez y la veracidad de la versión oficial.

En este reacomodo que fue a la vez cultural y político se alteraron las coordenadas izquierda/derecha, pero sobre todo aquellas que durante décadas habían sostenido los estereotipos del conservadurismo. Las fuerzas identificadas con la Revolución mexicana asumieron la defensa de la tradición, mientras que las corrientes políticas asociadas con la preservación del orden existente exigían cambios. El debate en

torno al intervencionismo estatal continuó alimentado por el proyecto modernizador de Carlos Salinas y su continuación en el reformismo de Ernesto Zedillo, que redujeron de manera drástica el intervencionismo económico del Estado. En estos años, sin embargo, el debate quedó instalado en el corazón de la lucha por el poder entre las élites. La defensa de la tradición estatista fue la causa de la separación de Cuauhtémoc Cárdenas del PRI y de la formación del Partido de la Revolución Democrática en 1989. No obstante, cabe hacer notar que la protesta cardenista contra las reformas neoliberales se inició cuando el presidente De la Madrid reconoció los primeros triunfos de candidatos panistas en elecciones municipales. El argumento de Cárdenas y del antiguo presidente del PRI, Porfirio Muñoz Ledo, que se unió a su protesta, fue que el gobierno estaba entregando el poder a la reacción.

El significado de esta conmoción en la cultura política debe medirse considerando que el discurso oficial del siglo xx mantuvo intacta la fractura que en el siglo anterior opuso a liberales y conservadores, como si éstos nunca hubieran sido realmente derrotados o hubieran permanecido idénticos a sí mismos durante un siglo, como si en lugar de desaparecer en alguno de los sucesivos cambios políticos que experimentó el país, o por el simple paso del tiempo, se hubieran mantenido al acecho, preparados para el asalto a la patria liberal. No obstante, las corrientes de opinión que se manifestaron en el país a partir de los ochenta, distaban mucho de reproducir las fracturas del pasado, aunque dejaban ver algunas continuidades. El PRI y las izquierdas no eran los legatarios de los liberales del xix, y sus críticos y adversarios tampoco eran los herederos de los conservadores. El jacobinismo de la Revolución mexicana seguía siendo un componente importante de la identidad de los primeros, pero la filiación política de los segundos no estaba determinada por su creencia religiosa, sino más bien por su rechazo al intervencionismo político del Estado.

Las opiniones antiestatistas que en el espectro ideológico nacional se situaban a la derecha, formaban fuerzas políticas mayoritariamente secularizadas, diversas y audaces, que provenían de las regiones más modernas del país, y exigían la ruptura con el pasado. En contraste

con el PAN, y como reacción a las políticas modernizadoras de la tecnocracia que había llegado al poder con Salinas y Zedillo, las corrientes que habían construido una larga trayectoria con promesas de un futuro mejor quisieron responder a las demandas de cambio proponiendo la restauración de tradiciones que —denunciaban— habían sido abandonadas. En medio de esta confusión, el partido oficial se escindió. A los disidentes se sumó una turbulenta constelación de grupos de izquierda en nombre también de las tradiciones de la Revolución mexicana para formar el Partido de la Revolución Democrática, PRD, en 1989; y a principios de 1994, en Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, pasó en unas cuantas semanas de la ofensiva revolucionaria a la reivindicación de las tradiciones ancestrales de las comunidades indígenas.

La creciente diferenciación política fue un reto a los fundamentos excluyentes de la patria liberal mexicana —tal como la concibieron los ideólogos del liberalismo triunfador, Altamirano, Guillermo Prieto, Vicente Riva Palacio o Sierra— en la que estuvo anclada por décadas la estrecha asociación entre identidad política e identidad nacional que dio pie a la intolerancia frente a la oposición que fue característica de la política mexicana hasta finales del siglo xx.¹⁴

El binomio identidad política/identidad nacional, originalmente formulado por Justo Sierra, “el partido liberal [es] la nación”,¹⁵ fue durante décadas fuente de legitimidad del partido oficial. En la campaña presidencial en 1958, Adolfo López Mateos describió así la identidad del PRI:

El partido histórico a que pertenecemos propugna el progreso nacional y ostenta una tradición libertaria y popular: luchó por la Independencia para hacer una patria libre; formuló antes y después de la Reforma,

¹⁴ Jorge Adame Goddard, *El pensamiento político y social de los católicos mexicanos. 1867-1914*, México, Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, 1991; Enrique Florescano, *Imágenes de la patria a través de los siglos*, México, Taurus, 2005.

¹⁵ Citado en David Brading, *Los orígenes del nacionalismo mexicano*, México, Ediciones Era, 1998, p. 47.

las bases para dar a todos igualdad, libertad individual, sufragio general y organización democrática; más tarde hizo la Revolución que acabó con el monopolio de la tierra.¹⁶

Todavía en 1986, el partido oficial justificó las grandes irregularidades en la elección para gobernador de Chihuahua, con el argumento de que había ocasiones en que era legítimo recurrir al “fraude patriótico”.

LA CULTURA DE LA PARTICIPACIÓN

Vista la historia del siglo xx con los ojos de la victoria liberal de 1867, el triunfo fue tan duradero como muchos de nuestros problemas sociales. El mito político unificador en que se convirtió el liberalismo a finales del xix cuando dejó de ser una ideología combativa, como lo describe Charles Hale,¹⁷ trascendió el mundo de las ideas y por conducto del nacionalismo posrevolucionario gobernó actitudes y comportamientos políticos durante más de un siglo; inspiró la comprensión de la historia, y generó un conjunto de representaciones y estereotipos que todavía en 1980 poblaban el universo político de muchos mexicanos.

De la experiencia y convicciones de la generación de los liberales del xix heredamos tanto la ansiedad que hasta el ascenso electoral del PAN producía la diferencia política como la desconfianza que inspiraba la oposición. La Revolución renovó ambas actitudes, que la hegemonía de su partido alimentó durante más de medio siglo. Desde esta perspectiva, el cierre del siglo xix se pospuso casi cien años, hasta que en las tres últimas décadas del xx la legitimidad del principio

¹⁶ Citado en Lourdes Celis, Catherine Macotela *et. al.*, *Historia de la acción pública: Adolfo López Mateos 1958-1964*, México, Fondo para la Historia de las Ideas Revolucionarias en México, 1978, p. 139.

¹⁷ Charles A. Hale, *The transformation of liberalism in late nineteenth-century Mexico*, Princeton, Princeton University Press, 1989.

de la oposición y del pluralismo político impulsó reformas institucionales que reflejaban la realidad de una sociedad política diversa.

La sociedad mexicana de finales del siglo xx dejó a un lado el conformismo y la pasividad que le fueron característicos durante casi toda la segunda posguerra. Estas actitudes cedieron el paso a la participación, la diversidad social se impuso al ideal de la homogeneidad nacionalista, así como el debate a la manufactura de unanimidades, el pluralismo a la democracia mayoritaria y los procesos electorales a la designación autoritaria de los gobernantes. Surgieron nuevos patrones de comportamiento político: las tasas de participación electoral aumentaron en forma significativa; también se extendió la convicción de que la oposición es un componente necesario de la democracia. En un tiempo relativamente breve los mexicanos desarrollaron gusto por el debate, perdieron el miedo a la diferencia política y aceptaron sus divisiones internas como signo de la normalidad democrática, más que como una amenaza a la estabilidad o a la integridad nacional.

Estas actitudes eran ajenas al consenso de la patria liberal, en el que no había lugar para la participación independiente. Con base en la experiencia y en la conveniencia, el discurso oficial fomentó por años la creencia de que la participación, al igual que la diferencia política, traía rupturas, conflictos y violencia. En los años ochenta esta desconfianza desapareció por el empuje de la extensión de la *cultura de la participación*. La movilización electoral puso fin al consenso excluyente de la patria liberal. El sufragio adquirió una fuerza y una legitimidad sin precedentes, gracias, primero, a la afluencia de votantes reales, y, en segundo lugar, a la creación en 1992 del Instituto Federal Electoral, IFE, como responsable y garante de procesos electorales ordenados, limpios y creíbles. En 1994 fueron a las urnas más de 35 millones de votantes, 77% del electorado; y aunque ese porcentaje disminuyó en el año 2000 a 64%, en números absolutos los participantes aumentaron a más de 37 millones. Por otra parte, el pluripartidismo se instaló con gran naturalidad. El incremento de la participación favoreció a cada uno de los partidos, y aunque desde los noventa más de 90% de los mexicanos concentra sus preferencias en PAN, PRI y PRD,

también han sostenido organizaciones minoritarias relativamente representativas.¹⁸

El pluripartidismo de finales del siglo xx no era una construcción artificial, sino la auténtica expresión de la pluralidad política de la sociedad. En 1999, 70% de los mexicanos se identificaba con algún partido, y casi el mismo porcentaje se interesaba mucho o poco por los asuntos políticos; muchos habían que repudiaban la política, pero eran más los que se sumergían en ella en el radio, la televisión o la prensa escrita.¹⁹

Si los resultados electorales indican que los mexicanos ya no responden al viejo principio de la patria liberal, según el cual la afiliación partidista era un componente de la identidad nacional, el nacionalismo que había sido la piedra angular del consenso también se había transformado, sobre todo como respuesta a cambios en la economía nacional e internacional. Entonces para la mayoría de los mexicanos el exterior dejó de ser una amenaza y empezó a ser visto como una oportunidad. Estas nuevas actitudes socavaban la razón última del Estado jacobino: la defensa de la nación frente a un mundo externo presuntamente hostil.

En 1985, y dentro de una ola creciente de revisionismo histórico que se había iniciado después de 1968, François-Xavier Guerra publicó un análisis de los orígenes de la Revolución centrado en la distancia entre la referencia teórica del régimen liberal que se instaló en el país

¹⁸ En 1994 el PRD obtuvo casi 6 millones de votos, el PAN 9 millones y el PRI 17 millones de votos; en la elección presidencial del 2000 Acción Nacional recibió 16 millones, contra los 13 millones del PRI. A estas cifras habría que añadir los sufragios que recibieron los partidos minoritarios: el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido del Trabajo (PT), Convergencia, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), el Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN), el Partido Popular Socialista (PPS), el Partido Acción Social (PAS) y el Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN). De éstos sólo los cuatro primeros existían todavía en el año 2005, y dos más se fundaron con posterioridad: el Partido Alternativa Social Demócrata y Campesina y el Partido Nueva Alianza.

¹⁹ Todos los datos relativos a cultura política provienen de Yolanda Meyenberg y Julia Flores Dávila (coords.), *Ciudadanos y cultura de la democracia: reglas, instituciones y valores de la democracia*, México, Instituto Federal Electoral, 2000.

después de 1867 y la realidad social, muy alejada de los principios de la Constitución liberal que establecía la división de poderes, procesos electorales y libertades ciudadanas. En cambio, la concentración del poder, los votos manipulados y los derechos individuales repetidamente burlados imprimían a la vida política las mismas características que cien años después exhibía el sistema autoritario de hegemonía de partido, gobernado por la Constitución de 1917. En este sentido la democratización mexicana, fincada en elecciones limpias y pluralidad política, puso fin al alejamiento entre los principios liberales de la Constitución y la realidad de su funcionamiento. En la lectura de los conservadores del siglo XIX se habría cerrado la brecha entre el *país legal* y el *país real*.²⁰

LOS NUEVOS LIDERAZGOS POLÍTICOS

A la pregunta acerca del origen de las transformaciones de la cultura política muchas respuestas enfatizan el efecto de grandes procesos sociales y económicos. No obstante, los cambios políticos también son desencadenados por acontecimientos puntuales y dramáticos, o por ideas, nociones y experiencias que se acumulan sin estruendo hasta que un día se hacen presentes para dejar al descubierto percepciones del poder que cuestionan las del pasado, referentes inesperados que cimbran las representaciones establecidas. Así ocurrió en México. La movilización antiautoritaria de los ochenta y de los noventa recogía los ecos de las noticias acerca del fin de las dictaduras en América Latina o de la caída del socialismo. En particular, se refería a los debates entre los intelectuales a propósito de la historia nacional y de la democracia, que nunca como entonces fueron difundidos por los medios, y estimularon la discusión pública.

²⁰ François-Xavier Guerra analiza ampliamente esta brecha entre el *país legal* y el *país real* en la experiencia mexicana, al comparar el proyecto liberal y la realidad del México de la segunda mitad del siglo XIX. François-Xavier Guerra, *Le Mexique de l'ancien régime à la révolution*, París, Harmattan, 1985, 2 vols.

La influencia de los intelectuales ha sido una constante de la historia política mexicana, de suerte que el liderazgo que muchos de ellos asumieron en el proceso de democratización nada tendría de novedoso. La *apertura democrática* que impulsó el presidente Luis Echeverría en los setenta con el fin de reconciliar al Estado con universidades y universitarios, generó un contexto que estimuló el surgimiento del debate de asuntos públicos en el medio intelectual, así como el antagonismo entre los críticos del Estado jacobino y sus defensores. El espectro ideológico mexicano reflejó estas diferencias en la formación de corrientes de izquierda y derecha que incluían a grupos diversos que iban, en el primer caso, del marxismo intransigente al populismo priista, de la misma manera indiferenciada en que en la derecha se incluían liberales, católicos y tradicionalistas extremos.

Pese a las inevitables confusiones, el debate entre los grupos que se formaron alrededor de estas alternativas enriquecía la reflexión pública. Las discusiones y la rivalidad entre las revistas *Vuelta* (1976) y *Nexos* (1978) son emblemáticas de esta división en el seno de las élites intelectuales. La prensa escrita y en algunos casos la televisión, como fue la experiencia notable de la colaboración de Octavio Paz con Televisa desde finales de los años setenta, situaron los valores de la democracia pluralista en el corazón de la reflexión y el debate públicos a partir de la crítica al presidencialismo y al Estado.

También surgió de nuevo la disputa por la historia que había sido una de las fuentes de legitimación del jacobinismo mexicano. Después de 1968, y en ausencia de una legitimidad democrática, el presidente de la República y el partido oficial apelaron cada vez con más frecuencia a la historia. Hasta 1982 esta operación retórica fortaleció el recurso a la tradición dentro del discurso oficial e incluso de las izquierdas, que también se referían a la Revolución mexicana para justificar sus estrategias o sus propuestas, esto es, dejaron de buscar en el futuro los significados y las razones del presente, y al hacerlo renunciaron a uno de sus rasgos de identidad.²¹

²¹ Raymond Aron, *The century of total war*, Nueva York, Doubleday, 1954.

El viraje hacia el pasado y la tradición alejaba a las izquierdas mexicanas de la tradición de los revolucionarios franceses que creían que con base en la razón podían construir un presente y un futuro totalmente desvinculados del pasado. Mientras para los contractualistas rousseauianos la legitimidad del Estado depende únicamente del consentimiento tácito de los ciudadanos que se renueva todos los días, para los conservadores la legitimidad es obra de la historia y de tradiciones que van mucho más allá de los recursos de una generación. Desde este punto de vista, la versión oficial de la historia de México era jacobina por su parcialidad y por su desdén frente a los hechos o los actores que no tenían cabida en la patria liberal.²² Sin embargo, desde el punto de vista historiográfico era profundamente conservadora porque derivaba su significado de lo que había quedado atrás, de su pasado temporal, así fueran las luchas revolucionarias, en el que identificaba el germen de su evolución. Según Karl Mannheim, ahí donde los progresistas utilizan el futuro para interpretar la realidad, el conservador utiliza el pasado,²³ mira el presente a partir de actitudes derivadas de circunstancias y acontecimientos anclados en lo que los precedió, y no promete construir una utopía en el futuro. En estos términos, el talante conservador del Estado y del partido oficial se acentuó entre 1970 y 1976, cuando en lugar de buscar justificaciones en un porvenir brillante, el gobierno volvió los ojos al pasado idealizado de la patria liberal y de las políticas populares del cardenismo. López Portillo hizo lo mismo en la crisis política que se produjo al término de su gobierno.

Entre tanto, Daniel Cosío Villegas, Octavio Paz, Gabriel Zaid y Enrique Krauze, por mencionar a los más prominentes, lanzaron el antiestatismo y la crítica al Estado de la Revolución, a su partido y a sus presidentes. Sus trabajos dieron lustre intelectual a actitudes, ideas

²² En la historia “hipotética de la desigualdad” Rousseau escribió: “Hagamos los hechos a un lado, para que no incidan sobre la cuestión”, con el fin de eliminar de la discusión aquello que era irrelevante para la demostración del desarrollo de la inequidad en la sociedad moderna. Citado en Robert Nisbet, *Conservatism: Dream and reality*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1986, p. 24.

²³ *Ibid.*, p. 89.

y observaciones antes reservadas *a la gente reaccionaria*, como escribió Gabriel Zaid en 1977,²⁴ cuyas interpretaciones o cuando menos recuerdos no habían sido parte de la reflexión política. *Pueblo en Vilo* de Luis González y González, publicado en 1968,²⁵ fue un ingenioso y certero desafío a la historia jacobina, pues reconocía la importancia de actores que habían sido ignorados por la *historia de bronce*, la de la construcción del Estado nacional, la de los héroes y los acontecimientos que poblaban la patria liberal. Pero a la experiencia —real o imaginada— mil veces contada de los revolucionarios, Luis González contrapuso la historia de los *revolucionados*, como le gustaba decir, que había sido hecha a un lado o simplemente olvidada. “Somos oriundos [los microhistoriadores] de un *milieu* social conservador, y por añadidura, perseguido”.²⁶ A partir de entonces, el destino y la *visión de los vencidos* de la Revolución empezó a ganar espacio en las preocupaciones de la historiografía mexicana.

En 1974 Jean Meyer publicó *La Cristiada*, que no sólo rebautizó la guerra cristera, sino que la reivindicó como una rebelión contra el autoritarismo revolucionario.²⁷ Es ésta la historia ya no de una lucha entre el progreso que representaba el Estado revolucionario y el oscurantismo que encarnaban la Iglesia católica y la religión —tal como hasta entonces había sostenido la historia oficial—, sino como una legítima insurrección popular. Esta obra también cuestiona la pretensión de que Revolución —como la nación— sólo había habido una. Tanto González y González como Meyer realzan la diversidad de las experiencias históricas de los mexicanos, y construyen desde el mundo académico una plataforma de lanzamiento de las regiones en contra del centralismo del poder federal y del gigantismo típico del partido oficial.

²⁴ Gabriel Zaid, “El 18 brumario de Luis Echeverría”, *Vuelta*, vol. I, núm. 2, enero de 1977, p. 11.

²⁵ Luis González y González, *Pueblo en vilo: microhistoria de San José de Gracia*, México, El Colegio de México, 1968.

²⁶ Luis González y González, *Todo es historia*, México, Cal y Arena, 1989, p. 234.

²⁷ Jean Meyer, *La Cristiada*, México, Siglo XXI Editores, 1973, 3 vols.

El impacto político de estas obras fue más insidioso que inmediato. A diferencia de trabajos similares anteriores, en este caso el contexto político del post 1968 les dio un mayor significado y alcance porque esa crisis desnudó el autoritarismo del Estado de la Revolución mexicana. La historia oficial fue cuestionada también desde la izquierda marxista;²⁸ no obstante, la contribución de la historiografía conservadora a la crítica democrática fue más efectiva, porque su blanco era el autoritarismo estatal que la izquierda seguía justificando. La microhistoria de Luis González no buscaba únicamente celebrar las “grandes tradiciones” o recuperar la “luminosa pureza de las costumbres”,²⁹ sino que repudiaba el centralismo que había aplastado las expresiones regionales, promovía el localismo, se mofaba de las grandes ciudades y, desde luego, del modelo de la historia nacional diseñado por Sierra. La microhistoria se sitúa en las antípodas de la historia jacobina, racionalista y civilizadora; Luis González y González la define así:

[La microhistoria] se origina en el corazón y en el instinto [...] No sirve para hacer, pero sí para restaurar el ser. No construye, instruye. Le falta el instinto adivinatorio. No ayuda a prever; simplemente a ver. Su manifestación más espontánea es la historia pueblerina o microhistoria o historia parroquial o historia matría [...] Emociones que no razones inducen el quehacer microhistórico.³⁰

La *apertura democrática* de Echeverría amplió los espacios para el juicio independiente, en particular en el periodismo. En esos años los editoriales de *Excelsior* y, en general, la información que entregaba a sus

²⁸ Adolfo Gilly, *La revolución interrumpida: México, 1910-1920: una guerra campesina por la tierra y el poder*, México, Ediciones El Caballito, 1971; Arnaldo Córdova, *La política de masas del cardenismo*, México, Ediciones Era, 1974; Adolfo Gilly, Arnaldo Córdova, Armando Bartra, Manuel Aguilar Mora y Enrique Semo, *Interpretaciones de la Revolución mexicana*, México, Universidad Nacional Autónoma de México-Nueva Imagen, 1979.

²⁹ González y González, *Todo es historia*, op.cit., p. 234.

³⁰ *Ibid.*, p. 228.

lectores estimulaban la libre reflexión. En sus páginas Daniel Cosío Villegas publicó entre 1971 y 1976 varios de los artículos que después recogió en tres breves libros de ensayo que fueron un éxito editorial: *El sistema político mexicano*, *La sucesión presidencial* y *El estilo personal de gobernar*.³¹ Los excesos verbales del presidente Echeverría fueron un acicate para que Daniel Cosío Villegas se lanzara a una censura tan severa como burlesca del presidencialismo mexicano. En realidad el mérito de los ensayos de Cosío Villegas como editorialista reside en que reinauguró la crítica liberal al presidencialismo, al patrimonialismo y a la concentración del poder. A diferencia de quienes lo siguieron por ese camino, Cosío no denunciaba a la Revolución mexicana, ni al intervencionismo estatal como enemigos de la democracia, sino que señalaba sus desviaciones o la caricaturización del poder presidencial. Su referencia era la República Restaurada que, según él, entre 1867 y 1876 había sido un periodo excepcional en el que la prensa y el Congreso habían actuado como efectivos contrapesos del poder presidencial.

En noviembre de 1976 se publicó el primer número de la revista *Vuelta* que desde entonces y hasta la muerte de su fundador, Octavio Paz, en 1998, fue la tribuna de los enemigos del estatismo y del presidencialismo. De hecho, esta vocación estaba inscrita en su origen. La revista nació a tres meses de la desaparición de *Plural*, revista que publicaba *Excelsior* y que también dirigía Paz, pero un conflicto en el interior del periódico precipitó la renuncia de su director, Julio Scherer, y de muchos editorialistas y reporteros. A partir de ese momento, la arbitrariedad presidencial se volvió uno de los temas centrales de todos ellos.

En la presentación de *Vuelta*, Paz no responsabiliza al gobierno de los hechos de *Excelsior*, pero afirma “me parece indudable que el golpe no se habría dado si sus autores no hubiesen contado por lo menos con el consentimiento tácito del Poder”.³² Este primer texto se refiere a los

³¹ Daniel Cosío Villegas, *El sistema político mexicano: las posibilidades del cambio*, México, Joaquín Mortiz, 1972; Daniel Cosío Villegas, *La sucesión presidencial*, México, Joaquín Mortiz, 1975; Daniel Cosío Villegas, *El estilo personal de gobernar*, México, Joaquín Mortiz, 1975.

³² Octavio Paz, “Vuelta”, *Vuelta*, vol. 1, núm. 1, diciembre de 1976, pp. 4 y 5.

tres temas en torno a los cuales se articuló la crítica política paciana en estos años, “el Estado sigue siendo el poder determinante en México. El Gobierno vive y crece a expensas de la sociedad. La izquierda y la derecha, el líder obrero y el banquero, el periodista y el obispo, todos, viven de hinojos ante la Silla Presidencial”.³³ A ojos de Paz, el caso *Excelsior*, en tanto que abuso de la autoridad presidencial, era doblemente grave por la debilidad o ausencia de los partidos políticos; en 1977 se refiere a los existentes como una “asamblea de fantasmas”. Desde entonces uno de los temas recurrentes de sus ensayos políticos fue la necesidad de construir un régimen pluripartidista que reflejara la diversidad política de la sociedad.

El objetivo de los críticos políticos de *Vuelta* es restarle al poder algo de poder y transferirlo a la conciencia pública “creándole exigencias, que al menos lo lleven a realizaciones simbólicas, [otro] quitándole esas máscaras”,³⁴ sostiene Gabriel Zaid en un ensayo acerca del libro de Maurice Joly, *Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu*.

Desde finales de los setenta y a lo largo de los ochenta los autores de *Vuelta*, en particular Paz, Zaid y Krauze se erigieron en los portavoces de la oposición a la tradición política jacobina. Sus temas recurrentes son los excesos del presidencialismo y la amenaza de la extensión del estatismo que podría devorar a la sociedad civil. Sus coincidencias son muy claras desde el plano general del anitestatismo o del antipresidencialismo. Sin embargo, también los separan diferencias importantes. Por ejemplo, mientras Krauze y Zaid sostienen una filosofía de la historia muy conservadora, con acentos que suenan a las críticas que Edmund Burke hizo a la Revolución francesa, Octavio Paz reconoce los logros de la Revolución y las virtudes de la hegemonía del PRI, aunque considera que había llegado el momento de cambiar, y nunca se opuso al progreso. En cambio Zaid es un crítico fervoroso de la modernidad. En el ensayo “Más progreso improductivo y un presidente apostador”, publicado en 1983, subraya los efectos destructivos

³³ *Ibid.*, p. 5.

³⁴ Gabriel Zaid, *op. cit.*, p. 10.

del progreso sobre las formas de vida preindustrial, las comunidades naturales y las virtudes de la vida rural, en oposición a los excesos de la ciudad. Defiende la “producción autónoma”, casi la autarquía, el autoempleo y la organización horizontal de la economía campesina “hecha de costumbres, tradiciones, amarchantamientos”.³⁵

Paz cree en la circularidad del tiempo, en el eterno retorno, pero no reivindica la superioridad del pasado para enfrentar el futuro, como lo hace Enrique Krauze en uno de sus ensayos más leídos, “El timón y la tormenta”, publicado inmediatamente después de que el presidente López Portillo diera a conocer el decreto de la expropiación bancaria. En ese artículo Krauze sostiene:

en una crisis como ésta deberíamos volver naturalmente a él [el pasado]. Es nuestra fuente de sabiduría. Si sabemos reconocerlo, lo hallaremos hoy mismo en la calle, en la cultura e identidad de los millones de mexicanos que no tienen voz. Nada firme construiremos sin contar con ellos, sin escucharlos. De ahí que nuestra única alternativa de reconstrucción deba *partir* de la sociedad civil que atesora el pasado.³⁶

Es decir, no se trata ya, como buscaban los padres de la patria liberal, de formar el hombre nuevo, ni de transformar la sociedad, sino simplemente de representarla.

Casi todos los actores políticos de la transición mexicana apelaban en una u otra forma a la historia. No obstante, no todos ellos se referían a la misma. Mientras el presidente Echeverría y sus colaboradores y simpatizantes —al igual que la izquierda— invocaban el patronato de los revolucionarios de 1910, desde Venustiano Carranza hasta los hermanos Flores Magón, Luis González y González—al igual que Gabriel Zaid— se acogía a las tradiciones antiliberales asociadas al catolicismo corporativista; mientras que Cosío Villegas y

³⁵ Gabriel Zaid, “Más progreso improductivo y un presidente apostador”, *Vuelta*, vol. 7, núm. 73, diciembre de 1982, p. 9.

³⁶ Enrique Krauze, “El timón y la tormenta”, *Vuelta*, vol. 6, núm. 71, octubre de 1982, pp. 22.

Krauze e incluso Paz buscaban rescatar la “tentativa ejemplar”³⁷ de la República Restaurada.

“Democracia sin adjetivos” de Enrique Krauze, publicado en enero de 1984, fue uno de los ensayos de *Vuelta* que mayores repercusiones tuvo en la opinión pública.³⁸ Krauze supo articular la atmósfera de feroz resentimiento que privaba en la opinión pública en contra del ex presidente López Portillo, generado por “la sensación de haber sido víctima de un gran engaño”,³⁹ derivado de las medidas desesperadas de final del sexenio y la irritación ante las evidencias de patrimonialismo presidencial y corrupción de muchos funcionarios, y propuso rescatar la democracia, el “as olvidado en la manga”, el “ideal revolucionario relegado para otros fines igualmente válidos pero distintos: el bienestar económico, la justicia social, la afirmación nacional, la paz y la estabilidad”.⁴⁰

El argumento central de este ensayo es que el modelo político del México priista se había agotado, pero, sobre todo, que era imperativo poner límites al presidencialismo. La mejor manera de hacerlo, decía Krauze, era estimulando el desarrollo de los partidos políticos, la competencia electoral y la independencia de la prensa. Los partidos existentes no le merecían mucho aprecio, incluso cifraba más esperanzas en la izquierda que en Acción Nacional, a pesar de que desde finales de diciembre de 1982 este partido había sido el principal beneficiario del voto de protesta y de que su presencia electoral había crecido en forma consistente a lo largo de 1983 y de 1984. No obstante, para Krauze en 1984, el PAN necesitaba más que eso porque:

Carece de líderes nacionales y grandes figuras. Desde la muerte de Christlieb Ibarrola (1968), no ha producido ideólogos sino hombres de choque ideológico —que es distinto. El PAN es el antiPRI. No ha podido

³⁷ Octavio Paz, *El ogro filantrópico: historia y política, 1971-1978*, México, Joaquín Mortiz, 1979, p. 39.

³⁸ Enrique Krauze, “Por una democracia sin adjetivos”, *Vuelta*, vol. 8, núm. 86, enero de 1984, pp. 4-13.

³⁹ *Ibid.*, p. 4.

⁴⁰ *Idem.*

presentar un programa alternativo. Tampoco ha sabido reivindicar ciertas raíces liberales del pensamiento de Gómez Morín y, menos aún, la parte recuperable de la tradición conservadora. Con todo, por cuarenta y cinco años ha permanecido activo e independiente. Debe renovar su programa, pero es el molde potencial para una lucha de partidos.⁴¹

El impacto que tuvo su exigencia se explica porque era una demanda de “democracia, aquí y ahora” que articulaba la impaciencia de muchos con los crecientes problemas económicos del país y con la patente incapacidad del PRI y de sus presidentes para resolverlos.

Ninguno de los críticos de *Vuelta* puede ser considerado como un ideólogo del Partido Acción Nacional, como tampoco podrían serlo Luis González o Jean Meyer. En primer lugar, no les interesaba vincularse con ése o ningún partido. No obstante, la operación de rescate de la tradición católica que llevaron a cabo los historiadores,⁴² al igual que los temas que plantearon Paz, Zaid o Krauze, coincidían con muchos de aquellos que por años había defendido el PAN: la autonomía municipal, la descentralización, la limpieza electoral y la democracia partidista. Esta convergencia le fue muy útil a los panistas, porque acercó a sus líderes a la élite intelectual y le imprimió a sus causas un prestigio y una legitimidad en el mundo de la inteligencia, que había perdido desde los años cuarenta.⁴³ Hasta entonces el PAN había sido percibido como un espacio más para el rezo que para la reflexión. Pero la relación entre Paz y Krauze y los panistas no podía ser estrecha. Los separaba el hecho de que, paradójicamente y a diferencia de los demás actores políticos de la transición, Acción Nacional no buscaba referentes en la historia nacional, entre otras razones porque el partido nunca se ha re-

⁴¹ *Ibid.*, p. 11.

⁴² Gabriel Zaid también trató de rescatar la tradición cultural católica cuya existencia había sido negada por el régimen de la Revolución mexicana. Gabriel Zaid, *Muerte y resurrección de la cultura católica*, México, Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, 1992.

⁴³ Cuando se fundó, el PAN fue visto como el “partido de los intelectuales”. Soledad Loaeza, *El Partido Acción Nacional: la larga marcha, 1939-1994*. Oposición leal y partido de protesta, México, Fondo de Cultura Económica, 1999.

conocido en el liberalismo, y tampoco le interesa ostentar sus posibles asociaciones con los conservadores del siglo XIX.

EL TRADICIONALISMO REVOLUCIONARIO

La expropiación bancaria precipitó el surgimiento de un tradicionalismo revolucionario que permitió a la derecha apropiarse de la bandera del cambio, por esta razón es preciso referirse aquí a ese viraje. En su búsqueda de alternativas al progresivo derrumbe de la cultura política autoritaria, las corrientes y grupos políticos que se identificaban con la Revolución recurrieron cada vez más al pasado en busca de referencias, de justificaciones y hasta de proyectos. La amplia y diversa familia ideológica que cobija a los estadistas mexicanos se convirtió así en el *Goofus Bird*, el pájaro de Jorge Luis Borges, que construye el nido al revés y vuela para atrás, porque no le importa adónde va, sino dónde estuvo.⁴⁴ Cuando así ocurrió quedó el campo libre para que otros representaran el futuro.

En 1981, Rolando Cordera y Carlos Tello publicaron *México: la disputa por la nación*, un ensayo en el que planteaban que el país enfrentaba una disyuntiva: “Remodelación económica neoliberal o afirmación y revisión nacionalista”. Para estos autores ambas opciones estaban “bien arraigadas en la historia contemporánea”,⁴⁵ sostenían que en ese momento había que recoger los postulados y las demandas populares de la Revolución mexicana y de la Constitución y reanimar las alianzas del cardenismo entre el Estado y las organizaciones de masas. Más que un cambio, lo que proponían era la profundización del intervencionismo estatal o bien que el Estado recuperara el papel de rector de la economía.

⁴⁴ Jorge Luis Borges, *Manual de zoología fantástica*, México, Fondo de Cultura Económica, 1998, p. 78.

⁴⁵ Rolando Cordera y Carlos Tello, *México, la disputa por la nación: perspectivas y opciones del desarrollo*, México, Siglo XXI Editores, 1981, pp. 78 y 79.

En México [...] “el nacionalismo no deriva del sustantivo nación [...] sino del verbo nacionalizar”; por eso el nacionalismo no aparece entre nosotros, como sucede, por ejemplo, en la mayoría de las naciones europeas, como una ideología conservadora, sino progresista: devolver a la nación, representada por el Estado, bienes que antes estaban en manos de particulares.⁴⁶

Cuando fueron publicadas estas páginas pocos hubieran reconocido en ellas una propuesta gubernamental. Sus autores eran en ese momento investigadores universitarios, aunque Tello había sido secretario de Programación y Presupuesto los dos primeros años del gobierno de López Portillo. No obstante, éste se había caracterizado por relaciones armoniosas con los empresarios y ni por asomo había mostrado inclinaciones socialistas. Tanto así que cuando el presidente anunció la expropiación bancaria el 1º de septiembre de 1982, el estupor fue generalizado.

Si la intención de esa medida era profundizar o renovar la tradición del Estado intervencionista y con ello abrir el camino al fortalecimiento de la izquierda, el efecto fue exactamente el contrario. La decisión galvanizó el antipresidencialismo y las opiniones antiestatistas dispersas que se habían venido formando en los años anteriores, no únicamente porque suscitara temores frente a un posible ascenso del socialismo, sino porque fue un ejemplo contundente de arbitrariedad y autoritarismo presidencial.

Las opiniones de izquierda, defensoras de la tradición del Estado jacobino, reaccionaron con cierto desconcierto, primero, y con entusiasmo después. No se reconocían del todo en ella, porque nuevamente, como en el pasado, del propio Estado había surgido una iniciativa radical que aprobaban, pero estuvieron dispuestos a comprometerse con ella, sin mirar los costos de semejante apoyo.

Roger Bartra planteó con claridad el dilema que la expropiación bancaria generó para la izquierda y la hipoteca que representaba para su desarrollo:

⁴⁶ *Ibid.*, p. 107.

La enorme dificultad a que se enfrentó la izquierda es que la coyuntura crítica estaba escindiendo en dos su programa: el gobierno retomó la dimensión reformista de sus demandas y los partidos de derecha le arrebataron su dimensión democrática. Cuando el despotismo gubernamental atentó contra sus intereses, la burguesía reclamó airada por sus “derechos democráticos”. La izquierda, que vio parcialmente satisfechas algunas de sus demandas, se encontró súbitamente encadenada a la lógica del aparato estatal.⁴⁷

La crisis financiera había provocado descontentos que beneficiaron a Acción Nacional en las elecciones de julio. En *Mis tiempos*, el propio López Portillo observa desdeñosamente: “Todo indica que la reacción contra la crisis económica se rechiza y no es izquierdista [...] Parece claro que la burguesía clasemediera, emergente, se nos fue a la derecha: los que no pudieron comprar el segundo coche o la casa o pagar los abonos por la crisis, se nos fueron al PAN”.⁴⁸ El efecto político de más largo alcance de esta medida fue la maduración del antiestatismo en muchos sectores de opinión.

En la medida en que la nacionalización bancaria había sido una decisión estrictamente personal del presidente de la República —en cuyo diseño e implementación intervino únicamente un grupo restringido de asesores al que no pertenecían ni el secretario de Hacienda ni el director del Banco de México, a quienes directamente competía el tema—, difícilmente podía explicarse en los términos de Cordera y Tello, como una alternativa de izquierda frente a la amenaza de la derecha.

A unos cuantos meses del grave acontecimiento, el debate no se planteaba en términos de la opción socialismo/capitalismo, sino que se convirtió en la prueba patente del autoritarismo presidencial. Incluso los más entusiastas partidarios de la expropiación reconocían su inocultable calidad autoritaria. En noviembre de 1982, Héctor Aguilar Camín escribía:

⁴⁷ Roger Bartra, *La democracia ausente*, México, Grijalbo, 1986.

⁴⁸ López Portillo, *op. cit.*, t. II, p. 1218.

anótese que es el regreso de la tradición política y económica de México la que se refiere a los actos de autoridad de la cúpula, no a las condenaciones democráticas que brotan en la base de la sociedad. La tradición que vuelve en la expropiación de la banca no es la de la colectividad, sino la del presidente, su sonido no es el del clamor nacional sino el de la voz solitaria que decide por sí, ante la nación, lo que la nación será en adelante. Es la tradición autoritaria de México, no la democrática, la que regresa y actúa, autoritariamente, en el mejor interés de la nación.⁴⁹

Esta experiencia prueba, una vez más, que la historia es irrepetible. Lázaro Cárdenas había muerto en 1970, y 1982 no era 1938, el año de la expropiación petrolera, cuya fuerza simbólica López Portillo quiso recuperar para detener el deterioro de su imagen personal tanto como del consenso jacobino. La nacionalización de la banca provocó una crisis de legitimidad que puso al descubierto los límites del uso político de la historia.

Mientras unos celebraban el *regreso de la historia*, hizo su aparición en el escenario de la protesta, antes que en las ideologías y en las instituciones, una corriente de opinión que exigía la democracia aquí y ahora, en nombre de grupos de clase media, de profesionistas y empleados, de comerciantes, empresarios grandes y pequeños, de católicos, que se habían desarrollado políticamente a un lado de los hijos de la patria liberal, sin que éstos se percataran de ese crecimiento.

EL PAN Y EL SURGIMIENTO DE LA DERECHA SECULARIZADA

Si la irritación de la opinión pública con el autoritarismo de Echeverría y de López Portillo fue palpable, pocos vieron que los cambios en la cultura política favorecerían a Acción Nacional. De éstos el más poderoso fue el sentimiento anticentralista que fue creciendo en los estados contra el gobierno federal, su sede, la capital de la República, y

⁴⁹ Héctor Aguilar Camín, "Memorias de una expropiación", en Héctor Aguilar Camín *et. al.*, *Cuando los banqueros se van*, México, Océano, 1982, p. 15.

su agente principal, el PRI. El resultado de este movimiento fue el ascenso de las regiones como base de nuevas identidades y equilibrios políticos. Así, el anticentralismo reanimó la fractura entre las regiones y el centro del país que la centralización jacobina había combatido.

Para quienes vieron la expropiación bancaria como un asalto a la propiedad, la decisión fue una causa unificadora. Si bien se propusieron modificar los equilibrios políticos existentes, no pretendían alterar el *statu quo* social. Por esta razón, optaron por canalizar su protesta vía elecciones y partidos. De las oposiciones partidistas existentes en 1982⁵⁰ el PAN era el único que podía ostentar una trayectoria de lucha en defensa del municipio libre y de los intereses locales, causa con la que se había comprometido desde los años cuarenta. Además, la misma debilidad inicial del partido y su estructura frágil y descentralizada eran propicias para que el partido fuera, en los primeros tiempos del proceso democratizador, el receptor pasivo de la protesta.

A favor del PAN hablaba su pasado. Era la única organización partidista que se había mantenido consistentemente leal a las instituciones de la democracia liberal desde su fundación.⁵¹ La defensa del voto y del cambio por la vía electoral era parte integral de su identidad. Es cierto que, dados los vínculos con el pensamiento católico, siempre hostil al liberalismo, en sus inicios el partido tuvo una relación ambivalente con la democracia; sin embargo, durante los largos años de la hegemonía del partido oficial el compromiso de los panistas con el pluralismo se afianzó simplemente por necesidad, porque su supervivencia dependía de la defensa de los derechos de las minorías políticas.

En la movilización antiautoritaria el partido confesional quedó sepultado, pese a la participación de un amplio sector del Episcopado y del clero. El PAN se cuidó mucho de asumir como propias las demandas específicas de la Iglesia y de los católicos militantes. El antiestatista-

⁵⁰ En las elecciones de 1982 además del PAN participaron los siguientes partidos: Partido Popular Socialista, PPS, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, PARM, Partido Demócrata Mexicano, PDM, Partido Socialista Unificado de México, PSUM, Partido Socialista de los Trabajadores, PST, Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, y Partido Social Demócrata, PSD.

⁵¹ Loaeza, *El Partido Acción Nacional...*, op. cit.

mo y el antipresidencialismo estaban en el corazón de las demandas de cambio que encontraron afinidades con Acción Nacional. Desde ahí evolucionaron muy rápido al reclamo antiautoritario característico de la nueva ola democratizadora.

El debate entre los intelectuales mexicanos contribuyó a la conversión de la opinión pública mexicana a la democracia liberal. Su influencia se hacía presente en las movilizaciones de defensa del voto, como ocurrió en 1986 en Chihuahua, cuando Acción Nacional rechazó los resultados electorales que le atribuyeron el triunfo al candidato del PRI. En ese caso, la movilización de la opinión internacional y el apoyo de prominentes intelectuales de la Ciudad de México le valió grandes titulares en la prensa nacional. Esta experiencia también fue notable porque la movilización panista logró *nacionalizar* el problema que las autoridades gubernamentales hubieran preferido mantener como un asunto local.⁵²

La disponibilidad del PAN para convertirse en el vehículo de las demandas democratizadoras escapó incluso a los más agudos observadores. En 1978 en el ensayo titulado *El ogro filantrópico*, Paz escribió:

El PAN es un partido nacionalista, católico y conservador que, como su nombre lo indica [...], estuvo emparentado en su origen con tendencias más o menos influidas por el pensamiento de Maurras y de su *Action Française* (el monarquismo y el antisemitismo excluidos). El PAN ha sido el eterno derrotado en las elecciones, aunque no siempre legalmente.⁵³

Muy pocos habrían rebatido este juicio. En ese año Acción Nacional todavía no se recuperaba de la severísima crisis interna que había

⁵² El 24 de julio de 1986 la prensa nacional publicó un desplegado firmado por Héctor Aguilar Camín, entre otros, en el que se solicitaba la anulación de las elecciones, dado que existía una *duda razonable* respecto a la autenticidad de los resultados. Las autoridades federales entregaron a este grupo la documentación de la jornada electoral para que realizaran una investigación independiente. Su conclusión fue que la imparcialidad de la Comisión Electoral Estatal era dudosa. *Ibid.*, pp. 386-398.

⁵³ Paz, *El ogro...*, *op. cit.*, p. 42.

vivido en 1976 a propósito de la elección de su candidato a la Presidencia de la República. El conflicto exhibió ante la opinión pública los desacuerdos entre quienes se aferraban a los principios doctrinales del partido como guía de acción, entonces estrechamente apegados a la doctrina social de la Iglesia y a algunos de los planteamiento más radicales del Concilio Vaticano II, y quienes, por el contrario, pugnaban por la apertura de la organización a las crecientes protestas antiautoritarias que había desencadenado el gobierno de Luis Echeverría. El PAN no presentó candidato a la Presidencia de la República, a consecuencia de los enfrentamientos entre el grupo de los *doctrinarios* y los *neopanistas*. Los resultados que obtuvieron sus candidatos al Congreso muestran a qué grado fue costosa esa decisión: el partido obtuvo medio millón de votos menos que en 1970, y su participación en el total de sufragios emitidos pasó de 14 a 8 por ciento.

No obstante, los costos fueron de corto plazo. De hecho esta crisis fue un impulso para la modernización del PAN. Primero, porque ante la amenaza de extinción, los panistas se volvieron más pragmáticos y aceptaron la diversificación de su electorado y los privilegios que le otorgó el reformismo electoral que impulsaba el gobierno de López Portillo. El partido siempre había oscilado entre ser una opción ideológica o captar el voto de protesta, viniera de donde viniera. A partir de 1976, y, sobre todo de las elecciones de 1979 que se llevaron a cabo en el marco propicio de la Ley Federal de Organizaciones, Partidos y Procedimientos Electorales, LFOPPE (1977), las puertas de Acción Nacional se abrieron generosamente a todos los descontentos. El *neopanismo* de José Ángel Conchello sembró la semilla del frente de rechazo que en el año 2000 llevó al poder a Vicente Fox.

En segundo lugar, el pragmatismo que impulsaron los *conchellistas* flexibilizó la organización del partido y le dio capacidad para responder con relativa agilidad a los cambios en el entorno: al reformismo electoral de 1977, a la movilización del voto de protesta después de 1982, a la gravísima crisis electoral de 1988, a la formación del Partido de la Revolución Democrática en 1989. También le permitió establecer alianzas circunstanciales con las políticas neoliberales y el reformismo de los dos últimos gobiernos del PRI, que favorecían sus cau-

sas;⁵⁴ así como acuerdos de más largo plazo con organizaciones políticas, empresariales, y religiosas relativamente variadas que le aportaron recursos materiales y humanos para consolidar su crecimiento.

Los resultados del partido en elecciones presidenciales dan prueba de las ganancias de esta estrategia: de dos millones de votos obtenidos en 1970, es decir, 12% del total de sufragios emitidos, pasó a cerca de cuatro millones en 1982, 16% del total. Cifras y porcentajes se mantuvieron relativamente estables en 1988,⁵⁵ pero en 1994 duplicó nuevamente el voto a ocho millones, hasta que en la elección del año 2000 acreditó, en alianza con el Partido Verde Ecologista de México, PVEM, 16 millones de votos, es decir, 43% del total.

No obstante, la ofensiva anticentralista fue el verdadero trampolín del PAN y el motor de su transformación en una organización de representación nacional. Fuertes desequilibrios económicos entre las regiones están en el origen de la descentralización, pero muy pronto hicieron su aparición las particularidades políticas. La enmienda al artículo 115 constitucional de 1982 aceleró este proceso porque atribuyó nuevas facultades y fuentes de ingreso a los municipios. Esta reforma estimuló la competencia electoral en este nivel porque el aumento de los recursos hizo más apetecibles los ayuntamientos.

Como reacción a la expropiación de la banca, en el ámbito local se activaron organizaciones intermedias: empresariales, religiosas y políticas. El Episcopado se pronunció contra la supresión de la iniciativa privada, y los empresarios expresaron graves inquietudes ante la inminencia del “capitalismo monopólico de Estado”.⁵⁶ Las filas del neopanismo se vieron engrosadas por las aportaciones de la Confederación

⁵⁴ El PAN apoyó las reformas constitucionales que introdujo el presidente Salinas al artículo 27, referidas al ejido, y al artículo 130 que otorgó reconocimiento jurídico a las iglesias. Para muchos panistas estos cambios fueron la reivindicación de errores del Estado jacobino, mientras que para el gobierno salinista fueron medidas modernizadoras.

⁵⁵ Los resultados oficiales de esta elección son muy poco confiables.

⁵⁶ Declaró el 9 de octubre de 1982 Federico Muggenburg, director de Estudios Sociales del Consejo Coordinador Empresarial, citado en Loaeza, *El Partido Acción Nacional...*, op. cit., p. 350.

Patronal de la República Mexicana, Coparmex, y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Concanaco, a las que están afiliados medianos y pequeños empresarios, así como de las organizaciones dependientes de la Iglesia, como el Movimiento Familiar Cristiano, MFC, Desarrollo Humano Integral, A.C., DHIAC y la Asociación Nacional Cívica Femenina, Ancifem, que se convirtieron en un semillero de líderes panistas. El compromiso de estos nuevos militantes con la causa de la democracia política no entraba en contradicción con sus actitudes conservadoras en materia de los valores asociados con el catolicismo, o con la creencia de que el verdadero origen de la nación mexicana es el catolicismo y la religión el único aglutinador de la unidad nacional. En estos temas destaca la Organización Nacional del Yunque, baluarte del ultratradicionalismo católico. Gracias a todas estas organizaciones la presencia de Acción Nacional se extendió por el país y el partido se convirtió en el representante de la fractura centro-periferia.

El ascenso de las regiones dio lugar al surgimiento de identidades políticas fundadas en las tradiciones y los equilibrios de poder local, que se sustraían a la influencia federal. Desde los ochenta las elecciones estatales y municipales reflejaron este proceso de descentralización política. En diciembre de 1982, inesperadamente el PRI perdió las presidencias municipales de San Luis Potosí y Guanajuato. Aunque la protesta fue canalizada por la vía electoral, la competencia por el voto alcanzó un nivel de conflictividad sin precedentes entre 1983 y 1986 en Baja California, Chiapas, Jalisco, Puebla, Sonora y Tlaxcala. Entre 1983 y 1991 Acción Nacional triunfó en 112 ayuntamientos, consolidando así la estrategia municipalista que había propuesto Manuel Gómez Morín desde 1947,⁵⁷ y que lo proyectaría al poder federal. De suerte que el crecimiento del partido se produjo en un movimiento

⁵⁷ Alonso Lujambio, "Mexico's democratization and the organizational development of the National Action Party", en Kevin J. Middlebrook (ed.), *Party politics and the struggle for democracy in Mexico: National and state-level analysis of the Partido Acción Nacional*, La Jolla, San Diego, Center for U.S.-Mexican Studies, University of California, 2001.

de la periferia al centro, a diferencia del PRD, que surgió en el centro y de ahí se extendió hacia la periferia.⁵⁸

En 1989 Acción Nacional conquistó la gubernatura de Baja California, pero esta victoria resulta inexplicable si no nos referimos a la disputada elección de 1988, en la que el PAN obtuvo 101 curules, pero, sobre todo, tuvo un papel decisivo en los equilibrios políticos nacionales, en tanto que interlocutor real del presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari. En la gravísima crisis que provocó la elección presidencial cumplió una función estabilizadora que consagró al PAN como una oposición relevante que, como tal, cogobernaba.

La presencia de Acción Nacional en los estados se extendió en el periodo posterior. Para 2005 ese partido había gobernado o gobernaba Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro y Yucatán, además de Nayarit y Chiapas, donde logró el triunfo en coalición con otras organizaciones.

No obstante los cambios que se han mencionado, la geografía panista recoge dos continuidades en la historia política del país: primero, el anticentralismo de regiones periféricas como Baja California, Nuevo León o Yucatán, y, segundo, el remanente del conflicto entre el Estado jacobino y los católicos, que culminó en la Cristiada. A pesar de que Acción Nacional ingresó al siglo XXI como una organización esencialmente secularizada, es inocultable la coincidencia entre el predominio del PAN en Guanajuato, Jalisco y Querétaro, y el ascendiente de la cultura católica en esos estados. León, Guanajuato, representa el caso más notable al respecto.

León fue la cuna de la Unión Nacional Sinarquista en 1937. Aquí, el ultratradicionalismo católico se mantuvo vigente —pese a la desaparición formal de la UNS en 1945— y conservó una influencia dominante que resurgió gracias a la LFOPPE en el Partido Demócrata Mexicano. Históricamente las relaciones entre la UNS y el PAN habían sido pocas y conflictivas. De ahí que el PAN no obtuviera votaciones importantes en León sino hasta 1985. A partir de esa fecha el partido se fort-

⁵⁸ En 1993 el PAN gobernaba 95 ayuntamientos, de un total de 2 390; en 2001 su número había aumentado a 413, y en 2005 a 539.

leció en la región en buena medida gracias al Yunque.⁵⁹ Esta organización secreta, rabiosamente anticomunista, integrada por católicos críticos del reformismo del Concilio Vaticano II, se fundó en Puebla en los años sesenta, como sucedáneo del Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, MURO, que desapareció luego de haber sido condenado por la jerarquía eclesiástica. El Yunque encontró en León un medio propicio para desarrollarse y puede conjeturarse que los miembros de la organización ingresaron a Acción Nacional con el flujo de los *neopanistas*. De ser así, el ultratradicionalismo católico, una corriente agresivamente antiliberal, habría penetrado al partido. El triunfo de Vicente Fox, él mismo originario de León, llevó al poder federal a un nutrido grupo de leoneses miembros también de esa organización extremista.⁶⁰ De hecho, durante el gobierno foxista la rivalidad entre ellos y quienes no pertenecían a esa organización fue motivo de tensión en el interior del PAN.

En el último tercio del siglo xx la base de apoyo de Acción Nacional se amplió y adquirió una identidad más definida. Las características sociológicas de los nuevos militantes y simpatizantes eran relativamente variadas. El electorado panista se asentaba en los estados, era más joven, tenía un nivel de escolaridad superior y mayores ingresos que los votantes del PRI o del PRD. El perfil de sus candidatos a todos los niveles de representación adquirió estos mismos rasgos, con uno adicional: su trayectoria profesional se había desarrollado en el sector privado.

La doctrina de Acción Nacional también se transformó. Entre 1939 y 1970 la dirigencia del partido introdujo modificaciones doctrinales importantes, aunque siempre dentro del marco general de la doctrina social de la Iglesia. Carlos Castillo Peraza, presidente del partido entre 1990 y 1993, llevó a cabo una renovación doctrinaria muy ambiciosa atenta a la evolución del pensamiento católico y de la Democracia Cristiana Internacional, pero el partido no pudo mantenerse inmune a la influencia del neoliberalismo. De manera que al iniciar-

⁵⁹ Álvaro Delgado, *El Yunque: la ultraderecha en el poder*, México, Random House Mondadori-Plaza y Janés, 2003.

⁶⁰ *Idem.*

se el nuevo siglo la derecha mexicana mostraba un perfil más preciso que en los años de la transición, depurado tanto por el ejercicio de gobierno como por el juego electoral y por la dinámica interpartidista. En este proceso, aunque la diversidad original no desapareció, se formó la identidad de una derecha secularizada que ofrece al electorado una propuesta que combina la defensa de los valores sociales tradicionales con reformas económicas de corte liberal, en un marco de pluralismo y respeto al juego electoral.

CONCLUSIONES

La democratización mexicana tuvo sobre las identidades políticas el efecto de un prisma: descompuso sus perfiles diversos y puso al descubierto una nueva complejidad en la que los defensores de las tradiciones sociales promovían el cambio político adelantándose al futuro, mientras que los adalides de la sociedad progresista exigían la conservación de los usos y costumbres políticos del pasado en nombre de la tradición. En este proceso la derecha experimentó un proceso de secularización que fue también un paso gigantesco hacia la modernización de esa corriente política.

El cambio cultural también puso fin a la condición de expatriados que pesó sobre quienes nunca fueron parte de la patria jacobina. Cuando ésta se derrumbó, los primeros beneficiarios fueron los panistas que siempre habían luchado contra la centralización del poder, la subordinación de las regiones al interés del gobierno federal o de la capital de la República, la intolerancia frente a la diferencia política y a la oposición, y la irrelevancia del voto, de las elecciones y del Poder Legislativo. La maduración de Acción Nacional como la primera opción exitosa de derecha secularizada en México, se explica por la creciente oposición al Estado jacobino.

Las transformaciones políticas de los últimos treinta años del siglo xx no son reversibles porque se apoyan en un complejo sustrato cultural. Siempre será posible encontrar analogías con el pasado; en nombre de una tradición irremediablemente idealizada habrá intentos

de restablecer políticas o instituciones. No obstante, por primera vez en la historia, las reformas de las instituciones del poder y de las reglas del juego político no precedieron a los cambios en las actitudes y en los comportamientos de los mexicanos, para orientarlos o forzarlos, sino que fueron éstos los que se impusieron a aquéllas, guiaron su diseño y las sometieron a su propio ritmo. Novedades como la limpieza electoral, el pluralismo político, la relevancia del Poder Legislativo, la diversidad de los medios de comunicación y la presencia activa del Poder Judicial, son reflejo de las mudanzas de la sociedad antes que el resultado de un proyecto modernizador diseñado por la élite en el poder. Por esta razón, parecería imposible la restauración del presidencialismo desbordado, de la centralización exacerbada o de la hegemonía de un solo partido.

II

EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: LA OPOSICIÓN LEAL EN MÉXICO*

La complejidad del proceso de estabilización del sistema político mexicano no nos permite hacer un análisis global de todos los factores que intervienen en él, aunque se ha subrayado la importancia del PRI, el partido dominante. En este trabajo nos interesa destacar el papel que el sistema de partidos, y más específicamente la oposición panista, desempeña en tanto que elemento legitimador del sistema.

Uno de los rasgos distintivos del caso mexicano es su empeño por mantener una estructura formal similar a la de las democracias occidentales; de ahí que consideremos la actividad electoral como uno de los fundamentos de la estructura institucional mexicana. Frente a un partido dominante encontramos una oposición organizada, constitucionalmente sancionada, que pretende representar el fraccionamiento propio de cualquier sociedad política.

Resulta pertinente recordar que la historia de los partidos políticos está ligada a la idea de la democracia, de la extensión del sufragio y de la participación popular en el proceso de toma de decisiones, de tal manera que han pasado a desempeñar una función de importancia considerable en la legitimación del sistema político. A ella se atribuye la responsabilidad de la creación de un electorado activo, de la solución pacífica de los conflictos políticos, del reclutamiento de las élites políticas, de la elaboración de programas de acción alternativos, de la socialización y del establecimiento de símbolos políticos comunes.

Dentro de la estructura formal mexicana se ha insistido en mantener la existencia de un régimen de partidos que interviene en el proceso político en tanto que factor de estabilización y legitimación del sistema. Si bien en términos generales son ésas las funciones de cual-

* Publicado originalmente en *Foro Internacional*, vol. xiv-3, núm. 55, enero-marzo de 1974, pp. 352-374.

quier régimen de partidos, en el caso mexicano están perfectamente delimitadas de acuerdo con las exigencias de permanencia del sistema.

Las peculiaridades que presenta el régimen de partidos mexicano están determinadas por la naturaleza autoritaria del sistema político y por su deseo de mantener una estructura formal de competencia política. De entre los tres partidos que conforman la oposición electoral,¹ el Partido Acción Nacional ofrece un indiscutible interés en la medida en que se ajusta a los patrones de comportamiento que le brinda el sistema, al mismo tiempo que hasta ahora se presenta como una de las pocas alternativas establecidas para expresar el descontento contra el régimen dentro de la vía de la legalidad.

El PAN es un partido que se ajusta a los patrones de comportamiento formal que le ofrece el sistema; su funcionalidad dentro del mismo puede examinarse desde varios puntos de vista. No obstante, hemos considerado particularmente atractivo el análisis y la presentación de su doctrina como un elemento importante en la determinación de sus formas de lucha política. Ahora bien, estas formas se sitúan dentro del esquema del proceso mexicano y, por lo tanto, contribuyen a su preservación.

EL RÉGIMEN DE PARTIDOS EN MÉXICO

Es ya un lugar común la afirmación de que el sistema partidista mexicano es un ejemplo *sui generis* de organización política. Sin ajustarse precisamente a los lineamientos de las democracias occidentales, sus peculiares características lo apartan de las pautas generales de desarrollo político de los países subdesarrollados.

Nos encontramos ante una estructura de partido dominante que por momentos parece confundirse con el aparato estatal, que monopoliza la responsabilidad electoral, al tiempo que fomenta la existencia de una oposición en términos sorprendentemente dispares. Se trata de un mo-

¹ En 1974, año de publicación de este artículo, los partidos de oposición además del PAN eran el Partido Popular Socialista, PPS (1948) y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, PARM (1954).

delo en el que la estabilidad política y el crecimiento económico del país se han obtenido sin que se haya optado por “ninguna de las dos fórmulas políticas consagradas: la dictadura o la democracia occidental”.²

En el sistema político mexicano coexisten, las más de las veces en perfecta armonía, las dos piezas clave que subraya Daniel Cosío Villegas: un Poder Ejecutivo con facultades de amplitud extraordinaria y un partido oficial. La vinculación entre ellas se da de tal manera que puede afirmarse que ambas constituyen un bloque en el que las unidades trabajan de manera coordinada sin llegar a abarcarse mutuamente.

A pesar de que la Constitución política fue delineada siguiendo los cánones de la democracia occidental de competencia política, división de poderes y autonomía federal, “la dinámica política, la institucionalización del cambio, los equilibrios y controles, la concentración y distribución del poder hacen de los modelos clásicos elementos simbólicos que sancionan y recubren una realidad distinta”.³ El Poder Legislativo está dominado por la mayoría del partido oficial y el Poder Judicial está lejos de ser independiente. Por otra parte, funcionan tres partidos políticos que buscan representar a una oposición que preste sentido a las funciones electorales del sistema y, en conjunto, contribuir al desarrollo político del país dentro de límites muy precisos. El peso del PRI, sin embargo, parece restar significación a la existencia de estas organizaciones, puesto que en el partido oficial se reúne el grueso de las fuerzas sociales políticamente participantes o, por lo menos, actúan por su conducto para ejercer su influencia sobre el proceso político.

EL PARTIDO DOMINANTE

Desde su fundación, el partido dominante se constituyó en una fuente decisiva de legitimidad del régimen político que incorporó las fuerzas y los objetivos nacidos de la Revolución de 1910. La razón última

² Daniel Cosío Villegas, *El sistema político mexicano*, México, Cuadernos de Joaquín Mortiz, 1972, p. 20.

³ Pablo González Casanova, *La democracia en México*, México, Ediciones Era, 1965, p. 11.

de su creación respondía a la necesidad de resolver pacíficamente las pugnas que se suscitaban en el interior del grupo revolucionario y disciplinar la transmisión periódica del poder. Estas circunstancias determinaron la estrecha identificación que se estableció entre la organización, nacida en 1929 bajo el nombre de Partido Nacional Revolucionario, y el régimen que intentaba institucionalizar. Además de la reducción de los conflictos y las tensiones, el partido tenía como objetivo la preservación en el poder de la nueva élite política mediante la unificación de los muchos grupos que se disputaban las primicias del éxito revolucionario.

La concentración del poder que se proponía su fundador, el general Calles, con esta iniciativa coincidía con las ideas corporatistas de la época y con la necesidad de crear una organización que legitimara dicha centralización. De acuerdo con Samuel Huntington,⁴ los partidos autoritarios surgen como respuesta a una crisis de modernización política en la que se presenta la necesidad de introducir, disciplinar y legitimar a nuevos actores en el sistema. Tal legitimación se hará con base en la idea de la participación popular en la elección de los gobernantes. De esta manera el partido se convierte en el agente por medio del cual el sistema como un todo renueva periódicamente su legitimidad.

La continuidad que se expresa en el partido oficial desempeña una función integradora y de institucionalización que pretende enmarcar un pluralismo limitado. Desde un principio se buscó superar el personalismo y reemplazarlo por “instituciones”, entre las que destacaría el partido con el fin de asegurar la permanencia de la estructura política recién establecida. Ello implicaba una buena dosis de flexibilidad y capacidad de transacción para absorber las potencialidades de oposición disfuncional o el poder para reprimirlas.

El origen mismo del partido dominante ha determinado en gran parte su comportamiento posterior. Dado que surgió como instrumento de institucionalización de un sistema político cuyas bases ya habían

⁴ Samuel P. Huntington, *Political order in changing societies*, Londres y New Haven, Yale University Press, 1968, p. 51.

sido establecidas, la naturaleza funcional de la vinculación entre los dos elementos implicaba que la labor del partido consistiría en la preservación de las nascentes instituciones, porque la prolongación del sistema conllevaría la propia supervivencia.

En esta relación simbiótica ha llegado a afirmarse que el PRI no pasa de ser una dependencia más del Poder Ejecutivo, entre otras cosas porque sus fondos provienen de fuentes gubernamentales y el presidente de la República es al mismo tiempo el jefe supremo de la organización.⁵ Esta relación de dependencia del partido con respecto al sistema se expresa, entre otros, en el hecho de que los cambios que se han operado en el primero a lo largo de su historia responden a cambios que ha sufrido el sistema. “La historia del PRI, en cierto modo, es el examen permanente y realista de sus procedimientos anteriores a las exigencias del partido y a la evolución cívica del país”.⁶ Por otra parte se atribuye a su función de reductor de conflictos políticos parte del éxito del “modelo mexicano”: “la eficacia del sistema mexicano ha dependido, en mayor medida que de ningún factor, de la flexibilidad que ha demostrado para mantener la primacía de lo específicamente político”.⁷

Dentro de la gama de funciones que ejercen los partidos en el sistema político, al PRI le correspondería fundamentalmente la de legitimación-estabilización, dado que el sistema se sirve de él para defenderse e imponer resistencia tanto a las tensiones centrífugas como a sus procesos internos de combate político, dentro de un marco de pluralismo limitado. Pero desde luego que no es el único instrumento con que se cuenta para ello. De hecho estas necesidades pueden ser satisfechas de manera suficiente cuando las amenazas al buen funciona-

⁵ El mejor exponente de esta tesis es Manuel Moreno Sánchez, en *Crisis política de México*, México, Extemporáneos, 1970.

⁶ Vicente Fuentes Díaz, *Los partidos políticos en México*, México, Altiplano, 3a. ed., 1972, p. 229.

⁷ Porfirio Muñoz Ledo, “México: el cambio se ha iniciado, el país no será ya más el mismo”, ponencia pronunciada ante el Simposio sobre América Latina, celebrado en la Universidad de Texas, Austin, el 27 de abril de 1971, publicada en *El Día*, 3 de mayo de 1971.

miento del sistema son apenas latentes, indirectas o parciales. La satisfacción de las mismas quedará determinada por la voluntad de los dirigentes y por las rigideces ideológicas.

Puede afirmarse que la actividad del PRI ha condicionado en mucho la vida política del país y que, en términos generales, las campañas electorales se conciben en función de él y, desde luego, de su papel en tanto que legitimador del sistema. Entre sus muchas contribuciones se cuenta la primordial de socialización. De la misma manera que subraya la importancia de la participación popular en las urnas electorales, multiplica los mítines, las asambleas populares y los congresos.

Dentro de este esquema de pluralismo limitado en el que se desarrolla la vida política en México, se manifiestan otras formas permitidas de articulación de las demandas al margen del partido oficial. Resulta útil señalar que este último jamás ha adoptado una doctrina de partido único, ni ha dado un carácter oficial al monopolio del poder más bien ha insistido explícitamente en la idea de que mantiene una filosofía pluralista del Estado.⁸

Lo que Maurice Duverger llama la tendencia natural hacia el pluralismo, en el caso mexicano ha sido canalizada a través de dos tipos de agencias. Por una parte, los grupos de presión que *grosso modo* representan a la iniciativa privada, y por la otra, las distintas organizaciones partidistas, sobre todo el PRI.⁹ Ello supone la actividad institucionalmente aceptada de grupos minoritarios que pretenden participar de manera efectiva en el proceso de la toma de decisiones.

⁸ Al hablar del Partido Revolucionario Popular de Turquía, Duverger señala que se insistía en mantener una apariencia democrática: "El partido único no deducía su derecho a gobernar de su carácter de élite política o de 'avanzada de clase obrera', o de la naturaleza providencial de su jefe, sino de la mayoría que obtenía en las elecciones". Maurice Duverger, *Los partidos políticos*, México, Fondo de Cultura Económica, 3a. ed., 1957, p. 304.

⁹ "La democracia descansa en el reconocimiento de la existencia de una variedad natural de posiciones ideológicas y prácticas en lo concerniente a la orientación de los asuntos públicos [...] Los partidos políticos deben ser los medios para la acción de esa pluralidad consustancial a la sociedad libre". *Iniciativa de Ley Federal Electoral*, presentada por el presidente Luis Echeverría el 25 de octubre de 1972. *La reforma política del presidente Echeverría*, México, Cultura, Ciencia y Política, 1973, p. 107.

Tal vez sea necesario señalar que la existencia de estas organizaciones no es sino un elemento más dentro del afán de representar un pluralismo social enmascarado que no se expresa en un pluralismo político real.

La acción de los grupos de presión sobre las decisiones del poder público se manifiesta de hecho con mayor intensidad que la de los tres partidos políticos de oposición PAN, PPS y PARM. Es sabido que los empresarios y financieros nacionales constituyen un factor real de poder al que el Estado se ve obligado a hacer copartícipe del proceso de decisiones. La estructura económica mixta del país ha determinado que una de las exigencias funcionales del sistema sea la satisfacción de las necesidades de este sector. La Confederación Nacional de Cámaras Industriales, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, la Confederación Patronal de la República Mexicana y la Asociación Nacional Bancaria ejercen una influencia considerable sobre las decisiones gubernamentales. En más de una ocasión han hecho que se modifiquen en su favor iniciativas legislativas que afectan directa o indirectamente sus intereses. Desde 1940 puede hablarse de una creciente comunidad de objetivos entre el sector privado y el público. Su influencia se refleja en el contenido de todas aquellas políticas especiales adoptadas para promover el crecimiento económico en México.¹⁰

Como ya hemos mencionado, existe un indudable interés por parte de los dirigentes del sistema por mantener una apariencia democrática de pluralismo político en el plano electoral, de ahí que tolere y en ocasiones fomente la existencia de partidos de oposición. A este respecto podemos establecer una distinción entre lo que llamaríamos oposición leal y una oposición simulada. Aun cuando el matiz entre las dos puede pasar inadvertido nos atrevemos a sugerir que existe una diferencia entre el PPS y el PARM como “adláteres del PRI”, y el PAN que ha dado en considerarse la única oposición organizada independiente, aun cuando “como no ha ganado ni está ganando suficien-

¹⁰ Roger D. Hansen, *The politics of Mexican development*, Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1971, p. 205.

te fuerza es difícil esperar confiadamente que en un futuro previsible llegue a ser un muro de contención del gobierno y de su partido”.¹¹

El hecho de que exista la idea más o menos generalizada de que los primeros dos partidos están subvencionados por el PRI se debe no sólo a que el PAN nunca ha sumado sus candidatos electorales a las fórmulas priistas, a diferencia del PARM y del PPS; la identificación de estos últimos con el partido oficial podría en cierto modo deberse a su origen mismo: ambas organizaciones nacieron a partir del desmembramiento de grupos vinculados con la élite revolucionaria. Por otra parte su actividad en tanto que organizaciones partidistas se limita a los periodos de elección.

LA OPOSICIÓN LEAL: EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

La “oposición leal” podría definirse como una fuerza políticamente organizada que vindica los intereses de una minoría participante, pero dentro de los límites del marco institucional dentro del cual actúa. Al aceptar las reglas establecidas del juego político nunca desafía su funcionamiento ni las bases constitucionales del sistema; tácita y explícitamente contribuye a su estabilidad y legitimación.

El Partido Acción Nacional surgió en 1939 como una respuesta a las políticas socializantes del cardenismo respecto a la educación, la familia y la Iglesia y a la economía en general. En sus orígenes advertimos el deseo de participación política de grupos que se sintieron desplazados por la Revolución.

Desde su fundación hasta la fecha ha tendido a considerarse el representante de los grupos más conservadores del país. Sin embargo, esta caracterización no se debe únicamente al origen y a la ideología apenas conocida del partido, sino también a la acción del PRI en este sentido.

El conflicto político puede resumirse en dos tendencias generales, es decir, toda política supone dos tipos de soluciones: una, que introdu-

¹¹ Cosío Villegas, *op. cit.*, p. 69.

ce un cambio sustancial con respecto a los patrones de comportamiento anterior, y la otra que defiende estos últimos. En el caso mexicano, el PRI, entre los muchos mecanismos de los que se sirve en materia de propaganda para insistir en su carácter revolucionario, ha subrayado la imagen del PAN como representante de la reacción. Sobra decir que la parquedad de los recursos con que cuenta este último le impide en buena medida proyectar por sí mismo sus propios postulados ideológicos o programáticos, independientemente de la justicia de tal imagen.

En las sociedades que presentan fuertes diferencias socioeconómicas y políticas internas, el terreno es propicio al conflicto. Los grupos que en estos casos anhelan y no ocupan una posición de poder representan una amenaza para la estabilidad del sistema, la cual también depende de las fuerzas sociales que operan fuera de él. Estos grupos políticamente desfavorecidos pueden recibir dos tipos de respuesta a sus demandas de participación: la represión o la integración mediante la posibilidad de defenderse del régimen que los excluye utilizando los canales que el sistema brinda para el ejercicio de una función *tribunicia*.¹²

Por esta vía se satisface, aunque parcialmente, una de las exigencias funcionales de una sociedad heterogénea, al organizar dentro de las estructuras del sistema a las minorías que de no tener esta oportunidad podrían optar por un camino menos efectivo para la estabilidad del sistema. Es una manera de canalizar una fuente potencial de conflicto, en virtud de que neutraliza el aspecto amenazante que puede adquirir la no participación.

Los partidos que aceptan cumplir con esta función ven en ella la ventaja que les proporciona un terreno favorable a su crecimiento por medio de la explotación del descontento; pero, por otra parte, se en-

¹² Georges Lavau propone el concepto de "función tribunicia" para caracterizar organizaciones que representan a grupos desfavorecidos, a quienes les proporcionan un medio para defenderse del sistema. El origen del concepto es el tribuno que hablaba en nombre de la plebe en la república romana. Véase Georges Lavau, "Partis et systèmes politiques: interactions et fonctions", *Canadian Journal of Political Science/Revue Canadienne de Science Politique*, II, núm. 1, marzo de 1969, pp. 18-44, pp. 38-41.

cuentran en una situación en la que a cambio de su participación deben ceñirse a las exigencias del mismo sistema. Además de que se ven sujetos a una clientela inestable, quedan excluidos prolongada si no permanentemente del poder, dado que no representan una alternativa real para el reemplazo de la autoridad política.

Acción Nacional ejerce en este sentido una función tribunicia limitada. En principio, un sistema político debe ofrecer programas alternativos de cambio; el PAN pretende ser una alternativa con respecto al PRI y con ello contribuye a legitimar y estabilizar el sistema, por lo menos en lo que se refiere a algunos de sus elementos más significativos. Como ejemplo podríamos citar el hecho de que existe una tendencia localizada por parte de los votantes urbanos a manifestar su descontento con el régimen votando por este partido.

Las repetidas victorias electorales del PRI han obstruido el fortalecimiento del régimen de partidos y han provocado un alejamiento de la opinión pública. De hecho, la estructura de partido dominante resta importancia electoral y política a la influencia que los partidos de oposición puedan ejercer sobre grupos sociales y culturales con una clara conciencia de su identidad.¹³

La funcionalidad de Acción Nacional en el sistema mexicano reside en que no representa una alternativa real de poder y, por lo tanto, no constituye una amenaza para el monopolio político del partido oficial. La existencia misma de una oposición cumple uno más de los requisitos de legitimación, su actividad como tal se lleva a cabo en políticas específicas. Para Acción Nacional los males que aquejan al país son producto de los dirigentes que no han interpretado correctamente la letra constitucional, de ahí la lealtad de su acción frente al sistema. Lleva a cabo la función de crítica política sin constituirse en relevo político.

¹³ "La fuerza exigua de un sistema de partidos en México se percibe con claridad en la proporción de votos que logran registrar los candidatos a la Presidencia de la República". Y que nunca ha superado 25% de la votación. González Casanova, *op. cit.*, p. 12.

EL PROCESO ELECTORAL COMO LEGITIMADOR DEL RÉGIMEN

Como ya hemos apuntado, una fuente fundamental de legitimidad del sistema político mexicano se halla en la actividad electoral. No obstante, la hegemonía del PRI y la consecuente debilidad del régimen de partidos así como la aparente ineffectividad de la actividad de las cámaras legislativas, han tendido a anestesiar en el electorado el deseo de recurrir a las urnas. Ello se ha manifestado en un marcado abstencionismo (de 22 millones de ciudadanos empadronados en 1970 ocho millones se abstuvieron de votar, proporción excepcionalmente elevada en un país donde el voto es obligatorio)¹⁴ y en el recurso a vías extraconstitucionales para expresar el descontento contra el régimen imperante.

Esta situación ha llevado al sistema a tratar de fortalecer y acentuar la importancia de los canales legales de participación. A las intensas campañas contra la abstención se suma un esfuerzo, ya periódico, por inspirar aliento artificial a la agónica oposición organizada.

El 21 de diciembre de 1962 el presidente López Mateos presentó ante el Congreso de la Unión un proyecto de enmienda al artículo 54 constitucional tendiente a la creación de los “diputados de partido”, haciendo gala de flexibilidad para incluir a las minorías políticas dentro del proceso nacional, “sin desfigurar las instituciones firmemente arraigadas en la conciencia nacional”.¹⁵

Se instauró entonces un nuevo sistema de representación en la Cámara de Diputados que se ha llamado mixto y que consiste en, por una parte, mantener la regla de mayoría para el partido dominante y, por otra, aplicar la norma de representación proporcional a la minoría opositora. Y aunque la reforma resultó efectiva en la medida en que en la subsiguiente elección los partidos minoritarios contaron con una representación más amplia (35 diputados), los resultados no fueron ha-

¹⁴ Rafael Segovia, “La reforma política: el Ejecutivo federal, el PRI y las elecciones de 1973”, *Foro Internacional*, vol. XIV-3, núm. 55, enero-marzo de 1974, pp. 305-330.

¹⁵ Mario Moya Palencia, *La reforma electoral*, México, Ediciones Plataforma, 1964, p. 115.

lagadores. El afán legitimador del sistema, así como la endémica debilidad de la oposición partidista se han traducido en el recurso periódico a esta medida para fortalecer el juego democrático.

En 1971, dadas las dificultades que encontraba el régimen para responder a las demandas de una creciente clase media se introdujo una nueva reforma al artículo 54.

Si bien la primera enmienda establece por primera vez a la oposición en términos constitucionales y reconoce que los partidos minoritarios podrían alcanzar un número de 20 diputados entre los de mayoría y los que obtuvieran por cada 2.5% de la votación total en el país, la segunda reforma amplía esas posibilidades. En su fracción I estipula:

Todo Partido Político Nacional, al obtener el uno y medio por ciento de la votación total en el país, en la elección de diputados respectiva, tendrá derecho a que se acrediten, de sus candidatos, a cinco diputados y a uno más hasta veinticinco como máximo, por cada medio por ciento más de los votos obtenidos.

Esta norma se aplicaría a la minoría, puesto que sólo la fracción II del mismo artículo afirma que si un partido logra la mayoría en 25 o más distritos no tendría derecho a que se le acreditaran este género de legisladores. Por lo demás, la oposición contaría únicamente con esa cifra que suma los diputados elegidos por mayoría y por razón de porcentaje.

Por otra parte, la oposición en México encuentra no pocas dificultades para su organización dentro de las vías establecidas por el sistema. La Ley Federal Electoral del 5 de enero de 1973 mantiene a este respecto las estipulaciones de la anterior Ley Electoral del 4 de diciembre de 1951, en la que se define a los partidos políticos como asociaciones con fines electorales, responsables de la educación cívica y de la orientación política del electorado, subrayando con ello su papel de integradores dentro del sistema más que de relevo político.

En cambio, modifica las exigencias numéricas para el reconocimiento oficial de un partido: sólo podrán participar en la contienda electoral las organizaciones de esta naturaleza que hayan obtenido el

registro correspondiente en la Secretaría de Gobernación y para lograrlo se hace necesario, conforme lo establece la fracción II del artículo 23 de la mencionada ley, presentar listas nominales de afiliados que sumen como mínimo 65 000 (la ley anterior señalaba un mínimo de 30 000) en las dos terceras partes de las entidades federativas, incluyendo el nombre, número de credencial de elector y firma de cada uno de ellos. Por lo demás, en su declaración de principios deben explicitar su apego a los principios constitucionales y su compromiso a respetar las leyes e instituciones existentes.

El control sobre la oposición organizada se expresa igualmente en la fracción III del artículo 20 de la misma ley, que excluye del proceso a aquellas organizaciones que dependan de partidos políticos extranjeros o de asociaciones internacionales, con una referencia implícita al movimiento comunista internacional o incluso a la Democracia Cristiana Internacional.

Pero volviendo al problema de la necesidad del sistema de legitimación, aparentemente las medidas legislativas no han podido responder a la ampliación de la base de apoyo que se ha perseguido en los últimos diez años. En las elecciones presidenciales de 1970 el total de votos emitidos fue de 13 354 987, de los cuales 79.8% correspondió al PRI, 13.6% al PAN, 1.35% al PPS y 0.81% al PARM. Si comparamos estos resultados con los de la elección de diputados de 1961 encontramos que a pesar de los esfuerzos orientados hacia la intensificación de la actividad electoral, el aumento no es considerable. En ese año el total de votos fue de 6 845 826, de esa cifra el PRI obtuvo 90.2%, el PAN 7.5%, el PPS 0.95%, PARM 0.49%, y el Partido Nacionalista Mexicano, PNM, que ha desaparecido, 0.27%. Vemos, pues, que si por una parte se duplica el número de votos emitidos, el PAN apenas dobla su porcentaje, mientras que el PRI sufre una disminución de 10%. Este último fenómeno parece más atribuible a un elevado 37% de abstencionistas que se registró ese año que a un fortalecimiento real de la oposición.¹⁶

¹⁶ Cifras tomadas, para 1961, de Moya Palencia, *op. cit.*, p. 182; para 1970, de la comparecencia del secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, 18 de noviembre de 1971, cit. en *La reforma política del presidente Echeverría*, *op. cit.*, pp. 19-50.

Todo parece indicar que la solución al problema de la participación que busca encauzar el sistema debe hallarse recurriendo a otros mecanismos:

Un Ejecutivo fuerte en la ley y más vigorizado en la práctica ha dado como resultado el menoscabamiento del otro poder elegido por el pueblo, el Legislativo. ¿Importa acudir a las urnas para designar diputados y senadores, si éstos han abdicado de muchas de sus facultades?¹⁷

Para las elecciones legislativas de 1973 se realizó una intensa campaña contra la abstención, al mismo tiempo que se desarrollaron actividades de toda índole orientadas a motivar al electorado. Los partidos políticos pudieron presentar sus programas de acción en todos los medios de difusión y se trató de crear un clima favorable a la movilización electoral.

El propósito era fomentar un desarrollo político, entendido éste como un proceso continuo de

respuestas afortunadas a nuevas demandas y una intención de apertura hacia la participación y el diálogo recurriendo a la terminología en boga, y se busca que el modelo político se desplace de los métodos caracterizados por la reconciliación hacia la movilización.¹⁸

Se pretendía mantener la estabilidad del sistema ampliando su base de legitimidad en las urnas electorales, es decir, dentro de los cauces legalmente definidos. Acción Nacional se apresuró a sumarse a los esfuerzos en esta dirección, viendo en ello no únicamente la realización de uno de sus objetivos enunciados, el desarrollo de la conciencia cívica, sino también la posibilidad de capitalizar en su favor el descontento hacia el régimen. De hecho, éste fue uno de los argumentos más fuertes que se esgrimieron en favor de su participación en las elecciones.

¹⁷ Miguel Ángel Granados Chapa, "Vida pública que no lo es. Razones de la abstención", *Excélsior*, 2 de febrero de 1973.

¹⁸ Muñoz Ledo, *op. cit.*

nes. En una entrevista de prensa celebrada el 30 de abril de 1973, el líder panista, José Ángel Conchello, aseveró que es una necesidad que Acción Nacional continúe en la lucha política electoral “como la vía más adecuada” para evitar que se opte por el camino de la violencia para lograr los cambios necesarios.

LA FUNCIONALIDAD DE LA LEALTAD PANISTA

La plataforma política y social del Partido Acción Nacional para el periodo 1967-1970 se inicia con la siguiente afirmación:

La lucha política mantenida desde hace 28 años por Acción Nacional se orienta a lograr el cumplimiento de los postulados políticos y de los principios sociales de auténtica raigambre democrática que contiene la Constitución de 1917, que en buena parte se mantienen incumplidos, o que han sido desviados o deformados por los gobiernos que desde entonces han dirigido al país.

Esto significa que Acción Nacional se sitúa dentro de las exigencias impuestas por la Ley Electoral en cuanto a lo que a la constitucionalidad de sus postulados se refiere, y al mismo tiempo pretende responder a la imagen contrarrevolucionaria que del partido se tiene. Su crítica, su oposición, se define en términos de políticas y políticos específicos con base en el supuesto fundamental de que es necesario que el régimen de hecho se adecúe al de derecho. El partido se define a sí mismo como un “grupo estrictamente respetuoso de las formas legales”, que se ha propuesto coadyuvar a la liquidación del monopolio priista, pero adoptando sus mismas reglas. Esta actitud lo ha llevado a asumir el papel de núcleo minoritario que mantiene una crítica vigilante de la política gubernamental, que denuncia sus abusos y desvíos pero siempre dentro de los límites que le impone el régimen.

Su actividad está regida por este condicionamiento al cual responde a partir de los postulados del Occidente cristiano, al que con-

sidera el forjador de sus ideales políticos: "Su paradigma de la vida democrática encuentra su base en el modelo europeo del juego de partidos".¹⁹

Para los ideólogos del partido todos los problemas del país tienen raíces políticas, por lo tanto, su solución dependerá de la rehabilitación política. A partir de este supuesto su actividad se orienta fundamentalmente hacia la formación de una conciencia ciudadana, lo cual conlleva la necesidad de formular una plataforma ideológica articulada más que un programa de acción. Esto sugiere que en su escala de prioridades el partido ha desplazado su función como potencial alternativa gubernamental en todo el país, para ceder terreno a la función de movilización electoral del partido. El significado de esta decisión sugiere la precedencia de los principios filosóficos con respecto a las soluciones pragmáticas: "En todo caso consideramos que el análisis de filosofía social debe preceder a la adhesión a aplicaciones más determinadas de los principios básicos".²⁰

La pobre perspectiva que se ofrece a Acción Nacional de algún día asumir las responsabilidades gubernamentales ha determinado en gran parte su énfasis sobre la necesidad de una ideología explícita, al mismo tiempo que ello responde a sus objetivos de educación política. La formación de un electorado activo es su mayor preocupación que, por otra parte, contribuye a la imagen pluralista del Estado. Los problemas que parecen atañerle más directamente se refieren a la realización de una auténtica vida democrática en el país por medio de la corrección, fundamentalmente, del proceso electoral:

Lo cierto es [...] que en sus treinta y dos años de existencia el PAN no ha logrado presentar un programa que sea diferente y más atractivo que el que se arrogan el gobierno y el PRI.²¹

¹⁹ Antonio Delhumeau, *México: realidad política de sus partidos*, México, Instituto Mexicano de Estudios Políticos, 1970, p. 172.

²⁰ Efraín González Morfín, "Solidarismo", ponencia presentada ante la XXIII Convención Nacional del PAN, 4-5 de febrero de 1973.

²¹ Cosío Villegas, *op. cit.*, p. 69.

De hecho, el partido formula su programa a expensas de los errores del gobierno.

La iniciativa para fundar Acción Nacional nació bajo la influencia de la presión que la política cardenista empezó a ejercer sobre algunos grupos urbanos que sintieron amenazados sus intereses por los principios anticlericales y la tendencia socialista del gobierno. El clima parecía favorable para la formación de un partido que, con el apoyo de los elementos conservadores de la población, respondiera al acelerado proceso de monopolización del poder que entre tanto efectuaba el partido oficial entonces llamado Partido de la Revolución Mexicana (PRM). No obstante, el tono de la política progresista que caracterizó al cardenismo perdió su vigor con Ávila Camacho y

con Miguel Alemán el giro conservador se completó. Entonces la Iglesia y [esa] gente adinerada dieron pronto por cierta la posibilidad de entenderse directamente con semejantes gobiernos y, en consecuencia, juzgaron inútil el riesgo de respaldar, aun de trasmano, a un partido que por definición iba a oponerse al gobierno.²²

Esta decisión determinaría en buena medida la ineffectividad del PAN y su incapacidad para lograr el apoyo de las fuerzas que inicialmente hubieran podido apuntalar su acción dentro del proceso político.

En el momento de su fundación el partido se adjudicó el deber de restaurar los principios democráticos en nombre de los intereses de la nación, mediante la formación de la conciencia ciudadana y una función electoral efectiva. Al proponerse desempeñar esta función el partido se basaba en una concepción moralista de la política y del Estado, que postula el imperio de la ley moral sobre la ley positiva, sobre la sociedad misma o cualquier otra forma de poder humano.²³

Acción Nacional, coherente con esta posición, recurrió al derecho y a rígidos principios universales para respaldar su acción. Mientras que

²² *Ibid.*, p. 70.

²³ Efraín González Luna, *La democracia en México*, México, Editorial Jus, 1962, p. 18.

el partido oficial contaba con el apoyo del ejército, el PAN, al optar por la vía pacífica y tradicional de participación, exageró la importancia dentro de su estructura de los juristas y del orden constitucional.

El 14 de septiembre de 1939 su fundador, Manuel Gómez Morín, pronunció un discurso en el que sostenía que la decisión de forjar un nuevo partido político había sido producto de la “repugnancia” que el desorden provocado por las medidas gubernamentales despertaba en un grupo “que no tiene el apetito de un triunfo próximo que, inclusive, no está preparado ni para las responsabilidades de ese triunfo”.²⁴

Es un “sentido del deber” y no la política como profesión lo que impulsaba a ese grupo de universitarios, primeramente unidos por lazos de carácter personal, a buscar la participación. Los nacientes panistas pretendieron imprimir un sentido de trascendencia casi religiosa a la actividad política, misma que a sus ojos la praxis gubernamental había hecho a un lado. Se trataba de una “cruzada” que se proponía salvar al individuo en nombre de valores universales. El país parecía carente de una clara conciencia de su trayectoria, Acción Nacional quiso ser “el instrumento de su regeneración en el sentido biológico del término”.²⁵

Es justo en el momento en que los derechos derivados de la primacía del individuo frente al Estado, tales como la libertad de enseñanza, el derecho a la propiedad y la libertad de creencia, parecían ser impugnados por la autoridad gubernamental que se hacía necesario brindar a la ciudadanía la posibilidad de responder legalmente a esta “provocación”.

México era para aquellos jóvenes un país extraviado, prisionero, como en 1917, de un gobierno sin escrúpulos (con ansias de poder y un claro desprecio por el derecho) nacido de un acto espurio, de la desidia de los electores, de la renuncia a ejercer un derecho constitucional, de la confabulación de los perversos.²⁶

²⁴ Manuel Gómez Morín, *Diez años de México*, México, Editorial Jus, 1950, p. 15.

²⁵ Efraín González Luna, en Gómez Morín, *op. cit.*, p. xii.

²⁶ Gastón García Cantú, *El pensamiento de la reacción mexicana. Historia documental, 1810-1962*, México, Empresas Editoriales, 1965, p. 976.

LA DOCTRINA DE ACCIÓN NACIONAL

Ya ha quedado señalada la urgencia del PAN por formular una plataforma ideológica. Como base de ella encontramos que el principio y fundamento de la sociedad es la persona y el bien común la finalidad del Estado. La influencia filosófica más inmediata que en este terreno encontramos es la del personalismo cristiano de Jacques Maritain. Para él, como para los ideólogos panistas, el hombre es una persona,²⁷ no sólo un individuo aislado o el siervo de cualquier falsa trascendencia terrenal; como tal el hombre está vinculado a Dios y en su camino hacia él se realiza la expansión de todas sus posibilidades. Subyace, pues, la concepción de que toda actividad humana tiene un sentido misionero que trasciende los límites puramente materiales.

“Lo que nos induce, nos obliga a vivir en sociedad es un factor de índole espiritual. El vínculo social es de orden espiritual”,²⁸ dice Efraín González Luna. El quehacer político tiene una justificación que es lo que en la XXIII Convención Nacional del partido se definió como “solidarismo”. Esta doctrina sostiene la esencia moral y jurídica del Estado al que se considera la institución fundamental para la realización de las potencialidades humanas. Por medio de ella podrá alcanzarse el bien común que consiste en la realización individual en el seno de la sociedad.

Acción Nacional insiste en que esta posición es un punto intermedio entre el individualismo a ultranza del siglo XIX y el “socialismo totalitario y burocrático”. El partido no se presenta como el portavoz de un grupo en particular, sino como el promotor de proyectos que engloban a la sociedad como un todo, en el reconocimiento de su naturaleza pluralista y en la búsqueda de consenso social.

La ausencia de formación política del pueblo mexicano lo lleva a desertar de sus derechos políticos, “aquellos que los ciudadanos de un

²⁷ “Nadie puede ser considerado en las relaciones de convivencia como un simple instrumento de ‘personas o grupos’ —incluido el Estado— con menoscabo de sus libertades espirituales y de su destino personal, temporal o eterno”, Adolfo Christlieb Ibarrola, *La oposición*, México, Ediciones de Acción Nacional, 1965, p. 66.

²⁸ Efraín González Luna, *op. cit.*, p. 11.

país tienen para intervenir en el gobierno de la comunidad política de la que forman parte”.²⁹ Se hace entonces necesario delimitar el ámbito de competencia del Estado, en el que el reconocimiento de esos derechos es apenas teórico, con el fin de que no invada el terreno de la libertad individual: la de enseñanza, la de conciencia, la de propiedad, entre otras.

Hemos mencionado que Acción Nacional apareció como respuesta a las tendencias socialistas del gobierno del general Cárdenas. En 1934 los postulados constitucionales referentes a la tierra y a la nacionalización empezaron a realizarse. Surgió entonces el temor de que fueran igualmente aplicadas las disposiciones constitucionales en materia de educación. La implantación de la educación socialista y el control por parte del Estado de las escuelas normales se consideraron como los síntomas evidentes de que el sistema estaba definitivamente orientado a apoderarse de las conciencias.³⁰ De esta manera, la discusión en torno al artículo 3º constitucional se convirtió en una de las reivindicaciones fundamentales del partido:

Alrededor de este principio se integró Acción Nacional, incorporándolo como motivo de lucha y bandera del Partido, aunque integró también otros postulados en defensa de derechos a la propiedad en relación con el problema agrario y en general contra la intervención del Estado en la economía.³¹

La libertad de enseñanza implica la libertad de conciencia y ello nos conduce directamente al problema de las relaciones entre la Iglesia

²⁹ Adolfo Christlieb Ibarrola, *op. cit.*, p. 37.

³⁰ En un discurso pronunciado en Guadalajara en 1934, el general Calles afirmó: “Es necesario que entremos al nuevo periodo de la revolución que yo llamaría el periodo revolucionario psicológico [...] debemos entrar y apoderarnos de las conciencias de la niñez, de las conciencias de la juventud, porque son y deben pertenecer a la revolución [...] la revolución tiene el deber imprescindible de apoderarse de las conciencias, de desterrar los prejuicios y de formar la nueva alma nacional”. Tomado de Adolfo Christlieb Ibarrola, “El texto único y obligatorio”, en García Cantú, *op. cit.*, p. 993.

³¹ Delhumeau, *op. cit.*, p. 166.

y el Estado. La religiosidad de los principios del partido reside en el valor que le confiere a la persona humana como criatura de Dios, Ser, ante el que —sostiene— debe rendir cuentas de sus actos. Podemos afirmar que los tres elementos característicos de la doctrina panista son: la identificación con los principios de la doctrina social de la Iglesia,³² una teoría del Estado basada en la realización de los valores personales y una concepción moralista de la actividad política.

Si bien el PAN reconoce que sus valores doctrinales se inspiran en la doctrina occidental cristiana, por otra parte niega insistentemente la acusación que se le hace en cuanto a que se trata de una organización de carácter confesional. No obstante, en sus declaraciones revela la importancia que atribuye a la participación de la Iglesia en tanto que institución social. Respecto a su intervención en la vida política del país el líder juvenil del partido Héctor González Schmal afirmó:

Creo que su misión no es la de participar de manera directa en política, aunque sí tiene[n] la responsabilidad de orientar a sus fieles en el orden político para despertarles la conciencia de participar como ciudadanos en la vida de su pueblo.³³

El tipo de intervención de la Iglesia que en esta declaración se sugiere es mucho mayor que la permitida en las leyes mexicanas, dado que le confiere el papel de orientación política que en principio no debe desempeñar.

³² En el libro de Delhumeau aparecen cuadros muy completos que comparan las encíclicas papales y las declaraciones de los ideólogos del partido, entre las que se encuentran grandes coincidencias. Por otra parte, el líder juvenil panista Héctor González Schmal sostuvo que su apoyo al clero progresista estaba condicionado a que respondan “a la orientación general que ha dado la Iglesia a través de la historia y sobre todo de los documentos pontificios”. Héctor González Schmal, “Los partidos políticos y la juventud”, *Revista de Revistas*, nueva época, núm. 9, 28 de julio de 1972.

³³ *Idem.*

LOS INTENTOS DE REDEFINICIÓN DE LA OPOSICIÓN PANISTA

Las instituciones políticas tienden a llevar a cabo cambios que responden a una necesidad de adaptación frente al medio en el que se desarrollan, cambios que están condicionados por su experiencia social e histórica. En la evolución de Acción Nacional hay intentos aislados en este sentido, pero siempre nos encontramos con una constante en lo que se refiere a sus dos presupuestos fundamentales: la dignidad de la persona humana como principio de la sociedad y el bien común como finalidad del Estado. Las variaciones que en estrategia e ideología ha efectuado

se correlacionan, por un lado, con los cambios operados en la política gubernamental y en el desarrollo del país; por otro, con los nuevos planteamientos de la Iglesia Católica con respecto a los países subdesarrollados.³⁴

En los primeros veinte años de su existencia (de 1939 a 1959) el partido había optado por una postura que lo condenaba irremisiblemente al marginamiento frente a la política gubernamental. Había exagerado su papel de crítico y su actividad se limitaba a señalar sistemáticamente el fraude electoral, el enriquecimiento ilícito, la violación del orden constitucional, el agravio a la dignidad humana y el monopolio burocrático.

En la determinación de esta estrategia intervinieron básicamente las ideas originales de Gómez Morín y de Efraín González Luna respecto a cuál era el papel de la oposición en México. El primero concebía la acción del partido en sus efectos como la de un grupo de presión, idea que justificaba con base en la ausencia de una democracia auténtica; para el segundo el partido era un organismo político tendiente a alcanzar metas trascendentales, desdeñaba la búsqueda del poder con argumentos referentes a la salvación de la patria y la unidad nacional.³⁵

³⁴ Delhumeau, *op. cit.*, p. 183.

³⁵ *Ibid.*, p. 195.

No obstante, ya desde 1955 empezó a notarse un afán dentro de las filas del partido por introducir cambios orientados hacia una redefinición de sus posturas programáticas y de su papel dentro del sistema político mexicano. A los jóvenes panistas se atribuye este impulso por dinamizar la acción del partido. De la organización juvenil partió con más claridad en 1958 la iniciativa de sumar el partido al movimiento democristiano que había adquirido auge en esos años en todo el mundo.

La nueva tendencia podría imprimir al partido una visión más progresista y presentarlo ante la opinión pública bajo una apariencia distinta y más atractiva. La Revolución cubana y la reacción que le siguió, ante la supuesta amenaza del avance comunista en América Latina, brindaban al partido una tentadora oportunidad de obtener una base de apoyo más amplia, pero al mismo tiempo sugería una confrontación más directa con el gobierno y con el PRI.

Según los “panistas democristianos” esta coyuntura le permitiría a la organización ganar una nueva dimensión política, al incluirlo dentro de un movimiento mundial, que podría ser una importante fuente de apoyo ideológico y económico. Era la promesa del fortalecimiento a partir de una ayuda exterior, dada la esterilidad, el aislamiento en el que se hallaba dentro del sistema mexicano que pocas oportunidades le brindaba de crecimiento y efectividad.

A pesar del empuje indudable que esta línea tuvo sobre un sector importante del partido la idea fue rechazada y surgió la amenaza de división en la organización. La consecuencia inmediata fue la renuncia de los jóvenes que más insistentemente se habían pronunciado en ese sentido y el empeño por parte de los líderes del partido de introducir modificaciones en su estrategia para evitar la disgregación definitiva.

Cuando Adolfo Christlieb Ibarrola asumió la presidencia del PAN en 1962 se propuso adoptar una postura más progresista con vistas a una participación más dinámica del partido en la política del país, fortaleciendo y preservando al mismo tiempo los principios ideológicos del partido. Con el deseo explícito de integrarse a las responsabilidades del poder inauguró una estrategia basada en el diálogo con el gobierno, a diferencia de la postura anterior. Christlieb buscó desarrollar

los antiguos temas y precisarlos, apegándose a las realidades socioeconómicas del país.³⁶

Ello implicaba, necesariamente, el rechazo a la opción democristiana, definido desde 1962. Según Christlieb un partido cristiano en México podría resucitar el conflicto Iglesia-Estado y comprometer los logros que en las relaciones entre estas dos instituciones se habían alcanzado; por otra parte podría poner en duda el carácter profundamente nacionalista del partido y obligar al gobierno a aplicar estrictamente los principios anticlericales de la Constitución. Se corría el riesgo de pasar a ser una oposición disfuncional, de perder el registro en la Secretaría de Gobernación y de convertirse en una fuerza divisiva dentro de la sociedad mexicana en un momento en que la oposición buscaba una nueva dimensión:

En Acción Nacional concebimos la actividad política como una posibilidad de diálogo entre mexicanos de buena voluntad [. ..] Por eso desde la oposición, buscamos como objetivo principal en la próxima campaña [elecciones presidenciales de 1964] la concordia entre los mexicanos.³⁷

La nueva actitud conciliadora del PAN lo llevó a aceptar con mayor decisión los postulados constitucionales y la Revolución. El tono de sus críticas se hizo más moderado y tendió a formular un programa de amplios alcances en términos laborales, en la medida en que incorporó a su programa la idea de la participación de los trabajadores en los beneficios de las empresas. Empezó entonces a considerarse que su postura era más avanzada que la del PRI.

No obstante, lo que algunos suponen un movimiento del partido hacia la izquierda, debida también en parte al progresismo de los escritos papales, ha de verse más como un cambio de estrategia. Los principios fundamentales de la organización se mantuvieron idénticos:

³⁶ Para un análisis detallado de la gestión de Christlieb, véase Donald Joseph Mabry, "Acción Nacional: The institutionalization of an opposition party", Syracuse University, Ph. D. Dissertation, 1970.

³⁷ Christlieb Ibarrola, *op. cit.*, p. 80.

Buscamos que en México tenga plena realidad un concepto de la vida fundado en el respeto de la persona humana, a sus libertades espirituales y al derecho de todo hombre para compartir con sus semejantes los bienes de la tierra en un régimen de justicia.³⁸

La nueva política del partido coincidía con la necesidad del sistema de ampliar sus bases de legitimidad, de ahí que en esta época se sitúe la introducción de las diputaciones de partido —que para algunos autores fue producto de la acción de Christlieb—, a más de otras reformas tales como la exención de impuestos a los partidos políticos, medidas para evitar el voto múltiple, así como el reconocimiento de más victorias panistas a nivel local. No obstante la conveniencia que la política de Christlieb representaba para el fortalecimiento del partido, algunos de sus elementos más conservadores vieron en ella un movimiento hacia la izquierda, más que un intento de modernización orientado a borrar la imagen contrarrevolucionaria y reaccionaria del PAN. La ayuda para esta transformación se buscó desde dentro, a partir de las necesidades del sistema mismo, pero para muchos panistas sus efectos sólo llevaron al partido a ceñirse más estrechamente a los intereses de la élite en el poder.

“¿Y AHORA QUÉ?” LA XXIII CONVENCIÓN NACIONAL DEL PAN

Una de las tesis que fundamentan la actuación de Acción Nacional en la vida política del país es la idea de que, a pesar de que los métodos gubernamentales han desembocado en la “institucionalización de la violencia”, existen todavía caminos democráticos para la lucha política, es decir, la participación mediante la oposición organizada.

El 4 y 5 de febrero de 1973 se celebró la XXIII Convención Nacional de Acción Nacional. En ella se reunieron delegados de todos los estados de la República en proporciones más bien dispares. El propósito de la reunión era formular la plataforma programática del partido

³⁸ *Ibid.*, p. 65.

para el periodo 1973-1976 y prepararse para las elecciones federales que se celebrarían el 1 de julio.

La tónica de los debates que se llevaron a cabo tendió a señalar los problemas que más directamente afectan los principios y las aspiraciones del partido, siendo entre ellos el más importante el fraude electoral y el respeto a los resultados de las elecciones. Pero en términos generales y conforme a su apreciación en cuanto a las posibilidades de obtener el poder, destacó la importancia que atribuye a su papel como crítico del gobierno y como formador de la conciencia ciudadana.

Nos hemos referido ya al hecho de que Acción Nacional ejerce una “oposición leal” dentro del sistema mexicano, dado que acepta los condicionamientos y las “reglas del juego” impuestas por el gobierno y por el partido dominante. Esta actitud lo ha llevado a modelar en más de una ocasión su actuación conforme a los lineamientos del gobierno en turno. Sin embargo, puede notarse la continuidad de su papel de crítico, esto es, de su función tribunicia.

La insistencia del régimen del presidente Echeverría en la necesidad de la autocrítica plantea a Acción Nacional un desafío ante la opinión pública. En un momento en que “denunciar los males del país en todos los frentes es un acto que, en nuestros días, no tiene el vigor valiente que merece porque, en el colmo del cinismo se ha desatado la verbena de la denuncia, el abuso de las lamentaciones, pero realizado por los mismos culpables de la miseria”,³⁹ la actividad crítica del partido pierde la posible fuerza que pudiera adquirir a partir de la capitalización del descontento. Ante la opinión pública la política gubernamental persigue una dimensión democratizante por medio de la autocrítica y el reconocimiento de sus propios errores. Es como si buscara fortalecerse confesando su propia debilidad.

Conscientes de la particular coyuntura interna por la que atraviesa el país (caracterizada fundamentalmente por un cambio de estilo en la actividad política), los panistas parecen enfrentarse a la exigencia de efectuar un cambio en su estrategia. Dada la inconformidad que pa-

³⁹ José Ángel Conchello, “El reto y la respuesta”, ponencia presentada ante la XXIII Convención Nacional del Partido Acción Nacional, 4-5 de febrero de 1973.

rece manifestarse en el país, Acción Nacional se considera el instrumento para dar respuesta al reto que plantea una situación política más o menos inestable:

Para los hombres de 1973 el absolutismo es un reto y estamos aquí para dar la respuesta, restaurando la participación del pueblo en la vida pública, restaurando al pueblo en el poder y devolviéndole el poder al pueblo.⁴⁰

Las críticas formuladas contra el régimen pueden resumirse en la idea de que, en todos los casos, en las decisiones gubernamentales prevalecen los factores reales de poder sobre las estructuras establecidas por la letra constitucional.

La represión, la corrupción de los funcionarios públicos, la concentración del poder económico, la centralización política y económica, las violaciones a la constitución, son producto de un presidencialismo desenfrenado, que subordina cada vez más la participación del pueblo en los procesos de decisión, en un proceso inexorable de deshumanización de la vida política. Podemos resumir diciendo que las características del régimen son: más capitalismo, pero menos libertades, más poderío económico pero menos justicia social.⁴¹

Durante la reunión, la política económica del gobierno fue la que recibió mayores críticas. Se sugirió una reorientación global de la economía, “romper la vergonzosa alianza de los políticos con los económicamente poderosos”, y al mismo tiempo que se habló de un desmesurado desarrollo del capitalismo se acusó al gobierno de intervencionismo injustificado en esta materia. Se volvió una vez más al problema de la educación, cuyo sistema “refleja fielmente la pirámide social”, y se hizo particular referencia al control sobre la opinión pública por conducto del monopolio del papel para periódicos, una prensa “gobiernista” y radio y televisión igualmente sujetos a los intereses del régimen.

⁴⁰ *Idem.*

⁴¹ Bernardo Bátiz, “Democracia participativa”, ponencia presentada ante la XXIII Convención Nacional del Partido Acción Nacional, 4-5 de febrero de 1973.

Pero todas estas críticas estaban orientadas hacia el aparato estatal y sus funcionarios. Para los panistas el problema de México no es tanto que haya problemas serios, sino que las instituciones que podrían empezar a resolverlos simplemente no funcionan y tampoco, según afirmaron, hay la voluntad política para hacerlas funcionar en servicio del pueblo.

PARTICIPACIÓN VS. ABSTENCIÓN. EL DILEMA DE ACCIÓN NACIONAL

Pero la discusión más acalorada que se suscitó durante la convención fue en torno al problema de la participación en los comicios electorales. Desde el momento de su fundación, Acción Nacional se enfrentó a una situación de facto que ponía en tela de juicio su efectividad en tanto que partido político, ante el peso gigantesco de un partido dominante en el que se concentraban los factores de poder. Por lo tanto, en términos del partido mismo surge constantemente el conflicto que produce la participación en una contienda electoral cuyos resultados son de sobra conocidos con anterioridad.

Para Manuel Gómez Morín, sin embargo, el dilema no era tal. Él consideraba que la función de Acción Nacional, si bien la conquista del poder era inalcanzable, debía ser la de una válvula de escape que aminorara las presiones que de no contar con ella podrían llevar al sistema a la dictadura. La pasividad electoral puede provocar, según sus propias palabras, que el pueblo caiga en una situación similar a la del porfiriato en términos políticos, en “el pantano del conformismo, el letargo de una nueva decepción”.⁴²

Sin embargo, tampoco la existencia del PAN pudo evitar el desbordamiento del partido oficial en materia electoral y el conformismo que en páginas anteriores hemos señalado y que se expresa en un alto nivel de abstencionismo.

Estas circunstancias han agudizado, para los más sinceros panistas, el desafío que para su fuerza ante la opinión pública constituye el se-

⁴² Gómez Morín, *op. cit.*, p. 19.

guir actuando dentro de un sistema que lo ha condenado a la ineffectividad. Parte del desprestigio del partido es atribuible al hecho de que se conforme con la dosis de participación que el sistema tiene a bien concederle en beneficio propio. Por lo tanto, dentro del partido se manifiestan dos tendencias muy claras: la primera, que insiste en seguir adelante con la lucha política como hasta ahora se ha llevado a cabo, es decir, conforme al papel que le ha tocado desempeñar dentro de la política mexicana, y la otra, que postula la necesidad de un cambio en las formas de lucha política.

La primera tendencia recibe el favor de los miembros más antiguos del partido. Fieles a la tradición de su fundador, ven en su actividad un canal que, aun cuando no sea oficialmente reconocido en su importancia real, ha sido capaz de encauzar, aunque de manera parcial, el repudio hacia el gobierno. Esta línea se niega a aceptar la esterilidad de la lucha en los términos en que se ha realizado. Por el contrario, afirman que la presión de los diputados panistas en el Congreso, por ejemplo, ha tenido como resultado la creación de las diputaciones de partido, éxitos parlamentarios y buenas iniciativas. El problema de esta última parte de su justificación reside en que, en caso de que tales éxitos fueran ciertos, jamás han recibido un reconocimiento oficial. Una de las quejas más repetidas de los panistas ha sido en el sentido de que gran parte de sus proposiciones ante el Congreso han sido rechazadas en una primera instancia para después ser nuevamente presentadas por el Ejecutivo como propias.

La segunda tendencia busca responder a las exigencias políticas que el crecimiento económico ha despertado en amplios sectores de la población. De acuerdo con ellos, el pueblo busca y ha emprendido nuevas formas de lucha política, lo cual implica la obsolescencia de sus patrones tradicionales de oposición, y el partido debe encabezarlas, “los fraudes sufridos nos obligan [...] a movernos en un nivel superior al meramente electorero”. Se trata ya no únicamente de capitalizar el descontento por medio del voto, sino de iniciar un nuevo tipo de acción en el que el compromiso político sea total con el fin último de expresar una oposición más radical ante las formas de comportamiento del sistema. La crítica y la condena al gobierno han mostrado sobradamente

su ineficacia. “No hemos sido capaces de identificarnos con el pueblo en muchas de sus luchas populares; quizás hasta hemos tenido miedo a movilizar su fuerza social”.

Los métodos que esta facción proponía para iniciar una nueva forma de lucha política consistían en rechazar la nueva ley electoral, que consideran que los restringe a 25 representantes en vez de favorecerlos, y llevar a cabo una intensa campaña de movilización popular en contra del gobierno utilizando la desobediencia y la resistencia pasiva.

Participar [...] es desperdiciar energías en hacer el juego al gobierno —a quienes no se nos respeta el voto debemos— [...] emplear esas fuerzas en tareas más provechosas [...] y en desligarnos del gobierno ante los ojos del pueblo.⁴³

Pero optar por esa posición podría acarrear la desaparición misma del partido. La no participación de un partido en los comicios electorales era susceptible de sanciones tales como el retiro del registro de la Secretaría de Gobernación, y podría modificar la función tradicional del PAN, y provocar un desmembramiento interno; aun en este sentido el sistema limita su acción y los jerarcas panistas no parecían dispuestos a correr el riesgo de la desaparición. Las dificultades que presenta la organización de un partido político no pueden ser minimizadas y menos cuando el poder político está de tal manera centralizado que una oposición disfuncional puede ser suprimida de manera definitiva y posteriormente reemplazada por una organización más dócil a los intereses del sistema. La adopción de la no participación implicaba una modificación fundamental en la línea tradicional del partido y, tal vez, una reacción desintegradora dentro del mismo. El cambio en los métodos de lucha política significaba adoptar un esquema distinto al delineado por el sistema y al propio partido. Sin embargo, el PAN no

⁴³ Las citas referentes al problema de la no participación fueron tomadas de los documentos distribuidos durante la discusión en la convención. De los cuatro escritos de esta naturaleza sólo uno hace mención de sus autores: el de la delegación del VIII Distrito del Distrito Federal.

tiene la fuerza suficiente para correr los riesgos que supone el desafío al sistema.

Hemos tratado de mostrar cómo Acción Nacional desempeña en el régimen político el papel de “auxiliar” en las elecciones más que de contendiente directo. Los intentos que se han hecho por fortalecer el partido se han topado con el límite impuesto por el sistema mismo de estabilización de sus funciones democratizantes. Pero también ha tenido que enfrentarse a los obstáculos que él se impone por su propia voluntad y por la naturaleza misma de su doctrina. Hemos visto cómo, al tiempo que el partido habla de la necesidad de adoptar una nueva estrategia política, lucha por seguir siendo el mismo.

III

LA DEMOCRACIA CRISTIANA Y LA MODERNIZACIÓN DEL PARTIDO, 1957-1965*

En el mes de octubre de 1998 el Partido Acción Nacional informó a la opinión pública que había ingresado a la Internacional Demócrata Cristiana (IDC). El anuncio no fue una sorpresa para los enterados. El partido había estado participando en reuniones internacionales de esa organización desde 1987, incluso como anfitrión de la que se celebró en la Ciudad de México, y en 1993 se había afiliado como observador permanente a la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA). La decisión estaba respaldada por la reconocida identificación del PAN con la doctrina social de la Iglesia católica, así como por los grandes cambios que se habían producido en México y en el mundo en la década anterior.¹ Más todavía, este desarrollo puede ser visto como la reanimación de una corriente que había estado presente en el PAN desde su fundación en 1939, o como un nuevo intento para poner en pie en México un proyecto político que ganó adeptos en la década de los sesenta en América Latina en el contexto de la guerra fría, y que recibió un renovado impulso en todo el mundo 20 años después.²

Los primeros acercamientos de Acción Nacional a los partidos demócratacristianos de otros países habían tenido lugar un poco más de cuarenta años antes. En 1957 los líderes de la juventud panista pugnaron

* Artículo publicado originalmente con el título “La Democracia Cristiana y la modernización del Partido Acción Nacional (1957-1965)”, en *Historia y grafía*, núm. 14, 2000, pp. 147-182.

¹ Carlos Castillo Peraza, presidente de Acción Nacional en ese momento, justificó el ingreso a la ODCA con los argumentos de que había “afinidad doctrinal e ideológica” y que la caída de socialismo real imponía la necesidad de que se expresaran las “familias culturales y políticas” que no negaban los postulados del liberalismo económico, pero que hacían hincapié en la responsabilidad social de personas, grupos y empresas y en la necesidad de “una orientación ética”. Citado en *Proceso*, núm. 875, 9 de agosto de 1993, pp. 23-25.

² David Hanley, *Christian Democracy in Europe: A comparative perspective*, Londres y Nueva York, Pinter Publishers, 1994.

por la afiliación a la IDC, que en ese momento promovía una tercera vía en América Latina, concretamente en Chile, El Salvador y Venezuela.³ La propuesta nació de una severa crítica al aislamiento en que se encontraba el partido. Al igual que en otros países de América Latina, en México esta iniciativa tenía el apoyo de la IDC y la bendición del Vaticano.⁴ Contrariamente a lo que hubiera podido pensarse, su principal adversario no fue el gobierno mexicano sino una corriente del mismo partido encabezada por uno de los fundadores, Manuel Gómez Morín, quien se opuso con sorprendente determinación, y con éxito, al proyecto de los jóvenes panistas.

El ingreso del PAN a la IDC en 1998 fue recibido con naturalidad y hasta con cierta indiferencia en el interior del partido y en la opinión pública. Estas reacciones fueron muy distintas a las que provocó el episodio que se inició en 1957. Entonces la propuesta de afiliación a la Democracia Cristiana provocó una severa crisis interna que puso al descubierto la lucha por la reorientación de Acción Nacional y por el control de la organización. La renuncia —o expulsión— de los líderes de la propuesta selló su derrota; sin embargo, casi al mismo tiempo

³ Edward J. Williams, *Latin American Christian Democratic parties*, Knoxville, The University of Tennessee Press, 1967.

⁴ Como se verá más adelante, la propuesta de los jóvenes panistas estaba inscrita en un proyecto más amplio del Vaticano de revisión de la presencia política del catolicismo en la región. Por ahora vale citar un documento del presidente chileno (1964-1970) demócratacristiano, Eduardo Frei, publicado en 1948: "Para América Latina, esta esperanza en una Europa [la demócrata cristiana] donde el humanismo cristiano impone sus categorías y sus valores puede ser de una importancia decisiva y, a su vez, el apoyo que los pueblos de América Latina puedan aportar a esta esperanza es una fuerza inapreciable. Por ello la formación de partidos y de grupos que defienden, propagan y viven esta idea es una tarea vital para la independencia espiritual y para el porvenir de esta América, cuya aportación a la causa del hombre es indispensable [...] Nosotros no luchamos únicamente por la disminución del tiempo de trabajo o por el aumento de salarios. Nuestro programa tiene alcance universal porque expresa los valores supremos para la salvación de la sociedad. Y también ofrece soluciones prácticas a los pueblos que buscan la manera de destruir este dilema agonizante entre dos imperialismos que amenazan con la destrucción de la paz y arruinar al hombre". En "El futuro de la Democracia Cristiana", citado en Pierre Letamendia, *Eduardo Frei*, París, Beauchesne, 1989, pp. 174-175.

que se produjo ésta, Adolfo Christlieb Ibarrola fue elegido presidente del partido. El nuevo dirigente llevó a cabo un proyecto de renovación partidista que lo conectaba directamente con las directivas políticas del Vaticano, que hubiera sido uno de los efectos de la frustrada propuesta anterior. Los cambios produjeron algunas tensiones dentro del partido, pero éstas no alcanzaron dimensiones críticas; más todavía, gracias a la transformación que impulsó Christlieb Ibarrola el PAN pudo superar el modelo de partido católico que se había impuesto desde 1949, así como llevar a cabo una reorganización con base en los principios del pluralismo político y de la democracia liberal. Esta experiencia puede contribuir a la comprensión del desarrollo de los partidos en el sistema político mexicano, porque permite identificar y ponderar el tipo de variables que han intervenido en la evolución de Acción Nacional, la oposición partidista más antigua en México.

Un partido político puede estudiarse a partir de dos perspectivas: una, la primera como un universo cerrado y autocontenido, cuya dinámica se explica en sus propios términos, tal como los definen su jerarquía y sus reglamentos internos, su ideología y las relaciones entre sus dirigentes y militantes; en este caso los partidos son analizados como entidades autónomas en cuyo comportamiento el entorno desempeña un papel secundario. La segunda perspectiva estudia los partidos como parte de un conjunto, el sistema de partidos, el cual a su vez se inscribe dentro del todo más amplio que es el sistema político; este enfoque otorga al entorno una influencia determinante en el comportamiento y las decisiones de las piezas que integran el todo. Vistos así, los partidos son entidades cuya autonomía está limitada por las estrategias y los objetivos de otros actores políticos. La capacidad de cada uno de ellos para jugar con las restricciones que se derivan de la pertenencia a un todo es una medida de su autonomía relativa.⁵

⁵ La primera perspectiva ha sido puesta al día en la tradición de Max Weber y Robert Michels por autores como Angelo Panebianco, *Political parties: Organization and power*, Nueva York, Cambridge University Press, 1982. No obstante, este autor también reconoce la importancia de la influencia del entorno y de sus relaciones con la organización partidista. El autor contemporáneo más importante de

Estas dos perspectivas de análisis no se excluyen, sino que cada una puede servir para explicar distintos aspectos de un partido político. Así, por ejemplo, la comprensión de los equilibrios internos se utiliza para explicar la adopción de determinadas tácticas de lucha en una coyuntura electoral o los métodos de reclutamiento de dirigentes, militantes y candidatos. En cambio, estrategias de reforma de largo plazo o cambios en los documentos del partido pueden obedecer a la transformación del contexto —incluido el comportamiento de otros actores políticos— en que está inserto.

La perspectiva que ve a los partidos políticos como parte de un todo parece la más apropiada para entender la experiencia mexicana anterior a los años ochenta pues, por lo menos hasta entonces, el Estado fue el actor político fundamental y los partidos estaban en una posición de subordinación. El régimen constitucional y el equilibrio de fuerzas que se impuso en el sistema político de la posrevolución explica que la estructura y las decisiones de sus organizaciones fueran en primer lugar una respuesta a las iniciativas del Estado. Esta condición esencialmente reactiva limitaba su capacidad para desarrollarse como instituciones autónomas y les imprimía una marcada vulnerabilidad al contexto.⁶

Este artículo tratará de explicar el fracaso de la propuesta democratacristiana de 1957 y el éxito del proyecto renovador del PAN de Christlieb Ibarrola, con base en la hipótesis de que una y otro buscaron en el entorno exterior al partido los recursos para reanimarlo y liberarlo de las restricciones del régimen autoritario, que parecían condenarlo a un estado de agonía perpetua. Entre ambas propuestas había similitudes, pero entre 1957 y 1963 las condiciones del entorno se modificaron de manera muy significativa creando una oportunidad propicia para que Christlieb emprendiera con éxito el cambio de Acción Nacional que Hugo Gutiérrez Vega, líder de la juventud panista,

la perspectiva que analiza los partidos como parte de un todo es Giovanni Sartori, *Partidos y sistema de partidos I*, Madrid, Alianza Editorial, 1980.

⁶ Para un desarrollo amplio de esta hipótesis, que aquí es utilizada como premisa, véase Soledad Loaeza, *El Partido Acción Nacional: la larga marcha, 1939-1994. Oposición leal y partido de protesta*, México, Fondo de Cultura Económica, 1999.

había intentado muy poco tiempo antes. En 1962 se inauguró el Concilio Vaticano II y en 1963 el Congreso mexicano votó las reformas constitucionales que introdujeron las diputaciones de partido; Christlieb tuvo entonces los instrumentos para llevar a cabo la modernización del partido y así garantizar su supervivencia.

El análisis de esta hipótesis se hará en cuatro apartados. El primero de ellos describe el proceso de *confesionalización* que sufrió el Partido Acción Nacional después de 1949 —al término de la gestión de Manuel Gómez Morín— y sus consecuencias. El segundo apartado expone la propuesta de los jóvenes demócratacristianos de Acción Nacional, en el marco general de la política del Vaticano hacia América Latina después de 1945 y de los cambios que se introdujeron en ella en la primera mitad de los años cincuenta. El tercer apartado reconstruye los acontecimientos de 1957-1961 en el seno del partido. El cuarto y último está dedicado a explicar los cambios que propició la estrategia de Christlieb Ibarrola, orientado por los documentos del Concilio Vaticano II y el reformismo electoral del gobierno de Adolfo López Mateos; ambos factores tuvieron una importancia equiparable sobre la reorientación del PAN, sin embargo, aquí se hará hincapié en la influencia del pensamiento católico y de la estrategia vaticana sobre el proyecto de Acción Nacional.⁷

LA CONFESIONALIZACIÓN DE ACCIÓN NACIONAL, 1949-1962

En 1949 Manuel Gómez Morín cumplió su segundo periodo después de una década en la presidencia del PAN. Con su separación del cargo llegó a su fin una etapa en la vida del partido en la que se había buscado construir una alternativa de participación parlamentaria institucionalizada para los grupos de opinión que no se sentían representados por el PRI. En sus orígenes, Acción Nacional se había formado como un partido de universitarios que se oponían a las políticas del

⁷ Para una discusión de la influencia de la reforma electoral de 1963, véase Loaeza, *op. cit.*, pp. 277-288.

Estado posrevolucionario en materia agraria, educativa y laboral, y a la monopolización del poder. No obstante, desde 1945 la presencia católica había quedado implantada en el partido porque la naciente organización se acogió tanto al pensamiento católico de la época como a la doctrina social de la Iglesia; por otra parte, en sus primeros pasos Acción Nacional tuvo el concurso de jóvenes profesionistas que también militaban en organizaciones de laicos dependientes de la Iglesia.

Sin embargo, y como se ha tratado de demostrar en otras investigaciones,⁸ el partido no se había formado como una organización *de* católicos, sino *para* católicos. El margen de acción de un partido civilista de oposición parlamentaria en un régimen autoritario era tan estrecho que, de manera casi inevitable y por necesidad más que por convicción, el PAN se convirtió en portavoz de una corriente de opinión eminentemente católica que repudiaba el anticlericalismo del legado revolucionario y defendía su derecho a la libre expresión y a la participación. Esta evolución también fue resultado de la política de acercamiento y apoyo a la iniciativa privada que emprendieron los gobiernos de Manuel Ávila Camacho y de Miguel Alemán. Esta estrategia del poder arrebató al joven Acción Nacional algunas de las banderas más importantes que había levantado en 1939, en defensa de los intereses afectados por el reparto agrario o por la sindicalización de los trabajadores promovidos por el presidente Cárdenas.

El fin de la presidencia gomezmorinista significó el inicio de la hegemonía católica en el PAN. A excepción de José Ángel Conchello (1972-1975), todos los jefes nacionales que sucedieron a Gómez Morín hasta 1978 habían sido previamente líderes de organizaciones católicas —Acción Católica, Unión Nacional de Estudiantes Católicos, Acción Católica de la Juventud Mexicana, Unión de Católicos Mexicanos— y es probable que hayan mantenido su activismo en ellas incluso durante su gestión al frente del partido.⁹ Esta hegemonía se prolongó

⁸ *Idem.*

⁹ Los presidentes del PAN en el periodo fueron: Juan Gutiérrez Lascuráin (1949-1956), Alfonso Ituarte Servín (1956-1959), José González Torres (1959-1962), Adolfo Christlieb Ibarrola (1962-1968), Ignacio Limón Maurer (1968-1969) y Manuel González Hinojosa (1969-1972).

durante casi treinta años que pueden dividirse en dos momentos: la *confesionalización*, que va de 1949 a 1962, es un momento de compromiso total del partido con la defensa de la Iglesia católica y de sus principios e intereses. En esos años el PAN fue un *ghettopartei*, una organización ultraminoritaria y aislada de la estructura de poder real, ensimismada, que ejercía una oposición intransigente. El segundo momento de la hegemonía católica corre de 1962 a 1978 —con el paréntesis conchellista de 1972-1975— y es el del *reformismo* que se inició bajo el liderazgo de Adolfo Christlieb Ibarrola y Efraín González Morfín, quienes emprendieron la transformación del partido a tono con el *aggiornamento* de la Iglesia católica para llevarlo “al encuentro del mundo”.¹⁰ Este desarrollo se tradujo en la ampliación de los horizontes del partido, de sus temas, de la diversificación de sus interlocutores; pero quizá lo más importante fue que abandonó la intransigencia y adoptó una estrategia de diálogo con el gobierno.

A pesar de que ambos momentos —la confesionalización y el reformismo— están inscritos dentro de la preeminencia del factor católico en el PAN, muestran diferencias importantes entre sí. Estas diferencias son las mismas que distinguen la intolerancia defensiva del reinado de Pío XII de la apertura de sus sucesores, Juan XXIII y Paulo VI. No obstante, la orientación de Acción Nacional en estos años también estuvo influida por el contexto político inmediato. Así, el partido confesional y marginado de los cincuenta correspondía a una estructura de poder rigurosamente centralizada, una de cuyas manifestaciones era el apogeo del partido oficial y un virtual monopolio electoral que aseguraba la unanimidad del Poder Legislativo y la uniformidad política en los tres niveles de gobierno. En cambio, el reformismo panista fue parte de la búsqueda de alternativas de cambio pacífico que impulsó en toda la región la inquietud que provocó el triunfo de la Revolución cubana; entre ellas destaca la reforma electoral de 1963 que introdujo las diputaciones de partido.

¹⁰ Para un análisis de la dependencia de Acción Nacional de la Iglesia católica hasta principios de los años setenta desde la perspectiva exclusivamente de la dinámica interna del partido, véase Donald J. Mabry, *Mexico's Acción Nacional: A Catholic alternative to revolution*, Syracuse, Syracuse University Press, 1973.

Cambios en las alianzas y la composición social del partido

La evolución del PAN hacia una organización confesional se explica primeramente por las deserciones que sufrió en sus primeros años de existencia, en particular de las filas de profesionistas y de empresarios que habían sido considerados el sustento central del proyecto gomezmorinista de 1939. Tanto el presidente Ávila Camacho como el presidente Alemán supieron allegarse el apoyo de estos grupos, que se convirtieron en protagonistas del proceso de modernización del país. Desde este punto de vista, la identificación del panismo con la militancia católica era una alternativa que, además, ofrecía la posibilidad de ampliar la base del partido mediante la diversificación de su composición social. En este periodo el PAN dejó de ser la asociación de notables de los primeros tiempos para acoger a artesanos y campesinos que provenían de las luchas de los católicos tradicionalistas de la Unión Nacional Sinarquista, UNS, en estados como Colima, Jalisco, Michoacán y Oaxaca.

Este fenómeno provocó una suerte de dualización del apoyo electoral del PAN, pues por una parte el Distrito Federal, la entidad emblemática de la modernidad de la posguerra, fue la capital del panismo en cuanto al número de votos que aportaba al partido, pero por la otra, su presencia se concentraba en estados que entonces estaban entre las 10 entidades de mayor marginalidad en el país: Oaxaca, Michoacán y Jalisco.¹¹ Entre 1946 y 1963 estos tres estados proporcionaron al partido el mayor contingente de diputados federales y presidencias municipales: en primer lugar, Oaxaca, con ocho alcaldías y dos diputaciones federales; después Michoacán, con cuatro alcaldías y cuatro diputaciones federales, y, por último, Jalisco, con dos presidencias municipales y dos diputaciones federales. Las características de estas entidades son muy distintas de las que ostentaban los estados ricos del norte del país, como Coahuila y Sonora, donde el voto por Acción Nacional no se incrementó sino a partir de 1967.

Por otra parte, los cambios en la composición social del partido también influyeron en los niveles de escolaridad de sus candidatos y

¹¹ Véase Pablo González Casanova, *La democracia en México*, México, Ediciones Era, p. 281.

militantes. En la primera década una proporción muy elevada de los primeros poseía un grado universitario; por ejemplo, más de 60% de los aspirantes panistas a una diputación federal en 1943 era profesionista; en 1958 esta proporción había disminuido a 22%.¹² Este fue uno de los saldos del desplazamiento de la Universidad Nacional Autónoma de México como terreno de reclutamiento partidista por parte de las organizaciones católicas; es decir, cuando la creencia religiosa se convirtió en el dato central de la identidad panista. Este fenómeno también contribuyó a que aumentara en forma considerable el número de mujeres en las filas de militantes e influyó en la disminución de la media de escolaridad del conjunto.

Paradójicamente, durante el cuarto de siglo que se prolongó la hegemonía católica sobre el PAN, las relaciones del partido con la jerarquía eclesiástica fueron distantes, porque así lo aconsejaban los intereses de esta última, en virtud de que en el mismo periodo la Iglesia estuvo inmersa en un proceso gradual de reconstrucción interna, de restauración exterior y de reconciliación con el Estado.¹³ En estas circunstancias eran mayores los costos que los beneficios que podía derivar del apoyo o promoción de un partido político de oposición.¹⁴

A pesar de la reserva de las autoridades eclesiásticas en relación con el PAN, la Iglesia fue un sustento indirecto a la supervivencia del PAN, pues no prohibió a sus fieles la afiliación al partido y tampoco impidió

¹² Loeza, *op. cit.*, p. 226, cuadro III.1.

¹³ Véase Soledad Loeza, *Clases medias y política en México. La querella escolar 1957-1963*, México, El Colegio de México, 1988.

¹⁴ En estos años la jerarquía eclesiástica mantuvo la línea que había establecido el arzobispo Luis María Martínez durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho. En 1943 el arzobispo Martínez había declarado que la Iglesia católica de México reconocía la realidad de las restricciones que limitaban las actividades de los católicos. También sostuvo que la Iglesia católica no estaba vinculada con el PAN ni con la Unión Nacional Sinarquista y que dejaba en libertad a los católicos para agruparse "bajo su propia responsabilidad" en las organizaciones políticas de su preferencia. Asimismo, había desautorizado a organizaciones o individuos que pretendieran hablar en su nombre. Citado en José Flores García, "Acción Nacional y la doctrina de la Iglesia católica", en Varios autores, *El Partido Acción Nacional. Ensayos y testimonios*, México, Universidad Iberoamericana-Editorial Jus, 1978, p. 90.

que organizaciones de laicos, en particular Acción Católica y Acción Católica de la Juventud Mexicana, que dependían directamente del Episcopado, fueran la infraestructura de organización de Acción Nacional, donde reclutaba dirigentes, militantes y simpatizantes. Pero desde una posición de aliados voluntarios y subordinados no era mucho lo que los panistas podían exigir de las autoridades eclesiásticas, aparte de constituirse en transmisores de sus mensajes doctrinales. Por otra parte, la Unión Nacional Sinarquista, mediante la intermitente existencia de su brazo político, el Partido Fuerza Popular, era un rival de consideración para el PAN, pues seguía siendo una alternativa para los católicos tradicionalistas, entre quienes Acción Nacional había buscado potenciales aliados desde 1943.

En los años en que Acción Nacional fue un partido confesional sus relaciones con la UNS fueron siempre incómodas. Una distancia de clase insuperable separaba a ambas organizaciones. En 1986 un dirigente sinarquista afirmaba que el PAN nunca había sido una verdadera alternativa para ellos porque era un “partido elitista”:

no correspondía al grueso de la militancia sinarquista [...] nos sentíamos, pues, y así lo dicen nuestros compañeros que militaban en aquel tiempo (1944), incomprendidos y utilizados simplemente para el trabajo más sucio de un partido, la pega de carteles, todo ese tipo de cosas. Cuando dirigentes sinarquistas andaban postulados como candidatos [eran] vistos como “patito feo”, entonces se llegó a la decisión de formar nuestro propio partido...¹⁵

Pasaron muchos años, y entre otros acontecimientos la desaparición del Partido Demócrata Mexicano, sucesor de la Unión Nacional Sinarquista y del PFP, antes de que el estado de Guanajuato —el corazón geográfico del movimiento— le otorgara sus votos a Acción Nacional. El bastión del tradicionalismo católico sólo contribuyó de

¹⁵ Entrevista con Baltazar Ignacio Valadez Montoya, 18 de junio de 1986, en Rubén Aguilar Valenzuela y Guillermo Zermeño Padilla, “De movimiento social a partido político. De la UNS al PDM”, en Jorge Alonso (comp.), *El PDM: movimiento regional*, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1989, p. 76.

manera importante al voto total del PAN en las elecciones presidenciales de 1952 y de 1970, cuando la UNS o el PFP apoyaron las candidaturas de católicos probados: Efraín González Luna y Efraín González Morfín, respectivamente. Los primeros diputados panistas guanajuatenses ingresaron a la Cámara de Diputados en 1964 (uno de mayoría, por León, y el segundo, como diputado de partido, originario de Celaya), y en 1986 fue elegido el primer presidente municipal panista en el estado, en San Francisco del Rincón.

Los vínculos indirectos entre el partido y la Iglesia en México creaban una situación ambigua: a ojos de la opinión pública esta asociación parecía mucho más estrecha de lo que era en realidad: Acción Nacional se beneficiaba sólo relativamente de ella, pues a cambio del tímido apoyo que recibía mediante doctrina y militantes, compartía el sello de ilegitimidad que pesaba sobre la participación política de la Iglesia católica. De haber sido otro el contexto de las relaciones Estado-Iglesia es posible que la trayectoria del PAN hubiera sido semejante a la de fuerzas políticas afines que en otros países de América Latina se integraron en esos años a la política vaticana de reformismo democristiano.

Temas y doctrina del partido

Entre 1939 y 1949, los temas del PAN habían sido la antidemocracia, la denuncia de la corrupción sindical, la política económica; sus programas y plataformas hacían referencia, entre otros, a los artículos constitucionales que limitaban la presencia y actividades de la Iglesia católica, concretamente el 3o. y el 130. Sin embargo, en los años de la confesionalización, los temas generales y los asuntos de política coyuntural se desdibujaron, mientras que los cambios a disposiciones constitucionales relativas a la propiedad de la tierra, la condición jurídica de la Iglesia y, en particular, la libertad de enseñanza, pasaron a ser las principales banderas del partido, al igual que el nacionalismo religioso.

A semejanza del discurso católico de la época, en el de Acción Nacional el anticomunismo cobró importancia como valor positivo y sig-

no de identidad. Paradójicamente, a diferencia de las autoridades eclesiásticas, los panistas no encontraron en esta coincidencia ideológica con los gobiernos de la posrevolución, que se sumaron a la denuncia anticomunista de la guerra fría, razón suficiente para reconciliarse con ellos.¹⁶ Más bien aprovecharon los nuevos aires para denunciar la simulación gubernamental en ese combate, la inveterada “tolerancia de los círculos oficiales” a las corrientes de izquierda y el patrocinio gubernamental que en más de un caso las había beneficiado. Estos señalamientos fueron más vigorosos y concretos después de la fundación del Partido Popular en 1948, que se convirtió en el blanco natural del PAN —sobre todo porque su presidente era el viejo adversario ideológico de Gómez Morín, Vicente Lombardo Toledano—, de la misma manera que Acción Nacional fue para el pp el principal contrincante. Por esta razón, dentro de un ambiente dominado por el anticomunismo, el de Acción Nacional destacaba por su ferocidad.

Una de las consecuencias de mayor alcance de la confesionalización del PAN fue la profundización de la visión moralista de la política que en los orígenes había promovido el tapatío Efraín González Luna, para quien la política no era una lucha por el poder entre intereses en conflicto, sino un deber moral. El partido se comprometió con una misión cuyos objetivos eran cada vez más amplios y abstractos. “Limpiar la vida pública” se convirtió en el primer objetivo de los panistas, y la reiterada denuncia de la corrupción inundó su discurso de expresiones altisonantes como “nauseabundo”, “inmundicia”, “lodazal”, que aplicaban no solamente a las prácticas de un gobierno o de un gobernante en particular, sino que hacían extensivas a la práctica política.

El moralismo de las actitudes panistas alimentaba una visión dicotómica de la realidad política, polarizada entre “ellos” y “nosotros”, en una construcción imaginaria en la que un lado concentraba todos los vicios del poder, mientras que el otro monopolizaba las virtudes ciudadanas y morales. Esta misma visión dicotómica del mundo y de la supuesta autosuficiencia que aseguraba la doctrina católica, imponía al partido impermeabilidad en relación con el mundo exterior. La no-

¹⁶ Véase Loeza, *Clases medias y política en México...*, op. cit., pp. 163-169.

ción tomista del *bien común* pasó a ser el pilar de la identidad doctrinal de Acción Nacional. El problema que como partido político enfrentaba el PAN era que, a excepción de los principios generales de respeto a la persona y a las sociedades naturales, la doctrina del bien común es general e imprecisa y da lugar a interpretaciones diversas que pueden traducirse en políticas también muy diferentes. Es decir, en estos años se acentuó la vaguedad de los planteamientos pues era tan remota la posibilidad de que el partido accediera al poder que no había esfuerzo alguno de precisión en las plataformas y programas de gobierno.

En el terreno programático el confesionalismo se tradujo en un doctrinarismo que tuvo consecuencias de largo plazo sobre las estrategias de organización y de crecimiento del partido, pues una de sus premisas era que la sociedad estaba despolitizada, que no tenía conciencia ni noción de lo que eran la política o la democracia, entonces había que pensar en ellas como parte de un futuro tan ideal como lejano. De esta manera Acción Nacional empezó a mirarse a sí mismo como agente de un proyecto de educación a largo plazo, para quien la conquista del poder no era una tarea urgente y cuyo sentido de la cuenta larga carecía de valor político.¹⁷ Esta estrategia le era desfavorable desde el punto de vista electoral porque es probable que ya desde entonces la ausencia de votantes propiciara el fraude en las urnas, que era aprovechada por el PRI para incrementar los votos por sus candidatos.¹⁸ Asimismo promovía la despolitización que, paradójica-

¹⁷ En 1976 el arquitecto Ignacio Limón Maurer afirmaba: “dentro de Acción Nacional, hay muchas gentes que se desesperan y quisieran la violencia [...] porque están desde hace 35 años, y dicen: —Me estoy haciendo viejo y veo los mismos cacicazgos en Veracruz, en Tlaxcala o en Sonora. Se desesperan, y es una desesperación muy humana y muy razonable, porque uno dice: —Bueno, yo voy pasando, llevo 49 años aquí y no logro nada, no veo nada concreto.— Pero se les olvida que el tiempo en que se mide la nación, es otro, es otra medida”. Citado en “Apéndice documental con el texto de seis entrevistas”, en Varios autores, *El Partido Acción Nacional. Ensayos y testimonios*, op. cit., p. 188.

¹⁸ Juan Molinar y Alberto Aziz Nassif, “Los resultados electorales”, en Pablo González Casanova (coord.), *Segundo informe sobre la democracia: México el 6 de julio de 1988*, México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, UNAM-Siglo XXI Editores, 1990, pp. 138-171.

mente con otro discurso y diferentes métodos, alentaban los gobiernos priistas.

Organización y recursos

Por último, la dependencia del catolicismo explica la persistente debilidad organizativa del partido, pues si podía apoyarse en la infraestructura de socialización y de movilización que le proporcionaban las organizaciones de laicos dependientes de la Iglesia, parecía innecesario entonces crear una infraestructura propia. La hegemonía católica en el partido desalentó las actividades de organización. Así, por lo menos hasta mediados de los setenta, Acción Nacional se mantuvo como una red bastante relajada de relaciones personales, que se concentraba en la capital de la República, que tenía representantes en algunas regiones del país y que esporádicamente establecía alianzas con fuerzas locales que se oponían al gobierno federal, al partido oficial o al cacique local.

Es probable que los dirigentes del partido fueran relativamente indiferentes a las labores de organización y proselitismo porque daban por descontada la infraestructura que les proporcionaban los grupos católicos para la difusión de la doctrina, así como para articular movilizaciones de apoyo. Por otra parte, hombres de fe, creían que Acción Nacional algún día alcanzaría el poder, casi en forma espontánea porque llegarían a imponerse “la bondad y el valor universal de su doctrina”.¹⁹ Los panistas de entonces concentraban —y limitaban— sus esfuerzos de propaganda en las épocas electorales.

A todo esto habría que añadir la falta de recursos materiales, la pobreza del partido, cuya sobrevivencia dependía de donaciones extraordinarias, cuotas irregulares y aportaciones importantes —casi todas anónimas— que recibía el partido esporádicamente. Según el biógrafo oficial del PAN, Luis Calderón Vega, como las campañas de los candidatos de Acción Nacional dependían de su propio bolsillo,

¹⁹ Ignacio Limón Maurer, doc. cit., p. 124.

de la buena voluntad de sus simpatizantes y de las posibilidades económicas de sus militantes, en su mayoría muy limitadas, estas empresas políticas tenían un auténtico sabor misionero, que desafiaba la imaginación y el ingenio.²⁰

LA DEMOCRACIA CRISTIANA: UNA ALTERNATIVA PARA UN PARTIDO EXÁNIME

La década de los años cincuenta fue para Acción Nacional una larga travesía del desierto, en la que apenas lograba hacerse presente en los periodos electorales. Tanto así que según Juan José Hinojosa en los primeros veinticinco años del PAN “las victorias eran apenas accidentes”.²¹ Los primeros representantes de Acción Nacional ingresaron a la Cámara de Diputados en la XL Legislatura (1946-1949) y a partir de entonces nunca dejó de tenerlos; sin embargo, los diputados panistas fueron persistentemente una minoría marginal, de 4 a 5, y sólo en una ocasión su número ascendió a 6 (1955-1958) en un universo total que en el periodo aumentó de 147 a 178 distritos electorales.²² Su primer candidato a la Presidencia de la República fue Efraín González Luna, quien obtuvo cerca de 9% del voto en las elecciones de 1952.²³

²⁰ Luis Calderón Vega, *Reportaje sobre el PAN*, México, Ediciones de Acción Nacional, 1970.

²¹ Juan José Hinojosa, entrevista con Alberto Enríquez Perea, “Mis recuerdos sobre los padres fundadores de Acción Nacional”, *Estudios Políticos*, nueva época, vol. 8, julio-septiembre de 1989, pp. 62-68, p. 62.

²² El número de distritos electorales varió en el periodo. De 1943 a 1949 la representación política del país en la Cámara de Diputados estaba distribuida en 147 distritos; entre 1952 y 1958 su número aumentó a 162, y de 1961 a 1970 fue de 178 distritos. Ivonne Martell Espinosa, “Representación y reparto distrital en México”, tesis para obtener el título de licenciado en ciencias sociales, Instituto Tecnológico Autónomo de México, 1993.

²³ Se le reconoció 16% del voto al general Miguel Henríquez Guzmán, candidato del Frente de Partidos del Pueblo Mexicano, que era una escisión del partido oficial identificada con el cardenismo y cuya participación en la contienda electoral fue vista con grandes temores por el PRI.

El desinterés de las sucesivas dirigencias panistas por los aspectos organizativos del partido contribuyó a que llevara una existencia precaria marcada por una relativa inestabilidad. Hasta 1964 su continuidad fue titubeante. Así lo sugieren las fuertes variaciones en el número de candidatos al Congreso en las elecciones federales: de 1943 a 1946 aumentó (de 21 a 80) pero disminuyó en 1949 (69), aumentó nuevamente en 1952 (143), en 1955 cayó otra vez (88) y se recuperó en 1958 (139), pero sin alcanzar la cifra de la elección presidencial anterior. Por otra parte, la presencia geográfica también muestra discontinuidad: entre 1943 y 1961 sólo en nueve entidades se presentaron candidatos panistas en todos los comicios federales (Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca y San Luis Potosí), aunque no cubrían consistentemente todos los distritos. La participación de candidatos panistas era irregular en la mayoría de los estados. En algunos se presentaron en tres contiendas consecutivas, pero estuvieron ausentes en las siguientes (Chiapas, Estado de México, Yucatán); en otros, sólo se registraron candidatos cuando los comicios para la renovación del Congreso coincidieron con la elección presidencial (Campeche, Nayarit y Quintana Roo).²⁴ Además, el partido no poseía un registro nacional de afiliados, de suerte que las dimensiones de la organización son materia de especulación.²⁵

La lentitud del progreso de la representación panista a mediados de los años cincuenta se había convertido en estancamiento. En las elecciones federales de 1955 el partido obtuvo el mismo porcentaje que tres años antes. Más allá de las restricciones que imponía el contexto autoritario, era necesario evaluar la estrategia de oposición intransigente que parecía agravar las consecuencias de la presencia minorita-

²⁴ Loaeza, *El Partido Acción Nacional...*, op. cit., p. 243, cuadro III.2.

²⁵ Entrevistados en 1977 tres diferentes dirigentes del partido dieron respuestas muy distintas cuando se les preguntó cuántos miembros tenía el partido. Ignacio Limón Maurer afirmó que tenía “unos 250 000”; Manuel González Hinojosa respondió “muy posiblemente rebasen el millón de afiliados”, y José González Torres contestó “está por el medio millón de hombres”. Cándida Fernández Baños y Ana Marcovich de Kozłowski, “Un diálogo con los hombres de Acción Nacional”, en Varios autores, *El Partido Acción Nacional, Ensayos y testimonios*, op. cit., pp. 101-129.

ria en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, la influencia del PAN sobre la opinión pública no podía ser muy grande si a su tamaño minúsculo se sumaba una actitud de rechazo que se traducía en autoexclusión:

Los diputados panistas que en este periodo llegaron a la Cámara, mantenían una actitud de rechazo abierto a los diputados del partido oficial; no se permitían dialogar con ellos pues de hecho no les reconocían calidad de diputados ya que, en opinión de Acción Nacional, habían llegado a ese puesto a través de un fraude electoral.²⁶

En contraste con la irregularidad de la presencia del PAN, su porcentaje de participación en el voto nacional registraba un incremento constante aunque modesto, pues pasó de 1% en 1943 a 9% en 1955, progreso que podía ser un indicador de su potencial de crecimiento.

Sin embargo, el estímulo más poderoso para superar esa situación provenía del entorno político: en 1954 el gobierno anunció una devaluación del peso que provocó amplio descontento. A partir de ese año se inició en México una amplia ola de movilizaciones que pasaría por los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional en 1956, los estudiantes universitarios y normalistas de la Ciudad de México en 1956, los trabajadores ferrocarrileros, telefonistas y maestros en 1957 y 1959. A esta efervescencia interna también contribuyeron acontecimientos en el ámbito internacional. La caída del presidente Jacobo Arbenz en Guatemala, orquestada por el gobierno norteamericano también en 1954, encendió entre algunas fuerzas políticas latinoamericanas un sentimiento antiimperialista que alcanzó su punto culminante con la fallida invasión de Bahía de Cochinos en Cuba, organizada en 1961 por opositores a la revolución castrista con apoyo del gobierno de Estados Unidos. Este contexto ofrecía la oportunidad en toda América Latina para que el descontento contra las políticas gubernamentales se articulara con el repudio al intervencionismo de Washington,

²⁶ María Elena Álvarez de Vicencio, *Alternativa democrática*, México, EPESA, 1a. ed., 1986, p. 111.

así como a los gobiernos nacionales que actuaban como sus aliados y que eran ellos mismos antidemocráticos.

Por todas estas razones en México el proceso de la sucesión presidencial de 1958 se desarrolló en una atmósfera política cargada que era una oportunidad para todas las fuerzas opositoras al gobierno, muchas de las cuales emprendieron una reorganización, entre ellas Acción Nacional.

EL PAN EN LAS ELECCIONES DE 1958

En octubre de 1957 la XIII Convención de Acción Nacional eligió candidato a la Presidencia de la República a Luis H. Álvarez, quien con el apoyo de la delegación de Chihuahua había contendido en una competencia muy reñida con José González Torres, precandidato del Distrito Federal.²⁷ En ese entonces, según los estatutos del partido, para ser elegido el candidato debía contar con el 80% del voto de las delegaciones, y en la primera ronda de votación Álvarez había obtenido 178 votos mientras que González Torres había recibido 100 votos. En la segunda vuelta de votación el primero, quien presumiblemente tenía el apoyo de Manuel Gómez Morín y de Efraín González Luna,²⁸ obtuvo 215 votos de los delegados y su contrincante 112, mismos que cedió al ganador para que su precandidatura no fuera motivo de conflicto.

El triunfo de Luis H. Álvarez fue en cierta forma sorprendente. Era casi un desconocido para la mayoría de los panistas, pero había derrotado al secretario general del partido, González Torres. Sin embargo, las candidaturas revelan el tipo de discrepancias que suscitaba en el interior del PAN el debate acerca de la necesidad urgente de un cambio de imagen y de estrategia. Había fuertes contrastes entre Álvarez y Gon-

²⁷ Se presentaron cinco precandidaturas, pues además de Álvarez y González Torres en la primera vuelta de votación se presentaron Rafael Preciado Hernández, que obtuvo 10 votos, Juan Gutiérrez Lascuráin con 18 votos y Luis Castañeda Guzmán con 22 votos.

²⁸ Calderón Vega, *op. cit.*, p. 99.

zález Torres. El activismo político de este último se había desarrollado de manera fundamental en organizaciones católicas (anteriormente había sido presidente de la ACJM, secretario general de la Unión Nacional de Padres de Familia, UNPF, presidente de Acción Católica entre 1953 y 1955 y luego presidente internacional de Pax Romana). Álvarez era un joven político local que previamente había sido candidato panista a la presidencia municipal de Ciudad Juárez y después a la gubernatura de Chihuahua. De hecho, su experiencia política fue el principal argumento de quienes lo apoyaron. Según la descripción de Luis Calderón Vega triunfó porque era:

Hombre de una pieza, representa con singular decoro, lo más sano, fuerte y noble de la nacionalidad. El hombre, digamos, común y corriente; pero con tal capacidad de servicio y entrega al bien común, con tan probadas dotes de organizador y combatiente civil, con tal natural don de mando que lo constituyeron en el líder que, en un momento dado, pudo asumir la representación nacional.²⁹

Luis H. Álvarez también era muy distinto al candidato presidencial de Acción Nacional en 1952, Efraín González Luna. No era “una eminencia nacional”, ni un “teórico”,³⁰ pero muchos lo apoyaron como representante de una nueva generación, que podía imprimirle al partido un aspecto novedoso, más dinámico y diferente al que le había impuesto la confesionalidad. De acuerdo con su imagen, Álvarez, llevó a cabo una campaña electoral propositiva con un programa reformista, adoptó un tono moderno, amplió el repertorio de propuestas para los votantes al abordar temas como el combate a la pobreza y al desempleo, reforzó las denuncias contra el caciquismo, así como la defensa de la iniciativa privada frente a lo que consideraba el peligroso avance del estatismo, y habló de la lucha por la paz y la libertad. Asimismo, demandaba garantías para la propiedad agrícola y ganadera; en materia laboral proponía la participación de utilidades y la democra-

²⁹ *Idem.*

³⁰ *Idem.*

cia sindical,³¹ sin abandonar la denuncia de la “infiltración comunista”, según él, solapada y protegida por el propio gobierno.

El esfuerzo del partido no se quedó sólo en su candidato presidencial. Acción Nacional presentó 139 candidatos a diputados federales. Sin embargo, los resultados obtenidos en 1958 fueron decepcionantes. Al candidato panista se le reconocieron apenas un poco más de 700 000 votos, frente a 6 767 754 que se atribuyeron al candidato del PRI, Adolfo López Mateos (93% del voto), cifra muy difícil de creer si se considera el clima de protesta de los meses anteriores a la elección presidencial y el descontento y la inquietud que se había manifestado entre diversos sindicatos y grupos de trabajadores, precisamente cuando López Mateos era secretario del Trabajo. Es muy probable que en las elecciones de 1958 el partido dominante haya querido demostrar una fuerza que había sido puesta en entredicho por la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM) de Henríquez Guzmán seis años antes, y que por esa misma razón el PPS y el PARM hayan apoyado la candidatura de López Mateos. Lo cierto es que los panistas se sintieron como nunca defraudados y rechazaron los resultados de la elección.

La reacción del PAN ante la derrota de su candidato presidencial en 1958 ofrece una medida de sus expectativas y de lo que estaba en juego para el propio partido, pues recurrió al extremo de protestar contra lo que consideró el mayor fraude que había sufrido, retirando a su representante de la Comisión Federal Electoral y anunciando que los seis diputados cuyos triunfos habían sido reconocidos, no ocuparían sus curules (sólo dos acataron la decisión del Consejo Nacional).

La derrota agravó las tensiones en el seno del partido entre quienes insistían en participar en los procesos electorales en los términos establecidos, y quienes denunciaban la *mascarada* electoral y se inclinaban por un cambio de estrategia: recurrir al abstencionismo y buscar nuevos aliados, y de esta manera aumentar su capacidad de negociación con el gobierno. En 1958 esta última posición significa-

³¹ Luis H. Álvarez, “Entrevista”, *La Nación*, vol. XXXIII, núm. 842, 1 de diciembre de 1957, pp. 2-3.

ba el fortalecimiento de una corriente interna que había hecho su aparición meses antes y que proponía que Acción Nacional se afiliara a la IDC.

La evolución del PAN hacia la Democracia Cristiana había sido propuesta desde 1957 por Hugo Gutiérrez Vega, quien se había acercado a la DC venezolana y a la alemana. Sus argumentos para proponer una tercera vía frente a la antidemocracia reinante y a lo que percibía como la amenaza del comunismo internacional, hacían hincapié en la represión de la disidencia sindical e insistían en la necesidad de un cambio político general ante el deterioro de la situación interna.

A tono con la intransigencia anticomunista y el giro hacia el reformismo social que —como se verá más adelante— había tomado la Democracia Cristiana en América Latina, el órgano oficial del partido, *La Nación*, empezó a publicar numerosos artículos que criticaban la falta de libertad sindical en México, la represión de las movilizaciones obreras y la indiferencia del gobierno y los empresarios frente a sus justas demandas salariales. Lo que los panistas democratacristianos buscaban era un mensaje, un puente de comunicación con grupos sociales más amplios, con organizaciones de trabajadores que podían ser aliados poderosos. Sin embargo, esta orientación no contaba con el aval unánime de los dirigentes partidistas; muchos de ellos, en particular Manuel Gómez Morín, mantenían una clara desconfianza frente al sindicalismo.

En diciembre de 1958 Gutiérrez Vega publicó en *La Nación*, cuyo director Alejandro Avilés se había sumado a su causa, un artículo en el que anunciaba que la juventud panista “reclama[ba] su lugar de vanguardia en el Partido”, que estaba dispuesta a formarse y a organizarse para “la nueva construcción”. El líder juvenil anunciaba:

No vamos a levantar banderas sucias para limpiarlas. Nuestro ímpetu va mucho más allá que la Revolución. Que sepan los llamados revolucionarios, que no aceptamos etiquetas de izquierda o de derecha. Sólo aceptamos una que es la que ostentamos con orgullo sobre el pecho: **Democracia Cristiana** [...] Vamos a realizar esta tarea con toda responsabilidad [...] sabemos que luchando con nuestro Partido estamos

cumpliendo una responsabilidad para con México, sí, pero también estamos cumpliendo una responsabilidad para con Dios.³²

La derrota de González Torres no fue el fin de la causa de los democratacristianos, la cual con el apoyo de los acontecimientos de 1958 —concretamente la manipulación de los resultados electorales y el desconocimiento de los posibles avances de Acción Nacional— se anotó una victoria importante en febrero de 1959 con la elección del mismo González Torres a la presidencia del partido. Para muchos, el fraude que había sufrido el candidato Álvarez en los comicios presidenciales era prueba de que los recursos electorales eran insuficientes y que era preciso buscar las soluciones en un medio distinto al que ofrecía el sistema político mexicano. El nuevo presidente del partido auguraba un buen futuro a la propuesta, pues él, mismo se propuso promoverla activamente. La democracia cristiana, según él no era un partido católico, porque no estaba subordinado a la Iglesia, sino que trataba de “dar vida a la doctrina católica en el campo social y político”.³³ Esta intención era la misma que había manifestado el Vaticano en la estrategia que había adoptado en América Latina desde mediados de los años cincuenta.

La Democracia Cristiana preconiliar en América Latina

Los dos momentos de la hegemomía católica en el PAN antes identificados también corresponden a dos momentos distintos en la política general del Vaticano: el primero, dominado por el temor a la expansión del comunismo en el mundo, y el segundo, por la apertura y la pluralización del mundo católico que impulsó Concilio Vaticano II a partir de 1962. Más todavía, la experiencia latinoamericana en este periodo comparada con lo ocurrido en otras regiones, por ejemplo,

³² Hugo Gutiérrez Vega, “Ni izquierda, ni derecha: ¡Democracia Cristiana!”, *La Nación*, 21 de diciembre de 1958, vol. xxxv, núm. 897, p. 17. (Negritas en el original).

³³ José González Torres, “Qué es la Democracia Cristiana”, *La Nación*, diciembre de 1959, vol. xxxvii, núm. 947, p. 10.

en Europa, ilustra el hecho de que “aunque la Iglesia católica es universal en términos de fe y de doctrina, su comportamiento está influido por las realidades locales”.³⁴

Para entender el comportamiento político de los católicos es preciso distinguir dos de sus referentes generales: la línea del Vaticano, dictada por documentos y posturas del papa, y el pensamiento católico, cuyos autores aportan interpretaciones diversas que no siempre responden a las líneas vaticanas. Por ejemplo, después de 1945, al mismo tiempo que el Vaticano se había movido muy poco en relación con sus posturas y postulados anteriores a la segunda guerra mundial, en el mundo católico se habían fortalecido corrientes reformistas vinculadas con el pensamiento del filósofo y teólogo, Jacques Maritain. Su libro *Humanismo integral* había sido publicado originalmente en 1936 con el subtítulo *Problemas temporales y espirituales de una nueva cristiandad*, y pocos años después se convirtió en la piedra de toque de las democracias cristianas que se formaron en Europa al término de la guerra.

El pensamiento maritainiano dio un decisivo impulso al reformismo político de la posguerra, pues ofrecía un fundamento moral a la práctica democrática. Condujo a proponer una perspectiva eclesial de la libertad religiosa cuyo punto de partida no era la fe en una religión única y verdadera —noción ampliamente rechazada por la sociedad moderna—, sino la admisión de una realidad concreta en la que cada ser humano tiene derecho a buscar la verdad de acuerdo con los dictados de su conciencia, mientras que la Iglesia católica tiene derecho —al igual que otras familias espirituales— al libre ejercicio de su actividad espiritual.³⁵ Esta visión implicaba el abandono del clericalismo político y del Estado confesional, y la adopción de una noción de sociedad que, aun cuando siguiera orgánicamente ligada al cristianismo,

³⁴ Margaret E. Crahan, “Church and State in Latin America: Assassinating some old and new stereotypes”, *Daedalus*, verano de 1991, vol. 120, núm. 3, pp. 135-158, p. 145.

³⁵ Louis de Vaucelles, “Autour de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme”, en Institut Catholique de Paris, *Les catholiques français et l’héritage de 1789, d’un centenaire à l’autre, 1889-1989*, París, Beauchesne, 1989, pp. 275-283.

respetaría las creencias y las libertades de los no cristianos, sería una “cristiandad profana”, cuya participación en la vida de la Ciudad, en el sentido de santo Tomás, se desarrollaría sobre bases de igualdad de deberes y derechos con los cristianos.

Los católicos europeos encontraron en esta propuesta la base para legitimar la colaboración con los miembros de otras familias religiosas, y una primera señal de esta apertura fue desde luego la adopción de la denominación *cristianos*, mucho más inclusiva que la de católicos que se refiere sólo a aquellos que deben obediencia al Vaticano. Muchas de las ideas maritainianas fueron el germen de las propuestas reformistas católicas de la posguerra, por ejemplo, la seguridad social, la protección al trabajo, un cierto intervencionismo estatal que convocaba a la cooperación con la iniciativa privada.

Los partidos democratacristianos que surgieron en Alemania, Austria, Bélgica, Francia e Italia en la posguerra fueron elementos activos en la reconstrucción de los regímenes democráticos. Mantenían algunos de los objetivos centrales de los partidos católicos del pasado. Al igual que éstos, frente al individualismo y el estatismo —disyuntiva que la guerra no había resuelto— proponían una *tercera vía*, un reformismo social —una “revolución por la vía de la ley”, como lo fraseó Georges Bidault, fundador del Movimiento Republicano Popular (MRP) en Francia—, pero también tenían diferencias esenciales con aquellas formaciones. En primer lugar, rechazaban la noción de organizaciones políticas confesionales vinculadas con la defensa estricta de los derechos de la Iglesia, luego enfatizaban la autonomía del orden temporal, pero sobre todo estaban empeñados en fomentar la voluntad de construir la Ciudad pluralista y respetuosa de las personas. A diferencia de los partidos católicos anteriores a la guerra, los democratacristianos ya no promovían la organización corporativa de la sociedad y también habían dejado atrás el antiparlamentarismo.³⁶

La región latinoamericana no se mantuvo al margen de los cambios en el pensamiento católico europeo que llevaron a la secularización de

³⁶ Jean-Marie Mayeur, *Des partis catholiques à la démocratie-chrétienne, XIXème et XXème siècles*, París, Armand Colin, 1980.

los partidos católicos. Jacques Maritain también tuvo una influencia muy grande sobre los católicos de la región; sin embargo, mientras que en Europa la aceptación por parte de la Iglesia de las instituciones centrales de la democracia liberal tuvo un efecto secularizador sobre las actitudes políticas de los católicos, en la región latinoamericana se profundizó el confesionalismo. En los países latinoamericanos, al igual que en España, las autoridades eclesiásticas siguieron desempeñando un papel decisivo en la orientación política de los laicos y, en consecuencia, el anticomunismo fue la directiva dominante de cualquier acción política.

La diferencia entre los católicos europeos y los latinoamericanos fue reconocida por las autoridades vaticanas, pues mientras en Europa tuvieron que aceptar el compromiso con las instituciones de la democracia liberal, en América Latina mantuvieron una línea de plano ambigua. Todo sugiere que consideraban que el condicionamiento de la guerra fría sobre cualquier tipo de cambio en la región latinoamericana era mucho mayor y que la liberalización política podría acarrear una transformación del statu quo, bajo la influencia de la Unión Soviética y del marxismo, posibilidad inaceptable en el contexto bipolar de la época, que revela también que para Pío XII una cosa era tolerar la democracia y otra muy distinta promoverla. En América Latina el Vaticano mantuvo el principio enunciado por el papa León XIII a finales del siglo XIX, que sería utilizado en numerosas ocasiones para justificar el apoyo de los católicos a fórmulas autoritarias:

No se condena ninguna forma de gobierno en acto [...] [ni] está prohibido preferir gobiernos moderados de formas democráticas, salvando empero la doctrina católica acerca del origen del poder. [Es decir, Dios] Siempre que sea adecuada de por sí para realizar el bien de los ciudadanos, ninguna de las distintas formas de gobierno es reprobable para la Iglesia.³⁷

³⁷ Citado en Carlos Castillo Peraza, "Iglesia y democracia: una bella historia", Carlos Castillo Peraza, *El PAN nuestro*, Mérida, Editorial Dante, 1990, p.140.

En América Latina la evolución de la nueva línea vaticana desarrolló con más vigor aquellos aspectos asociados con la intransigencia anticomunista que era el fundamento del reformismo católico. La tolerancia política que se había producido entre los partidos europeos como requisito para superar el confesionalismo no fue el dato más sobresaliente del catolicismo latinoamericano, cuya energía política se concentró en el combate al comunismo y a todo aquello que pudiera asociarse o identificarse con el marxismo y la revolución. De ahí que, por lo menos hasta la reunión del Consejo Episcopal Latinoamericano, Celam, celebrado en Medellín, Colombia, en 1968, los católicos—doctrina y militancia— hayan estado mayoritariamente asociados con el apoyo a gobiernos antidemocráticos, siempre y cuando fueran sus aliados en la guerra contra el comunismo.

Desde 1956 fue más o menos claro que América Latina había adquirido una posición prioritaria en las preocupaciones del Vaticano. Ese año, y a iniciativa de las autoridades papales, se creó la Conferencia Episcopal de América Latina, con el objetivo de resolver los problemas *religiosos* que se habían detectado en la región y que se manifestaban en la escasez de clero regular y secular, así como un modo de vida católico “deficiente”. De ahí que el objetivo fuera “despertar nuevas prácticas de evangelización”.³⁸

Sin embargo, para 1959 la catequesis había pasado a segundo lugar, pues el tema de la cuarta reunión de Celam celebrada ese año en Colombia fue el comunismo en América Latina. El cambio no es de ninguna manera sorprendente en vista de los acontecimientos mundiales, concretamente la Revolución cubana, y del diagnóstico que había hecho el Vaticano acerca de la debilidad del catolicismo en la región. La declaración final de esta reunión afirmaba que era necesario trans-

³⁸ Celam nace de las preocupaciones de Pío XII en relación con los problemas *religiosos* del continente, donde, según el papa, el modo de vida católico era deficiente y había una peligrosa escasez de clero regular y secular. Los cuatro principales temas de la Conferencia fueron: la escasez de sacerdotes, la educación religiosa, problemas sociales y temas relacionados con las poblaciones amerindias. François Houtart, “CELAM: The forgetting of origins”, en Dermot Keogh, *Church and politics in Latin America*, Londres, MacMillan Press, 1990, pp. 65-81, p. 65.

formar las estructuras sociales para promover la justicia y hacía hincapié en que la Iglesia tenía que adoptar una posición clara y firme ante la amenaza que representaba el comunismo que buscaba el apoyo de las masas.³⁹

La Democracia Cristiana fue la respuesta a esta búsqueda. En 1957 el Partido Falange de Chile había adoptado esa denominación, bajo el liderazgo de Eduardo Frei; en Venezuela se consolidó COPEI (Comité de Organización Política Electoral Independiente) que había sido fundado en 1946; en 1960 se fundó el Partido Demócrata Cristiano en El Salvador; en Nicaragua el Partido Social Cristiano fue reorganizado en 1963, y en 1964 se formó un Partido Demócrata Cristiano en Ecuador. Todos ellos tenían rasgos en común: nacieron vinculados con organizaciones de jóvenes, la mayoría universitarios; también eran escisiones de partidos conservadores, y por último, ampliaron su apoyo social gracias a que encabezaron una ofensiva contra los regímenes autoritarios.⁴⁰

Entre estos partidos y el PAN había muchas coincidencias en cuanto a origen y perspectivas. La Falange chilena y COPEI, por ejemplo, habían sido fundados en estrecha vinculación con organizaciones católicas de estudiantes universitarios en los años treinta; habían recibido la influencia del pensamiento español de derecha; proponían una tercera vía entre liberalismo y estatismo y, después de 1945 se distanciaron de las clases privilegiadas, a las que criticaban porque en lugar de comprometerse con la reforma social estaban atrincheradas en la defensa del statu quo.⁴¹

³⁹ *Ibid.*, p. 70.

⁴⁰ Williams, *op. cit.*, p. 17.

⁴¹ El partido chileno de la Falange se transformó en 1957 en Democracia Cristiana y concretó su compromiso con el humanismo cristiano de Jacques Maritain y con el reformismo social, hizo suyas las demandas de los trabajadores y estableció vínculos muy estrechos con organizaciones obreras. Proponía, por ejemplo, la subordinación de la búsqueda del beneficio al deber moral, la primacía del trabajo frente al capital, el acceso de los trabajadores a la administración de la empresa, a sus beneficios e incluso a la propiedad de la misma. El objetivo de todo esto era prevenir el avance del comunismo.

Con todos estos antecedentes no deja de sorprender la firme oposición de Gómez Morín al proyecto de los jóvenes panistas seguidores de Gutiérrez Vega. Una posible explicación reside en el hecho de que si bien los partidos europeos de la Democracia Cristiana habían ejercido una importante influencia sobre sus contrapartes en América Latina,⁴² el catolicismo político en esta región nunca alcanzó el grado de secularización que logró en Europa. Como ya se ha dicho antes, la constatación de las condiciones sociales del subdesarrollo y el agravamiento de la guerra fría en la región, creó un terreno propicio a la polarización *reforma/revolución* que llevó a la Iglesia católica a participar activamente en la defensa anticomunista, ya sea en forma directa o por medio de partidos. Lo anterior significa que en América Latina la Democracia Cristiana era un proyecto mucho más vinculado a las autoridades eclesíásticas que en Europa occidental. Esta diferencia explica la firme oposición de Gómez Morín al proyecto.⁴³ En una entrevista otorgada en 1969, a una pregunta al respecto, el fundador de Acción Nacional acusó a la corriente democratacristiana de debilitar al partido y de recibir el apoyo de “algunos obispos alemanes”, y añadió sin titubeos:

⁴² Por ejemplo, Eduardo Frei recibió apoyo directo del MRP francés y seguía de cerca las posturas de su líder Georges Bidault, quien pugnaba por un partido laico, no confesional que acogiera en su seno a todos los franceses, sin distinción de credo religioso, pero identificados con la “civilización cristiana”. Véase Letamendia, *op. cit.*, p.181.

⁴³ La antipatía de Gómez Morín hacia la democracia cristiana es en cierta forma incomprensible, pues tenía mucho en común con Eduardo Frei quien, como miembro primero de la Falange y fundador después de la Democracia Cristiana, parece haber compartido muchas de las preocupaciones, lecturas y hasta amistades del político mexicano. Por ejemplo, los dos eran amigos cercanos de Gabriela Mistral, quien introdujo a Maritain con los falangistas chilenos en 1939, ambos leían a Léon Bloy, Charles Péguy, François Mauriac y Paul Claudel. También tenían entre sus temas favoritos las libertades del hombre como persona, el Estado, la democracia y una actitud crítica frente al capitalismo y el comunismo. Pero es posible que tuviera diferencias importantes en cuanto al sindicalismo y, desde luego, la subordinación a la autoridad eclesíástica y la vinculación con organizaciones internacionales. En 1947 Frei fundó la ODCA.

[La Democracia Cristiana] es claramente un movimiento confesional internacional que no se ajusta a la experiencia mexicana de profundo anticlericalismo. Ha tenido éxito en países como Chile y Venezuela, pero hay que recordar que ninguno de estos países han experimentado las guerras religiosas que han tenido lugar en mi país. Personalmente soy amigo de muchos demócratas cristianos, incluyendo a Rafael Caldera, pero esto no tiene nada que ver con que aceptemos sus tesis.⁴⁴

El conflicto entre secularizadores y democratacristianos se resolvió de la peor manera: con la renuncia pública de estos últimos, que abandonaron el PAN no sin antes haber acusado a los dirigentes de defender tesis liberales anacrónicas, de haber reducido su oposición al PRI a un juego de valores entendidos y de evadir el compromiso con la reforma social que exigía cualquier cambio político.⁴⁵

ADOLFO CHRISTLIEB IBARROLA Y LA MODERNIZACIÓN DE ACCIÓN NACIONAL

No obstante esta penosa experiencia, la intención de Manuel Gómez Morín no era bloquear el cambio. Él también reconocía la necesidad de un ajuste importante en el partido, de manera que como contrapropuesta al grupo democristiano, en 1962 apoyó la candidatura de Adolfo Christlieb Ibarrola a la presidencia del PAN. Christlieb compartía con la mayoría de la dirigencia panista de la época una formación en la militancia católica, y como jefe nacional promovió un proyecto político inspirado también en la doctrina social cristiana. Pero en lugar de apoyarse de manera exclusiva en los recursos que le ofrecía la Iglesia católica, como pretendían hacerlo los jóvenes que —al menos en apa-

⁴⁴ Citado en Franz von Sauer, *The alienated "loyal" opposition Mexico's Partido Acción Nacional*, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1974, pp. 123-124.

⁴⁵ "Los democristianos ven con envidia los éxitos de la dinamizada derecha democristiana en Italia, Alemania y América del sur, y encuentran la derecha tradicional de México ineficaz". "Grietas en la derecha", *Política*, vol. iv, núm. 77, 1 de julio de 1963.

riencia— se habían agrupado en torno a González Torres, se propuso seguir los pasos de los partidos demócratacristianos europeos, plenamente secularizados, para insertarse de lleno en el régimen institucional.⁴⁶

En noviembre de 1962 Christlieb Ibarrola asumió la presidencia del comité ejecutivo de Acción Nacional. Tenía el difícil encargo de rehacer una organización exánime. Desgastado por el largo periodo de aislamiento y por las secuelas de la controvertida elección presidencial en 1958, el partido se encontraba en una crisis aguda de identidad y de organización.⁴⁷

El debate en el interior del partido en torno a la opción demócratacristiana no se había resuelto, de manera que Acción Nacional llegó herido a las elecciones de 1961. Su precario estado de salud explica en parte la pobreza de su desempeño y de sus resultados electorales. En ese año el PAN participó en nueve estados menos que en los comicios anteriores, y aunque el número de distritos electorales había aumentado de 162 a 178, el grupo de candidatos panistas disminuyó de 139 a 95. El PAN recibió 8% del voto, pero perdió más de la cuarta parte de los sufragios que había obtenido en todo el país en la elección anterior.

⁴⁶ “Gómez Morín no veía con simpatía la afinidad de esos líderes [Ituarte Servín y González Torres] con personas y grupos con posturas sobre la libertad religiosa muy apartadas de las suyas. Christlieb [...] criticaba la dificultad [de éstos] para distinguir entre la actividad política y la religiosa [...] Detectaba imprudencia, insensatez y no poca intolerancia entre quienes formaban lo que él bautizó como el ‘grupo de los piadosos’”. Alonso Lujambio, “El dilema de Christlieb Ibarrola. Cuatro cartas a Gustavo Díaz Ordaz”, *Estudios*, núm. 38, otoño de 1994, pp. 49-75, p. 57.

⁴⁷ En la ceremonia de transmisión de la presidencia de la organización, el dirigente saliente, José González Torres, había aceptado que el partido “confrontaba” problemas graves que, según él, eran una “crisis de crecimiento”. En su discurso el presidente entrante habría sido más explícito: “Ciertamente, como decía el Lic. González Torres, el Partido está en crisis. Pero es una crisis que, enfáticamente debo hacer anotar, no es exclusiva de Acción Nacional, sino reflejo de una crisis nacional y aun me atrevo a decir de una crisis universal. En el Partido, esa crisis obedece a razones económicas y a defecciones personales y se ha expresado mediante críticas externas e internas [...] Por esa crisis, algunos se han ido; pero los que se van son los escépticos que en fin de cuentas ya no creen ni en sí mismos”. Adolfo Christlieb Ibarrola, “Discurso en la toma de posesión como nuevo presidente de Acción Nacional”, *La Nación*, 25 de noviembre de 1962, año XXIII, tomo XLIII, pp. 18-19.

Estos resultados pusieron en tela de juicio la unidad misma de la organización pues exacerbaban las tensiones derivadas de la iniciativa demócratacristiana. Es cierto que la disminución también podría explicarse porque la tasa de participación en elecciones intermedias es por regla general menor a la que se registra en los comicios presidenciales. Más todavía, ese año se redujo dramáticamente la votación de todos los partidos, y, como se verá más adelante, este fenómeno fue tema de preocupación para la élite política. Sin embargo, las dificultades internas de Acción Nacional fueron determinantes para que se impusiera la necesidad de modernizar la organización. Esta idea cobró fuerza a medida que se fue reconociendo que el abstencionismo era uno de los principales obstáculos al crecimiento del partido.

Así, a finales de 1962, Christlieb Ibarrola tenía que enfrentar dos tareas: restablecer la unidad en el interior del partido y también responder a la necesidad del cambio. Ambos asuntos eran de vital importancia para Acción Nacional, porque ponían en juego la continuidad de la organización. Para alcanzar sus objetivos el nuevo líder del PAN contaba con apoyos importantes entre sus correligionarios más distinguidos, en primer lugar, Manuel Gómez Morín; luego, Christlieb tenía su propia capacidad para evaluar las condiciones del entorno. Para el diseño de una estrategia adecuada a los fines tuvo, y supo utilizar a su favor, dos elementos que le ofrecía la coyuntura: la sacudida del catolicismo que trajo Concilio Vaticano II y la reforma electoral de 1963 —con todos sus presupuestos e implicaciones.

El Concilio Vaticano II y la secularización del PAN

Si en el contexto político nacional soplaban vientos favorables a una reforma electoral, que era uno de los temas recurrentes en las plataformas de Acción Nacional, los cambios en el catolicismo que precipitó el Concilio Vaticano II, también iban en la misma dirección. La evolución del pensamiento católico y el cambio de estrategias de los católicos contribuyeron a la modernización del partido, así como la reforma electoral, porque lo obligaron a definir su posición dentro del sistema po-

lítico. En los documentos y las líneas del *aggiornamento* católico, Acción Nacional pareció por fin encontrar la plataforma que resolvía algunos de los dilemas más agudos de identidad que habían frenado su desarrollo en las décadas anteriores.

Como se verá más adelante, paradójicamente el recurso del liderazgo panista a las propuestas renovadas de acción de la Iglesia católica atenuó el tono confesional del PAN, el cual no pasó a ser un instrumento de la jerarquía eclesiástica, porque la reflexión y las conclusiones conciliares lo llevaron “al encuentro del mundo”, de donde había estado ausente durante más de una década. Desde ahí, Acción Nacional construyó una nueva interpretación del país en el que vivía y de los problemas de los grupos sociales que aspiraba a representar. Es decir, el Concilio Vaticano II contribuyó a resolver las ambigüedades del PAN —y de paso sus conflictos internos—⁴⁸ en temas como la relación entre política y religión. Pero su importancia en términos de modernización del partido estriba en que, gracias a la interpretación de Christlieb Ibarrola de los documentos conciliares, quedó conjurada la nostalgia

⁴⁸ Una de las primeras entrevistas de Christlieb Ibarrola como presidente nacional del PAN publicadas en la prensa nacional versó sobre el tema de religión y política, pero estaba directamente vinculada con el problema de la corriente demócrata cristiana. En esa ocasión Christlieb enfatizó que la razón fundamental del rechazo era el carácter internacional de la Democracia Cristiana: “El orden internacional se funda sustancialmente en las relaciones entre Estados. Atribuir a los partidos funciones propias de los Estados equivale a quebrantar ese orden. Los partidos tienen competencia para formar opinión sobre cuestiones internas e internacionales, dentro y fuera del país, pero no para arrogarse, so pretexto de resolverlas, funciones que son propias de un gobierno. Es función de los partidos pugnar por que los gobiernos adopten las soluciones que aquéllos señalen en sus programas, o alcanzar el poder para establecerlas. Pero los partidos no pueden ni subordinarse en sus actividades, ni depender en su funcionamiento, de organizaciones o de partidos políticos extranjeros”. “Declaraciones hechas por el Lic. Adolfo Christlieb Ibarrola en su carácter de Presidente del Partido Acción Nacional, al periodista Juan Manuel Ramírez, en entrevista publicada por *Excelsior*, en la ciudad de México, D.F., los días 22 y 23 de mayo. Publicadas bajo el título ‘Religión y política’”, en Adolfo Christlieb Ibarrola, *Temas políticos*, México, Ediciones de Acción Nacional, 1963, 1, pp. 29-50, p. 38.

del partido católico que hasta entonces no había desaparecido del ánimo de muchos panistas.

De la defensa católica al reformismo social

Para los católicos latinoamericanos la Revolución cubana tuvo el efecto de una descarga eléctrica. Su triunfo fue la materialización de la amenaza comunista que desde 1945 anunciaba el Vaticano. Las consecuencias de este impacto fueron de largo alcance, pues exacerbaron tensiones latentes en el catolicismo de la región que poco después serían activadas por un acontecimiento propiamente católico, el Concilio Vaticano II.

El objetivo de este gran concilio ecuménico, convocado por el papa Juan XXIII el 25 de enero de 1959, es decir apenas tres meses después de la muerte de su antecesor, era presentar el mensaje de la Iglesia en formas y términos inteligibles para el hombre moderno, pero sin alterar la doctrina. Se trataba también de ofrecer una imagen más conciliadora de la Iglesia, distinta a la que le había impuesto el papado de Pío XII. Según Juan XXIII la Iglesia siempre había combatido el error, en ocasiones con gran severidad, pero “ahora la esposa de Cristo prefiere la medicina de la compasión a las armas de la severidad. Cree que para satisfacer las necesidades del mundo actual es más apropiada la plena explicación del poder de su doctrina que la condena”.⁴⁹

El Concilio Vaticano II se inauguró el 11 de octubre de 1962, es decir, al mismo tiempo que se desarrollaba la crisis de los misiles entre Estados Unidos y la Unión Soviética a propósito de la instalación de armamento nuclear en Cuba, que fue uno de los primeros síntomas de que la rivalidad entre las superpotencias se había trasladado de Europa al mundo subdesarrollado. La asamblea católica se prolongó por un periodo de cuatro años durante los cuales se reunió en Roma en cuatro

⁴⁹ Citado en Malachi Martin, *The Jesuits. The Society of Jesus and the betrayal of the Roman Catholic Church*, Nueva York, Simon and Schuster, 1987, p. 318.

sesiones separadas de cuatro meses, y sus documentos y conclusiones tuvieron distintos tipos de efectos sobre las diferentes regiones del mundo católico.

La defensa de los derechos humanos fue el tema general del Concilio, sin embargo, los prelados reunidos se cuidaron bien de no comprometerse con ningún modelo político o económico en particular. En nombre de la tolerancia, el diálogo y la pluralidad se limitaron a señalar que los derechos humanos básicos fijaban límites y establecían obligaciones “para todos los sistemas e ideologías, pero no se detuvieron a definir la forma precisa en que debían organizarse estos sistemas”.⁵⁰

A la luz de la trayectoria del Celam no es de extrañar el giro que tomó Concilio Vaticano II, ni la importancia que tuvo para la historia de América Latina en el periodo siguiente, todavía menos si se considera que los delegados de la región tuvieron un papel muy activo en esa gran asamblea, en la discusión y elaboración de las conclusiones finales.⁵¹

A partir de la aceptación de la pluralidad política y económica, los católicos —institución y fieles— se propusieron ampliar el repertorio posible de sistemas políticos que —desde su perspectiva— podían asegurar su objetivo último. Paradójicamente, esta diversidad no condujo a una mayor libertad política ni a más tolerancia frente al pluralismo político de la familia católica, sino que precipitó fuertes tensiones en el seno de la propia Iglesia, derivadas del hecho de que como el compromiso con la transformación de estructuras no estaba explícitamente vinculado con ninguna forma política en particular, quedó asociado únicamente al principio de justicia social.

⁵⁰ David Hollenback, “Global human rights: an interpretation of the contemporary Catholic understanding”, en Alfred Hennessey y John Langan (eds.), *Human rights in the Americas: The struggle for consensus*, Washington, D.C., Georgetown University Press, 1982, p.13. Citado en Crahan, *art. cit.*, p. 135.

⁵¹ “Si la influencia de los obispos latinoamericanos se manifestó en todos los documentos conciliares, su intervención es evidente en particular en la Constitución Pastoral de la Iglesia en el mundo moderno [*Gaudium et Spes*]. Así puede argumentarse que la existencia misma del CELAM fue un factor clave en la dirección que siguió el Concilio Vaticano II”, *ibid.*, p. 74.

En conclusión, el *aggiornamento* católico y la *reconciliación de la Iglesia católica con el mundo moderno*, con que se iniciaron los años sesenta tuvo un efecto de dispersión de las fuerzas políticas del catolicismo que aún hoy cuatro décadas después no se resuelve. Sin embargo, es indiscutible que aportó elementos novedosos para la reflexión política de los creyentes, y en algunos casos, como en el del Partido Acción Nacional contribuyó a la modernización de las formaciones políticas que se identificaban con los principios y los valores cristianos.

El PAN y el pluralismo político

El documento conciliar *Gaudium et spes, constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual* fue decisivo para la reflexión interna de los panistas.⁵² El documento sostiene que los cristianos están comprometidos con la transformación de las estructuras y las instituciones de los pueblos, es decir, abandona la posición tradicional de defensa del statu quo, que en el pasado los había identificado con las clases privilegiadas o con regímenes autoritarios; asume la defensa de los derechos humanos, y la promoción de la participación activa en “el gobierno de la cosa pública”. *Gaudium et spes* determinó la reconciliación de la Iglesia católica con las instituciones políticas de la democracia liberal, que eran las únicas que podían garantizar la autonomía de la institución, su integridad y libertad de acción. Sin embargo, con la aceptación del liberalismo político vino, de manera inevitable, la del pluralismo político de la sociedad, esto es el reconocimiento de que los creyentes podían

⁵² Este documento era de gran importancia para el propio Vaticano. El término *constitución* se aplica normalmente a los documentos que definen o declaran el dogma, y no a aquellos que se ocupan de temas pastorales. Al recurrir a un documento de esta naturaleza se trataba de precisar las relaciones de la Iglesia con el mundo moderno, el Vaticano enfatizó el tema: “En contraste con muchos documentos papales anteriores relativos a la modernidad, éste es más abierto a nuevas corrientes intelectuales y sociales”. Gene Burns, *The frontiers of Catholicism. The politics of ideology in a liberal world*, Berkeley, California University Press, 1994, p. 54.

seguir siendo reconocidos como hijos de la Iglesia aun cuando ostentaran opiniones políticas diversas.

Este último punto era decisivo para Christlieb Ibarrola y fue un paso fundamental hacia la modernización de Acción Nacional. El entonces presidente del partido no se cansaba de subrayar la necesidad de respetar las opiniones temporales discrepantes de los cristianos, y criticaba a quienes, con base en el número de bautizados y la proporción de practicantes católicos, confundían las obligaciones del cristiano con la adhesión “circunstancial y contingente” a un programa político que, como todo lo humano, “no está exento de pasiones e intereses personales”.⁵³ Creía que los partidos demócratacristianos en América Latina cometían un grave error al querer agrupar a los cristianos sobre las bases pasajeras de una plataforma partidista, y al hacerlo habían “resucitado el clericalismo y dividido a los cristianos”.⁵⁴

⁵³ Adolfo Christlieb Ibarrola, “El cristiano y la política”, texto de una conferencia sustentada en la Universidad Rafael Landívar, 21, 22 y 23 de mayo de 1969, en Adolfo Christlieb Ibarrola, *Solidaridad y participación*, México, Ediciones de Acción Nacional, 1969, pp. 3-40, p. 22. “Hay ocasiones en que la actividad política se origina con la finalidad de garantizar las libertades no de los cristianos como hombres miembros de la comunidad civil, sino de la Iglesia como institución. Pienso que en el orden temporal no es exigible en favor de la Iglesia, la libertad para una acción absoluta, que pueda convertirla en una fuerza temporal coexistente con la de la autoridad civil. La libertad de la Iglesia debe entenderse como libertad para anunciar el Evangelio, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la predicación, el culto y el cumplimiento de los ritos, como expresa la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cuando se habla de persecuciones o de conflictos debe analizarse sinceramente si su causa real es la predicación del Evangelio, o tiene su origen en alguna existencia de libertades incondicionales como las que en el pasado fundaron estructuras o influencias clericales invasoras o partícipes del poder temporal”, *ibid.*, pp. 22-23.

⁵⁴ Según él, el temor al comunismo había llevado a la formación de los partidos confesionales de la posguerra, y en muchos lugares esa evolución había ido en menoscabo de la misión universal de la Iglesia. Recordaba que en Argentina había habido hasta cinco partidos con denominación cristiana, que muchos pensaban —equivocadamente— que el cristianismo no era una religión sino una filosofía social. En Francia el MRP había perdido apoyo entre quienes repudiaban la guerra en Indochina y la represión en Madagascar, y, continuaba, en Alemania la Unión Demócrata Cristiana apoyaba a la burguesía y las tesis neoliberales, en Brasil la reforma agraria sólo había beneficiado a los campesinos miembros o simpatizantes de la Democracia Cristiana. Véase *ibid.*, p. 27.

Christlieb siempre antepuso la catolicidad de la Iglesia a las divergencias políticas. Rechazaba la idea de que la labor de la institución religiosa se redujera a la “sacristía” así como el “pietismo” que, según él, conducía al conformismo. Criticaba a los católicos integristas que ponían en peligro la universalidad de la Iglesia porque la vinculaban a formas políticas y culturales que por su propia naturaleza cambiaban de continuo. Tampoco aceptaba el progresismo de los católicos que definían la civilización cristiana en términos modernos, sobre estructuras concretas. No obstante la importancia de todo lo anterior en la explicación de la línea de diálogo con el gobierno de Christlieb, el rasgo más notable y de mayor alcance político de esta postura era el reconocimiento de la calidad plural de la sociedad y de las opiniones políticas, y la censura a quienes utilizaban “la palabra de Dios” como “instrumento de eficacia política” o que aprovechaban, con fines temporales,

la influencia que tenga entre los cristianos políticamente comprometidos.

Los cristianos deben evitar cobijarse bajo el magisterio teológico de la Iglesia. Deben tener presente que cuando la Iglesia habla, habla en nombre de Dios, en favor de los hombres, pero no puede convertirse en portavoz de fracciones electorales.⁵⁵

Con el impulso del pensamiento conciliar, Christlieb se lanzó de manera decidida a la reforma interna del PAN, con el fin de construir una organización secularizada, inspirada en los valores cristianos, pero plenamente respetuosa de la autonomía del poder temporal y del principio de que la democracia “cuyo fundamento está en el respeto de los derechos esenciales de la persona humana, implica como consecuencia necesaria la convivencia de grupos políticos diversos”.⁵⁶ Este esfuerzo cristalizó en la XVIII Convención Nacional del partido, celebrada en

⁵⁵ *Ibid.*, p. 24.

⁵⁶ “Discurso pronunciado por el Presidente de Acción Nacional, licenciado Adolfo Christlieb Ibarrola, en la primera sesión plenaria de la XVII Convención Nacional del Partido, el 22 de noviembre de 1963”, en Adolfo Christlieb Ibarrola, *La oposición*, México, Ediciones de Acción Nacional, 1965, pp. 75-87, p. 83.

junio de 1965, con la aprobación de su nuevo documento *Principios de doctrina*. Su objetivo era incorporar a los documentos fundamentales del PAN los cambios que habían experimentado la doctrina social y las nociones centrales de *Gaudium et spes*. De ahí que haya habido una reorganización de prioridades y temas: énfasis en el principio de solidaridad, la primacía de la persona y de la política y las ventajas del pluralismo político.

La convicción de Christlieb de que las sociedades eran políticamente plurales fue el punto de partida para una nueva visión del PAN de sí mismo, de sus funciones y del papel que le tocaba vivir en el sistema político mexicano. Gracias a este cambio el partido empezó a pensarse en los términos de una oposición constructiva, que deseaba participar en las decisiones y en las responsabilidades del poder:

En una democracia, la oposición no es simplemente una fuerza negativa, un peso muerto frente a la acción gubernamental. Todo lo contrario: la oposición —se ha dicho— es en las democracias una fuerza que impide a los gobierno la estrechez de miras a que los lleva fatalmente la dependencia de un solo partido. Cuando un gobierno en sus programas toma en cuenta las exigencias de la oposición para determinar su línea de acción, se abre a las aspiraciones del país, recoge al máximo los elementos de unidad y ensancha los fundamentos de su propia subsistencia.⁵⁷

La estrategia que naturalmente se derivaba de esta visión del papel de la oposición y de la importancia de su participación en los asuntos públicos consistía en entablar relaciones con los demás partidos políticos. Según el líder panista, la actividad política “es una posibilidad de diálogo”, y los intercambios y contactos entre ciudadanos de distintas tendencias, así como su “contacto con los funcionarios públicos, permiten captar y resolver con mayor agilidad las exigencias nacionales.”⁵⁸

⁵⁷ Christlieb Ibarrola, “Oposición democrática”, en *ibid.*, p. 12.

⁵⁸ Christlieb Ibarrola, “Discurso pronunciado... en la primera sesión plenaria...”, *doc. cit.*, p. 83.

Este cambio le permitió a Acción Nacional aprovechar las ventajas de las reformas a los artículos 54 y 63 de la Constitución que propuso el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados en diciembre de 1962. Según la exposición de motivos, el objetivo de esta modificación era encauzar por la vía legal a las fuerzas políticas e impulsar la organización partidista. Con este fin se proponía la introducción de una fórmula de representación minoritaria que corrigiera el efecto asfixiante de las mayorías abrumadoras que hasta entonces ostentaba el PRI. Votada la reforma, con el apoyo de los tres partidos de oposición presentes en la Cámara, además del PAN, el Partido Popular Socialista, PPS, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, PARM, quedó establecido un sistema mixto de representación que mantenía el principio de mayoría y distritos uninominales, “complementado por otro, yuxtapuesto, de representación minoritaria”.⁵⁹ Así, además de diputados de mayoría, cada uno de los partidos tendría derecho a un número proporcional de “diputados de partido”, cinco de ellos se atribuirían al que hubiera recibido cuando menos 2.5% del voto y uno más por cada 0.5% adicional hasta alcanzar 20 curules.

Gracias a estos cambios en las elecciones federales de 1964, Acción Nacional recibió 300 000 votos más que tres años antes, pasó a un millón, esto es, un incremento de 25%, y se aseguró 20 diputaciones, dos de mayoría y 18 de partido que estipulaba la ley. En cambio, ni el PPS ni el PARM alcanzaron el 2.5% de votación y mantuvieron la representación en la Cámara únicamente gracias a que los legisladores priistas hicieron una interpretación “del espíritu de la ley” que, según ellos, promovía el pluralismo y justificaba que tuvieran diputados de partido a pesar de que ninguna de esas organizaciones habían alcanzado el porcentaje mínimo de votos.

En la Cámara, los diputados panistas desplegaron una intensa actividad legislativa, abandonaron el aislamiento y el repudio a los priis-

⁵⁹ “Proyecto de reformas y adiciones a los artículos 54 y 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 de diciembre de 1962”, en Partido Revolucionario Institucional, Instituto de Capacitación Política, *Historia documental del Partido de la Revolución*, México, Partido Revolucionario Institucional, 1984, 11 volúmenes, vol. 7, pp. 632-633.

tas y con ello fueron ganando en la opinión pública una presencia que difícilmente habrían tenido de mantener la intransigencia del pasado. De haberlo hecho habrían dejado pasar una gran oportunidad. Más todavía, esta reforma electoral marca un hito en la historia del sistema político mexicano, pues fue el primer ejercicio de negociación que llevó a cabo un gobierno de la posrevolución con una oposición partidista.

CONCLUSIONES

La propuesta de reforma de Acción Nacional que lanzó el grupo en torno a Hugo Gutiérrez Vega en 1957 era consistente con la doctrina y la trayectoria del partido. Por una parte, hubiera resuelto la ambivalencia que significaba para el partido la asociación con el catolicismo, porque al explicitar sus vínculos con las autoridades católicas habría podido derivar también las ventajas de esta identidad y no sólo las desventajas; por ejemplo, tal vez hubiera podido convertir al PAN efectivamente en el polo aglutinador de toda la oposición católica. Por otra parte, sin embargo, habría sido el fundamento de una relación orgánica con las autoridades eclesásticas que habría limitado su autonomía y frenado el proceso de institucionalización del partido.

El episodio de 1957-1963 en la historia de Acción Nacional demuestra que en estos años la transformación del PAN fue posible gracias a los cambios que experimentó el entorno inmediato: tanto la política vaticana como el sistema político. El dato más importante al respecto es que el entonces líder panista, Adolfo Christlieb Ibarrola, supo extraer de ambos los recursos para reorientar al partido y reformarlo; los objetivos eran los mismos que los que impulsaron al grupo de Gutiérrez Vega, pero sus medios fueron más efectivos. Este proceso fue decisivo para la modernización de Acción Nacional.

IV

LA INCERTIDUMBRE EN LA TRANSICIÓN: EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA AVERSIÓN AL RIESGO*

La noción de *transición prolongada* puede servir para conceptualizar el proceso que ha transformado a lo largo de casi dos décadas el autoritarismo mexicano porque enfatiza su carácter gradual y el papel privilegiado de las élites partidistas. Los cambios más significativos que ha experimentado el sistema político han ocurrido en el ámbito electoral, pero han tenido consecuencias muy importantes sobre el conjunto de la estructura del poder. Por ejemplo, han contribuido a transformar el poder de la Presidencia de la República, que en el pasado era todopoderosa, pero que en la actualidad se ve obligada a negociar sus iniciativas legislativas con partidos de oposición fortalecidos, cuya influencia se ha extendido y que son actores relevantes para los equilibrios políticos generales, mientras que su partido, el Partido Revolucionario Institucional, PRI, ha perdido el virtual monopolio electoral que tuvo durante décadas.

Si se toma como punto de partida del desmantelamiento del autoritarismo en México la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales de 1977, mejor conocida como LFOPPE —cuya intención era impulsar el multipartidismo—, puede apreciarse la lentitud con que ha transcurrido la transición. Este ritmo ha sido explicado sobre todo como resultado de una estrategia del PRI, que habría defendido la continuidad del statu quo bloqueando las iniciativas reformistas de los partidos opositores. A pesar de que existen algunos datos que apoyan esta interpretación, el ritmo del cambio no se explica de manera

* Este artículo fue originalmente publicado con el título “La incertidumbre en la prolongada transición mexicana: el Partido Acción Nacional y la aversión al riesgo”, en Reynaldo Yunuen Ortega Ortiz (ed.), *Los caminos de la transición*, México, El Colegio de México, 2001, pp. 137-176.

Agradezco los comentarios a la primera versión de este trabajo de Alejandro Castañeda, Todd Eisenstadt, Alicia Gómez, Jean-François Prud'homme, Jaime Sempere, Andreas Schedler y Reynaldo Ortega.

satisfactoria si no se analizan las estrategias y el comportamiento de los partidos de oposición en ese proceso. A lo largo de veinte años, el número y la identidad de los partidos de oposición ha variado, al igual que su capacidad de influencia. De ellos el Partido Acción Nacional es el único que ha estado presente desde el principio de este desarrollo,¹ aunque la importancia de su participación ha cambiado en el tiempo: en 1977 se limitó a discutir la iniciativa de reforma electoral que presentó el Ejecutivo, pero en 1989 un documento elaborado por panistas fue la base de discusión del Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales, Cofipe, de 1990, que actualmente rige la organización y el desarrollo de los comicios mexicanos.

Pese a que en los años ochenta Acción Nacional adoptó estrategias audaces y relativamente riesgosas, éstas fueron episódicas. En general el partido se ha distinguido por una preferencia por el gradualismo político que comparte con la élite autoritaria. Esta inclinación ha sido motivo de severas críticas, y algunas de ellas han llegado a señalarlo como el *freno de mano* de la transición. Sin embargo, nada sugiere que sus decisiones tuvieran el propósito deliberado de obstaculizar el cambio, prolongar el autoritarismo o renunciar a las funciones de un partido de oposición.² El análisis de los argumentos y las decisiones de Acción Nacional revela que este partido no es la oposición *domesticada* o *cooptada* que se ha querido ver.³ Si fuera cierto que el PAN ha frenado la transi-

¹ En 1977 las discusiones públicas en torno a la reforma propuesta participaron, además del PAN y el PRI, los otros partidos entonces existentes: el Partido Popular Socialista, PPS, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, PARM, el Partido Mexicano de los Trabajadores, PMT, el Partido Comunista Mexicano, PCM, y el Partido Socialista de los Trabajadores, PST. De éstos sólo el PARM ha sobrevivido el proceso de cambio. En dos décadas han aparecido algunos partidos nuevos, el más importante ha sido el Partido de la Revolución Democrática, fundado en 1989.

² Por ejemplo, se considera que su persistente negativa durante los años noventa a formar una coalición con el segundo gran partido de oposición, el Partido de la Revolución Democrática, para acoger al conjunto de la protesta antipriista, ha sido un obstáculo para acelerar la derrota del PRI.

³ La noción de *lapdog opposition* que propone Todd Eisenstadt ("Eddies in the third wave? Fitting protracted transitions into theories of democratization", Background paper for the Conference: "Pathways to Democracy: Specifying Protracted Transitions", El Colegio de México, 19-21 de mayo de 1999) se funda en la premisa

ción política, este efecto no sería el producto de una relación de subordinación con el poder o de un acuerdo secreto con el PRI, sino del tipo de organización de que se trata.

Aquí se propone discutir la hipótesis de que el gradualismo de Acción Nacional se explica porque es un actor político averso al riesgo, que rehúye la incertidumbre. Esta característica se deriva del tipo de partido que es, de su nivel de institucionalización, de los intereses que representa y de sus valores, así como de sus percepciones de la realidad inmediata y de su fuerza relativa. Muchas de las decisiones del PAN en momentos críticos reflejan una autolimitación que está dictada por la determinación de evitar resultados inciertos. En este aspecto la trayectoria de Acción Nacional muestra un patrón consistente —que incluso podríamos rastrear hasta sus primeras participaciones electorales a partir de 1943— de optar, en condiciones de incertidumbre, por resultados ciertos por modestos que sean, antes que arriesgarlos a la promesa de una ganancia probable. De lo anterior se desprende que en el repertorio de decisiones del PAN, el riesgo ocupa un lugar muy importante, pero únicamente como un valor negativo pues lo calcula sólo como pérdida probable. Esta evaluación lo ha conducido a “no percibir oportunidades reconocibles que probablemente hubieran sido ventajosas”.⁴

En algunos episodios de la transición este comportamiento general, que los propios panistas han llamado *estrategia de la prudencia*, ha sido desafiado por acciones agresivas y una estrategia de confrontación con el gobierno o con el PRI. Sin embargo, ni siquiera en estos casos desapareció del todo la aversión al riesgo. Su comportamiento indica que al evaluar la coyuntura e identificar sus opciones el liderazgo pa-

de que los panistas diseñan sus estrategias y decisiones a partir de los intereses del partido dominante. Sin embargo, esta visión no toma en cuenta el papel que tuvieron en las reformas electorales de 1989-1990, 1992-1993, 1994 y 1996, que pusieron fin a la intervención del gobierno en el proceso electoral, ampliaron la capacidad de supervisión de los partidos y culminaron con la creación de un órgano electoral autónomo.

⁴ Niklas Luhmann, *Sociología del riesgo*; México, Triana Editores-Universidad Iberoamericana, 1998, p. 65.

nista distingue entre dos niveles de incertidumbre y adopta estrategias distintas dependiendo de si lo que está en juego son equilibrios políticos generales o particulares. Este patrón de comportamiento podría formularse de la siguiente manera: Acción Nacional ha optado por comportamientos riesgosos cuyos resultados son inciertos, cuando el equilibrio general del sistema político era estable y las acciones del partido no lo comprometían seriamente; en cambio, cuando estuvo en juego ese equilibrio, el partido optó por comportamientos *estabilizadores*.⁵

Visto de esta manera es más fácil explicar el notable contraste entre las estrategias que adoptó el PAN en dos momentos cruciales del proceso de transición: sus inicios, entre 1983 y 1987, y su aceleración a raíz de la crisis postelectoral de julio de 1988, que concluyó con la toma de posesión de Carlos Salinas como presidente de la República. En ambos el partido tuvo un papel central: en el primer caso como vehículo de una movilización opositora que generó una incertidumbre electoral sin precedentes en el México autoritario, en el segundo, en cambio, Acción Nacional fue un referente de estabilización. En cada caso el partido eligió estrategias que respondían a una racionalidad conforme a sus intereses.

El artículo está dividido en tres apartados: el primero analiza la importancia del tiempo como variable política, distintiva de las transiciones prolongadas, y la manera como esta variable modifica cualitativamente la incertidumbre inherente a estos procesos e influye sobre el comportamiento de los actores políticos. El segundo apartado plantea que la intención central de las reformas electorales mexicanas ha sido contener la incertidumbre política, incluso desde 1963; aquí se propone que el concepto de *institucionalización* es más útil para describir estos cambios, que las nociones de *liberalización* o *democratiza-*

⁵ Howard Margolis distingue dos tipos de utilidad que calculan los individuos: altruista y egoísta. El primero favorece las preferencias del grupo y el segundo las del individuo. Según Margolis la racionalidad de la decisión es el resultado del intercambio entre ambos tipos de utilidad. Citado en Douglass C. North, *Institutions, institutional change and economic performance*, Cambridge, Mass., Cambridge University Press, 1990, p. 14. Esta distinción entre comportamiento egoísta y comportamiento altruista también fue planteada por Max Weber.

ción que normalmente se usan en el análisis de las transiciones. El tercer apartado examina y compara las estrategias de Acción Nacional en las coyunturas electorales de 1985 y 1988, tratando de identificar los elementos que en cada caso explican los distintos comportamientos de un actor contrario al riesgo.

EL FACTOR TIEMPO Y LA INCERTIDUMBRE EN LAS TRANSICIONES PACTADAS

Una de las premisas generales de los procesos políticos que han ocurrido en los últimos veinticinco años mediante los cuales regímenes autoritarios han sido sustituidos por democracias liberales ha sido que la violencia no es una condición necesaria para el cambio. Las transiciones que se iniciaron a mediados de los años setenta en la Europa mediterránea se convirtieron en un referente para diseñar *modelos de democratización*, y uno de sus principales atractivos fue que realizaron el tránsito de la dictadura a la democracia escapando a la experiencia traumática de una confrontación generalizada.

A finales del siglo puede constatarse que las experiencias de este tipo en otras regiones del mundo han sido tan diversas como distintos eran los puntos de partida;⁶ no obstante, la noción de *acuerdo* o *pacto* derivada de los modelos originales —en particular del español—, al igual que las nociones asociadas de *cooperación* y *consenso*, está presente en todas ellas como uno de los ingredientes necesarios para el éxito de la transformación pacífica de las instituciones políticas. A diferencia de las luchas democráticas del siglo XIX y de buena parte del siguiente, en esta nueva ola de democratización,⁷ el cambio político no ha sido

⁶ Véase por ejemplo, Juan J. Linz y Alfred Stepan, *Problems of democratic transition and consolidation. Southern Europe, South America, and post-communist Europe*, Baltimore y Londres, The Johns Hopkins University Press, 1996.

⁷ Philippe Schmitter y Javier Santiso sostienen que la experiencia reciente es una “cuarta ola de democratización”, una de cuyas características es que los democratizadores tienen menos tiempo que sus predecesores en las olas previas para esperar momentos propicios para que los cambios maduren. Philippe C. Schmitter y Javier

el resultado del triunfo absoluto y definitivo de uno de los actores políticos, sino de un acuerdo entre ellos; el pacto es el requisito inicial para que el cambio ocurra. Esta experiencia implica el reconocimiento de que la construcción de la democracia no se funda en una decisión unilateral, y que ninguna de las fuerzas políticas —continuistas o reformadoras— tienen la capacidad para imponerse a las demás.⁸

Ahora bien, si una de las características distintivas de esta ola de democratización es el pacto elitista, entonces este modelo no es alternativo al concepto de transición prolongada, pues —como bien se desprende del planteamiento inicial—⁹ los actores que intervienen en ambos casos son los mismos: la élite en el poder y las élites de las fuerzas opositoras, y es también en el terreno electoral donde se desarrollan los principales combates entre ellas.

La diferencia más importante que distingue las experiencias citadas como ejemplo de transiciones pactadas en la Europa mediterránea y del este y en América Latina, y de transiciones prolongadas —en particular las de México y Brasil—, estriba en el *tiempo* que tomó la construcción de los acuerdos relativos a los mecanismos de lucha por el poder. En el primer caso el proceso culminó en un lapso relativamente breve, en la conclusión de un gran acuerdo general, más o menos definitivo, en torno a las reglas del juego electoral. Una vez resuelto este tema el debate político se desplazó a otros terrenos. En las transiciones prolongadas, en cambio, el proceso se extiende por años, es acumulativo, y está integrado por acuerdos que resultan parciales porque están expuestos una y otra vez a una revisión, a la luz del equilibrio coyuntural entre las fuerzas políticas.¹⁰

Santiso, "The temporal dimensions to the consolidation of democracy", *International Political Science Review*, vol. 19, núm. 1, enero de 1998, pp. 69-92.

⁸ Para la experiencia española, véase Josep Colomer, *La transición a la democracia: el modelo español*, Barcelona, Anagrama, 1998.

⁹ Eisenstadt, *op. cit.*

¹⁰ Para el caso de México, Jean-François Prud'homme sostiene que en 1986 se inició en México un ciclo reforma-elecciones-reforma, en el que cada legislatura producía su propia reforma electoral. Entre ese año y 1996 (fecha de la última reforma) hubo en México una nueva ley, el Cofipe de 1989-1990, y tres reformas. Según este

En las transiciones aceleradas todos los actores políticos comparten el mismo sentido de urgencia en cuanto a la necesidad de concluir el acuerdo a la mayor brevedad posible, así como la percepción de que la persistencia de la incertidumbre es desfavorable a todos por igual, porque puede acarrear un resultado negativo: el colapso institucional que pudiera precipitar una confrontación generalizada, la intervención de un ejército extranjero o el regreso de los militares al poder.¹¹ De hecho, una de las motivaciones más poderosas para que los actores políticos acepten negociar nuevas reglas del juego es el deseo de superar la incertidumbre que dificulta tomar decisiones informadas, calcular costos y ganancias, analizar sus riesgos y prever sus consecuencias. El efecto más significativo de la incertidumbre en situaciones de transición es que propicia —al menos implícitamente— resultados extremos. En particular, como lo indica Adam Przeworski, si se vienen abajo todas las normas de la negociación, se abre la puerta a una insurrección o a la irrupción de fuerzas antidemocráticas que obstaculizan o pervierten el proceso.¹² De ahí la urgencia de llegar a acuerdos. En las transiciones aceleradas el apremio en el que coinciden todos los actores políticos impone un ritmo intensivo a las negociaciones, reduce los tiempos y el margen para los titubeos. Sin embargo, ese apremio es también un incentivo para la cooperación y las reglas acordadas en ese contexto ase-

autor el sistema de partidos por sí solo no generaba los incentivos para lograr un acuerdo general y “consensual”, y observa que el ciclo reforma-elecciones-reforma tiene horizontes temporales muy breves porque funciona según el principio de ensayo y error y “da lugar a pautas de interacción recurrentes entre las fuerzas políticas. En este ciclo, las elecciones constituyen sólo un momento para medir la correlación de fuerzas entre las distintas agrupaciones; la negociación de reformas también es una oportunidad de comparar fuerzas”. Jean-François Prud’homme, “La negociación de las reglas del juego: tres reformas electorales (1988-1994)”, *Política y Gobierno*, vol. III, núm. 1, primer semestre de 1996.

¹¹ El valor democrático que se le ha atribuido al consenso propicia la lentitud en las negociaciones. Véase Andreas Schedler y Javier Santiso, “Democracy and time: an invitation”, *International Political Science Review*, vol. 19, núm. 1, enero de 1998, pp. 5-18, p. 11.

¹² Véase por ejemplo, Adam Przeworski, *Democracy and the market. Political and economic reforms in Eastern Europe and Latin America*, Nueva York, Cambridge University Press, 1991, pp. 29-30.

guran el compromiso mínimo de los actores con la superación de las condiciones que crean la incertidumbre.

En las transiciones prolongadas, en lugar de colapso, el sistema autoritario registra una larga agonía, en la que no parece tan urgente la necesidad de concluir acuerdos porque está en cierta forma asegurada una precaria continuidad institucional, que excluye un desenlace extremo como alguno de los antes mencionados. Sin embargo, cuando la incertidumbre se extiende en el tiempo los actores tienen que lidiar con la cambiante complejidad del contexto, el cual afecta en forma decisiva las negociaciones entre ellos.

La experiencia mexicana es ejemplar en cuanto a la relación entre un contexto de emergencia y un comportamiento cooperativo entre los partidos políticos: la crisis postelectoral que se produjo entre julio y septiembre de 1988, a raíz de las denuncias de fraude en la elección presidencial, generó una atmósfera extendida de confrontación política que explica los acuerdos entre los partidos que aceptaron como válidos los resultados oficiales para la integración de la Cámara de Diputados.¹³ Seis años después, a finales de enero de 1994 los tres grandes partidos mexicanos, el PAN, el PRI y el PRD, concluyeron en forma inusitadamente apresurada acuerdos relativos a una reforma electoral que durante meses habían arrastrado, bajo la presión del contexto que creó a principios de año el levantamiento guerrillero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. Una vez superada la crisis, la voluntad de cooperación de los actores se desvaneció y el PRD retiró su aval a la reforma, a pesar de que había participado activamente en su diseño.

Cuando los actores políticos no perciben la amenaza de un desenlace extremo que pone en juego su propia supervivencia, pueden considerar que el paso del tiempo les favorece. A primera vista el gradualismo parece una estrategia obvia de la élite autoritaria que se niega a modificar el statu quo, pero que acepta buscar nuevas reglas porque no tiene capacidad para resistir la presión de circunstancias adversas o de fuerzas reformistas. Para esta élite las modificaciones dosificadas sirven

¹³ Véase Soledad Loaeza, *Entre lo posible y lo probable*, México, Editorial Planeta, 2008, pp. 65-86.

sólo para postergar sine die su pérdida de poder. Sin embargo, los continuistas no son los únicos que derivan ventajas de esta estrategia, pues los cambios parciales y espaciados en el tiempo también pueden favorecer a los reformadores, sobre todo si se considera que en esos procesos el tiempo es un recurso político a libre disposición de todos los participantes.¹⁴ Así, la lentitud de las negociaciones propia de las transiciones prolongadas puede explicarse por desacuerdos entre los actores en cuanto a la agenda de prioridades o simplemente porque alguno de ellos —continuista o reformista— cree que el tiempo puede procurarle más o mejores cartas de negociación. Por ejemplo, el ritmo gradual del cambio permite que se consoliden organizaciones partidistas incipientes, tanto con los recursos que derivan de acuerdos parciales como con los que obtienen de sus triunfos en las urnas.¹⁵ La élite continuista puede, a su vez, apostar a los recursos que conserva del pasado en el poder, así como a los errores de las nuevas organizaciones y a la impaciencia de los electores para restaurar su propio capital.

No obstante, si la prolongación de las negociaciones entre los actores políticos puede favorecer los intereses particulares de cada uno de ellos, en cambio puede afectar negativamente al conjunto del proceso: aumentar su vulnerabilidad al azar, multiplicar los riesgos o elevar los costos de la negociación entre los actores; el simple paso del tiempo también puede modificar el sentido original del pacto propuesto por los actores: en lugar de ser el punto de partida de la democratización puede convertirse en el objetivo mismo de las interacciones entre la élite autoritaria y las oposiciones.

¹⁴ Schmitter y Santiso, art. cit., p. 73.

¹⁵ Véase Colomer, *op. cit.*; Guillermo O'Donnell y Philippe C. Schmitter, *Transitions from authoritarian rule. Tentative conclusions about uncertain democracies*, Baltimore y Londres, The Johns Hopkins University Press, 1986; Larry Diamond, Juan J. Linz y Seymour Martin Lipset, *Democracy in developing countries*, Boulder, Colorado, Lynne Rienner Publishers, 1989; Timothy Garton Ash, *We the people. The revolution of 89 as witnessed in Warsaw, Budapest, Berlin and Prague*, Londres, Penguin Books, 1990; Scott Mainwaring y Timothy R. Scully (eds.), *building democratic institutions*, Stanford, Stanford University Press, 1995.

Cuando así ocurre pierden precisión las condiciones del acuerdo buscado y éste adquiere un carácter abstracto. Entre otras razones porque cuando las discusiones en torno a las reglas de la competencia electoral, los calendarios comiciales, las autoridades responsables, la formación y consolidación de partidos y la participación de los ciudadanos en estos procesos se prolongan, quedan expuestas a la contaminación de las exigencias de las funciones cotidianas de gobierno y administración, de conflictos ajenos a la discusión de las reglas de la competencia por el poder. De manera que, al alargarse el debate en el terreno electoral, queda inserto dentro de un universo indiferenciado de intereses, presiones y objetivos, cuya complejidad dificulta la conclusión de acuerdos. Asimismo, las negociaciones están expuestas a los efectos de *accidentes*¹⁶ que pueden alterar los equilibrios políticos de corto plazo, y que van desde un terremoto hasta la caída del precio internacional del petróleo, y a contingencias subestimadas, por ejemplo, la aparición de la violencia política. El paso del tiempo también puede disolver el propósito original de la transición propuesta y convertirse, como parece haber ocurrido en México, en una inacabable *guerra de desgaste* entre los actores políticos, cuyo objetivo es la mutua aniquilación.¹⁷ En un combate de esta naturaleza la capacidad de resistencia de los contrincantes adquiere una importancia estratégica.

¹⁶ Maquiavelo advertía al Príncipe que siempre podían ocurrir *accidentes*, casualidades que el Príncipe no podía controlar de ninguna manera, pero que podían ser determinantes del destino de su decisión. Los accidentes maquiavélicos están asociados a la incertidumbre, son excepciones que se producen por efecto de la naturaleza irregular y poco sistemática de la realidad política, pero Maquiavelo sostenía que, con todo y su calidad intrínsecamente inesperada, tenían que formar parte del cálculo político. John P. McCormick, "Addressing the political exception: Machiavelli's 'accidents' and the mixed regime", *American Political Science Review*, diciembre de 1993, vol. 87, núm. 4, pp. 888-900.

¹⁷ El sistema de interacción que promueve sólo negociaciones parciales "aliena la polarización y la exclusión de fuerzas políticas. La única posibilidad de cambio desde el sistema de partidos parece ser un eventual desplome político de una de las fuerzas que polarizan las negociaciones". Prud'homme, *op. cit.*, p. 98.

LA INCERTIDUMBRE EN LAS TRANSICIONES PROLONGADAS Y LA ESTRATEGIA DE LAS VINCULACIONES

Todo proceso de transición implica incertidumbre,¹⁸ porque deriva del agotamiento o la obsolescencia de la regularidad autoritaria, de suerte que la transición consiste en una sucesión de situaciones *anormales*, irrepetibles, que ocurren mientras no hayan cristalizado nuevos equilibrios institucionales.¹⁹ En esta normalidad precaria, es difícil la instalación de patrones regulares de comportamiento, porque prevalece una situación confusa, en la que, ante la ausencia de referentes de racionalidad —reglas de juego o cálculos de pérdidas y ganancias, escasa información o incapacidad para procesar cantidades de información no siempre relevante—, el actor político puede paralizarse o comportarse de manera errática. La capacidad de los actores para tomar decisiones no está únicamente limitada por la indeterminación de las reglas del juego político o por la suya propia como participantes relevantes, sino que también los limita un contexto estructural que difícilmente pueden controlar o manipular, y que en muchos casos tampoco logran comprender del todo.

En las transiciones aceleradas, el contexto complejo e indefnido, en el que los actores no pueden identificar con claridad las relaciones causa-efecto, determinó su voluntad de reconocer la conveniencia de superar la incertidumbre mediante la cooperación. En cambio, en las transiciones prolongadas, como no existe un cuadro de emergencia, o al menos no es reconocido como tal por todos los actores, la evaluación del contexto queda subordinada a sus intereses particulares, de suerte que optan por comportamientos egoístas que retrasan los acuerdos generales.

La incertidumbre en transiciones prolongadas se complica porque en ese caso las negociaciones políticas se llevan a cabo en forma simul-

¹⁸ O'Donnell y Schmitter, *op. cit.*, pp. 3-5.

¹⁹ Estos autores sostienen que la incertidumbre en estas circunstancias es tan importante que el análisis de las transiciones tendría que apoyarse en la "teoría de la anomalía", en la que lo inesperado y lo posible son tan importantes como lo habitual y lo probable. *Ibid.*, p. 5.

tánea con las funciones administrativas del gobierno que tienen que seguir su curso normal, pero que no pueden escapar a la precaria normalidad. De manera inevitable la política contamina a la administración, y esta interacción incrementa los riesgos asociados a las decisiones de los actores. La discusión en torno a las reglas del juego queda condicionada a asuntos de otra índole, y los niveles de incertidumbre se multiplican. Por ejemplo, los inversionistas no querrán tomar decisiones en tanto los actores políticos no lleguen a un acuerdo; su cautela introduce incertidumbre en la esfera económica. Esta situación se ve agravada por el hecho que los contextos se modifican con el mismo paso del tiempo, y con ello las condiciones de negociación entre los actores políticos adquieren mayor complejidad y grado de dificultad.

Cuando la interacción entre los actores políticos se extiende a terrenos no electorales, las diferencias de opinión, reales o ficticias, al respecto pueden ser utilizadas como instrumentos de presión y de negociación, para obtener ventajas en temas propiamente electorales. En este caso los actores políticos tienen a su alcance una estrategia de *linkage* o vinculación, similar a la que Henry Kissinger puso en práctica en la diplomacia norteamericana en los años setenta y que en el contexto de la guerra fría consistía en presionar a los soviéticos en una región del mundo que era de menor importancia para Estados Unidos, para que les dejaran las manos libres en otra que consideraban prioritaria.

El problema que plantea esta estrategia de vincular concesiones en un terreno para obtener beneficios es que *premia* la prolongación de la transición, porque invita a que se autoperpetúe dado que concluir la supone costos que los actores preferirán ahorrarse, por lo menos el de renunciar a una carta de negociación. En la experiencia mexicana hay varios ejemplos de decisiones producto de esta estrategia: en 1998 el Partido Acción Nacional suspendió las negociaciones con autoridades gubernamentales a propósito del presupuesto público para protestar por los resultados oficiales de la elección en una pequeña comunidad, Huejotzingo, Puebla. El gobierno federal obligó a las autoridades electorales a una revisión, que para muchos era injustificada, ante la premura del proceso legislativo y la necesidad de contar con los votos

panistas en el Congreso donde el partido del gobierno federal no era mayoritario. En este caso, el interés colectivo de que el presupuesto fuera votado quedó sujeto al interés particular de Acción Nacional de asegurarse la presidencia municipal en juego. Para el gobierno era tan importante sacar adelante el presupuesto que la veracidad de las denuncias panistas era irrelevante, a pesar de que cuando el gobierno aceptó la presión impuso un costo a su propio partido, el PRI.

Todo lo anterior indica que hay incentivos para que la incertidumbre se prolongue y se amplifique hasta quedar instalada en áreas no electorales en las que también interactúan los partidos, pero en las que además prevalece una aguda asimetría de información y de capacidad de procesamiento. Tal vez una de las consecuencias más serias de la prolongación de la incertidumbre sea que con ella aumenta y también se extiende la vulnerabilidad de todo el proceso de cambio al carácter contingente de la política, a los accidentes maquiavelianos sobre los cuales el actor político no tiene ningún control; asimismo, se multiplican riesgos y costos.

Los actores políticos ante la incertidumbre

No hay conducta libre de riesgo, dado que cualquier decisión implica ganancias o daños contingentes. Cuando los actores políticos introducen cálculos de riesgo en sus decisiones en el proceso de transición, están buscando hacer un uso adecuado de las oportunidades que se les presentan, pero también y sobre todo, imprimir racionalidad en un contexto que se caracteriza por la incertidumbre. Sin embargo, no todos realizan este ejercicio y tampoco la perciben de la misma manera. Para algunos la incertidumbre es una amenaza, mientras que otros la verán como una oportunidad; unos preferirán un resultado cierto, aunque modesto, otros, en cambio, estarán dispuestos a sacrificar ese resultado cierto ante la perspectiva de una ganancia. De ahí que sea posible distinguir a los actores políticos a partir de su actitud frente a la incertidumbre, la cual, a su vez, influye sobre el ritmo de la transición.

El actor averso al riesgo está dispuesto a renunciar a una ganancia máxima si las probabilidades de obtenerlas son menores a las de una ganancia inferior pero segura; el actor proclive al riesgo, en cambio, está preparado a aumentar al máximo sus ganancias aunque las probabilidades de éxito sean bajas, y el actor indiferente al riesgo considera que las probabilidades de obtener ganancias máximas o mínimas son iguales.²⁰ Las bases en que se sustentan estas actitudes frente al riesgo tienen que ver con las características del actor de que se trate. Así, normalmente, un actor institucionalizado mostrará mayor aversión al riesgo que un actor no institucionalizado que quiere mantener abiertas todas sus opciones. El comportamiento de autolimitación se explica porque las organizaciones complejas funcionan según equilibrios y mecanismos internos que son una restricción, y violarlos o ignorarlos puede acarrear serias perturbaciones a la organización en su conjunto.²¹

La actitud del actor político frente a la incertidumbre es consistente con otros elementos de su comportamiento, tales como los mecanismos preferidos de acción el alcance de sus exigencias y los tiempos que impulsa en los acuerdos.²² Por ejemplo, Acción Nacional tiende a atribuir un valor negativo a la incertidumbre, de esta actitud básica se deriva su disposición a negociar pactos con sus adversarios, reconocer que la lucha por el poder no es un combate que busca el desplome inmediato de los contrincantes y que tampoco concluye en victorias —o derrotas— absolutas y definitivas. Todas estas características hacen del PAN un actor moderado. Un partido radical en términos de la incertidumbre es aquel que la mira como una oportunidad, que lle-

²⁰ C. J. McKenna, *The economics of uncertainty*, Nueva York, Oxford University Press, 1986, pp. 19-41.

²¹ Las instituciones estructuran los intercambios, son una forma de canalización y de contención del comportamiento, de ahí que su efecto sea definir y limitar las opciones. North, *op. cit.* Los actores políticos que repudian la institucionalización lo que están rechazando es la disminución de sus opciones.

²² Esta clasificación de moderados y radicales es distinta de la que normalmente se utiliza en el estudio de las transiciones, que distingue entre continuistas y reformadores con referencia a su actitud frente al pasado autoritario; en la mayoría de los casos se parte del presupuesto de que unos y otros comparten una misma actitud cautelosa frente a los riesgos.

ga a utilizarla como carta de negociación política; esta actitud nutre la tendencia a la intransigencia y a ver la negociación política como un juego de suma-cero o como un ejercicio unilateral.

Las diferencias de comportamiento entre los actores políticos también se explican por el nivel de incertidumbre que consideran en sus decisiones. Existen, por lo menos, dos niveles: la incertidumbre que compromete los equilibrios generales del sistema, y la que afecta únicamente al actor. Por ejemplo, si un partido político decide abstenerse de participar en las negociaciones de nuevas reglas de competencia electoral, su negativa es un riesgo para todos los demás porque puede influir sobre sus simpatizantes y, por consiguiente, alentar el recurso a formas extrainstitucionales de lucha por el poder. Esta opción pone en peligro el éxito de todo el proceso de transición, es un comportamiento *egoísta* que subordina el interés colectivo de contar con nuevas reglas de competencia política al interés particular de, por ejemplo, mantener la pureza ideológica. Si se decidiera por un comportamiento *altruista* cooperaría en la negociación aun cuando ello pudiera significar la modificación de su postura inicial. En cambio, un partido puede elegir una estrategia particular, por ejemplo, la formación de una coalición, que plantea el riesgo de enajenar a electores potenciales en desacuerdo con esa estrategia, pero la pérdida de votos afectaría sólo a ese partido; sin embargo, su decisión no tiene por qué afectar el proceso electoral en su conjunto. El éxito de los procesos de transición depende en buena medida del número de participantes egoístas y altruistas y de su capacidad de influencia respectiva.

LA EVOLUCIÓN DE LAS REGLAS DEL JUEGO EN MÉXICO: INSTITUCIONALIZAR PARA REDUCIR LA INCERTIDUMBRE

Una de las singularidades del caso mexicano es la continuidad electoral de casi ocho décadas, a diferencia de lo ocurrido en muchos países donde el fin del autoritarismo quedó sellado por una *elección fundacional*, que tuvo este carácter porque fue parte de un proceso de instaura-

ción o de restauración de partidos y procesos electorales que habían sido interrumpidos o suprimidos por el régimen autoritario.

En un sistema democrático los riesgos de una elección son limitados: pueden significar la sustitución de los gobernantes, pero las derrotas —al igual que las victorias— son necesariamente temporales, pero son riesgos calculados. En cambio, en regímenes autoritarios los riesgos que acarrea una elección son mucho más profundos, porque pueden poner en tela de juicio la continuidad de los actores políticos, la estructura misma de dominación. Así ocurrió en Filipinas en 1983 cuando una elección “normal” se convirtió en una catástrofe para el régimen de Ferdinando Marcos que no pudo resistir la presión de la campaña de sus opositores ni la movilización callejera posterior que repudió los resultados oficiales y que provocó el derrumbe final.

En México, desde 1920 las elecciones federales para la renovación del Poder Ejecutivo y del Legislativo se han celebrado periódicamente conforme a los plazos constitucionales, regidas por leyes particulares que fueron reformadas o sustituidas en varias ocasiones, incluso antes de 1977. A pesar de que los comicios estaban estrechamente controlados por el gobierno y por el PRI, y de que sus resultados eran previsibles, los periodos electorales generaban inquietudes y ciertas perturbaciones; las más importantes condujeron a defecciones del partido oficial. Las elecciones generaban incertidumbre porque abrían un paréntesis en la normalidad autoritaria, que se cerraba muy rápidamente pero era un espacio que podía ser una oportunidad para los descontentos o los rebeldes.

Mientras el PRI y el gobierno pudieron controlar los efectos del descontento que se manifestaba en las elecciones, es decir hasta 1988, las elecciones tuvieron una función estabilizadora y legitimadora sobre todo a partir de 1946. Eran vistas como una fachada democrática y como una válvula de escape, aunque siempre marginal a otros mecanismos de negociación más efectivos. En general, los comicios transcurrían en un clima de indiferencia, pues sólo la clase política se sentía directamente involucrada y afectada por estos procesos. Las sucesivas legislaciones en la materia reflejaban cambios en el sistema político: por ejemplo, la ley electoral de 1918, que recogía la fragmentación política de la

revolución, fue sustituida en 1946 por una ley totalmente nueva que centralizaba la responsabilidad de los procesos en el gobierno federal, conforme al afianzamiento del autoritarismo presidencialista de la época. Sin embargo, en 1963 se introdujo una reforma que creó diputaciones de partido, que eran atribuidas proporcionalmente, y que tenía por objeto responder a las demandas de participación de minorías activas que se habían manifestado en formas no electorales respondiendo a los ecos de la Revolución cubana. Sin embargo, esta válvula de escape se agotó en poco tiempo. En 1973 hubo una nueva ley y en 1977 se introdujo la LFOPE, ambas inspiradas en la misma idea de que había que dar cabida a las minorías políticas.

Sin embargo, y bajo la influencia de las transiciones en la Europa mediterránea o de experiencias como la filipina, a partir de principios de los años ochenta los comicios dejaron de ser el refrendo de decisiones tomadas de antemano. Los métodos tradicionales de fraude electoral (la manipulación de las listas de electores, el relleno de urnas) y de alteración de los resultados se convirtieron en prueba concreta de la naturaleza antidemocrática del régimen. Esta transformación del significado de las elecciones y del voto —que de fuente de legitimación pasó a ser instrumento de deslegitimación— introdujo en la vida política mexicana un nuevo tipo de incertidumbre e incrementó de manera dramática el componente de riesgo de los comicios para la élite autoritaria.

En los años sesenta se decía que los cambios en la legislación electoral tenían un propósito modernizador, se las presentaba como un paso en la construcción de la democracia. Pero en la medida en que también buscaban desalentar formas de participación política extrainstitucionales, reducir la incertidumbre en torno a la lucha por el poder y crear una estructura estable de interacción política, su intención era institucionalizar la participación.²³ No eran necesariamente democratizadores, porque el gobierno mantenía los procesos electorales bajo su férreo control, pero estructuraban la participación en forma eficiente.²⁴ Entre el Cofipe y las leyes anteriores hay una diferencia fundamental

²³ North, *op. cit.*, p. 6.

²⁴ North nos recuerda que las instituciones no se crean necesariamente para ser eficientes, en este caso podríamos decir democráticas, sino que, al menos las reglas

que impone un sello democratizador a la nueva legislación: mientras que las anteriores fueron pensadas y diseñadas exclusivamente por el Poder Ejecutivo, con el apoyo del PRI, todos los cambios legislativos en materia electoral posteriores a 1990 se hicieron con una intervención muy activa y una influencia determinante de los partidos de oposición.

Existe un amplio desacuerdo respecto a cuándo se inició la transición mexicana.²⁵ Una manera de resolverlo consiste en abandonar las nociones de *liberalización* y *democratización* que se han utilizado para analizar estos procesos y mirarla mediante el concepto de *institucionalización*. De todas formas, la aplicación de las dos primeras al caso mexicano es insatisfactoria²⁶ porque el punto de partida de la transición no era una dictadura cuyo desmantelamiento requiriera la reinstalación de las garantías individuales —liberalización—; por otra parte, si bien era un régimen de partido hegemónico, permitía la participación de oposiciones independientes, celebraba elecciones puntualmente y reconocía en el sufragio universal la expresión de la soberanía popular²⁷ —tampoco fue precisa la reinstauración de derechos civiles, democratización—; simplemente se trataba de darles vigencia.

formales, se crean en beneficio de los intereses de quienes tienen el poder para negociar las reglas. North, *op. cit.*, p. 16.

²⁵ Hay desacuerdo en relación con el inicio del proceso. 1982 es una fecha importante porque la bancarrota política y financiera del Estado creó condiciones propicias para el fortalecimiento de otras organizaciones políticas. Entre 1983 y 1985 Acción Nacional registró una cadena de triunfos electorales municipales. En cambio, algunos autores sostienen que la transición se inició en la crisis postelectoral de 1988; otros más lo sitúan en el año de 1994, con la vigencia del Cofipe; por último, algunos consideran que la transición comenzó en México después de las elecciones federales de 1997, cuando el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, y Cuauhtémoc Cárdenas del PRD fue elegido jefe de Gobierno de la capital de la República.

²⁶ Renée G. Scherlen, "Lessons to build on: the 1994 Mexican presidential election", *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, vol. 40, núm. 1, primavera de 1998, pp. 19-38.

²⁷ Según las definiciones respectivas de *liberalización* y *democratización*, en O'Donnell y Schmitter, *op. cit.*, pp. 7-8. Véase Soledad Loaeza, "La experiencia mexicana de liberación", *Foro Internacional*, vol. xxxiv-2, núm. 136, 1994, pp. 221-251.

El concepto de institucionalización,²⁸ en cambio, recoge la intención profunda de las reformas electorales que se han introducido en México en los años de la transición prolongada: limitar la incertidumbre que creaban desacuerdos entre las élites y el recurso a formas extra-institucionales de participación, con la ventaja adicional de que posee una baja carga valorativa. El uso de esta noción puede parecer insuficiente, porque sugiere que no se reconoce ninguna diferencia con las reformas anteriores a 1986 —1963, 1973 y 1977—; sin embargo, son esencialmente distintas por lo menos por dos razones: por el papel activo de las oposiciones en este terreno desde los años ochenta, y luego, por la debilidad relativa del partido oficial y, en cierta forma, de la Presidencia de la República. Por ejemplo, el Código Federal Electoral, CFE, de 1986 es defensivo del PRI, refleja cálculos de riesgo electoral de este partido que no están presentes en las legislaciones anteriores; el Cofipe —con sus sucesivas reformas— recoge también ese tipo de consideraciones, pero de todos los partidos que negociaron su diseño.

Al acercarse las elecciones presidenciales de 1988, el gobierno de Miguel de la Madrid reconoció que la hegemonía histórica del PRI en la Cámara de Diputados estaba amenazada por el creciente descontento que provocaba la crisis económica y por el notable progreso electoral del PAN desde finales de 1982. Entre 1980 y 1984 el número de municipios gobernados por panistas aumentó de 13 a 32, la mayoría de ellos urbanos, algunos densamente poblados, y varias capitales estatales. En las elecciones trienales de 1985 en las que se renovó la Cámara de Diputados el partido oficial mantuvo su tradicional superioridad con más de 70% del voto, y Acción Nacional con 15% no alcanzó el objetivo de formar una *nueva mayoría*, que había sido su lema de campaña. No obstante, de las 41 curules que conquistó, nueve fueron de mayoría relativa, el número más elevado que había registrado en su historia. Las restantes 32 le fueron atribuidas por representación proporcional. Estos avances pueden parecer demasiado modestos como para justificar

²⁸ Esta interpretación se apoya en la definición general de instituciones e institucionalización de Douglass North, ya citada, y retoma elementos de la más restringida de Samuel P. Huntington, *Political order in changing societies*, Londres y New Haven, Yale University Press, 1968, pp. 12-24.

los temores presidenciales; no obstante, como se verá más adelante, Acción Nacional se había abierto un espacio muy importante en la opinión pública nacional e internacional que hacía creíbles sus triunfos. Una estrategia audaz le había asegurado una presencia que se traducía en una capacidad de influencia política muy superior a su importancia electoral real.

Por otra parte, si bien los equilibrios generales del sistema político no habían sido alterados por los avances del PAN, durante el gobierno delamadridista el país vivió una severísima crisis económica en la que se conjugaron —entre otros problemas— una profunda recesión y tasas inflacionarias sin precedentes en el México contemporáneo —que no fueron controladas sino hasta diciembre de 1987 cuando se concluyó un Pacto de Solidaridad Económica entre los principales sectores productivos. El estrangulamiento del crédito, interno y externo, trajo el cierre de muchas empresas medianas y pequeñas y puso en aprietos incluso a algunas de las más grandes. La movilización electoral panista fue el vehículo del descontento que provocaron estas condiciones tan desfavorables. Su impacto político adquirió un peligroso potencial después de los sismos de septiembre de 1985 que destruyeron amplias áreas de la Ciudad de México. Sus habitantes volcaron sobre el gobierno el miedo, el dolor y la rabia contra la devastación que había provocado un fenómeno natural, denunciando su incapacidad para atender con agilidad y eficiencia la emergencia.

Si las elecciones legislativas de 1985 hubieran tenido lugar después de los sismos de septiembre es muy probable que el PRI se hubiera topado con pérdidas considerables en la capital de la República. El efecto político más duradero de los sismos fue que impulsaron y legitimaron formas autónomas de organización y movilización, muchas de ellas surgidas en forma espontánea para realizar operaciones de rescate, pero se mantuvieron para dar continuidad a las demandas de habitación de los damnificados. Esta experiencia fue un antecedente de las movilizaciones de los años noventa protagonizadas por grupos autoorganizados que actuaban al margen de los partidos.

Ante la ola creciente de movilización en 1986 el presidente De la Madrid presentó al Legislativo una iniciativa de ley electoral para sus-

tituir la LFOPPE de 1977. El nuevo código electoral incrementaba el control de las instancias gubernamentales sobre los procesos electorales, fomentaba la dispersión del voto de protesta y aseguraba la representación mayoritaria en la Cámara de Diputados del partido hegemónico. El tono defensivo de la propuesta es patente en el aumento de 100 a 200 el número de las diputaciones plurinominales; un incremento que significó la ampliación de la Cámara de 400 a 500 diputados. También se suprimió la restricción que en el pasado se había diseñado para contener la sobrerrepresentación del PRI, que prohibía acceder a las curules plurinominales al partido que obtuviera más de un cierto número de diputaciones por mayoría. La regla que refleja con más transparencia los temores del gobierno delamadridista es la llamada cláusula de gobernabilidad que estipulaba que al partido que obtuviera mayoría de votos y la mayoría de las curules uninominales, se le atribuirían mediante la fórmula de representación proporcional tantas diputaciones como fueran necesarias para alcanzar la mayoría en la Cámara. Con el CFE de 1986, el PRI y el gobierno aceptaban que ya no podían confeccionar sus mayorías en las urnas, entonces lo harían en la Cámara de Diputados.

EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: UN ACTOR AVERSO AL RIESGO

Desde su fundación en 1939 y hasta 1976, Acción Nacional vivió en una sostenida incertidumbre en medio de un contexto político general estable. En esas condiciones el riesgo permanente era la desaparición, dado que se trataba de una organización siempre frágil. No obstante, después de 1988 el partido dejó de preocuparse por su continuidad, que parecía asegurada; los riesgos mayores que contemplaba en cuanto a sí mismo eran las prácticas fraudulentas del PRI o la competencia con el otro gran partido de oposición, el Partido de la Revolución Democrática. La incertidumbre, en cambio, se había apoderado del contexto político general. En estas circunstancias, en los cálculos del partido se impuso de manera casi invariable el deseo de conjurar la ruptura desordenada de los equilibrios en ese nivel, incluso si en el corto plazo ello

podía acarrear costos al propio partido. Además, durante décadas el partido tuvo una imagen pobre en la opinión pública, que lo consideraba políticamente irrelevante y que observaba su escasez de recursos materiales y humanos.

Acción Nacional ha mostrado una marcada sensibilidad al riesgo desde su fundación, cuando se pronunció en contra de cualquier radicalismo político y a favor de la vía electoral y partidista, cuando las armas seguían siendo un recurso posible de acceso al poder. Este rasgo se profundizó por las condiciones especiales de su supervivencia: la continuidad del partido estuvo por años amenazada por la arbitrariedad propia de los gobiernos autoritarios, que hacía posible que, en cualquier momento, desapareciera la tolerancia que dejaba vivir a la oposición partidista. Las mayorías absolutas del PRI pendían como una espada de Damocles sobre su existencia, y su irrelevancia e ineficacia ponían en juego permanentemente su razón de ser.²⁹ Acción Nacional fue por años una organización precaria. El número de candidatos que presentaba en los comicios variaba, era mayor en años de elección presidencial y disminuía en elecciones intermedias. Su presencia geográfica también era irregular. Con frecuencia los comités locales desaparecían por falta de recursos financieros y humanos, y una elección demandaba esfuerzos sobrehumanos para reanimar a una militancia siempre exigua.

Sin embargo, la repetida participación del PAN en los comicios desde 1943 y en los presidenciales desde 1952 (a excepción de 1976 cuando no presentó candidato presidencial) fue sentando las bases de su institucionalidad. El papel central que adquirió Acción Nacional durante la crisis de los años ochenta demostró que la simple continuidad le había proporcionado un apreciable capital político: la imagen de autono-

²⁹ Hasta la introducción en 1963 de una fórmula de representación proporcional que establecía diputaciones de partido, el PAN nunca logró conquistar más de seis escaños en un total de distritos electorales que entre 1946 y 1961 aumentó de 147 a 178. Entre 1966 y 1982 presentó candidatos en menos de 20% de los ayuntamientos y gobernó apenas un puñado de ellos; su representación en los congresos locales fue casi inexistente, y apenas en 1989 conquistó su primera gubernatura. La persistente incapacidad del PAN para abrirse paso en el electorado —por las razones que fueran— también generaba agudos conflictos internos.

mía. Su eficacia pudo haber planteado muchas dudas, no así su independencia con respecto al poder, a diferencia de la visión que aquejaba a otras formaciones de oposición minoritaria, que eran vistas como simples apéndices del PRI y que desaparecieron cuando la competencia electoral se instaló en el centro de la lucha por el poder.

A ojos de algunos sectores de la opinión pública, Acción Nacional era el único partido de oposición independiente que podía recoger su protesta para castigar al gobierno, poner límites al ejercicio arbitrario de la autoridad o llevar al poder a un nuevo tipo de gobernantes. Por otra parte, para los grupos de privilegio y para las clases medias, que hubieran podido sentirse amenazadas por un cambio radical y que compartían la aversión al riesgo del partido,³⁰ su compromiso con las vías institucionales de acción política era garantía de que era un agente confiable.

En 1988 el PAN era una organización relativamente autónoma, tenía una identidad específica, discernible de otros actores —como las organizaciones empresariales o religiosas que durante décadas habían recurrido al partido como instrumento de presión sobre el gobierno—, actuaba conforme a una lógica propia, despersonalizada, y podía diseñar estrategias y definir acciones a partir de objetivos propios. La complejidad organizativa que había adquirido en el proceso afianzó la *prudencia* de la dirigencia partidista. En otras palabras, en la oposición institucionalizada que era Acción Nacional a finales de los años ochenta, se profundizó la aversión al riesgo que le había sido característica desde los orígenes, por el simple hecho de que su dinámica interna también había desarrollado restricciones, pesos y contrapesos.

La audacia en un contexto de predictibilidad política

El PAN fue el vehículo de la reacción antiautoritaria que desencadenó la expropiación bancaria de septiembre de 1982 entre empresarios

³⁰ Véase Jorge Buendía Laredo, “Estabilidad política, aversión al riesgo y competencia electoral en transiciones a la democracia”, en Reynaldo Yunuen Ortega (ed.), *Caminos a la democracia*; México, El Colegio de México, 2001, pp. 177-207.

medianos y pequeños, regionales y de ciudades de los estados del norte del país. Su intención era tener una participación política efectiva, no sólo presionar al gobierno —como había ocurrido en varias ocasiones en el pasado—, sino asumirlo. De esta manera surgió el *neopanismo*, un movimiento que estuvo integrado por una nueva generación de militantes que aportó recursos e introdujo tonos y estilos mucho más agresivos a las campañas electorales del partido. La característica más notable de esta nueva corriente del PAN fue el tono de confrontación que adoptó frente al PRI, el gobierno y el presidente de la República.

Entre 1983 y 1988 candidatos y dirigentes panistas tomaron un tono impaciente, advertían que recurrirían a la acción directa y anunciaban el inminente colapso del PRI, reclamaban exaltados que si no se respetaban los resultados electorales apoyarían *acciones populares correctivas*, y declaraban que estaban dispuestos a romper la legalidad si otros lo hacían.³¹ Acción Nacional abandonó así su estrategia tradicional que había consistido en presentarse como el referente institucional y legalista de la lucha política frente a los atropellos priistas.

La protesta y los conflictos electorales fueron un problema cotidiano a partir de 1983. En la defensa del voto los panistas organizaron marchas, caravanas automovilísticas, huelgas de hambre, actos de resistencia civil. Por ejemplo, los comicios que se celebraron en Sonora en 1985 estuvieron marcados por la violencia y por los enfrentamientos entre la policía y panistas que ocupaban edificios públicos, bloqueaban calles y carreteras para exigir elecciones limpias o el reconocimiento de presuntas victorias. Este tipo de acciones cobró una dimensión internacional preocupante para el gobierno federal en 1986 en la campaña por la gubernatura de Chihuahua que se convirtió en un poderoso foco de tensión política, cuyas reverberaciones trascendieron las fronteras nacionales, entre otras razones porque los mismos panistas recurrieron a la opinión pública internacional para denunciar los presun-

³¹ Véase por ejemplo, Bernardo Bátiz, “El futuro de México y Acción Nacional”, documento presentado ante la XXXII Convención Nacional, 11-12 de febrero de 1984. Citado en Loaeza, *op. cit.*, p. 365.

tos fraudes electorales, en particular en Estados Unidos cuando el gobierno federal negociaba la reestructuración de la deuda externa. Todos estos actos generaron una atmósfera política de tal manera cargada que muchos periodistas —sobre todo norteamericanos— creyeron que Chihuahua estaba al borde de la guerra civil y el sistema político mexicano a punto de derrumbarse.

Todo parecía indicar que el PAN había perdido la aversión al riesgo que le había sido característica; sin embargo, es de hacer notar que, pese a la incertidumbre económica del periodo, las acciones panistas más audaces se produjeron en un contexto general de estabilidad política que limitaba el impacto de la confrontación, y sus repercusiones sólo excepcionalmente tuvieron un impacto nacional. En cierta forma se mantuvieron encapsulados como conflictos regionales, de la misma manera que el neopanismo fue originalmente un fenómeno regional localizado en estados del norte del país.

A pesar de los malos augurios y las condiciones adversas, en los comicios federales de 1985 el PRI mantuvo la hegemonía histórica en los cargos de elección popular: todos los gobiernos estatales que se renovaron, la mayoría absoluta en el Congreso federal y en los congresos locales, aun cuando en los comicios participaban además del PAN, otros siete partidos.³² Más todavía, en 1987 el presidente De la Madrid ejerció libremente la facultad de designar al candidato de su partido a la Presidencia de la República —a pesar de las protestas de distinguidos miembros de su propio partido—; y su intervención siguió siendo decisiva para la elección de candidaturas a gobernadores, diputados y senadores. De manera que, aun cuando se hablara de crisis política, ésta no había alcanzado los equilibrios profundos del sistema político y tampoco puso en entredicho el funcionamiento regular del gobierno federal. Esta situación resulta en cierta medida sorprendente porque no correspondía a la incertidumbre económica del

³² En las elecciones de 1985 participaron, además del PAN y el PRI: Partido Popular Socialista, PPS, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, PARM, Partido Demócrata Mexicano, PDM, Partido Socialista Unificado de México, PSUM, Partido Mexicano de los Trabajadores, PMT, Partido Socialista de los Trabajadores, PST, y Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT.

periodo.³³ El descontento en contra de la inflación, la caída de las inversiones, el deterioro del empleo, de los ingresos y del nivel de vida de la población cobraría una dimensión política de consideración en 1988, con la formación del Frente Democrático Nacional, FDN, que apoyó la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas.

La estrategia de confrontación del neopanismo no le rindió al partido los frutos electorales que esperaba. Los actos de violencia ocurridos en Sonora en 1985 y en Chihuahua en 1986 tuvieron un elevado costo para el PAN: los empresarios locales criticaron ásperamente una estrategia que había representado cuantiosos costos económicos. Muchos de ellos volvieron a las filas del PRI. En Chihuahua el neopanismo sufrió una amplia derrota en las elecciones locales de 1989, y no fueron pocos los que la atribuyeron a la penosa experiencia de tres años antes. En todos los casos los conflictos terminaron diluyéndose, los candidatos priistas elegidos lograban mantenerse en el poder pese a las protestas panistas, y las aguas del statu quo recobraban paulatinamente su nivel.

La protesta neopanista también se topó con los límites derivados de la evaluación de los riesgos de un desenlace extremo. A partir de 1983 el sistema político vivió tensiones producto de los conflictos electorales que involucraron en su mayoría a grupos de clase media, sin embargo, también se cernía la amenaza de la extensión de la protesta a los sindicatos y grupos urbanos de menores ingresos, que hubiera podido desbordar las instituciones existentes. Una amplia movilización social fue un persistente fantasma para el gobierno de Miguel de la Madrid, así como para otros actores políticos. La organización espontánea de los habitantes de la Ciudad de México en septiembre de 1985 fue un primer y ominoso síntoma. Este peligro llegó a ser reconocido por los aliados de los panistas —muchos empresarios se reconciliaron con el gobierno delamadridista y abandonaron la oposición— y por ellos mismos, sobre todo por la dirigencia nacional, que en más de una

³³ Véase Enrique Provencio, "El claroscuro de los ochenta: la década en la perspectiva del desarrollo", en José Joaquín Blanco y José Woldenberg (comps.), *México a fines de siglo*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Fondo de Cultura Económica, 1993, tomo II, pp. 225-265.

ocasión se deslindó de hechos violentos o impuso a sus militantes más aguerridos la decisión de aceptar los resultados oficiales.³⁴

La autolimitación del PAN en una situación de incertidumbre

La autolimitación de Acción Nacional en un contexto general de incertidumbre política queda a la luz en su comportamiento en el conflicto postelectoral de julio de 1988. Su candidato a la Presidencia de la República, Manuel J. Clouthier, llevó a cabo una campaña del más puro estilo neopanista; pronunciaba inflamados y agitados discursos antigobiernistas, apelaba de continuo a la experiencia filipina, advertía a sus simpatizantes que tenían que prepararse para defender una victoria que “el sistema” trataría de arrebatarle, realizaba simulacros de actos de resistencia civil y en algunos estados realizó actos de esta naturaleza.

La dirigencia del partido fue en cierta forma marginada por el equipo de campaña del candidato presidencial, integrado por miembros de organizaciones de defensa civil. Hubo muchas fricciones entre ellos, pero los líderes panistas cedieron en sus pretensiones de controlar la candidatura, entre otras razones porque estaban convencidos de la efectividad de Clouthier y de su penetración en el electorado. Así que se mostraron dispuestos a tolerar la autonomía de su candidato y un estilo político que chocaba con las prácticas moderadas del pasado; también reconocían que el radicalismo de los neopanistas había tenido un efecto importante de propaganda. No obstante, su actitud cambió cuando se desencadenó la crisis de la elección presidencial, el 6 de julio, misma que se prolongó hasta la instalación de la LIV Legislatura, a finales de agosto.

En el atardecer de ese día el candidato panista Manuel J. Clouthier y otros dos candidatos, Cuauhtémoc Cárdenas del FDN y Rosario Ibarra de Piedra del Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, presentaron ante el gobierno el documento titulado “Llamado a la legalidad”, en el que denunciaban violaciones en el proceso electoral —relleno de

³⁴ Véase Loaeza, *op. cit.*, p. 384.

urnas, alteración de resultados, ausencia deliberada de autoridades electorales en las casillas— y el intento del gobierno de “consumar una imposición”, y advertían a las autoridades que si no se restablecía “de modo inequívoco” la legalidad del proceso electoral, defenderían los derechos del pueblo mexicano. En ese momento se inició un intenso forcejeo, seguido de intensas negociaciones que duraron hasta el 31 de agosto, entre el gobierno y el PRI y los candidatos y partidos de oposición, para resolver el conflicto.

Este proceso transcurrió en una atmósfera de aguda incertidumbre para todos los actores políticos, que se movían entre los procedimientos legales establecidos y movilizaciones de protesta que representaban un riesgo de colapso institucional. La primera incógnita que se planteó en las semanas posteriores a la elección, la más inquietante, tenía que ver con las reacciones de la población a la nueva realidad política y sus posibles respuestas a la situación de emergencia creada por la crisis postelectoral. Además, tampoco podía preverse el comportamiento del FDN que era un actor multiforme, integrado por una coalición heterogénea, sin consistencia interna y cuyas relaciones con el candidato Cárdenas estuvieron plagadas de contradicciones y titubeos. De hecho, este conjunto empezó a disgregarse desde el día de la calificación de la elección presidencial, y sus integrantes participaron en las negociaciones en forma individual.³⁵

Estas circunstancias fueron decisivas para que Acción Nacional abandonara las tácticas del neopanismo, se distanciara de su candidato Clouthier (quien insistía en organizar la resistencia civil, un referéndum, anular el proceso y convocar a nuevas elecciones), examinara y votara los 300 casos de presuntos diputados de mayoría, así como la instalación del Colegio Electoral —el órgano de autocalificación. Por último, los diputados discutieron la calificación de la elección presidencial y Carlos Salinas de Gortari, candidato del PRI, fue declarado presidente electo el 10 de septiembre con el voto a favor de los diputados priistas y de algunos miembros de partidos integrantes del FDN, el voto en contra de la mayoría de los panistas, pues algunos decidieron aban-

³⁵ Véase Loaeza, *op. cit.*

donar el salón de sesiones junto con la mayoría de los diputados de las organizaciones frentistas.

El comportamiento del PAN le fue ásperamente reprochado por las otras oposiciones, así como por el grupo de apoyo del candidato Clouthier, que hubiera preferido la movilización extrainstitucional. El partido no organizó ni participó de manera oficial en ninguna manifestación pública de protesta. Su estrategia era equivalente a aceptar de hecho la elección en su conjunto —que era el sentido profundo de su participación en todas sus etapas—; sin embargo, esto no significa que los panistas hubieran renunciado al papel que les tocaba desempeñar en la correlación de fuerzas que se fue configurando en esos momentos, y que consistía en la estabilización de la incertidumbre y la moderación de los antagonismos que había desatado la competencia entre el PRI, los partidos frentistas y los simpatizantes de Cuauhtémoc Cárdenas. El PAN defendió con pasión sus victorias, participó con los otros presuntos diputados en los enconados debates en la Cámara, en los enfrentamientos dramáticos y los insultos, pero ante el muro que construyeron los priistas para contener las denuncias opositoras y sostener el triunfo de su candidato, respondieron con leyes y reglamentos, y sólo excepcionalmente parecieron dispuestos a transgredir sus límites. Acción Nacional acreditó 101 escaños en la Cámara, es decir la quinta parte de la representación.

Los argumentos de la dirigencia panista para justificar su estrategia en ese periodo hacían invariablemente hincapié en que la estabilidad general del país estaba en entredicho y que había que evitar que el país cayera en el caos y la violencia. Al término del accidentado proceso, el 16 de noviembre Acción Nacional dio a conocer un documento oficial en el que afirmaba que la elección de 1988-1994 era ilegítima de origen, pero justificaba su apoyo tácito al proceso; añadía que condicionaba un apoyo de largo plazo a la *legitimidad secundaria* que el nuevo gobierno podía conquistar si desde el primer día actuaba como “gobierno de transición”.³⁶ Sostenía que ante la posibilidad de que el

³⁶ “Compromiso nacional para la legitimidad y la democracia”, *Palabra*, vol. 2, núm. 7, enero-marzo de 1989, pp. 62-70.

país cayera en el caos y la violencia el partido había decidido integrarse al proceso político normalizado. La dirigencia del PAN sostenía que su propósito era vigilar al nuevo gobierno; sin embargo, el talante conservador de su respuesta ante la crisis es inocultable y muy semejante al de partidos políticos afines que en situaciones extremas y ante el riesgo de una reversión esencial de los equilibrios sociales optan por soluciones de facto.³⁷

No obstante, en los cálculos de Acción Nacional en esta coyuntura crítica intervinieron otras consideraciones de orden particular, derivadas del inesperado apoyo que recibió la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. La primera de ellas fue el hecho de que el partido había pasado del segundo al tercer lugar en los resultados electorales: mientras a Cárdenas se le reconocieron cinco millones de votos, a Clouthier se le atribuyeron tres millones y nueve a Salinas. De anularse la elección y celebrar nuevos comicios, en el contexto de polarización y profundo antagonismo que se había generado en torno a la competencia PRIFDN, había probabilidades de que el PAN perdiera votos y escaños, a favor, por ejemplo, del PRI, al cual podían otorgar su voto los electores moderados temerosos del triunfo del candidato frentista. En un escenario de esta naturaleza Acción Nacional perdería sus ganancias recientes y corría incluso el riesgo de desaparecer y convertirse de nuevo en una minoría irrelevante.

En la situación de incertidumbre que surgió en México a raíz del conflicto postelectoral de 1988 Acción Nacional eligió una estrategia de cooperación y limitación de la incertidumbre que salvaguardó sus propios intereses como organización y le reportó ganancias en su relación con el poder y con el electorado. Durante el gobierno de Carlos Salinas el PAN influyó de manera decisiva en la formulación de la nueva legislación electoral, logró que sus triunfos electorales fueran reconocidos por el gobierno y por el PRI (en 1989 obtuvo su primera gubernatura en el estado de Baja California), y gozó de un trato privi-

³⁷ Los argumentos de Acción Nacional son muy similares a los que esgrimió la Democracia Cristiana chilena cuando en un primer momento apoyó el golpe militar de Augusto Pinochet en septiembre de 1973, como preventivo del caos revolucionario que amenazaba al país.

legiado con el presidente de la República, mejor que el que recibía el propio PRI.

CONCLUSIONES

La experiencia mexicana y el caso del PAN nos permiten llegar a algunas conclusiones relativas a las transiciones prolongadas. Primero, que la duración de la transición depende de que los actores políticos hagan una evaluación consensual del contexto. Si coinciden en que la incertidumbre característica ha alcanzado un nivel crítico en el que las pérdidas que acarrearía la ausencia de negociaciones son mayores que sus ganancias, entonces todos tendrán interés en acelerar la conclusión de acuerdos. Sin embargo, si uno de ellos considera que la incertidumbre no es crítica, o que le favorece, entonces optará por un comportamiento egoísta de no cooperación y el proceso tenderá a prolongarse. Este ritmo propicia, de manera inevitable, la configuración de contextos que no son considerados de emergencia; como se ha visto en la experiencia mexicana, cuando así ocurre hay más incentivos para prolongar esta incertidumbre moderada que para resolverla.

De lo anterior se desprende que la actitud de los actores frente a la incertidumbre, y su percepción de ella, son determinantes de la duración de las transiciones. En la definición de estos factores intervienen elementos subjetivos como la ideología. Habrá partidos, como el PAN, para los que el orden social es un valor y una prioridad de gobierno, por consiguiente, tienden a atribuir un valor negativo a la incertidumbre; en cambio, para partidos como el PRD o incluso el PRI, que mantienen referentes revolucionarios y provienen de una tradición de movilización extrainstitucional, la incertidumbre es una oportunidad, limitarla representa también restringir las opciones del partido. Asimismo, la actitud frente a la incertidumbre depende del tipo de bases sociales que quiere allegarse un partido: serán más aventurados aquellos que buscan representar a quienes “no tienen nada que perder”. La duración de un proceso de transición será más prolongada si los actores políticos poseen percepciones discrepantes del valor

de la incertidumbre y, por consiguiente, lidian con ella de manera distinta.

Por último, la duración de un proceso de transición depende del número de actores egoístas y actores altruistas. Ahora bien, como uno de los aspectos centrales de este modelo de cambio político negociado es el consenso, aunque sean muchos los partidos que participen en el proceso, basta con que uno solo de ellos opte por un comportamiento egoísta para influir sobre la velocidad de las negociaciones y, por ende, del cambio político.

V

EN LA ANTESALA DEL PODER: 1994-2000*

El triunfo de Vicente Fox en las elecciones presidenciales de julio del año 2000 llevó al poder al Partido Acción Nacional y puso fin al monopolio que el Partido Revolucionario Institucional había mantenido sobre la Presidencia de la República desde 1929, si aceptamos la continuidad de ese partido fundado en 1946 con sus antecesores, el Partido Nacional Revolucionario (1929) y el Partido de la Revolución Mexicana (1938). En su momento la interpretación dominante de los resultados de la campaña del 2000 vio en el candidato panista un factor decisivo en la derrota del partido hegemónico. Muchos analistas y observadores explicaron este triunfo atribuyendo a Vicente Fox una personalidad carismática, que —decían— había sido el factor determinante de la derrota del aparato tradicional de movilización del PRI.¹ La importancia desmesurada que adquirió el candidato también se impuso a las reglas de procedimiento de elección interna del PAN pues por primera vez en su historia la candidatura presidencial no fue el resultado de una votación interna, sino que la convención del partido designó a Vicente Fox por aclamación.²

La preminencia del candidato en relación con el partido durante la contienda electoral es un hecho inobjetable; sin embargo, nada tiene

* Publicado originalmente en *Foro Internacional*, vol. XLIII, núm. 1, 2003.

¹ Véase por ejemplo, Kevin J. Middlebrook (ed.), *Party politics and the struggle for democracy in Mexico. National and state-level analysis of the Partido Acción Nacional*, La Jolla, Center for U.S.-Mexican Studies, University of California, San Diego, 2001. La mayoría de los ocho autores que participan en este libro dan por hecho el carisma de Vicente Fox.

² Paradójicamente, el PRI que siempre había recurrido a “candidaturas de unidad” designadas por aclamación, fue el único de los tres grandes partidos que a finales de 1999 organizó una elección primaria interna para decidir quién sería su candidato presidencial. Al igual que el PAN, el Partido de la Revolución Democrática, PRD, también designó por aclamación a su candidato a la Presidencia de la República.

de excepcional dado que la creciente importancia de la televisión en las campañas políticas ha fomentado la personalización de las contiendas y ha relegado a un papel secundario a los partidos, así como sus ideas y plataformas de gobierno. Este fenómeno que afecta en mayor o menor medida a todas las democracias, en el caso de México fue exagerado porque muchos se empeñaban en conectar la personalización de la competencia electoral con lo que era visto como una poderosa tradición local: la del caudillo, el hombre fuerte al que apelan los electores en una situación de crisis, incluso a expensas de leyes e instituciones. Este presupuesto relativo a la cultura política mexicana se veía reforzado por otras experiencias latinoamericanas, como la de Carlos Saúl Menem en Argentina en 1989, Alberto Fujimori en Perú en 1990 y Hugo Chávez en Venezuela en 1998, cuyas elecciones tuvieron un fuerte sabor plebiscitario. Con base en estas referencias y en la historia del personalismo en la política latinoamericana se predecía el triunfo del candidato panista, sin tomar en cuenta que en México, a diferencia de lo ocurrido en Perú o en Venezuela, la campaña presidencial transcurría en un marco general de estabilidad en el que tres grandes partidos, el PRI, el PAN y el Partido de la Revolución Democrática, PRD, participaban junto con siete pequeñas formaciones más.

En este contexto el potencial plebiscitario de la campaña de Vicente Fox no era comparable con los casos mencionados, simplemente porque tanto Fujimori como Chávez llegaron al poder en medio del colapso de los partidos tradicionales. En contraste, en los seis años del gobierno de Ernesto Zedillo el sistema de partidos en México se había fortalecido, pese al sostenido debilitamiento del PRI y al desarrollo accidentado del PRD. En el año 2000 Acción Nacional era un partido consolidado, firmemente afianzado en el sistema político mexicano.

La relativa estabilidad política y económica que se mantuvo en el país después de 1995 y la maduración de las instituciones electorales crearon un entorno favorable para la evolución de las organizaciones partidistas. De hecho, el triunfo de Fox tuvo el concurso del Partido Verde Ecologista de México, PVEM, que formó con el PAN la Alianza para el Cambio y aportó 5% del casi 43% que le aseguró la Presidencia de la República al candidato panista. Este porcentaje no es irrelevante

si se considera que el priista Francisco Labastida obtuvo 37% de los sufragios.

El objetivo de este artículo es analizar la evolución del PAN en el periodo 1994-2000 a partir de dos preguntas: ¿qué cambios experimentó el partido en esos años? y ¿qué tan predecible era su victoria en la elección presidencial? La respuesta nos permitirá conocer las influencias que participaron en su desarrollo, dilucidar el grado de madurez institucional de la organización, así como hacer una ponderación, si bien indirecta, del peso de cada uno de los factores del binomio PAN-Fox en la derrota del PRI.

No se trata aquí de analizar la elección del 2000 pues un ejercicio de esta naturaleza supone la inclusión del PRI, de los efectos de los asesinatos de 1994, de los escándalos de corrupción, de sus relaciones con el presidente de la República y un recuento de la historia de sus conflictos internos y de los desgajamientos. La historia de estos procesos y de su impacto sobre la derrota del partido es un tema distinto al que aquí se trata, a pesar de que el deterioro del partido oficial es la variable explicativa más poderosa de los resultados que llevaron a Fox y al PAN al poder. Este artículo se limita a examinar el desarrollo del PAN durante el gobierno de Ernesto Zedillo.

El análisis parte de la hipótesis de que en los años 1994-2000 el PAN registró cambios electorales, organizativos e ideológicos que lo consolidaron institucionalmente, de tal suerte que cuando alcanzó la Presidencia de la República era una alternativa creíble de gobierno nacional. Estos cambios también le permitieron superar el potencial disruptivo de la candidatura de Fox sobre la organización, sin grandes costos para su estabilidad interna. La consistencia institucional del partido fue puesta a prueba por los primeros simpatizantes del candidato y por una campaña que estuvo fundamentalmente en manos de una estructura extrapartidista, los Amigos de Fox, cuyos dirigentes, recursos y estrategias escapaban al control de Acción Nacional, cuando no lo obstaculizaban.

El desarrollo de esta hipótesis se hará en tres apartados. El primero de ellos describe la transformación que experimentó el PAN en el sistema tripartidista que se instaló y consolidó en el periodo 1994-2000;

el segundo analiza el afianzamiento del partido en esos años como alternativa de gobierno, mediante el examen de su desempeño en términos de votantes y simpatizantes, así como de los cambios de doctrina y organización; el tercer apartado revisa la relación entre el partido y Vicente Fox hasta antes de la elección.

ACCIÓN NACIONAL EN EL TRIPARTIDISMO MEXICANO DE LOS NOVENTA

Muchos de los cambios que experimentó el PAN en este periodo fueron inducidos por las reformas estructurales que introdujeron los gobiernos de De la Madrid (1982-1988), Salinas (1988-1994) y Zedillo que transformaron gradualmente el Estado mexicano. El régimen de partidos fue una de las áreas políticas más afectadas por la disminución del intervencionismo estatal. Las crisis financieras y las reformas económicas significaron una notable reducción de los recursos que en el pasado se utilizaban para alimentar las redes clientelares que fueron la base de la estructura del PRI. La retirada del Estado de este terreno creó un espacio que fue ocupado por los partidos, que entonces lograron convertirse en uno de los ejes del equilibrio político nacional, tanto por su fuerza en el Legislativo como por su creciente presencia en los gobiernos locales y estatales.

La consolidación de este proceso mediante el cual los partidos asumieron funciones de organización y articulación de intereses que antes habían estado reservadas al Estado,³ se explica también porque en las dos últimas décadas del siglo, las organizaciones partidistas proyectaban una fractura política relativamente novedosa que se fundaba en la creciente oposición entre el centro del país y las regiones. El crecimiento del PAN en los años ochenta fue la primera expresión de esta ruptura territorial porque el partido fue el vehículo de la protesta anti-centralista de los estados en contra del gobierno federal y de su sede,

³ Para un desarrollo amplio de esta hipótesis, véase Soledad Loaeza, *El Partido Acción Nacional: la larga marcha, 1939-1994. Oposición leal y partido de protesta*, México, Fondo de Cultura Económica, 1999.

la capital de la República. Acción Nacional dio sus primeros pasos firmes hacia el poder en el terreno municipal y estatal, desde donde fue extendiendo su influencia a partir de diciembre de 1983. Entre 1989 y el 2000 candidatos panistas alcanzaron las gubernaturas de Baja California (1989 y 1995, y nuevamente en 2001), Chihuahua (1992), Jalisco (1992 y 1998), Guanajuato (1995 y 2000), Nuevo León y Querétaro (1997), Aguascalientes (1998), Nayarit (en coalición con el Partido de la Revolución Democrática, 1999) y Morelos (2000).

Este movimiento del PAN de la periferia al centro modificó profundamente el sentido de la política nacional, cuya lógica desde los años treinta había estado inspirada en la centralización y en la consecuente subordinación de los equilibrios políticos locales a la lógica de los equilibrios nacionales. El efecto más notable de este proceso de “emancipación” fue el resurgimiento de una vida política sujeta a la lógica de la distribución local del poder. Este proceso de descentralización también se manifestó en las batallas en la Cámara de Diputados, donde los representantes panistas asumieron la defensa de la autonomía municipal y de los intereses de los estados frente al centro. La experiencia de expansión del PAN contrasta poderosamente con la del PRD que, habiendo nacido de una fractura de la élite nacional y de sucesivos desgajamientos del PRI, se extendió del centro a la periferia. Los perredistas avanzaron desde el gobierno de la capital de la República que conquistaron por primera vez en 1997. En los tres años siguientes, alcanzaron las gubernaturas de Zacatecas, Tlaxcala, Michoacán, Baja California Sur y Nayarit en alianza con el PAN.

La elección de 1994

Al concluir la elección presidencial de 1994 Acción Nacional podía considerarse un partido triunfador. Aun cuando el 27% del voto que obtuvo su candidato, Diego Fernández de Cevallos, era inferior al 50% que consiguió el candidato del PRI, Ernesto Zedillo, el panista desplazó ampliamente al perredista Cuauhtémoc Cárdenas, que quedó en un lejano tercer lugar con 17% del voto, un poco menos de la mitad de

lo que registraron los resultados oficiales en 1988 para el Frente Democrático Nacional (FDN), que entonces apoyó a Cárdenas. El avance del PAN es todavía más notable, si consideramos que en aquélla tan disputada elección Manuel J. Clouthier recibió un poco más de 16% del voto. Los resultados que obtuvieron los candidatos panistas en 1994 también tienen que ser ponderados tomando en cuenta que esos comicios fueron los más competidos y vigilados hasta entonces, y que la tasa de participación fue cercana a 74% del voto, es decir, votaron 35 millones de ciudadanos.

No obstante, la fuerza política de un partido no se mide únicamente por sus resultados electorales, sino también por la capacidad de influencia que ejerce a partir de las funciones que desempeña en un momento determinado. Así, por ejemplo, en el sexenio 1988-1994 la importancia política del PAN no se fundaba en su presencia electoral, sino en su contribución a la estabilización del país en los momentos de crisis que desencadenó la confusa elección de Carlos Salinas de Gortari y al papel que asumió como principal interlocutor de su gobierno. Asimismo, en 1994 el PAN, al igual que todos los partidos entonces registrados, fue una pieza central para contarrestar los efectos disruptivos de los terribles acontecimientos de ese año: el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, el 1 de enero, el asesinato del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, en marzo, y en agosto el del secretario general de ese partido, José Francisco Ruiz Massieu. Todo esto puso en juego la celebración de las elecciones o la transmisión pacífica del poder presidencial, en un país donde todavía se manifestaban tendencias antielectoristas. De ahí la importancia del compromiso de los partidos con la defensa de la vía electoral, tal como se expresó en las nuevas reformas al código electoral, Cofipe. Se avanzó mucho en la “ciudadanización” de los comicios, en el sentido de que los órganos de decisión del Instituto Federal Electoral y de los consejos generales, distritales y locales quedaron integrados por personas hasta entonces ajenas a la función pública.

Vista a la distancia, la campaña presidencial de Fernández de Cevallos tuvo un impacto determinante sobre la posición de su partido en el tablero político mexicano. A diferencia de sus principales conten-

dientes, Cárdenas y Zedillo, para movilizar a los electores a su favor el candidato panista no recurría a los tradicionales mítines multitudinarios, sino que concentró buena parte de sus recursos y energía en los medios.⁴ Este tipo de campaña puso de relieve su personalidad; sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió seis años después con Vicente Fox, Fernández de Cevallos siempre insistió en presentarse como un hombre de partido. Por ejemplo, en una entrevista publicada antes de la elección, Fernández de Cevallos dijo: “hemos rebasado en todas partes toda la trayectoria del partido. No por la calidad o cualidad del candidato, no porque sea yo diferente o mejor, sencillamente porque son nuevos los tiempos, nuevas circunstancias. Vivimos un momento político diferente y eso le ha permitido a Acción Nacional penetrar como nunca en el electorado”.⁵

En junio de 1994 se llevó a cabo por primera vez en la historia un debate televisado entre candidatos a la presidencia. Éste fue el momento culminante de la candidatura de Fernández de Cevallos. En el intercambio que sostuvo con sus contrincantes del PRI y del PRD, ante un público calculado en 30 millones de televidentes, el panista paralizó a sus contendientes, sorprendidos por su elocuencia y desenvoltura. Una encuesta de opinión que se levantó el 6 de junio —a dos semanas del debate— registraba un aumento espectacular de las preferencias por Fernández de Cevallos, que entre abril y esa fecha habían pasado de 9 a 35%, mientras que Zedillo había aumentado discretamente de 45 a 50% y Cárdenas se había mantenido en 11 por ciento.⁶

No obstante, Fernández de Cevallos no pudo, no supo o no quiso mantener la ofensiva. En las semanas posteriores su campaña perdió ímpetu en forma para muchos inexplicable. Disminuyeron sus apariciones en público y su participación en los medios; su popularidad se vino abajo y a finales de julio se estabilizó en 27%, un porcentaje muy similar al que obtuvo en la elección del 21 de agosto. En el interior del

⁴ Para una descripción detallada de esta campaña, véase Loaeza, *op. cit.*, pp. 540-552.

⁵ Rodrigo Morales M., entrevista con Diego Fernández de Cevallos, “Nuevos tiempos, nuevas circunstancias”, *Voz y Voto*, núm. 18, agosto de 1994, pp. 5-7, p. 6.

⁶ Citado en Loaeza, *op. cit.*, p. 543.

propio Acción Nacional se hablaba de un “cambio incomprensible” en la campaña, incluso se hicieron conjeturas a propósito de un “acuerdo secreto” entre Salinas, Carlos Castillo Peraza, entonces presidente del PAN, y Fernández de Cevallos para que éste dejara el campo libre al candidato del PRI. La base de estas suspicacias era la cercanía entre el gobierno y la dirigencia del partido en esos años y rumores que ponían en tela de juicio la probidad del candidato panista.

No obstante, el supuesto cambio en la campaña del panista pudo haber sido mera incapacidad para responder a las expectativas que había creado su éxito en el debate, por ejemplo, multiplicar los actos de campaña, las apariciones en los medios y pasar a la plaza pública. Esto último parecía la estrategia lógica, sobre todo porque el partido no contaba con recursos para ampliar la campaña en los medios. Sin embargo, las concentraciones multitudinarias nunca habían sido el escenario preferido de los panistas y hubieran representado también una modificación central de una campaña que hasta entonces se había concentrado precisamente en el radio y la televisión. De ahí que una interpretación alternativa de la baja de volumen de Fernández de Cevallos después del debate refleje, más que un “acuerdo secreto”, la incapacidad del partido para adaptarse a las condiciones creadas por el debate.

Pese a todo Acción Nacional obtuvo resultados muy satisfactorios en agosto de 1994. Con más del 27% del voto su candidato presidencial recibió una proporción 10 puntos porcentuales superior a la que se atribuyó a Clouthier seis años antes; también aumentó el número de diputaciones para el partido a 119 (18 de mayoría y 101 de representación proporcional). En términos de votación total el PAN prácticamente triplicó los sufragios a su favor pues pasó de un poco más de tres millones en la elección de 1988 a más de nueve millones en 1994. Con estos números el PAN se convirtió en la segunda fuerza electoral del país.

Una estrategia de tres bandas

El ajuste más importante que hizo Acción Nacional a la transformación de su entorno inmediato le fue impuesto por la evolución del sistema

de partidos después de 1988. La formación del PRD en 1989 alteró los equilibrios y la orientación que venían sugiriendo las elecciones desde el inicio de esa década y que apuntaba hacia el establecimiento de un bipartidismo PRI-PAN. En los años noventa se formó un pluripartidismo dominado por tres grandes partidos que se distribuían en proporciones desiguales, pero más o menos constantes, el 90% del voto. En el Legislativo la competencia entre los tres grandes partidos se mantuvo, pero por el apoyo de las dos formaciones ultraminoritarias, PVEM y el Partido del Trabajo, PT, cuyos votos en el Congreso podían determinar el destino de las iniciativas legislativas.

La redistribución del poder influyó en el diseño de las estrategias de los partidos, así como en la naturaleza de la competencia entre ellos. Durante la presidencia de Carlos Salinas la cooperación del PAN con la Presidencia de la República fue uno de los datos fundamentales de la vida política, una relación de la cual quedó sistemáticamente excluido el PRD, mientras que al PRI le tocó en más de una ocasión ser apenas un convidado de piedra. En cambio, en los años 1994-2000 hubo un notable acercamiento entre el PAN y el PRD, que se fundaba en la determinada oposición al PRI, que paradójicamente apuntaló sus relaciones con el presidente Zedillo quien, a diferencia de su antecesor, abandonó la confrontación con el PRD y buscó incluirlo dentro de un esquema de cogobierno con las oposiciones. En las primeras semanas en el poder, Ernesto Zedillo anunció que mantendría una “sana distancia” en relación con su propio partido, así que en este juego de tres bandas el perdedor fue nuevamente el PRI que fue relegado, pero ahora incluso frente a los perredistas.

El presidente Zedillo llevó tan lejos su idea de cooperación con la oposición que nombró a un militante panista de larga data, Antonio Lozano Gracia, procurador general de la República, posición a la que habían aspirado los panistas desde los años cuarenta. El nombramiento reconocía la importancia política de Acción Nacional, pero era también un gesto de confianza del presidente hacia ese partido, que sugería desconfianza a sus propios correligionarios. Sobra decir que esta decisión generó resentimientos muy profundos entre los priistas, puesto que a Lozano Gracia le tocó investigar crímenes extraordinariamen-

te dolorosos y costosos para el PRI, en primer lugar los asesinatos de 1994.

La experiencia de incluir a un panista en un gabinete predominantemente priista no se saldó con buenos resultados para ninguna de las partes. Lozano no mostró la imparcialidad que esperaba el presidente Zedillo⁷ y cayó en errores gravísimos que lo obligaron a abandonar el cargo en 1996 en medio de escandalosas revelaciones, a propósito de testimonios falsos y de acusaciones sin fundamento, que habían sido emitidas contra prominentes miembros del PRI. Para el presidente Zedillo el costo de esta decisión debe medirse en el continuo deterioro de sus relaciones con su propio partido. Esta tensión reforzó la hostilidad de los priistas a algunas de sus políticas de liberalización económica; así por ejemplo, en 1997 los diputados del PRI trabajaron activamente en contra de la iniciativa de reforma eléctrica que presentó el Ejecutivo que fue finalmente derrotada. El procurador panista denunció al hermano del ex presidente Salinas, Raúl Salinas de Gortari, como autor intelectual del crimen de José Francisco Ruiz Massieu y logró su encarcelamiento. Este proceso dio origen a un conflicto muy serio entre el ex presidente Salinas y su sucesor, cuyos alcances en el seno de la élite priista aún no han sido completamente esclarecidos.

Más allá de las profundas diferencias ideológicas y programáticas que separaban al PAN y al PRD los resultados electorales crearon en ese periodo una situación de empate no sólo entre el partido en el poder y las oposiciones, sino entre ellas mismas. En la LVII Legislatura votada en 1997, las oposiciones hicieron amplio uso de la mayoría que sumaban para imponerse al PRI y bloquear o rechazar más de una iniciativa presidencial (en porcentajes de representación, al PAN correspondió 24%, al PRD 25% y 48% al PRI). Sin embargo, esta estrategia no fue la base de una coalición duradera, sino que estuvo armada a partir de una serie de pactos circunstanciales, porque en las urnas el

⁷ En una reunión con académicos de El Colegio de México, celebrada en enero de 1995, el entonces secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, a la pregunta de por qué se había nombrado a un miembro connotado de la oposición panista en un cargo tan delicado respondió que el presidente quería tener garantías de imparcialidad en las investigaciones.

PRD era un competidor tan importante como el PRI; de la misma manera que para el perredismo Acción Nacional era tan adversario como podía serlo el partido oficial. De ahí que los esfuerzos de perredistas y panistas para formar una alianza antipriista se hayan topado con el obstáculo de la rivalidad natural PAN-PRD. Tal vez este proyecto habría corrido con mejor suerte si alguno de los dos partidos hubiera tenido una franca mayoría sobre el otro.

Una consecuencia importante de la estrategia de cooperación entre los dos grandes partidos de oposición fue que formaron una mayoría legislativa, lo cual representó un reto al hiperpresidencialismo e imprimió una novedosa efectividad al sistema de pesos y contrapesos que establece la Constitución. Durante el gobierno del presidente Zedillo la autoridad presidencial se topó con nuevos límites. Asuntos tan urgentes como la aprobación del presupuesto anual o la reforma eléctrica fueron materia de prolongadas negociaciones partidistas, y entre los legisladores y el gobierno. La estrategia de cooperación entre el PRD y el PAN fue evidente en temas políticos delicados como las reformas electorales o las denuncias de corrupción que se presentaron contra el ex presidente Salinas y algunos ex funcionarios de alto nivel. En 1996 la fuerza conjunta de las oposiciones logró una significativa reforma del Cofipe, y finalmente el IFE adquirió plena autonomía en relación con el gobierno, que quedó excluido de ese organismo. Asimismo, se ampliaron las facultades del Tribunal Federal Electoral; esta transformación se fraguó en el Poder Legislativo y fue decisiva para afianzar la credibilidad de la institución responsable de la organización de los comicios.

A pesar de estos acuerdos, persistieron las diferencias entre los dos partidos sobre todo en temas de política económica. Por ejemplo, los perredistas siguieron criticando severamente las políticas de liberalización del gobierno, que los panistas, en cambio, defendían y hasta promovían. Más aún, Acción Nacional respaldó casi sin discusión la primera operación de rescate bancario en diciembre de 1994 para responder a la gravísima crisis financiera que se desató a unas cuantas semanas de la llegada al poder de Ernesto Zedillo. Esta operación dio fundamento a uno de los escándalos que pesó sobre el gobierno zedi-

lista durante toda su gestión. Los legisladores panistas fueron participantes muy activos en el diseño del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) que en 1998 sustituyó al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

Las insalvables diferencias entre panistas y perredistas explican que, a pesar de que ambos supieran que la fórmula ideal para obtener una victoria incontestable sobre el PRI en el 2000 era un solo candidato de oposición, a finales de septiembre de 1999 el proyecto cayera por tierra después de cuatro meses de negociaciones, entre otras razones por la insuperable rivalidad entre Vicente Fox y Cuauhtémoc Cárdenas.

La estrategia de cooperación con el gobierno generaba en ocasiones dudas en la opinión pública y muchas tensiones en el interior del panismo, donde no se lograba resolver la aparente contradicción que planteaba para muchos ser un partido de oposición y cooperar con el gobierno. Este dilema de identidad ha sido un constante tema de disputa desde los primeros años de la organización, pero se agudizó cuando Acción Nacional accedió al poder tanto en los ejecutivos locales como en el Legislativo federal, y se ha mantenido como una fuente de disenso en el interior de la organización. También ha propiciado la formación de corrientes radicales —que consideraban que la confrontación preservaba la identidad del partido— y moderadas —que pensaban que la cooperación era una oportunidad para ganar capital político funcionando como una oposición “responsable”, en mal disimulada referencia a la estrategia de la confrontación del PRD.

En 1999 el entonces líder de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Carlos Medina Plascencia, quiso resolver este problema de identidad presentándose ante la opinión pública nacional como el representante de una fuerza de oposición que no haría concesiones a un presidente del PRI, por muy amigable que hubiera sido con los panistas y sus intereses. El 1 de septiembre de 1999 a Medina Plascencia le tocó responder el informe presidencial que conforme a la ley debe pronunciar uno de los legisladores en representación de todo el Congreso. Rompiendo con la tradición, la respuesta que recibió el presidente Zedillo no fue una glosa de su documento, mucho menos un repertorio de halagos y agradecimientos. Para furia de los priistas pre-

sentes y sorpresa de muchos, el discurso de Medina Plascencia contenía severas críticas y agrios reproches al presidente.

El tono de la intervención del panista quedó establecido desde sus primeras frases: “C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: El Honorable Congreso de la Unión, recibe de usted el documento *que dice contener* el estado que guarda la administración pública federal”.⁸ A pesar de las indignadas protestas y de los gritos de los priistas que intentaban acallarlo, Medina Plascencia siguió adelante para enumerar un apretado listado de todas las fallas del presidente. Para empezar, señaló que había faltado al compromiso que había adquirido públicamente de mantener una relación fluida y constante con el Legislativo. Calificó la ceremonia del informe de ritual sin contenido; habló de la persistente pobreza, de la injusticia, de la inequidad, de falta de rumbo. Puso en duda la veracidad de muchas de las afirmaciones presidenciales: “¿Alguien puede afirmar, con apego a la verdad, ‘que ya pasamos lo peor’ mientras las comunidades indígenas del país siguen acumulando miseria y desesperanza?”. En la última parte de su intervención le reprochó elevando la voz que no hubiera garantizado la vigencia del Estado de derecho, en alusión al conflicto que mantuvo a la Universidad Nacional Autónoma de México en paro durante un año. Habló de incapacidad, de incompetencia y de impunidad.

Fue su discurso el de un partido fuerte, que se había crecido en el debate legislativo y en la experiencia de gobierno, que había asumido plenamente su papel en el tránsito de un sistema de partido hegemónico al pluripartidismo. Fue también un discurso que buscaba recuperar la credibilidad de su partido que para muchos había quedado comprometida por la cooperación con el gobierno, y fue también una manera de contraatacar al PRD, de arrebatárle la bandera de una tradición opositora que los perredistas habían empuñado reprochando a Acción Nacional una cercanía con el gobierno en la que no veían cooperación sino complicidad. Los panistas se preparaban para la elección presidencial no sólo frente al PRI, el tripartidismo los obligaba a redefinir su po-

⁸ Las cursivas son de la autora. PAN, “Respuesta a la intolerancia”, inserción pagada en *Proceso*, núm. 1192, 5 de septiembre de 1999.

sición en relación con el PRD que, como se verá más adelante, en los comicios federales de 1997 había registrado avances muy importantes que amenazaban con colocar de nuevo a Acción Nacional en una tercera posición electoral.

EL AFIANZAMIENTO DE ACCIÓN NACIONAL COMO ALTERNATIVA DE GOBIERNO

El fortalecimiento de Acción Nacional en el Poder Legislativo fue un aspecto muy importante de su desarrollo en los años 1994-2000. Sin embargo, en ese lapso el partido también se consolidó como una opción de gobierno; así puede interpretarse el progreso de los panistas en las urnas y el aumento de la militancia. Este crecimiento repercutió en el liderazgo del partido y obligó a cambios importantes de doctrina y de organización.

El crecimiento de Acción Nacional

El crecimiento del PAN en el periodo 1994-2000 se observa en sus triunfos electorales y en el aumento de la militancia. En relación con el primer aspecto habría que señalar que en las elecciones de 1994 su presencia se fortaleció en los 300 distritos del país, incluyendo los rurales donde el PAN hacía esfuerzos más bien modestos dada la legendaria lealtad de los campesinos al PRI. Este avance puede medirse en el hecho de que sólo en 39 distritos del país obtuvo menos de 10% del voto. En los tres años siguientes el partido mantuvo un ritmo acelerado de crecimiento. En ese periodo conquistó las gubernaturas de Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro, y retuvo la de Baja California. En 1996 el PAN conquistó los municipios más importantes del Estado de México, y en Coahuila triunfó en Monclova, Saltillo y en ocho municipios más.⁹ Sin

⁹ Francisco Reveles Vázquez, "La participación electoral del PAN: de las presidencias municipales a la Presidencia de la República", en Francisco Reveles Vázquez

embargo, después de las elecciones federales de 1997 la irrupción del PRD frenó el crecimiento del PAN porque el nuevo partido dividió el voto opositor.

A pesar de lo anterior, las oposiciones fueron un contrapeso real al poder presidencial. En conjunto sumaban una representación superior a la del PRI que obtuvo 39% del voto y 239 diputaciones. (El resto fue captado por el PT y el PVEM, a los que correspondieron 3 y 4% del voto respectivamente). La cooperación PAN-PRD fue creciente después de las elecciones para la LVII legislatura, en buena medida forzada por los mismos resultados electorales que atribuyeron a Acción Nacional 27% del voto y 121 curules, pero el PRD registró un notable ascenso porque obtuvo 26% del voto y 125 escaños. Acción Nacional vio con alarma cómo el PRD le disputaba la hegemonía sobre el voto de oposición, con el apoyo de una proporción creciente de votantes, muchos de ellos antiguos priistas descontentos con las reformas económicas del gobierno zedillista. De suerte que ambos partidos se encontraban en la compleja situación de mantener una estrategia de cooperación en el Poder Legislativo, al mismo tiempo que competían en las urnas.

El desempeño del PAN en la capital de la República en 1997 ilustra los costos que acarreó el tripartidismo para los panistas. En el Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas llegó a la Jefatura de Gobierno en la primera elección de ese tipo con más de 48% del voto; más todavía, los candidatos perredistas conquistaron una impresionante mayoría al acreditarse 38 de los 40 escaños en la Asamblea de Representantes y 29 de las 30 diputaciones federales.¹⁰

Estos resultados catastróficos para el PAN, que solamente acreditó 15.5% del voto, fueron de inmediato atribuidos al candidato Carlos Castillo Peraza, que llevó a cabo una campaña muy desacertada, pues aunque fuera un político avezado en las lides de la política federal y de su estado de origen, Yucatán, desconocía por completo la política

(coord.), *Partido Acción Nacional: los signos de la institucionalización*, México, Editorial Gernika-Universidad Nacional Autónoma de México, 2002, pp. 193-255.

¹⁰ *Ibid.*, pp. 231-232.

del Distrito Federal. Su fracaso es un ejemplo de la creciente diferenciación que se había producido entre la política local y la nacional, como lo es el hecho de que el porcentaje de votos por Cárdenas y el PRD en el Distrito Federal fuera muy superior a sus resultados en el nivel nacional. El desempeño del PAN en esta ocasión puso fin a la contribución que tradicionalmente hacía la capital de la República al conjunto de la votación panista, que desde los años cuarenta era superior a la de cualquier otra entidad. Este patrón electoral empezó a modificarse en los ochenta ante la expansión del partido en los estados; sin embargo, nadie esperaba el colapso de 1997. Este resultado también alteró en forma decisiva los equilibrios entre el centro y las regiones en el interior del PAN y fue fuente de tensiones internas y uno de los resortes de reformas importantes en la organización y los estatutos que hasta entonces estaban sujetos a una visión cuyo eje era la capital de la República.

Aires desfavorables siguieron soplando sobre Acción Nacional en los años 1998-1999, cuando registró pérdidas importantes en Baja California, Durango y Yucatán, aunque alcanzó la gubernatura de Aguascalientes y la de Nayarit en coalición con el PRD. Sin embargo, el más grande sinsabor lo produjo la derrota en las elecciones de 1998 en Chihuahua donde no pudo retener una gubernatura cargada de simbolismo para los panistas, dado que en los años ochenta ese estado había sido escenario de los primeros avances de la renovación del partido que encarnaron los neopanistas o “Bárbaros del norte”, como les gustaba autodenominarse, que retaron con éxito la hegemonía del PRI.

El retroceso de Acción Nacional en estos años alcanzó al ámbito municipal. En 1997 el partido ganó en 96% de las elecciones municipales que tuvieron lugar ese año, pero para 1999 esa proporción había descendido a 65%; asimismo, el porcentaje del voto por el PAN en el conjunto de los sufragios emitidos en estos procesos entre 1997 y 1999 cayó de 31 a 19%.¹¹ No obstante, las derrotas no minaron la posición de influencia política del partido, en buena medida porque los muni-

¹¹ Alonso Lujambio, “Democratization through federalism. The National Action Party strategy, 1939-2000”, en Middlebrook (ed.), *op. cit.*, pp. 47-94.

cipios gobernados por panistas estaban densamente poblados, representaban cerca de 30% de la población del país.

El alcance del impacto de la aparición del PRD en el tablero electoral mexicano sobre las derrotas del PAN en este periodo también debe examinarse a la luz de dos fenómenos asociados con el tripartidismo: la depuración de las opciones de oposición al PRI y los costos de la experiencia de gobierno. Los primeros avances de la oposición partidista en los años ochenta tuvieron como principal sustento una reacción anti-autoritaria a las decisiones presidencialistas de Luis Echeverría y José López Portillo. Bajo el amplio manto de la heterogénea comunidad de rechazo que se fue fraguando paulatinamente se mezclaban antiestatismo, antigobiernismo y antipriismo. Todas esas causas se acumularon de manera indiferenciada para impulsar el voto de protesta que fue característico de los comicios entre 1983 y 1988; por efecto del tripartidismo de los noventa las posiciones de los partidos y las actitudes y preferencias del electorado se fueron depurando. Este proceso también fue consecuencia de la gestión gubernamental de partidos que cuando estaban en la oposición podían jugar con la imaginación del elector, pero que una vez en el gobierno tenían que responder por los costos de decisiones reales.¹² Todo ello contribuyó a que se precisaran los perfiles de las opciones que se ofrecían al votante.

Las derrotas electorales de Acción Nacional en los años 1997-1998 influyeron sobre el crecimiento de la militancia, pues también ahí disminuyó el ritmo de expansión del panismo. Entre 1989 y 1995 el número de adherentes se incrementó de 75 000 a cerca de 120 000 y se mantuvo en ese nivel hasta 1999; este estancamiento puede explicarse porque el entonces presidente del partido, Felipe Calderón, insistió en introducir requisitos de formación ideológica para los militantes, como parte de una política de reclutamiento restrictiva que distinguía entre miembros activos y adherentes, típica del panismo

¹² Para un análisis muy escrupuloso de la experiencia gubernamental panista, véase Tania Hernández Vicencio, *De la oposición al poder. El PAN en Baja California, 1986-2000*, México, El Colegio de la Frontera Norte, 2001. Véase también Alberto Aziz Nassif, "Alternation and change: the case of Chihuahua", en Middlebrook (ed.), *op. cit.*, pp. 189-208.

tradicional.¹³ Durante la gestión de Calderón también se establecieron programas de entrenamiento y cursos de capacitación, y aunque todos éstos son procedimientos legítimos de consolidación de cualquier organización partidista, en este caso también fueron interpretados como un movimiento defensivo de los antiguos cuadros del partido para limitar la influencia de los recién llegados.

Cambios en el liderazgo

Los cambios en el liderazgo de Acción Nacional en los años noventa fueron también una respuesta a las modificaciones del entorno. Esto no significa que fueran ajenos a los desarrollos en el interior de la organización. Más todavía, los análisis que se han hecho de lo que el politólogo italiano Angelo Panebianco llama “la coalición dominante” en el PAN,¹⁴ muestran cómo estos arreglos interelitistas son un reflejo de las corrientes internas, de su composición y de su fuerza relativa. Este fenómeno es un aspecto sobresaliente en la vida del PAN, en cuyo seno conviven y compiten grupos y fracciones, no obstante la imagen de consistencia y relativa homogeneidad que ofrece al exterior.¹⁵ En contraste con su combate en el sistema político contra el hiperpresidencialismo y el centralismo, Acción Nacional posee una estructura centralizada y vertical, marcadamente presidencialista. De ahí que los dirigentes — y las corrientes a que pertenecen — tengan un peso determinante en la definición de las estrategias de la organización.

¹³ Una descripción detallada de las diferencias entre miembro activo y adherente se encuentra en Francisco Reveles Vázquez, “El centralismo en la estructura del PAN”, en Reveles Vázquez (coord.), *op. cit.*, pp. 165-192. Véase también David. A. Shirk, “Mexico’s democratization and the organizational development of the National Action Party”, en Middlebrook (ed.), *op. cit.*, pp. 95-128. No obstante, este autor confunde las dos categorías.

¹⁴ Véase por ejemplo, Francisco Reveles Vázquez, “Luchas y acuerdos en el PAN: las fracciones y la coalición dominante”, en Reveles Vázquez (coord.), *op. cit.*, pp. 111-164.

¹⁵ Véase Steven H. T. Wuhs, “Barbarian, bureaucrats, and bluebloods: Fractional change in the National Action Party”, en Middlebrook (ed.), *op. cit.*, pp. 129-158.

Hasta 1996 la figura dominante en el partido fue Carlos Castillo Peraza, un viejo militante y buen político e ideólogo que trataba de combinar la política de la convicción —trabajaba intensamente en los aspectos doctrinales de la organización— con el realismo político que lo condujo a cooperar con el presidente Carlos Salinas después de la agitada elección de 1988. A pesar de sus enormes esfuerzos por lograr esa combinación exitosa, con frecuencia eran evidentes las contradicciones en casi cualquier intento de combinar ideología y praxis. Sus relaciones con los cardenistas del PRD, la mayoría de ellos antiguos priistas, ilustran este tipo de dificultades. Castillo Peraza transfirió mucha de su desconfianza y aversión hacia el PRI a las posturas, los métodos y las personalidades del PRD, aun cuando la cooperación entre las oposiciones hubiera podido redituar ganancias al PAN. No obstante, Castillo nunca quiso asociarse con perredistas en quienes veía lobos disfrazados de corderos, que además pretendían usurpar una tradición que, a ojos del líder panista, pertenecía exclusivamente al PAN. No sería exagerado suponer que su hostilidad al viejo PRI que, a sus ojos, representaba Cuauhtémoc Cárdenas lo persuadió para que colaborara con el presidente Salinas.

Las relaciones entre el PAN y el PRD fueron de mayor cooperación con los sucesores de Castillo Peraza, Felipe Calderón (1997-1999) y Luis Felipe Bravo Mena (1999-2002). En particular el segundo mostró una mejor disposición a trabajar con el PRD, tal vez porque provenía del neopanismo, es decir, la corriente empresarial y pragmática que se implantó en Acción Nacional en los años ochenta. A partir de la llegada de Bravo Mena, la voluntad de expulsar al PRI del poder se impuso a cualquier otra consideración y abrió el camino a nuevas coincidencias entre los dos grandes partidos de oposición tanto en el Legislativo como en elecciones municipales e incluso para gobernador, como ocurrió en Nayarit (a pesar de que el candidato de esta coalición fuera un ex priista).

La elección de Calderón a la presidencia del partido a finales de 1996 podía interpretarse como el resultado de una nueva escenificación del conflicto entre pragmáticos y doctrinarios que estuvo latente en Acción Nacional desde sus orígenes en la relación entre los dos líde-

res fundadores, Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna.¹⁶ Calderón es miembro de una destacada familia panista, comprometida con el partido desde su fundación, representaba la tradición de la oposición heroica de los años duros del auge priista, defendía también la convicción de que para ser panista había que pensar como panista y no sólo apoyar al partido porque así lo permitía o lo demandaba la oportunidad.¹⁷ No obstante, era distinto de los viejos panistas, primero, porque él mismo tenía menos de 35 años cuando fue elegido, y segundo, porque su carrera en el partido había transcurrido en los años en que el PAN se desenvolvía ya como una oposición relevante. De ahí que Calderón tuviera conocimientos y habilidades de política partidista y parlamentaria que sumaban los atributos del panista pragmático a las “virtudes” del tradicional.

Por todo lo anterior, Calderón era un candidato muy fuerte; sin embargo, su triunfo no estaba asegurado. Su contrincante, Ernesto Ruffo, también poseía un importante capital simbólico porque era el primer candidato de Acción Nacional que había alcanzado una gubernatura, la de Baja California. Además, Ruffo encarnaba al neopanista por excelencia: de extracción empresarial había ingresado al partido al inicio de los ochenta, le interesaban poco los aspectos doctrinarios, pero como había sido un gobernador exitoso tenía una experiencia que todavía entonces era una perla rara en el partido. No obstante, el hecho de que Ruffo fuera originario de la región donde se había levantado la ola panista de los ochenta era el dato que imprimía fuerza a su candidatura. De hecho, en diversas ocasiones Ruffo hizo referencia a que los órganos internos del partido no representaban con fidelidad los equilibrios

¹⁶ Véase Loaeza, *op. cit.*, cap. II.

¹⁷ En Acción Nacional existen distinguidas dinastías familiares que se fundaron con el partido. Los apellidos Gómez Morín, González Luna, González Morfín, Gómez Mont, Gutiérrez Lascaráin, Calderón Vega, Vicencio, Velasco, Christlieb, González Hinojosa, Madero, entre otros, pesan mucho cuando se discuten candidaturas a cargos de elección o en la organización. En los años setenta el tema de las “dinastías” causaba mucha irritación en el interior del partido porque muchos pensaban que los lazos familiares entre los descendientes de los fundadores propiciaban la inequidad entre los panistas.

vigentes porque atribuían al centro y al Distrito Federal una preponderancia que no correspondía a su contribución proporcional a la fuerza del partido. Con este argumento, Ruffo, que tenía el apoyo de muchos dirigentes estatales,¹⁸ ponía en evidencia que lo que estaba en juego ya no era solamente la oposición entre doctrinarios y pragmáticos, o entre “panistas de sangre azul” y los arribistas del neopanismo. Ruffo representaba el reclamo de las ramas locales del PAN a la dirigencia nacional por una mayor representación y participación en las decisiones del partido.

Felipe Calderón fue elegido presidente del partido por el Consejo Nacional; en la primera ronda de votación la diferencia de votos entre él y Ernesto Ruffo fue relativamente pequeña (159/107). Como había sido casi siempre la costumbre, en la segunda vuelta de votación, el candidato con menos votos se pronunció por apoyar a su contrincante. Al nuevo presidente del PAN le tocó asumir los costos electorales del tripartidismo y del surgimiento del PRD, con el que habría de competir por los votos de oposición. Sin embargo, quienes apoyaron a Ruffo atribuyeron la caída del partido en los años 1997-1999 a los doctrinarios, a los desequilibrios en la representación de las regiones en órganos centrales del partido y a la política de cooperación con el gobierno.

Todos estos argumentos estuvieron presentes en el proceso de renovación de la dirigencia en 1999, sólo que en esta ocasión no eran tan grandes las diferencias entre los dos principales competidores, Luis Felipe Bravo Mena y Ricardo García Cervantes. Ambos eran considerados neopanistas, dado que el comienzo de sus actividades en el partido estaba vinculado con la llegada de Manuel J. Clouthier al PAN. Habían sido miembros del Consejo Nacional y del Comité Ejecutivo Nacional y ambos habían sido legisladores. No obstante, a diferencia de García Cervantes, cuya carrera en el partido abarcaba casi la totalidad de su experiencia profesional, en sus inicios Bravo Mena estuvo estrechamente relacionado con empresarios, en particular con la Coparmex, donde fue director de Estudios en los años setenta. Su ascenso político

¹⁸ Reveles Vázquez, “Luchas y acuerdos en el PAN...”, en Reveles Vázquez (coord.), *op. cit.*, pp. 144-146.

se asociaba con el crecimiento del PAN en el Estado de México, aunque es originario de León, Guanajuato, al igual que Vicente Fox. Los lazos de Bravo Mena con los empresarios más comprometidos con el PAN fueron clave para asegurarle el triunfo, sobre todo en una coyuntura en la que la precampaña de Fox, lanzada en 1997, pesaba ya sobre el proceso de elección de una nueva dirigencia.

La reorganización de un partido en el poder

La sustitución de Felipe Calderón por Luis Felipe Bravo Mena fue más que simplemente el triunfo del ala empresarial sobre los doctrinarios. Fue también consecuencia de la descentralización que estaba experimentando Acción Nacional, así como de la fuerza que habían adquirido las ramas estatales. Los gobernadores y presidentes municipales empezaron a demandar mayor participación en los asuntos del partido, por ejemplo, en la integración de las listas electorales. Tanto el PRI como el PRD sufrieron el mismo tipo de tensiones entre centro y periferia. El hecho de que los precandidatos y candidatos de los tres grandes partidos a la Presidencia de la República en 2000 hayan sido previamente gobernadores ilustra con claridad el nuevo equilibrio político nacional.

Estos cambios impusieron modificaciones importantes en la organización del partido, aunque no se alteró la estructura centralizada y presidencialista. Sin embargo, las reformas de los últimos años han ampliado en forma considerable la presencia de los comités estatales y las competencias del Comité Ejecutivo Nacional.

El PAN es un partido liberal en el sentido de que la adhesión es de carácter individual, sin embargo, para ingresar hay que presentar una solicitud y el apoyo de un miembro activo. El órgano supremo de autoridad es la Asamblea Nacional,¹⁹ AN. Durante la gestión de Calderón

¹⁹ La Asamblea Nacional está integrada por delegaciones nombradas por los comités directivos estatales y por el CEN o por la delegación nombrada por éste. Cada delegación estatal tiene 15 votos más uno por cada distrito federal electoral, a los cuales se suma uno más por cada punto porcentual o fracción superior a 0.5% de la votación obtenida en la última elección federal. Un delegado más tendrá cada dele-

y en 2001 se modificaron los porcentajes de representación de los estados para responder a los reclamos de las ramas estatales; sin embargo, las facultades de este órgano están de hecho limitadas porque se reúne cada tres años y sólo puede ser convocada en forma extraordinaria por el Consejo Nacional, CN, o por el Comité Ejecutivo Nacional, CEN. Esta disposición atribuye un enorme poder al presidente del partido. Hasta 2001 el predominio del CEN, además, estaba asegurado porque podía vetar acuerdos de la Asamblea Nacional y de las asambleas estatales y municipales.

La segunda instancia de autoridad en el PAN es el Consejo Nacional, que tiene en principio las funciones de un senado. El número de integrantes de este órgano ha aumentado significativamente, por efecto del crecimiento del partido; sin embargo, sus facultades no son muy amplias y, al igual que la Asamblea, está sujeto a la autoridad del CEN. En 2001 formaban parte del Consejo Nacional 300 personas elegidas por la Asamblea Nacional,²⁰ más el presidente y el secretario general del CEN, los ex presidentes del propio CEN, el presidente de la República y los gobernadores de los estados que sean miembros del partido, los presidentes de los comités directivos estatales, los coordinadores de los grupos parlamentarios, que son designados por el presidente del partido, y un coordinador nacional de diputados locales. En marzo de 2001 se inauguró formalmente la figura de consejero a perpetuidad o vitalicio. Recibieron esta distinción Luis H. Álvarez, Felipe Calderón y Vicente Fox.²¹

gación por cada punto porcentual o fracción superior a 0.5% que represente la votación del partido en la entidad en el total de la votación que haya recibido el PAN en la última elección federal. El voto de los delegados no es secreto.

²⁰ La elección de los 300 consejeros nacionales es bastante compleja. Las asambleas estatales tienen un papel importante en este proceso, pero el CN participa con esta instancia en la elección de 150 consejeros, los demás se eligen por fórmulas de distribución que combinan número de diputados federales por entidad, contribución de la entidad a la votación total del partido, número de miembros activos en la entidad en relación con el total de miembros del partido. Partido Acción Nacional, *Estatutos*, aprobados en la XIII Asamblea Nacional Extraordinaria, 8 y 9 de diciembre de 2001.

²¹ Reveles Vázquez, "El centralismo en la estructura del PAN", en Reveles Vázquez (coord.), *op. cit.*, pp. 165-192.

El presidente del partido es en realidad la máxima autoridad de la organización porque los estatutos le atribuyen gran capacidad de influencia en las decisiones de cada una de las instancias del partido, por medio de las atribuciones del CEN. Como se dijo antes, el presidencialismo es una característica de origen del PAN desde 1939 y se mantuvo hasta el año 2000. Este peculiar desarrollo se explica en parte porque al término de sus distintas crisis internas el partido reaccionaba fortaleciendo al presidente de la organización. Por ejemplo, en 1978 se modificaron los estatutos para que la decisión de participar en las elecciones fuera facultad del presidente —en respuesta a la crisis que provocó la no participación en la campaña de 1976. Esta disposición desapareció en las últimas reformas que transfirieron esta facultad al Consejo Nacional, y después de la victoria del año 2000 se amplió la influencia del CN, donde participan las organizaciones estatales.

No obstante lo anterior, y aunque las reformas recientes han tratado de transferir al CEN parte de las responsabilidades que antes tenía al presidente del partido, éste sigue siendo una autoridad central: no sólo preside la organización, sino que también es presidente del CEN, de la Asamblea Nacional, de la Convención Nacional y del Consejo Nacional. Es miembro *ex officio* de todas las comisiones que formen el Consejo o el Comité nacionales, coordina el trabajo y las relaciones entre los comités estatales y municipales y de las delegaciones entre sí y con el Comité Ejecutivo Nacional. El CEN, por su parte, tiene la facultad de vetar los acuerdos de las asambleas estatales. También es facultad del presidente proponer reglamentos, programa de actividades, asesores y dependencias. La fracción x del artículo 65 de los estatutos además le otorga la autoridad para “en casos urgentes y bajo su más estricta responsabilidad” tomar las medidas que juzgue “convenientes” para el partido, y podrá informar al respecto al CEN “en la primera oportunidad”.²² A todas estas atribuciones se suma el voto de calidad que tiene en caso de empate en un acuerdo de asamblea. Una de las modificaciones recientes más interesantes fue la su-

²² Partido Acción Nacional, Comité Ejecutivo Nacional, *Estatutos generales*, México, 1986, p. 46.

presión de la facultad del CEN para decidir las candidaturas de “ciudadanos de reconocido prestigio y honorabilidad”, como lo establecían los estatutos antes de 2001.

Hasta 1999 la elección del candidato presidencial se hacía de acuerdo con un sistema de voto indirecto de las delegaciones reunidas en la convención. No obstante, ese año, bajo la presión de la precandidatura de Vicente Fox, se introdujo el voto directo de los delegados, aunque se mantuvo la elección indirecta para los candidatos a gobernador, senador y diputado local. El CEN integra las listas de candidatos en distritos plurinominales de representación proporcional con el apoyo de las convenciones estatales y distritales, pero se reserva la designación de los dos primeros lugares en cada circunscripción.

Acción Nacional, partido democratacristiano

La importancia de la identidad doctrinal para Acción Nacional debe entenderse a partir de su historia. Durante décadas, la doctrina del PAN fue para sus adversarios ideológicos prueba de su carácter contrarrevolucionario y de que era un instrumento del Vaticano de intervención en los asuntos internos del país. Desde la fundación del partido la doctrina fue vista como un rasgo que lo diferenciaba de organizaciones efímeras que se formaban de manera oportunista en torno a personas o grupos de poder. Durante los años del auge priista la doctrina fue lo que sostuvo a Acción Nacional, y se convirtió en el emblema del heroísmo de los primeros años y de la fidelidad al partido. La doctrina panista cumplía diferentes funciones. Primero, ofrecía una base para una identidad política más precisa que la que sostenían los demás partidos, cuyo marco de referencia ideológica y programática fue durante años el vago “ideario de la Revolución mexicana”. En segundo lugar, gracias a la identidad doctrinal, el partido podía mantener consistencia interna en un entorno adverso. Estas funciones dejaron de ser importantes durante los años de crecimiento, en cambio, después de 1994 la doctrina se convirtió en el sello de legitimidad en el interior del partido.

El tema de la doctrina también ha sido una fuente de tensiones en el seno del PAN; a lo largo de su historia la etiqueta de “doctrinarios” ha tenido hasta cierto punto un sentido peyorativo porque implicaba rigidez, estrechez de miras y carencia de habilidad política. No obstante, los defensores de la doctrina se ven a sí mismos como los poseedores de una vocación de servicio ajena a las ambiciones del poder, mientras que éste era el impulso de los pragmáticos. La ignorancia de la doctrina es materia de reproche, pero para muchos panistas la doctrina es una camisa de fuerza para el crecimiento del partido. El propio Vicente Fox así lo afirmó en reiteradas ocasiones, y ésta era una de las principales diferencias entre los panistas y los Amigos de Fox. La división entre doctrinarios y pragmáticos desapareció durante la campaña electoral del 2000 porque los segundos se impusieron a los primeros, pero ganada la Presidencia de la República el liderazgo del partido volvió por sus fueros y en la actualidad una de las actividades más importantes de la militancia es la formación ideológica de los jóvenes.

En los años noventa el énfasis en la formación ideológica —o doctrinaria como los panistas prefieren llamarla— tenía las mismas funciones que en la década de la fundación, cuando Gómez Morín insistía en que la posesión de una doctrina era la única defensa contra los personalismos que entonces dominaban la política nacional. En los años ochenta el liderazgo panista vio nuevamente en la doctrina del partido una defensa frente al oportunismo de los neopanistas. Los viejos panistas querían evitar que el partido se convirtiera en lo que el PRI siempre había dicho que era: el instrumento de los ricos que lo utilizaban para defender sus intereses. También veían en la doctrina una vía para introducir un cierto orden en el crecimiento acelerado del partido, el cual podía tener efectos disruptivos sobre una organización que no estaba preparada para los grandes números.

Con el renovado interés por la doctrina se impuso la necesidad de modernizarla. Los triunfos electorales llevaron a la necesidad de trascender la protesta antipriista y diseñar políticas de gobierno. Con este fin, los panistas volvieron los ojos a la corriente política que les era más afín y que podía proporcionarles respuestas cercanas a sus creencias y

visión del mundo. Así, cuarenta años después de un fallido intento de insertar el partido en las filas de la democracia cristiana,²³ durante la presidencia de Carlos Castillo Peraza el PAN se incorporó plenamente a esta corriente. La conclusión lógica de este compromiso fue que puso fin a la ambigüedad del PAN en relación con sus componentes religiosos y la adopción de las propuestas democratacristianas de gobierno.

La modernización de la doctrina abarcó dos aspectos distintos, aunque relacionados: en el plano de los valores los panistas se acogieron al *solidarismo*, que es la propuesta católica de finales del siglo xx. Su premisa básica es la creencia de que el hombre es el pilar del orden social y la solidaridad inherente a las relaciones sociales; rechaza el colectivismo porque subordina la persona a la voluntad colectiva; repudia la idea de que la libertad del individuo consiste en alcanzar plena independencia de cualquier vínculo social, y critica la indiferencia del liberalismo hacia la espiritualidad.

El solidarismo muestra ciertas continuidades con el pensamiento católico anterior a la segunda guerra mundial como son: la concepción moralista de que la política no es un asunto de dominación y conflicto, y una visión organicista de la sociedad. Sostiene que las comunidades naturales están vinculadas entre sí por una necesaria interdependencia que mantiene el principio de orden de una jerarquía de objetivos y metas.

Por esta vía el PAN se identificó una vez más con las posiciones vaticanas, pero conjuró el riesgo de la confesionalización del partido cuando ingresó a la Internacional Demócrata Cristiana. En 1987 el partido fue elegido miembro de la Organización Demócrata Cristiana de América. Castillo Peraza justificó este paso con el argumento de que la caída del socialismo había hecho creer en la victoria del liberalismo, pero sobre todo había planteado la necesidad de fortalecer “las familias políticas y culturales que no niegan, por una parte, el respeto al mercado y a la libertad de la iniciativa económica, pero, que por otra parte sub-

²³ Para este episodio, véase el capítulo III de este libro.

rayan la responsabilidad social entre personas, grupos y empresas, y la necesidad de una orientación ética”.²⁴

En el acercamiento del PAN a la democracia cristiana tuvo un papel muy importante la fundación alemana Konrad Adenauer (Konrad Adenauer Stiftung, KAS) que, a través de la Fundación Rafael Preciado Hernández,²⁵ proporcionó a los panistas elementos muy valiosos para consolidar su identidad ideológica y su madurez organizativa. En 1987 Manuel Clouthier citaba la política de estabilización monetaria de Ludwig Erhard como un ejemplo válido para combatir la inflación mexicana. La economía social de mercado (que nació de la interpretación alemana de la encíclica *Quadragesimo anno*) fue la respuesta ilustrada del panismo a las reformas de los tecnócratas priistas. Basta comparar las propuestas de la KAS para América Latina con los documentos programáticos más recientes de Acción Nacional para encontrar coincidencias casi perfectas en materia de reforma fiscal, descentralización, educación, desarrollo de empresas medianas y pequeñas y combate a la corrupción. Jóvenes panistas y miembros de la dirigencia han participado en los distintos programas de formación de líderes de la Fundación Adenauer, que también es un respaldo importante para la Fundación Rafael Preciado Hernández del PAN. La influencia de la KAS sobre Acción Nacional es de tomarse en cuenta porque en el amplio espectro que es hoy en día la democracia cristiana europea, la versión más conservadora es la alemana, en cambio el partido belga es más progresista.

La influencia del pensamiento democristiano alemán sobre el PAN era muy clara en los noventa, especialmente en materia de política económica. El partido adoptó las críticas al intervencionismo estatal extendido, los principios de la economía social de mercado, el respeto al derecho de propiedad, la iniciativa privada y las garantías individuales, con base en la creencia de que los diferentes sectores de la sociedad no

²⁴ Citado en *Proceso*, núm. 875, 9 de agosto de 1993, pp. 23-25.

²⁵ Véase Soledad Loaeza, “The political dimension of Germany’s unintentional power: the KAS and Mexican democratization”, en Anne-Marie Le Gloanec (ed.), *Non-state actors in international relations. The case of Germany*, Nueva York, Manchester University Press, 2007, pp. 46-69.

son ni rivales ni enemigos, sino socios en la creación de riqueza. Desde 1988 las campañas presidenciales y las plataformas políticas se inspiraron de estas propuestas. No obstante, durante la campaña electoral del 2000 esta influencia fue opacada por las demandas pragmáticas de los Amigos de Fox y por el estilo del candidato.

La relación del partido con la IDC no debe subestimarse. En primer lugar, le dio una proyección internacional que fue un factor de influencia en la formación de una opinión favorable al candidato panista en el exterior del país en el año 2000. También le ha permitido desarrollar relaciones de privilegio con otros partidos en el poder, por ejemplo, con el Partido Popular de José María Aznar. El ingreso del partido mexicano a la IDC le significó una ganancia, porque fortaleció una de sus ramas regionales, la ODCA.²⁶

Ambas organizaciones estaban vinculadas por lazos solidarios, que fueron un canal para el intercambio experiencias y la construcción de vínculos personales.

La Democracia Cristiana trata de ofrecer soluciones distintas del liberalismo y del socialismo con el argumento de que no hay una sola tercera vía. Reconoce la necesidad de un intervencionismo estatal moderado y limitado en determinadas áreas: en asuntos culturales y en la educación, así como en la regulación del mercado. En relación con los primeros sostiene que al Estado toca garantizar una visión moral de la educación. En cuanto al mercado rechaza la idea de una armonía natural, y considera necesaria la regulación y el ejercicio de la autoridad pública sobre los actores económicos. La idea es crear un Estado regulador que se involucre de manera limitada en actividades productivas, pero que en cambio se concentre en la corrección de las distorsiones del mercado y en asegurar una mejor distribución del ingreso. No obs-

²⁶ En 1948 el chileno Eduardo Frei Montalva fundó la ODCA que era parte de la Unión Mundial Demócratacristiana. En 1984 la ODCA agrupaba 19 partidos y asociaciones políticas de la región; en el año 2000 su número había aumentado a 31 en 26 países de América Latina, y representaba el 30% del electorado de la región. En 1993 el PAN ingresó como miembro observador y en 1999 fue elegido miembro ordinario. Luis Felipe Bravo es uno de los diez vicepresidentes del Comité Ejecutivo de la IDC.

tante, a principios del siglo **xxi** la **DC** no se había mantenido impermeable a las reformas liberales del periodo anterior. Los documentos que se discutieron en la reunión de la **IDC** que se celebró en México en noviembre de 2001 muestran que dos pilares del credo liberal han sido adoptados por los democratacristianos: el principio de la igualdad de oportunidades y el papel de la educación en la liberación del individuo de las restricciones de su medio.

El Estado prácticamente ha desaparecido de estas propuestas políticas y ha sido sustituido por la noción de “gobierno”, cuyas responsabilidades sociales tendrían que entenderse exclusivamente en términos de política de salud y seguridad pública. Esta nueva fórmula es más secular, porque es más autónoma de la doctrina social de la Iglesia, pese a que mantiene los principios de subsidiariedad y de solidaridad. Sin embargo, su pronunciado ánimo antiestatista y la parquedad de las menciones relativas al comunitarismo acerca estos partidos al individualismo posesivo que fue la inspiración de las corrientes del liberalismo radical de finales del siglo **xx**.

El Partido Acción Nacional y Vicente Fox

Todo liderazgo carismático posee un gran potencial disruptivo de los procesos institucionales, dado que está en la naturaleza de este tipo de conducción política imponerse a las normas establecidas, ofreciendo como alternativa una acusada personalización de la autoridad. Por esta razón sus posibilidades de éxito son mayores en una situación de crisis institucional. En la elección mexicana de julio de 2000, y no obstante la existencia de un grupo extrapartidista, Amigos de Fox, el **PAN** no desapareció ni mucho menos de la campaña electoral aunque en ocasiones se viera opacado por la organización foxista. Acción Nacional fue una pieza indispensable para la elección de los legisladores, proceso sobre el cual mantuvo el control. Como los demás partidos, no fue arrasado ni eliminado por una supuesta marejada carismática, sino que contribuyó a dar forma a la campaña presidencial y a asegurar el desarrollo ordenado de la votación y del cambio de gobierno.

Nada permite hablar de los comicios de julio de 2000 como de una elección plebiscitaria.²⁷

Vicente Fox anunció su deseo de contender por la Presidencia de la República en julio de 1997, aparentemente como reacción al triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en la primera elección para la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal; en octubre de ese mismo año se inició la campaña del todavía gobernador de Guanajuato. Esta estrategia era en sí misma un reto al PAN con el cual mantenía relaciones difíciles desde 1991, cuando la dirigencia, entonces en manos de Luis H. Álvarez y Castillo Peraza, “negoció” con el presidente Salinas la gubernatura de Guanajuato a la que Fox era candidato. El panista se había declarado vencedor con base en resultados parciales, pero la Comisión Electoral Estatal otorgó el triunfo al candidato priista, Ramón Aguirre. Para responder a la movilización postelectoral de los panistas que se negaban a aceptar los resultados oficiales, se acordó que Aguirre renunciara a unas cuantas horas de haber sido declarado gobernador electo y que se nombrara interino a Carlos Medina Plascencia, un panista que había sido presidente municipal de León. Esta experiencia se convirtió en el modelo de las *concertaciones*, como se llamó a los acuerdos privados que concluyeron el presidente Salinas y la dirigencia panista para resolver conflictos postelectorales y lograr una estabilización de corto plazo.²⁸

El arreglo perjudicó la imagen del partido en el mediano plazo. Primero, porque dejó al descubierto el tipo de problemas morales que planteaban las soluciones pragmáticas. ¿Cómo podía explicarse que la dirigencia del PAN negociara el voto precisamente con Carlos Salinas, el presidente mexicano que había llegado al poder con más acusaciones de fraude que Pascual Ortiz Rubio en 1929 o Manuel Ávila Cama-

²⁷ Alonso Lujambio cita una entrevista que hizo a Vicente Fox en 1994 en la que éste le dijo que el PAN era ideológicamente muy rígido y que el estilo de sus campañas requería ciertas modificaciones. Sin embargo, reconoció que era muy largo el camino que había recorrido y que si uno lograba montarse en la maquinaria electoral del partido, uno podía “volar”. Véase Lujambio, art. cit., p. 90.

²⁸ Para una descripción detallada de esta concertación, véase Loaeza, *op. cit.*, pp. 498-503.

cho en 1940? En segundo lugar, el hecho de que los panistas hubieran aceptado a Medina Plascencia —o tal vez propuesto— como gobernador interino revelaba una desconfianza y una animosidad hacia su propio candidato que muchos consideraron injusta, entre ellos Vicente Fox, quien se veía a sí mismo como una víctima de Salinas y de sus propios correligionarios. El ex candidato a gobernador no renunció al partido, pero se retiró de la vida política por un tiempo.

Recordar este antecedente es indispensable para entender las recurrentes tensiones entre Vicente Fox y su partido. Más todavía, a la amarga experiencia de la gubernatura negociada se sumó más adelante el tema de la reforma del artículo 82 de la Constitución que estipulaba que para ser presidente de la República había que ser hijo de mexicanos nacidos en México. Fox, cuya madre nació en España, se sintió traicionado otra vez por su propio partido y reprochó a la dirigencia que no hubiera exigido que la supresión de este requisito entrara en vigor para las elecciones de 1994, pero se pospuso para 2000.

Las relaciones entre Fox y su partido siguieron siendo malas después de 1995, cuando accedió a la gubernatura de su estado, incluso se ha dicho que empeoraron cuando volvió a hablar de sus ambiciones presidenciales, un tema que había planteado desde 1991. Este acto de relativa indisciplina dentro de la historia del PAN, porque las candidaturas eran asunto de las instancias superiores y no de los individuos, por muy distinguidos que fueran, tampoco ayudó a Fox a ganarse el apoyo del PAN estatal, al que no logró sustraer del férreo control de la dirigencia nacional.²⁹ Desde esta perspectiva resultan obvias las razones de la integración de la organización extrapartidista Amigos de Fox, cuyo propósito era superar los obstáculos que se oponían a su meta: el liderazgo nacional y la estructura centralizada del partido.³⁰ Por último, cuando el partido le dio la espalda a sus pretensiones a la candida-

²⁹ Shirk, *op. cit.*, p. 122.

³⁰ “Los esfuerzos de los líderes panistas para frustrar las ambiciones presidenciales de Fox lo impulsaron a buscar otros medios de construirse apoyos”. Según esta interpretación, cuando constató que no contaba con el apoyo de su partido en el propio estado de Guanajuato fundó los Amigos de Fox como estructura alternativa al PAN. Véase Shirk, *op. cit.*, pp. 119-125.

tura, Fox empezó a presentarse como un “candidato de la sociedad”. Esta postura denotaba su desconfianza frente a los partidos, probablemente alimentada por sus propias experiencias en el PAN.

Amigos de Fox fue fundada como asociación civil “en una fecha patriótica”, el 16 de septiembre de 1998. Uno de sus promotores, Guillermo H. Cantú, relata que fue impulsada por el propio Vicente Fox y algunos de sus antiguos compañeros en la empresa Coca Cola.³¹ En el curso de unos meses se convirtió en una organización variopinta integrada fundamentalmente por empresarios grandes y pequeños, pero también formaban parte de ella católicos miembros de organizaciones radicales como Provida, antiguos priistas y antiguos comunistas. Según se desprende de esta memoria, la organización nació con total independencia del PAN y casi no contaba con militantes del partido en sus filas.

Para medir la reacción que esta iniciativa provocó en el partido baste recordar que se formó cuando el presidente del PAN, Felipe Calderón, impuso los “criterios restrictivos” de ingreso al partido. La distancia entre la propuesta calderonista y la foxista era muy grande. Mientras la primera se empeñaba en la renovación doctrinal, la segunda promovía una movilización en la que no se planteaba más programa que la derrota de un adversario y se hablaba en términos de “asalto”, “ejército”, “retos”, “desafíos”, y cuyo objetivo central era vender un “producto” —como se referían al precandidato sus promotores— con el apoyo de la mercadotecnia. La falta de ideas y la mezcla de actitudes “de guerra” y métodos mercantiles conducía en forma inevitable a la construcción de un personaje. De ahí que la campaña de los Amigos de Fox se haya concentrado en la personalización de la campaña y el diseño de una imagen, y que los mercadólogos hayan recurrido a una libre interpretación de la noción weberiana del carisma para sellar su producto.³²

³¹ Guillermo H. Cantú, *Asalto a Palacio. Las entrañas de una guerra*, México, Grijalbo-Raya en el Agua, 2001.

³² El libro de Cantú es rico en ejemplos derivados de la interpretación mercadotécnica del concepto de carisma: “Lo que traslucía el guanajuatense, con su esforzada dedicación, no era otra cosa que entusiasmo, esa sustancia divina que se gesta en

Con el respaldo de esta organización y de esta propuesta, el entonces gobernador de Guanajuato inició una intensa precampaña de movilización de la opinión pública que lo llevó por todo el país con el propósito de darse a conocer nacionalmente, y la gubernatura fue también el trampolín para que hiciera frecuentes giras al exterior. La estrategia corrió con éxito. Según una encuesta de BIMSA, levantada en marzo del año 2000, sólo 16% de los entrevistados pudo mencionar sin ayuda al PAN entre los partidos que participaban en la elección (frente a 71% que mencionó al PRI) y 28% había oído hablar de Vicente Fox (52% de Francisco Labastida).³³

La alternativa de movilización extrapartidista presentaba para Fox ventajas interesantes: primero, lo liberaba de las restricciones que imponían los estatutos del partido y de asuntos tan agobiantes para él como el tema de la doctrina; segundo, le permitiría escapar a las reglas de la competencia electoral en un momento en que se buscaba estrenar en México la transparencia de los comicios para garantizar la equidad en la competencia, sobre todo en relación con asuntos espinosos como el financiamiento de las campañas.³⁴ En la medida en que el objetivo central de Amigos de Fox era recaudar fondos para la movili-

el alma y que significa posesión o inspiración de Dios. Del griego *énthous*, dentro, poseído, y *teso*, dios, o descomponiendo de otra manera la etimología, del griego *en*, dentro, y *seísmos*, terremoto, es decir: sismo del alma. El entusiasmo es la fuerza que transfigura la vida, la que extrae la energía pura de la imaginación, la que mueve la voluntad. Es tan fuerte como el amor, pero el amor —han dicho algunos filósofos— resta, mientras que el entusiasmo suma. El fenómeno que empezó a nacer a mediados de 1997 era precisamente eso, entusiasmo. Por ello, los jóvenes a los que deslumbró con sus destellos, abandonaron otros propósitos en la vida y se unieron a fin de conquistar la gloria de la libertad ciudadana, una ambición tan intensa que devino en dolencia contagiosa”. Cantú, *op. cit.*, p. 165.

³³ Estos porcentajes se modificaban significativamente cuando el entrevistador insistía en la pregunta. Entonces Fox alcanzaba el porcentaje de reconocimiento de Labastida, pues en una segunda ocasión éste obtenía 85% y aquél 82%. Encuesta de identificación de partidos y candidatos, BIMSA-IPSOS, marzo de 2000.

³⁴ Shirk, *op. cit.*, p. 122. Lo que no sabía entonces Vicente Fox es que las finanzas de los Amigos de Fox habrían de convertirse en un punto oscuro de su carrera a la Presidencia de la República, que pondría a prueba su credibilidad en 2002 ya como presidente.

ción de la opinión pública previa a la elección, su acción estaba limitada por el calendario electoral, pues la legislación respectiva no se aplicaba al periodo preelectoral. Desde muy temprano se supo que Fox tenía el apoyo de poderosos empresarios que habían hecho aportaciones millonarias a Amigos. Sin embargo, este flujo tendría que detenerse una vez que fuera candidato oficial del PAN, porque el partido tendría que sumarlos al financiamiento público y registrar ante las autoridades electorales todos los recursos que utilizara en su campaña con el fin de que se mantuvieran dentro de los límites de ley.

El tema de los fondos de campaña generaba también muchas fricciones entre Fox y el PAN. La afluencia de los neopanistas en los años ochenta —de los cuales Fox era la viva encarnación— había provocado tensiones agudas en el seno del partido porque los candidatos que eran empresarios, o que contaban con el apoyo de estos grupos, disponían de recursos privados que estaban fuera del alcance de otros, generalmente los antiguos militantes, cuyas aspiraciones a una candidatura se topaban entonces con la diferencia entre precandidatos “ricos” y “pobres”. Éste fue uno de los argumentos de la dirigencia panista de la época (1978) para aceptar el financiamiento público que proponía la reforma electoral de 1977. Por otra parte, estos mismos panistas siempre habían visto con desconfianza las aportaciones de los empresarios al partido porque sabían que no estaban libres de compromisos, y se rebelaban contra la posibilidad de convertirse en instrumentos o rehenes de los intereses particulares. Así que cuando Fox se lanzó a construir una candidatura al margen de los tiempos y las reglas del partido, violentó mecanismos institucionales establecidos, concretamente el procedimiento de elección interna, pero también reglas no escritas que habían contribuido de manera importante a la imagen que los panistas tenían de sí mismos.

Por este camino Fox adquirió una presencia en los medios nacionales, a la que difícilmente hubiera podido oponerse el PAN, mucho antes de que el partido celebrara la convención que lo aclamó candidato y en la que por primera vez en la historia del partido únicamente se registró un aspirante. Entonces los panistas participaron a regañadientes en el mito del carisma de Vicente Fox, del valiente individuo

que tenía el coraje de enfrentar solo todo un sistema. Esta imagen nada tenía que ganar con el apoyo de un partido conservador, implantado en la vida política mexicana desde los años cuarenta. Más todavía, en los meses anteriores a la convención del partido, la tentación de una candidatura “independiente” se dejaba adivinar en muchas de las expresiones del precandidato Fox que rechazaba la “camisa de fuerza” que quería imponerle el PAN, o prometía dirigirse al pueblo sin la intervención de ninguna institución. De ahí que las inquietudes de los panistas en relación con los Amigos de Fox estuvieran plenamente justificadas, en la medida en que esta organización alimentaba en el candidato la ilusión de que podía ganar las elecciones sin el concurso del partido. Más aún, el estilo que adoptó Fox durante su campaña evocaba más el voluntarismo presidencialista del pasado que formas novedosas de hacer política.

Las relaciones entre los Amigos de Fox y el PAN estuvieron plagadas de tensiones a lo largo de la campaña presidencial, a pesar de que ambas organizaciones hicieron un esfuerzo por acordar una división del trabajo, y se mantuvieron como dos estructuras paralelas y especializadas: los Amigos se concentraban en la competencia por la Presidencia de la República; el partido, en cambio, se dedicó a sacar adelante la campaña para el Congreso. El presidente de Acción Nacional, Bravo Mena, desempeñó el papel de mediador entre ambas estructuras, pero los panistas nunca depusieron su desconfianza a los Amigos, y aunque en repetidas ocasiones se dijo que una vez pasada la elección, la organización se integraría al partido, esto nunca ocurrió.

Es indiscutible que la personalidad de Vicente Fox fue atractiva para muchos votantes que vieron en él frescura, valentía, aires de renovación y el fin del estilo acartonado del muy envejecido PRI. No obstante, los mismos resultados electorales de julio de 2000 ponen en tela de juicio una interpretación de esa elección centrada en el carisma del entonces candidato de Acción Nacional. Vicente Fox llegó al poder con 43% del voto, que es un porcentaje suficiente para asegurarse el triunfo en las urnas, pero inferior al 62% que obtuvo Fujimori en la segunda vuelta electoral en 1990 y al 59% de Hugo Chávez en 2000. No hubo marejada foxista y los candidatos panistas al Poder Legislativo

tampoco arrasaron a sus contrincantes de otros partidos. Más todavía, los datos de una encuesta nacional de actitudes democráticas levantada en 1999, “Ciudadanos y cultura de la democracia”, indican que la idea de que los mexicanos son proclives a los liderazgos carismáticos es falsa. A la pregunta de a quién elegirían como líder, 60% de los encuestados respondieron que al candidato que *conociera y aplicara las leyes*, de preferencia frente al que *respetara las tradiciones* y al que *convenciera y tuviera muchos seguidores*. Esta respuesta sugiere que para la mayoría de los mexicanos la autoridad presidencial está estrechamente vinculada con la ley, antes que con una determinada personalidad.³⁵

EPÍLOGO

La victoria del PAN y de Vicente Fox en la elección presidencial de julio del 2000 parece haber sido el resultado de una combinación inestable de factores institucionales y política personalizada. Es muy posible que una fórmula de esta naturaleza sea inevitable en tiempos en que los medios de comunicación de masas tienen un papel preponderante en las campañas electorales, al personalizar los mensajes políticos y promover una forma moderna de democracia directa. No obstante, el alcance y la duración de esta forma de hacer política se agota al término de la elección. Entonces, las instituciones asumen nuevamente el papel que les toca en la conducción gubernamental. Acción Nacional pudo sobrevivir la embestida de los Amigos de Fox porque había alcanzado una madurez institucional que la protegió de los efectos de la campaña presidencial, pero sobre todo, porque en los años 1994-2000 quedó firmemente afianzado en el universo político de los electores mexicanos.

La elección presidencial mexicana del año 2000 permite distinguir la aportación del candidato al triunfo del partido y la importancia de éste en los resultados finales, e ilustra el tipo de equilibrio que

³⁵ Yolanda Meyenberg, *Ciudadanos y cultura de la democracia*, México, Instituto Federal Electoral-Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 2002.

puede establecerse entre una figura política y una institución, cuando esta última tiene capacidad para absorber los efectos disruptivos de la exagerada personalización de la autoridad. La importancia de una evaluación del desempeño PAN en el periodo previo a la elección presidencial estriba en que la interpretación postelectoral que sobredimensionaba la influencia de la personalidad de Vicente Fox en la movilización política del año 2000, fue la base de algunos de los errores más graves que cometió el “gobierno del cambio” en los primeros 18 meses de su administración.

La victoria electoral no puso fin a las tensiones entre Vicente Fox y el PAN. Peor todavía, muchas de ellas se vieron agudizadas porque la interpretación de que el triunfo sobre el PRI había sido la obra del carisma inspiró al ya presidente y a miembros de su gabinete a pensar que si había ganado la elección solo, solo también podía gobernar el país. Fox aspiraba a ser un “presidente de la sociedad” y no de las instituciones, mucho menos de un partido. Esta estrategia se tradujo en el intento de restablecer un nuevo presidencialismo en detrimento de la posición de Acción Nacional como partido en el gobierno. También provocó reacciones negativas en una opinión pública que exigía cambios en el ejercicio de la autoridad presidencial como parte de la democratización.

La estrategia fundada en la idea de que el presidente podía gobernar por encima de las instituciones —fueran éstas partidistas o gubernamentales— influyó sobre decisiones políticas y administrativas que empeoraron las relaciones entre Vicente Fox y su partido. Por ejemplo, en la integración de su gabinete, el presidente electo insistió en que buscaba combinar capacidad con representatividad de la diversidad de la sociedad mexicana. Para Acción Nacional esta decisión significó la subordinación de sus propuestas de personal político-administrativo y de plataforma frente a las de grupos extrapartidistas, cuando no francamente antipanistas. Esta misma intención de escapar a las restricciones que le imponía la pertenencia al PAN, explica que en diciembre de 2000 el presidente Fox haya enviado al Congreso una iniciativa de ley indígena distinta a la que había sido elaborada por su partido. Desde entonces la Presidencia de la República se topó con las

dificultades y los costos de una relación contradictoria con Acción Nacional, que era después de todo la única institución responsable de los aciertos o desaciertos del nuevo gobierno. Aun cuando el partido no hubiera obtenido la mayoría absoluta contaba con 208 diputados (de un total de 500) y 46 senadores de 124. Su apoyo era indispensable para el éxito de las iniciativas gubernamentales.

De ahí que, aunque a muchos parecen obvias las razones de por qué el PAN se sometió a Vicente Fox en el año 2000, otros en cambio pregunten, ¿por qué Vicente Fox optó por someter su candidatura al Partido Acción Nacional?

VI

LOS COSTOS DEL TRIUNFO, 2000-2006

En apoyo al candidato del Partido Acción Nacional a la elección presidencial del 2 de julio de 2006, Felipe Calderón, se manifestó un electorado tan activo y comprometido como el que se aglutinó en torno a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador que promovía la Coalición por el Bien de Todos, CPBT. La competencia entre ambos se polarizó en torno al eje derecha/izquierda. A diferencia de los comicios del año 2000, cuando para muchos electores el voto tuvo un significado amplio y más que elegir entre partidos la opción era entre continuidad y cambio, o democracia y antidemocracia, seis años después entró en juego la identidad ideológica de los candidatos, de sus partidos y de los votantes. Así, el 4 de diciembre de 2005, en el discurso de protesta como candidato, Calderón advirtió a los ahí reunidos: “La elección del 2006, será distinta a la del 2000. La elección del 2000 fue una elección de transición y alternancia. Hoy la del 2006 será una elección que definirá el rumbo de la nación”.¹

La división del electorado entre izquierda y derecha ha sido una fórmula simplificada y convencional de ordenamiento de la lucha política desde la Revolución francesa; sin embargo, su aplicación al caso mexicano es relativamente reciente y da cuenta de varias y profundas transformaciones ocurridas en el interior del sistema político a raíz de la derrota del PRI en 2000. Desde su fundación en 1946, una de las pretensiones más efectivas de este partido fue presentarse como una opción de centro, alejada por igual del conservadurismo del PAN y del radicalismo de izquierda que representaban el Partido Popular Socialista, PPS, el Partido Comunista Mexicano, PCM, y grupos de oposición extraparlamentaria. En realidad por décadas el partido oficial se mantuvo en una nebulosa ideológica que se acogía a la Revolución mexicana

¹ Citado en Felipe Calderón, *El hijo desobediente. Notas en campaña*, México, Nuevo Siglo-Aguilar, 2006, p. 41.

como un referente impreciso y por lo mismo incluyente. Esta indefinición era funcional a la estrategia de los gobiernos priistas que durante décadas negaron la existencia del conflicto político en nombre de la supuesta unanimidad que inspiraba la defensa de la nación.

El desplazamiento del PRI del poder y, más en general, la democratización, parecía demandar la organización de frentes de oposición amplios en los que un objetivo común se impusiera a la natural diversidad interna. Sin embargo, antes de que una fórmula antiautoritaria se concretara, el gradual ascenso del pluralismo acarreó la división ideológica de la sociedad. En junio de 2007, Consulta Mitofsky dio a conocer los resultados de una encuesta que indicaba que 56% de los mexicanos identificaba al PAN con la derecha, y cerca de 36% afirmaba coincidir totalmente con ese partido.² Estos datos apuntan hacia una novedosa evolución del electorado mexicano que también ha favorecido la progresiva irrelevancia de las estrategias del partido electorero (*catch-all party*).

Desde esta perspectiva, el triunfo de Felipe Calderón fue la victoria de una amplia corriente de opinión que empezó a formarse en torno a los candidatos y propuestas panistas desde mediados de los años ochenta, y que creció a resultas de su llegada al gobierno, primero en el ámbito local, y luego en el federal con la elección de Vicente Fox a la Presidencia de la República.

Factores externos e internos al PAN intervinieron en este desarrollo. Por una parte, la dinámica de un sistema de partidos trino y, en particular, el fortalecimiento de la izquierda que impulsó, primero, el proceso organizativo del Partido de la Revolución Democrática, PRD, y luego, el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador cuyo discurso tenía

² Consulta Mitofsky, “La geometría de los partidos políticos en México; la moda es la derecha”, encuesta nacional en viviendas, junio de 2007 <www.consulta.com>, consulta del 8 de diciembre de 2007. Al iniciar la campaña presidencial, en noviembre de 2005, el periódico *Reforma* publicó los resultados de una encuesta que revelaba el carácter de enfrentamiento ideológico de la competencia. El 50% de los electores encontraba útil la diferencia entre izquierda y derecha para organizar la información política, así como para autoidentificarse. “La izquierda y la derecha sí existen”, *Reforma*, 27 de noviembre de 2005, <www.reforma.com>, consulta del 16 de febrero de 2007.

como eje la antinomia izquierda/derecha planteada como un reflejo espontáneo de la creciente desigualdad que separa a ricos y pobres. Esta estrategia de la oposición de izquierda obligó a Acción Nacional a definir posiciones y programas. Por la otra, la ideologización del partido fue consecuencia de factores internos, en particular del impacto desestabilizador que tuvo el acceso a la Presidencia de la República y al ejercicio del poder sobre los equilibrios en el seno del partido. La victoria del año 2000 desató agrias luchas intestinas que provocaba el antagonismo entre los “foxistas” y los “doctrinarios”, en las que estos últimos esgrimieron la doctrina —como los panistas se refieren a la ideología— como instrumento de lucha, que era a la vez sello de identidad y de lealtad partidista, para oponerse al ascenso en el interior del PAN del grupo vinculado con los intereses de Vicente Fox y a una restauración presidencialista que, a sus ojos, amenazaba devorar el partido. La consecuencia de este combate fue el fortalecimiento del PAN como una entidad generadora de identidad política y de ideología.

En el sexenio 2000-2006 las relaciones entre el presidente Fox y su partido se caracterizaron por la tensión y el desacuerdo. A los dilemas que planteaba la autoridad presidencial a la dirigencia de un partido siempre desconfiado del presidencialismo, se sumaron los efectos de una encarnizada lucha por el poder. Desde su fundación, el PAN insistió en que su identidad doctrinal lo distinguía del pragmatismo y del oportunismo de otras fuerzas políticas. No obstante, en los años noventa el partido supo avenirse a la práctica de negociación y acuerdos que fue característica del gobierno de Carlos Salinas, y que le imprimieron al panismo la flexibilidad que impulsó su expansión y el incremento de su influencia. Vicente Fox emblemata el pragmatismo de estos años. Paradójicamente, en este periodo los panistas también alcanzaron una notable homogeneidad ideológica; sus diferencias en este terreno eran sólo de énfasis pues vistos de cerca el discurso y las acciones de los grupos en pugna, las coincidencias eran más que las discrepancias.

Este artículo desarrolla la hipótesis de que contrariamente a lo que hubiera podido esperarse ante la realidad de las responsabilidades de gobierno, el PAN no flexibilizó sus posturas ideológicas, sino que la ideo-

logía recuperó el peso prioritario que tuvo durante los años de la travesía del desierto, en los cincuenta, cuando más aislado y alejado del poder estaba el partido. La importancia de esta evolución reside en que ha trascendido las fronteras partidistas, para imponer su sello al electorado y propiciar su reorganización a partir del eje izquierda/derecha. Tal como lo ha propuesto Scott Mainwaring para el caso brasileño, al iniciarse el siglo XXI, en México la fractura ideológica no es producto de las diferencias socioeconómicas o de la conciencia de clase, sino de divisiones interelitistas que cristalizan en partidos, desde donde se ejerce el liderazgo político de la sociedad. Es decir, el conflicto que encarnan los partidos recorre a la sociedad de arriba hacia abajo y no en dirección contraria.³

La primera parte de este artículo analiza las fuentes de tensión entre el presidente Fox y su partido; la segunda describe los ecos de este conflicto en el interior del partido y la reorganización del PAN a raíz de la victoria presidencial, así como el proceso de ideologización que precipitaron las luchas internas; por último se reconstruye la competencia por la candidatura presidencial como el último episodio de la batalla por el partido.

LAS TENSIONES ENTRE EL PRESIDENTE VICENTE FOX Y EL PAN

En todo régimen presidencial la relación entre el jefe del Ejecutivo y su partido es difícil. Las tensiones tienen un doble origen: por una parte, son inherentes al diseño institucional del gobierno presidencial en un régimen pluripartidista; por la otra, se derivan de factores coyunturales

³ Dos perspectivas se han aplicado al análisis del origen de los partidos políticos: una, los ve como la proyección institucional de fracturas socioeconómicas, es decir, como organizaciones que se construyen de abajo hacia arriba; desde la segunda perspectiva, en cambio, el nacimiento de los partidos es visto como resultado de las estrategias del Estado o de las élites que impulsan su formación con el propósito de estructurar la lucha por el poder, así como la participación y la representación políticas; en este caso, los partidos aparecen como proyectos que se desarrollan de arriba hacia abajo. Scott Mainwaring, *Rethinking party systems in the third wave of democratization. The case of Brazil*, Stanford, Stanford University Press, 1999.

como, por ejemplo, el carácter de los liderazgos políticos, el equilibrio de fuerzas en el contexto general o el nivel de institucionalización de los partidos. Durante el gobierno del presidente Fox ambos tipos de factores entraron en juego y su efecto combinado influyó sobre la capacidad de decisión del gobierno, que registró sonados fracasos legislativos, y sobre la fuerza electoral del PAN que en estos años también sufrió importantes descalabros.

Las tensiones entre el presidente de la República y los partidos son resultado de la acción simultánea en las funciones de gobierno de dos lógicas encontradas: la que sostiene la institución presidencial —que simboliza la voluntad unitaria de la nación— y la del partido que, no obstante la victoria, sigue representando solamente a un sector de la sociedad. Desde esta perspectiva, aun cuando en principio el partido es el apoyo natural del gobierno que se forma después del triunfo en las urnas, también puede ser un obstáculo porque la autoridad del presidente depende en buena medida de su capacidad para trascender la política partidista. Este objetivo demanda la subordinación de los intereses de su partido a otros más generales, de suerte que hay muchas probabilidades de que éste no reciba la atención privilegiada que esperaba después de la victoria electoral.

La lógica de acción de un presidente también es distinta de aquella que gobierna los cálculos y el comportamiento de su partido, pues mientras la eficacia del primero depende de su capacidad para concentrar autoridad y recursos, la del segundo, en cambio, obedece a la necesidad de compartir el poder con otros partidos que le disputan las preferencias del electorado y los votos en el Poder Legislativo. Más todavía, la forma de elección del presidente también influye sobre su relación con el partido porque el sufragio universal y directo propicia la tendencia a que cultive vínculos personales con el electorado y a que ceda a la tentación de desarrollar bases de apoyo propias, más amplias que las que ofrece el partido. Dadas estas condiciones, el partido en el poder tiene una intervención muy limitada en la formación del gabinete y en el proceso de toma de decisiones.⁴ De ahí que otra fuente de

⁴ Mainwaring, *op. cit.*, p. 264.

tensión entre el presidente y el partido sea la discusión acerca de dónde yace la responsabilidad gubernamental. A diferencia del primero, que por lo general no tiene que enfrentar al electorado en más de dos ocasiones, el segundo, tiene que seguir ganando elecciones en el futuro. En México esta diferencia es mayor porque no existe la reelección presidencial.

Durante los largos años de hegemonía del PRI las tensiones estructurales entre el partido y el presidente difícilmente se manifestaban porque el primero estaba subordinado al segundo. La relativa docilidad con que los priistas se plegaban a las disposiciones del Poder Ejecutivo se modificó gradualmente a partir de los años ochenta cuando se instaló la competencia electoral efectiva y el priismo empezó a pagar con votos los costos de políticas impopulares o de decisiones equivocadas de gobierno, sobre las cuales no tenía ningún control. En los años noventa se produjeron algunos conatos de rebelión entre los priistas contra la autoridad presidencial, pero el partido nunca logró superar su condición original de dependencia; tanto así que la derrota del año 2000 alteró profundamente la estructura misma del partido porque destruyó la fuente central autoridad interna del partido que era la Presidencia de la República, de ahí que desde entonces los liderazgos partidistas no hayan podido estabilizarse.

Las tensiones entre partidos y presidente, características de la incómoda combinación entre régimen presidencial y pluripartidismo, se activaron en 1997 cuando el PRI perdió la mayoría absoluta en las elecciones federales de ese año y tuvo lugar la primera experiencia de gobierno dividido que desde entonces se ha repetido cada tres años a resultas de procesos que no otorgan la mayoría absoluta al partido del presidente. En los inicios del gobierno de Vicente Fox, estas tensiones se vieron exacerbadas por sus desacuerdos con el PAN, derivados de factores coyunturales, entre ellos la mutua desconfianza que dominaba sus relaciones desde principios de los noventa, y que se profundizaron durante la campaña presidencial que estuvo en manos exclusivamente de la organización extrapartidista, Amigos de Fox. Posteriormente, la relación entre presidente y partido estuvo condicionada por la voluntad del primero de escapar a las restricciones que intentaba imponerle

el segundo, muchas de las cuales derivaban de normas y patrones de funcionamiento internos que se habrían visto violentados de haberse sometido a la voluntad presidencial; el grado de institucionalización del partido estaba en el origen de muchas de las fricciones. Por último, el temor a la restauración del presidencialismo autoritario del pasado inmediato también despertó la desconfianza y agudizó los recelos de los panistas hacia el ejercicio foxista de la autoridad. A unas semanas de que se iniciara el nuevo gobierno, en noviembre de 2000, *La Nación*, el órgano oficial del partido, planteaba estos temores como un dilema: “Un diferendo constante [de la historia del país] ... Se trata de si un presidente de la República emergido de un partido surgido de las filas del Estado deba gobernar para ese partido o para el electorado que le dio la fuerza del mando”.⁵

La experiencia de la presidencia de Estados Unidos en el siglo xx ilustra dos posibles formas de relación entre el presidente y su partido: en la primera de ellas el presidente es la autoridad dominante que subordina a su partido, el cual se disuelve en el conjunto de las fuerzas políticas, esto es, no recibe un tratamiento de privilegio en términos de información o de acceso a los recursos de la Presidencia, en comparación con los demás partidos.⁶ En esta fórmula el presidente se presenta como el portavoz de los sentimientos y de los objetivos nacionales. Franklin D. Roosevelt (1933-1945) ejemplifica este modelo. No obstante, su éxito se explica por la debilidad de los partidos estadounidenses, que eran organizaciones relativamente poco desarrolladas, y por circunstancias extraordinarias como la situación de emergencia que crearon, primero, la profunda crisis económica de los años treinta y, después, la segunda guerra mundial.

La presidencia de Ronald Reagan (1980-1988) representa la segunda fórmula de relación entre el presidente y su partido. En este caso, Reagan puso fin al gobierno presidencialista de corte rooseveltiano,

⁵ “Gobernar para todos”, *La Nación*, año LIX, núm. 2140, 8 de noviembre de 2000, p. 1.

⁶ Como hizo Woodrow Wilson con el Partido Demócrata. Véase Sidney M. Milkis, “The presidency and political parties”, en Michael Nelson (ed.), *The presidency and the political system*, Washington, D.C., CQ Press, 7a. ed., 2003, pp. 355-398.

reconoció las divisiones de la sociedad, renunció a la idea de formar un gobierno nacional y optó por uno de mayoría, y por el fortalecimiento del Partido Republicano. Su estrategia condujo a un sistema de partidos más programático que parecía una salida efectiva a los problemas que creaba el gobierno dividido.⁷ Como consecuencia de esta situación se revitalizó la lucha entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, y la coyuntura estuvo dominada por los esfuerzos de cada uno de debilitar al adversario. Tal vez una de las consecuencias más significativas de esta estrategia de gobierno dividido fue la diferenciación ideológica del electorado.

El presidente Fox quiso adoptar el modelo rooseveltiano de presidencia plebiscitaria, apoyado en su popularidad personal, para establecer una relación directa con la opinión pública; paradójicamente, en el contexto mexicano esta estrategia tuvo el efecto divisivo del modelo reaganiano, de suerte que se agravaron algunos de los problemas que se trataba de evitar derivados de la división ideológica del electorado. A lo largo del sexenio este fenómeno se acentuó. En la LVIII Legislatura, el PAN contaba con 206 diputados y 46 senadores; pero en las elecciones federales de 2003 la representación panista en la Cámara de Diputados retrocedió a 151 curules.

LA PRESIDENCIA PLEBISCITARIA COMO ALTERNATIVA AL GOBIERNO DIVIDIDO

La presidencia plebiscitaria le hubiera permitido al presidente Fox superar los escollos de un gobierno dividido; sin embargo, y a pesar de que durante todo el sexenio mantuvo tasas muy elevadas de popularidad, nunca logró establecer un liderazgo político nacional cuya influencia fuera más allá de los confines de su partido. Ante la opinión pública Vicente Fox nunca dejó de ser el primer presidente panista. Esta imagen era un reflejo de la proyección del PAN como una organización ideológica; peor aún, el presidente Fox también asumió estrategias di-

⁷ Milkis, *op. cit.*, p. 368.

visivas que contrariaban su propósito de construir un liderazgo nacional, por ejemplo, el uso de símbolos religiosos en actos públicos.⁸ El deseo de construir una presidencia plebiscitaria se topó también con la oposición del PRI y del PRD, que fue canalizada sobre todo en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, cuyas dificultades en algunos casos escalaron a francos enfrentamientos.⁹ Después de 2003, la estrella ascendente del líder del PRD, López Obrador, restó todavía más posibilidades al proyecto foxista de creación de un liderazgo nacional.

Entre 2000 y 2006 Acción Nacional tuvo dos presidentes, Luis Felipe Bravo Mena —reelegido en el 2002— y Manuel Espino —elegido en 2005. Ambos buscaron afianzar la precedencia del presidente con relación al partido, y ambos fracasaron ante la firme determinación de los “doctrinarios”, encabezados por Felipe Calderón y por Diego Fernández de Cevallos, de defender la autonomía del PAN, aun cuando el partido se debilitó después de los mediocres resultados que obtuvo en las elecciones de 2003. Así, durante seis años la comunicación entre Vicente Fox y algunos de los líderes más prominentes del PAN fue pobre; los vínculos entre la dirigencia, los legisladores y los militantes fueron tenues, y la influencia del partido sobre el proceso de decisiones de gobierno fue prácticamente nula.

El origen de las tensiones coyunturales entre el presidente Fox y el PAN puede atribuirse a las actitudes antipartido que subyacen en muchas posiciones del neopanismo, la corriente de procedencia de Vicen-

⁸ Sobre esto, véase Soledad Loaeza, “El estilo personal de Vicente Fox y los límites de la autoridad presidencial”, *infra*, pp. 243-277.

⁹ Rogelio Hernández ofrece una explicación alternativa que hace hincapié en los rasgos constitucionales de una presidencia débil que después de la derrota del PRI tuvo que enfrentar las restricciones del gobierno dividido. Véase Rogelio Hernández Rodríguez, “Un sistema sin equilibrio: presidencialismo y partidos en México”, en Gustavo Vega Cánovas (coord.), *México ante los retos del futuro*, México, El Colegio de México-Fundación Konrad Adenauer, 2007, pp. 245-276. Francisco Reveles Vázquez, en cambio, observa la subordinación del PAN al presidente de la República; para este autor Acción Nacional no es partido gobernante, sino “sostenedor”. Véase “El PAN en el poder: el gobierno de Fox”, en Francisco Reveles Vázquez (coord.), *Los partidos políticos en México. ¿Crisis, adaptación o transformación?*, México, Universidad Nacional Autónoma de México-Gernika, 2005, pp. 187-228.

te Fox, y al viejo antagonismo que la opone a los así llamados “doctrinarios” entre los que se contaban no pocos legisladores. El contexto político de la época sugiere otras razones. Primera, la decisión del presidente de no dispensar un tratamiento privilegiado a su partido frente a otros obedeció a una lectura equivocada de los resultados de la elección presidencial. Vicente Fox interpretó los comicios como un plebiscito antipriista que había reunido en torno a su persona un electorado amplio y diverso, movilizado por los principios y valores absolutos de la democracia, antes que por un programa partidista.¹⁰ Sin embargo, como candidato de la Alianza por el Cambio formada por el PAN y el Partido Verde Ecologista de México, PVEM, obtuvo una mayoría relativa de 43% del voto, frente a 36% que recibió Francisco Labastida Ochoa del PRI, y a casi 17% del candidato perredista, Cuauhtémoc Cárdenas.

En segundo lugar, la actitud de Vicente Fox hacia el PAN siempre fue ambigua, a pesar de que había sido elegido diputado por ese partido en 1988 y gobernador de Guanajuato en 1995. Incluso cuando ocupó esos cargos en repetidas ocasiones expresó su fe en liderazgos que se desarrollaban fuera del alcance de las reglas institucionales. Las suspicacias que le despertaban los partidos como agentes de la política tradicional encontraron una poderosa justificación en el acuerdo que concluyeron el presidente Carlos Salinas y la dirigencia panista, encabezada por Carlos Castillo Peraza, para resolver el conflicto postelectoral que estalló en Guanajuato en 1991 a raíz de las elecciones para gobernador en las que Fox había sido el candidato del PAN. Cuando la Comisión Electoral Estatal declaró ganador al priista Ramón Aguirre, los panistas guanajuatenses pusieron en pie una intensa movilización para exigir el reconocimiento de su presunto triunfo. El gobierno federal no aceptó las acusaciones de fraude y tampoco la derrota del PRI, pero Aguirre renunció el día que tomó posesión y Carlos Medina

¹⁰ Durante la campaña, Vicente Fox y sus asesores intentaron en repetidas ocasiones convencer a Cuauhtémoc Cárdenas de que depusiera sus pretensiones a la Presidencia de la República y se sumara a la movilización en torno al candidato de la alianza PAN-PVEM para formar un frente amplio por la democracia. Cárdenas nunca aceptó la propuesta.

Plascencia, alcalde panista de León, fue designado gobernador interino, como resultado de una negociación entre el presidente Salinas y Castillo Peraza, en la que por razones poco claras se desecharon las pretensiones de Fox.

Tercera, durante la campaña presidencial las ambigüedades de Vicente Fox se acentuaron porque se empeñó en construir una candidatura al margen de las estructuras del partido, el cual únicamente se sumó a la ola de apoyo que se empezó a formar en 1998. En cambio, Amigos de Fox, la organización creada para promover la candidatura presidencial, mantuvo el control de la campaña y sobre todo de los cuantiosos recursos financieros privados que logró movilizar. Un año después, la convención panista que debía elegir candidato presidencial, tuvo que rendirse ante las grandes dimensiones que había adquirido el apoyo al guanajuatense: por primera vez en la historia del PAN la votación de los delegados fue innecesaria, y Fox fue aclamado candidato. No obstante su éxito abrumador, hubo corrientes dentro del partido que resintieron este procedimiento que impulsó la ola de entusiasmo, como una imposición.

Estos antecedentes explican que al inicio de su gobierno la actitud de Fox frente a su partido fuera, cuando menos, de amable indiferencia. Al igual que otros candidatos presidenciales, consideraba que la organización había tenido un papel secundario en su triunfo, y no se sentía obligado a gobernar con el partido.¹¹ En muy poco tiem-

¹¹ En una entrevista que otorgó a cuatro días de la elección, Fox afirmó contundente que Acción Nacional tenía que respetar el derecho del presidente a integrar su gabinete sin injerencia del partido: “¡Al final quien gobierna es Vicente Fox, no es el PAN!”. Elena Gallegos y Juan Manuel Venegas, “El PAN ya me formó, ahora me tiene que dejar ir”, *La Jornada*, 6 de julio de 2000. En diciembre, los panistas escucharon escandalizados los nombres de los 38 integrantes del primer gabinete ampliado de Vicente Fox, que incluía a comisionados y coordinadores; sólo siete eran miembros del partido. Resulta revelador que entre las consideraciones que según Rubén Aguilar y Jorge Castañeda, miembros del círculo íntimo foxista, se hicieron para designar a Luis H. Álvarez responsable del proceso de pacificación de Chiapas no figure su calidad de líder del Partido Acción Nacional o su pertenencia de larga data a ese partido. Véase Rubén Aguilar y Jorge G. Castañeda, *La diferencia. Radiografía de un sexenio*, México, Grijalbo, 2007, p. 81.

po quedó expuesta su estrategia de construcción de una presidencia plebiscitaria.

La convicción de Fox y de su grupo de asesores —de los cuales la mayoría no pertenecía al PAN— de que representaba a los demócratas del país, sin distinción partidista, inspiró muchas de las decisiones que causaron el distanciamiento. Por ejemplo, cuando Fox integró su primer gabinete con personas provenientes de diversas fuerzas políticas puso en igualdad de condiciones a los panistas con perredistas y priistas que habían sido los adversarios del 2 de julio. Las perspectivas de que el PAN tuviera algún tipo de influencia sobre el proceso de toma de decisiones se desvanecieron casi del todo con la llegada del grupo foxista al poder, entre ellos no pocos habían sido incluso miembros del PRI o de gobiernos priistas.¹² Éste fue el primer desencuentro público del presidente Fox con su partido.

A partir de que se dio a conocer la composición del gabinete, la relación entre el presidente y su partido se convirtió en un tema de discusión y de división en las filas del panismo, y entre éste y el gobierno. Unos defendían la subordinación del partido a la autoridad presidencial, mientras que otros, por el contrario, asumían la defensa de los intereses de la organización, y reprochaban a los miembros del gabinete su desconocimiento del PAN y, sobre todo de la doctrina, y se preguntaban con inquietud cómo iban a gobernar estos funcionarios tan ajenos a las ideas y a las tradiciones partidistas.

Luis Felipe Bravo Mena, presidente del partido en el primer tramo del gobierno, buscó defender la independencia de Vicente Fox

¹² Las señales de que el presidente electo, Vicente Fox, formaría su gabinete con personas ajenas al partido produjeron en las filas del panismo descontento y aumentaron la desconfianza. Para aliviar la creciente incomodidad, Fox se reunió con el Consejo Nacional de su partido el 18 de noviembre, a dos semanas de la toma de posesión, para pedirles “con humildad” su apoyo y para ratificar su compromiso con “la trayectoria histórica de mi partido”, “con los principios fundamentales de humanismo, de solidaridad, de dignidad de la persona humana, que son propios de nuestro Partido y que son nuestra oferta, que es nuestra ideología [...] Quiero pedirle a mi partido, a este Consejo Nacional, que durante los próximos seis años sea también mi Consejo Nacional, el Consejo de la Presidencia de la República”. “Construir una gran nación”, *La Nación*, 22 de noviembre de 2000, año LIX, núm. 2141, p. 1.

frente a las severas críticas que le dirigían sus correligionarios: “Somos un mismo equipo para actuar consecuentemente tanto en la administración pública como en el Congreso [...] pero el gobierno no estará al servicio del Partido, ni la vinculación y lealtad entre ambos se mide por el número de carteras que militantes del Partido ocupan en el Gabinete”.¹³ Esta postura era comprensible dado el temor a la “abusiva simbiosis” del “partido-gobierno”; lo que era menos entendible era el temor de que el partido se convirtiera en un instrumento de la política presidencial, aun cuando así hubiera ocurrido entre los presidentes del PRI y su partido, pues, después de todo si el PAN quería asumir el poder tenía que hacerlo en los términos que dicta el régimen presidencial. No obstante, la libertad que Bravo Mena reclamaba para el jefe del Ejecutivo, en el caso de Vicente Fox era equivalente a relegar al PAN a una posición secundaria; además, planteaba el riesgo de que su gobierno fuera indistinguible de los gobiernos priistas anteriores.

Bravo Mena intentó desarrollar la noción de “vinculación democrática” para dar forma a las relaciones entre el presidente y el PAN. Explicó las primeras dificultades que se presentaron entre los legisladores panistas y el jefe del Ejecutivo como un incidente, problemas naturales en una etapa de aprendizaje, pero, según él, la comunicación entre Vicente Fox y el partido era “fluida”. “Continuamente se dan reuniones con el Presidente en donde platicamos los temas de la agenda [...] vamos conjugando la visión de ambos”.¹⁴ Sostenía que había

¹³ Luis Felipe Bravo Mena en *La Nación*, 6 de diciembre de 2000, año LIX, núm. 2142. Un mes antes de que se anunciara el nuevo gabinete, *La Nación* publicó un editorial que planteaba el temor a que el PAN en el poder repitiera la historia de la relación de subordinación del PRI a la Presidencia de la República: “Con estos antecedentes sería muy lamentable que algún panista se confundiera y que ganada ya la Presidencia del gobierno de la República se manifestara reclamando desde sus propias y parciales perspectivas un premio a la militancia, considerando que el triunfo electoral es más del partido que del pueblo, quien proclama la exigencia de un cambio”. “Gobernar para todos”, *La Nación*, 8 de noviembre de 2000, año LIX, núm. 2140, p. 1.

¹⁴ Silvino Silva Lozano, “Bravo Mena: Vinculación democrática, algo inédito en México”, *La Nación*, 8 de agosto de 2001, año LXI, núm. 2159, pp. 3-7, p. 4.

contacto permanente con la Secretaría de Gobernación y con los otros miembros del gabinete, e insistía en que “cada uno [presidente y partido] en nuestro terreno, pero que sí compartamos la totalidad de la estrategia general gubernamental, y le vayamos dando seguimiento”.¹⁵ Sin embargo, el gobierno parecía menos dispuesto que el PAN a establecer esta relación. Tan es así que en las dos legislaturas correspondientes al sexenio se presentó la misma falta de coordinación entre el presidente y su partido. Así quedó demostrado en el primer trimestre del 2001, cuando en la discusión de la ley indígena el presidente trató a Acción Nacional como si fuera parte de la oposición, y después, en los meses de octubre a diciembre del 2003, cuando a los legisladores panistas les tocó un papel secundario frente a una fracción de la bancada del PRI en la discusión de la reforma hacendaria. En el primer caso el aliado objetivo del presidente fue el EZLN, en el segundo, el antiguo partido oficial.

LA PRIMERA CRISIS EN LA RELACIÓN PRESIDENTE-PARTIDO

En los primeros meses de 2001 se produjo una crisis en las relaciones entre Fox y los legisladores de la bancada panista en el Congreso, que reprobaban su estrategia hacia el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN.

A unos cuantos días de iniciado su gobierno, el 5 de diciembre de 2000, el presidente presentó al Congreso una iniciativa de ley que sintetizaba el “espíritu de los Acuerdos de San Andrés”, en respuesta a la demanda del EZLN de que así se hiciera. La base de la propuesta era el documento de la Comisión de Concordia y Pacificación, Cocopa, integrada por legisladores de diferentes partidos, que en 1996 había elaborado la “Iniciativa de reformas constitucionales sobre derechos y cultura indígenas”, basada en los mencionados acuerdos. El gobierno de Vicente Fox también aceptó liberar a todos los zapatistas presos y ordenó el retiro del ejército federal de cuatro de las siete posiciones

¹⁵ *Idem.*

clave en el estado de Chiapas. Por último, el presidente saludó la convocatoria del EZLN a una gran marcha a la Ciudad de México.

La estrategia conciliatoria del gobierno inspiraba gran desconfianza entre los legisladores panistas, que consideraban que eran muchas las concesiones a cambio de nada; además, también rechazaban el desplazamiento del Poder Legislativo del proceso de negociación que el Ejecutivo había tomado en sus manos. El líder de la bancada en la Cámara de Diputados, Felipe Calderón Hinojosa, insistía en que el diálogo entre la Cocopa y el EZLN se había roto desde 1997, y que antes de atender las exigencias de los zapatistas era preciso restablecer el contacto con los legisladores: “No pedimos otra cosa sino que dialoguen con nuestros representantes, no pedimos otra cosa sino que reciban a nuestros compañeros y que sean ellos los responsables de ostentar la responsabilidad del Congreso y de coadyuvar al proceso de paz”.¹⁶

La prioridad que el gobierno otorgaba al conflicto en Chiapas también era motivo de desacuerdo entre el presidente y los legisladores, pues muchos consideraban que era un tema superado o, en todo caso, regional, que la política presidencial había reanimado de manera artificial. Sin embargo, lo que causaba más escozor entre los panistas era que el gobierno hubiera adoptado como propia la ley de la Cocopa y que como tal la hubiera presentado al Congreso.¹⁷ En términos generales, la estrategia de Vicente Fox en relación con el conflicto en Chiapas fue un primer ejercicio de presidencia plebiscitaria, en el que desechó las propuestas de su partido sobre el tema, y buscó movilizar a la opinión pública para que ésta presionara al Congreso

¹⁶ “Reclama PAN apoyo para la Cocopa”, versión estenográfica de la intervención del diputado Felipe Calderón Hinojosa, LVIII Legislatura, el 24 de enero del 2001. *La Nación*, 7 de febrero de 2001, año LIX, núm. 2146, p. 10.

¹⁷ Según Aguilar y Castañeda, incluso después de haber dejado el gobierno, Vicente Fox sigue pensando que se justificaba la prioridad que acordó al EZLN y a la ley indígena porque el conflicto en Chiapas tenía un “significado emblemático para la democracia”, en cambio, las reformas estructurales —energética, hacendaria, laboral, entre otras, eran muy divisivas. También creía que su llegada al poder abría una oportunidad única para la solución de un conflicto que, en su opinión no estaba resuelto y que, si no se negociaba, “podía estallar en cualquier momento”. Aguilar y Castañeda, *op. cit.*, pp. 107-108.

y exigiera a los diputados y senadores adoptar sin más trámite las reformas propuestas.¹⁸

En este desencuentro incluso el presidente del PAN, Bravo Mena, se sumó a la rebeldía contra una iniciativa que ni siquiera mencionaba el documento que representaba la posición oficial del partido desde 1998, y en cuya elaboración había intervenido él mismo en tanto que miembro del Senado.¹⁹ Los panistas mantuvieron como contrapropuesta a la iniciativa gubernamental las “Cartas municipales”. Este proyecto reconocía las formas tradicionales de organización política y social de los pueblos indígenas en el nivel municipal, pero rechazaba el principio de soberanía territorial de las comunidades indígenas sobre los recursos naturales y la organización del gobierno, que era el corazón de los Acuerdos de San Andrés. En opinión de los panistas el régimen de autonomía de esta propuesta introducía un cuarto nivel de gobierno que distorsionaba el orden constitucional.

El anuncio del subcomandante Marcos de que los zapatistas viajarían al congreso indígena a celebrarse en marzo en la Ciudad de México profundizó la brecha que separaba a los legisladores del PAN del presidente Vicente Fox, pues éste dio la bienvenida a la marcha del EZLN, que se inició en Chiapas el 24 de febrero, y se comprometió a garan-

¹⁸ “Ni en la visión o composición de su gobierno [Fox] había previsto una relación privilegiada con el Congreso. Toda la estrategia de Fox se centraba en el apoyo ciudadano expresado en las urnas. A lo largo de sus conversaciones con distintos políticos o mandatarios extranjeros, durante la etapa de la transición administrativa, había recogido la idea de que en las grandes democracias, los presidentes apoyaban sus iniciativas, primero en la gente, en la opinión pública, y luego las cabildeaban con los congresistas para sacarlas adelante. Y estos últimos se veían obligados a tener en cuenta a sus electores”. Aguilar y Castañeda, *op. cit.*, p. 84.

¹⁹ Las decisiones de gobierno se discutían en el seno del Grupo de los Once, G-11, según Aguilar y Castañeda, o Grupo Pinos, del que formaban parte el *staff* presidencial: Ramón Muñoz, Eduardo Sojo, Arturo Durazo, Francisco Ortiz y Carlos Flores, el secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, el secretario de Gobernación, Santiago Creel, el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, el comisionado de Orden y Respeto, Adolfo Aguilar Zinser, el comisionado para el Desarrollo Social, José Sarukhán, y el comisionado para Chiapas, Luis H. Álvarez, y Rodolfo Elizondo, coordinador de la oficina presidencial para Atención Ciudadana. Aguilar y Castañeda, *op. cit.*, p. 81.

tizar su seguridad y su tranquilidad. La posición oficial del CEN del PAN expresaba su respeto a las decisiones del presidente y al trabajo del comisionado Luis H. Álvarez; sin embargo, añadía que esperaba del EZLN “señales claras, objetivas y verificables que demuestren su genuina disposición para el diálogo”. La desconfianza aumentó de manera considerable porque al llegar la marcha a la ciudad el subcomandante Marcos pronunció discursos en los que abundó en ironías y en descalificaciones de los gobiernos panistas y del propio presidente Fox, ridiculizó el encuentro con la Cocopa y aumentó sus exigencias. Además de la aprobación de la ley, los zapatistas demandaban como condiciones previas a sentarse en la mesa de diálogo, la liberación de todos los presos y el retiro total del ejército de la zona de conflicto.

La insistencia de la bancada panista, en la que destacaba el senador Diego Fernández de Cevallos, en sostener la intervención del Poder Legislativo como parte del proceso de solución del conflicto en Chiapas buscaba frenar la presidencialización del gobierno que había emprendido el foxismo, pues, a su manera de ver, esta estrategia ignoraba la historia del partido de resistencia al presidencialismo exacerbado del pasado. No obstante, las razones del forcejeo entre los legisladores panistas y el presidente Fox y su equipo de asesores, a propósito del EZLN, nacían de diferencias a propósito de la solución deseable y del hecho de que, según Rubén Aguilar y Jorge Castañeda, funcionarios muy cercanos al presidente “la estrategia de Fox descansaba en una —indispensable— alianza entre gobierno y zapatistas”.²⁰ No mencionaban si el EZLN era parte explícita de ese acuerdo, pero sostenían que “era el único elemento que podía presionar al Congreso para aprobar la ley”.²¹

La oposición a la estrategia presidencial subió de tono durante el mes de marzo de 2001, a raíz de la marcha zapatista, pero, sobre todo, de la exigencia del subcomandante Marcos de que los comandantes del EZLN hicieran uso de la tribuna en el pleno de la Cámara de Diputados. Los legisladores panistas en bloque se sublevaron contra esta nueva condición. Los zapatistas habían ignorado los exhortos de los legisla-

²⁰ Aguilar y Castañeda, *op. cit.*, p. 87.

²¹ *Idem.*

dores al restablecimiento del diálogo con la Cocopa, se habían empeñado en hacer a un lado al Poder Legislativo y habían reconocido como interlocutor sólo al presidente Fox o a la opinión pública. El diputado García Cervantes, quien fungía entonces como presidente de la Mesa Directiva y de la Comisión Permanente subió a la tribuna a finales de enero para advertir que la marcha del EZLN al Distrito Federal podía violar la ley y complicar todavía más el proceso de paz; además, objetó vigorosamente que los comandantes zapatistas entraran al recinto legislativo armados y encapuchados, y que hicieran uso de la tribuna en violación de la Ley Orgánica del Congreso. Concluyó su intervención: “¿Queremos hacer la apología de la violencia?”²²

A ojos de los panistas, Vicente Fox estaba actuando igual que los presidentes priistas que se imponían a la ley para manipularla a su antojo y conveniencia. Ninguno de sus argumentos, y tampoco el desacuerdo explícito y público de los legisladores, movió al presidente Fox a modificar un centímetro su estrategia.

El 20 de marzo el presidente de la República apareció en televisión en cadena nacional para exhortar a los legisladores a aprobar las reformas constitucionales propuestas, pero sólo provocó una viva reacción entre ellos. El 22 de marzo el diputado Calderón asumió la defensa del Congreso y de su autonomía frente a los señalamientos de que era objeto por parte del presidente Fox, quien había sugerido que era un obstáculo al diálogo, asimismo respondió a las demandas de los zapatistas. Sostuvo que aceptar las exigencias del presidente y del EZLN sería una humillación para el Congreso y un sometimiento injustificable del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Concluyó su intervención con estas palabras: “respeto y aprecio a Guillén [apellido del subcomandante Marcos] y al presidente de la República [...] En esta grave hora nacional debe quedar claro también para la historia que, más allá de esos respetos, ni Marcos ni Fox mandan en esta Cámara de Diputados”.²³

²² Citado en Jorge Rodríguez Bañuelos, “Sin diálogo previo, la marcha zapatista amenaza la paz”, *La Nación*, 7 de febrero de 2001, año LIX, núm. 2146, pp. 8-9. checar fecha.

²³ “Ni Marcos ni Fox mandan en la Cámara de Diputados”, intervención del diputado Felipe Calderón Hinojosa, coordinador del grupo parlamentario del PAN

Los legisladores panistas terminaron por ceder a la presión del presidente, del PRD y de núcleos influyentes de opinión pública, y los comandantes zapatistas hicieron uso de la tribuna en el pleno de la Cámara.²⁴ Sin embargo, sólo los diputados que eran miembros de las comisiones de Asuntos Indígenas y de Asuntos Constitucionales asistieron a la sesión, en señal de protesta.

Por una coincidencia, la XVIII Asamblea Nacional del PAN se celebró en las mismas fechas en que se desarrollaba el debate a propósito de la presencia del EZLN en la Cámara. Entonces, Vicente Fox pudo calibrar las dimensiones de la oposición del panismo a su estrategia para resolver el conflicto en Chiapas y observar directamente que no era exclusiva de los legisladores “doctrinarios”, sino que estaba ampliamente extendida en el partido. Los asistentes aplaudieron con entusiasmo a sus líderes en el Congreso, Felipe Calderón y Diego Fernández de Cevallos, que habían expresado con meridiana claridad su oposición a la política del gobierno, e incluso no faltaron los abucheos al presidente Fox.²⁵

La iniciativa de reformas constitucionales relativa a derechos y cultura indígenas que presentó el Ejecutivo fue modificada en el Legisla-

en la Cámara baja, 22 de marzo de 2001, *La Nación*, 4 de abril de 2001, año LIX, núm. 2150, pp. 10-12.

²⁴ Durante los trabajos de la XVIII Asamblea Nacional del PAN el 24 y 25 de marzo, el líder de la bancada en el Senado, Diego Fernández de Cevallos, se refirió con la insolencia que le era bien conocida, a las presiones que había ejercido el presidente Fox sobre los legisladores: fueron “un hecho” y los vehículos Rodolfo Elizondo y Luis H. Álvarez. A la revista del partido declaró: “yo sentía la presión de Fox todos los días y a todas horas. La entendí y la dejé pasar”. Sin embargo, en esa misma ocasión no dejó pasar la oportunidad de expresar su desacuerdo con la estrategia presidencial: “Él [Fox] es un hombre que está convencido de que la mejor forma para llegar a un diálogo y a la paz es lo que ya todo México conoce, es decir que Marcos haga lo que se le dé la gana”. Ramón Otero Conde, “Diego Fernández de Cevallos. Persiste la declaración de guerra del EZLN”, *La Nación*, 4 de abril de 2001, año LIX, núm. 2150, pp. 8-9.

²⁵ Para una descripción de la atmósfera de resentimiento y desconfianza que se instaló en la Asamblea Nacional del PAN ante la presencia del presidente Fox, véase Alejandra Lajous *et al.*, *Vicente Fox. El presidente que no supo gobernar*, México, Océano, 2007, pp. 51-52.

tivo, para eliminar la noción de autonomías que era el corazón de los Acuerdos de San Andrés; la fórmula propuesta fue definida en los términos constitucionales establecidos, y las comunidades indígenas fueron reconocidas como entidades de interés público. La nueva legislación fue votada por unanimidad en el Congreso federal y en los congresos estatales, pero fue rechazada por el EZLN, y severamente criticada por la comisionada de Asuntos Indígenas, Xóchitl Gálvez, y por el propio presidente Fox. En las semanas que siguieron a la votación de la ley los legisladores panistas insistieron en que no había rupturas, sino definiciones; no obstante, el enfrentamiento entre el presidente y su partido era inocultable.

La estrategia del gobierno en relación con el conflicto en Chiapas tuvo un éxito limitado. No trajo una solución de largo plazo, pero desactivó la causa zapatista. La entrada a la Ciudad de México, las concentraciones en el Zócalo y las imágenes de los comandantes zapatistas en el pleno de la Cámara de Diputados tuvieron un efecto catártico que consumió el entusiasmo público que despertaba el EZLN, y condenó la causa a un destino último en el limbo de los asuntos sin solución.

LAS ELECCIONES FEDERALES DE 2003

En los dos primeros años del sexenio, la política económica y el presupuesto anual del gobierno también suscitaron las críticas de los panistas. El presidente Fox mantenía un porcentaje alto de aprobación, entre 6.7 y 7, pero la evaluación de la opinión pública de su capacidad de gobierno era más severa. Entre noviembre de 2000 y noviembre de 2002, el porcentaje de personas que creía que el presidente Fox ejercía un buen liderazgo había pasado de 69 a 32%, y el porcentaje de quienes creían que tenía una buena capacidad para resolver problemas se redujo en ese mismo lapso de 67 a 27%.²⁶ El presidente Fox se negó a examinar las causas de este desplome y se involucró directamente en

²⁶ Consulta Mitofsky, "Evaluación del gobierno de Vicente Fox, 12a. medición", <www.consulta.com.mx>, consulta del 2 de septiembre de 2004.

la promoción de los candidatos a diputados del PAN a la LIX Legislatura, con la esperanza de superar la condición de gobierno dividido que, según él, había obstaculizado la realización de sus políticas de gobierno. La participación de Vicente Fox en la búsqueda de la mayoría en la Cámara de Diputados tuvo como lema “quítale el freno al cambio”.²⁷ La alusión al obstáculo que representaba el Legislativo que contenía este mensaje era muy desfavorable a la imagen pública del Congreso.

Los estrategas de Acción Nacional consideraban que la participación del presidente en la campaña tendría un efecto negativo sobre sus candidatos, a quienes tocaría pagar la factura de decisiones gubernamentales en las que tuvieron poco que ver o, peor todavía, con las que estaban en completo desacuerdo. Más allá de las discrepancias y los enfrentamientos interpartidistas, la opinión pública identificaba a la Presidencia de la República con el PAN y viceversa, como parte del conjunto “gobierno”. Por consiguiente, las elecciones eran una oportunidad para expresar el descontento que le inspiraban, por igual, los diputados en el Congreso —que según el presidente no lo dejaban gobernar— y Vicente Fox, que no tenía la capacidad de hacerse escuchar y atender por los legisladores.

Como se dijo antes, los legisladores del PAN no alcanzaron la mayoría en la Legislatura LIX y se frustraron las expectativas del presidente Fox de superar la condición de gobierno dividido. Los candidatos panistas también fueron derrotados en las elecciones para gobernador de Campeche, Colima, Nuevo León y Sonora, aunque Acción Nacional retuvo la gubernatura de Querétaro y conquistó la de San Luis Potosí. En cambio, su presencia en el Distrito Federal se desplomó, porque perdió 20 de los 23 distritos que había ganado en 2000. Estos resulta-

²⁷ Aguilar y Castañeda afirman que “Fox confiesa que hizo todo lo posible para alcanzar una mayoría panista en la elección del 2003”. Su argumento era que el Congreso no le había querido aprobar las reformas estructurales y que era necesaria una mayoría para llevar adelante “el proyecto de nación”. “Luchó para ganar, pero perdió. Opina que su actuación no resultó contraproducente; si no hubiera hecho lo que hizo, los resultados habrían sido peores. Pero persiste la duda: ¿qué hubiera pasado si Fox no se involucra en el proceso?”. Aguilar y Castañeda, *op. cit.*, p. 327.

dos redujeron la capacidad de influencia de los legisladores panistas sobre el presidente de la República, y su imagen se vio afectada por las continuas quejas y críticas de que ellos mismos eran objeto por parte de otros funcionarios del gobierno.

Las interpretaciones de la derrota entre los panistas variaron. El presidente del partido, Bravo Mena, concluyó que no habían alcanzado la mayoría absoluta porque el partido carecía de cuadros fuertes y de vínculos sólidos con la sociedad; ambos factores, decía, restaban potencial a los liderazgos regionales. Otros miembros vieron en los resultados un reflejo de la evaluación crecientemente negativa que la opinión pública hacía del presidente; pocos se atrevieron a expresar en forma abierta que la hostilidad del presidente Fox hacia el Congreso y hacia los legisladores, a los que había acusado de bloquear el cambio, podía haber influido en la elevada tasa de abstencionismo que registraron esos comicios. Pese a estas diferencias, la mayoría coincidía en que el partido había pagado los costos de la frustración que provocaba el gobierno del cambio.

Peor aún, los mediocres resultados electorales del PAN le restaron incentivos al presidente Fox para que dispensara un tratamiento privilegiado a los legisladores panistas, que en el segundo trienio del gobierno pasaron a ser un mudo acompañante del gobierno. Para compensar la debilidad de sus legisladores en la Cámara, el gobierno buscó una alianza con el PRI en apoyo a sus propuestas de reforma estructural. En los primeros meses de la LIX Legislatura, el principal baluarte del foxismo en la Cámara fue Elba Esther Gordillo, que era la coordinadora de la fracción priista, quien asumió todo el peso de la ofensiva para sacar adelante la reforma hacendaria que, sin embargo, sucumbió ante el rechazo de los legisladores perredistas y de una corriente del PRI. Los legisladores panistas votaron disciplinadamente la iniciativa del gobierno, aunque ni ellos ni el partido intervinieron en el diseño de la propuesta.²⁸

²⁸ Según Aguilar y Castañeda, Roberto Madrazo y Elba Esther Gordillo habían conquistado la presidencia y la secretaría general del PRI gracias a una alianza con Vicente Fox, cuyo propósito era “llevar la dirección del partido tricolor a una man-

La incomodidad en las relaciones entre el presidente Fox y los legisladores panistas del trienio 2003-2006 no desapareció, aunque no se produjeron los enfrentamientos públicos ni las tensiones que se presentaron en el periodo anterior. El primer líder de los diputados panistas en este caso fue Francisco Barrio, un neopanista cuya trayectoria dentro del partido era similar a la de Vicente Fox. Sin embargo, en 2005, después de una brevísima incursión en la carrera por la candidatura presidencial, Barrio se sumó a la corriente interna que apoyaba a Felipe Calderón, en oposición al presidente, que promovía al secretario de Gobernación, Santiago Creel.

Las reformas estructurales que propuso el presidente Fox en el trienio anterior y que debían haber materializado su programa de cambio tampoco fueron votadas en el periodo legislativo 2003-2006.²⁹ No obstante, y a pesar de las reiteradas quejas del gobierno respecto a la inactividad del Congreso o a la lentitud de los procesos legislativos, y de los estereotipos que se difundieron en la opinión pública de que el Congreso era un órgano básicamente improductivo y oneroso, y los legisladores, unos políticos irresponsables,³⁰ las acciones de diputa-

cuerna que apoyaría las reformas estructurales [...] principalmente en materia fiscal, energética y laboral". Aguilar y Castañeda, *op. cit.*, p. 131. En la lista de participantes en la discusión detallada de las reformas no aparece el nombre de un solo panista. La ausencia es notable también porque en el proceso de renovación de la presidencia del PAN en marzo de 2002, Carlos Medina había puesto la reforma fiscal que entonces se presentó como ejemplo de la indiferencia del gobierno hacia el partido, y, en particular, hacia los legisladores panistas, entre quienes nunca hubo consulta ni cabildeo.

²⁹ Quedaron pendientes la reforma fiscal, la reforma energética, la reforma electoral, la reforma laboral, la reforma al sistema de pensiones, la reforma de seguridad y justicia, la reforma a telecomunicaciones, la reforma política y la ley de inversión extranjera. María Amparo Casar, "Una legislatura de claroscuros", *Reforma*, 7 de mayo de 2006, <www.reforma.com.mx>, consulta del 4 de febrero de 2008.

³⁰ En estos años aumentó de forma significativa el número de iniciativas presentadas por los legisladores, si bien algunas de ellas eran simbólicas o simplemente irrelevantes. No obstante, fueron tantas que según Benito Nacif la capacidad del Congreso para procesarlas llegó a su límite, de suerte que se produjo un "rezago legislativo", producto de insuficiencias institucionales antes que de la voluntad de bloqueo de la oposición: "Es probable que en la LIX Legislatura se termine estableciendo un

dos y senadores se incrementaron a lo largo del sexenio, las tensas relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo no condujeron a la parálisis gubernamental y muchas iniciativas presidenciales fueron votadas con agilidad.³¹

LA DESESTABILIZACIÓN DE LOS EQUILIBRIOS INTERNOS DEL PAN

En un régimen presidencial, el acceso al Poder Ejecutivo acarrea desequilibrios en el interior del partido triunfador y en su posición dentro del sistema político. Estas alteraciones pueden comprometer su continuidad, porque la fuerza de la Presidencia de la República puede minar su estabilidad institucional. En el caso del PAN durante el sexenio de Vicente Fox esta amenaza cobró forma en el ascenso de una corriente identificada con él y con una organización semisecreta llamada “El Yunque”, cuya identidad es, según la información publicada, marcadamente religiosa.³²

nuevo récord histórico en volumen de legislación aprobada”. Benito Nacif, “Desempeño legislativo: parálisis o inflación legislativa?”, *Reforma*, 30 de octubre de 2005 <www.reforma.com.mx>, consulta del 4 de febrero de 2008. Un análisis cuidadoso de las acciones en el Congreso muestra que, pese a la imagen pública de un Congreso incapaz de llegar a acuerdos, o de la pobre disposición de los partidos para establecer coaliciones necesarias para sacar adelante las iniciativas, más de 71% de ellas fueron votadas por todas las fuerzas presentes en el Congreso. Véase Casar, art. cit.

³¹ En mayo del 2001 se habían presentado 38 iniciativas del presidente de las cuales 10 fueron votadas por unanimidad, la mayoría era relativa a instituciones de crédito y servicios financieros, esto es, se trataba de temas importantes.

³² En 2003 el periodista Álvaro Delgado publicó *El Yunque: la ultraderecha en el poder* un largo reportaje sobre esta organización vinculada con organizaciones de extrema derecha asociadas con la ofensiva anticomunista de la Iglesia en México en los años cincuenta. El Yunque sería una derivación del Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, MURO, una pequeña y violenta organización anticomunista de origen poblano que en los setenta hizo su aparición en la ciudad de León, Guanajuato, para vincularse con los remanentes del sinarquismo, desde donde ingresó al PAN. A partir de la publicación de este libro se da por sentada la existencia de esta corriente de ultraderecha a la que, según Delgado, pertenecerían foxistas tan poderosos como Ramón Muñoz, Ana Teresa Aranda, Jorge Ocejo Moreno, José Luis Luege, Ana Rosa Payán, Francisco Garrido Patrón, Héctor Larios, Antonio Sánchez

La consecuencia más significativa que tuvo el triunfo de 2000 sobre Acción Nacional fue la aparición de una falla en la organización, que separaba a quienes apoyaban la subordinación del partido a las decisiones del presidente Fox de quienes, en cambio, defendían su autonomía. En el pasado, Acción Nacional había vivido conflictos internos derivados de diferencias básicamente de estrategia política, por ejemplo, entre abstencionistas que consideraban que los comicios eran una farsa que era preferible no convalidar, y participacionistas que creían en la utilidad del ejercicio electoral, aunque fuera limitada. En los años setenta surgió un áspero debate en relación con la política de crecimiento del partido entre quienes pugnaban por la apertura del partido al voto de protesta, sin importar su conocimiento o adhesión a la doctrina, y quienes insistían en que esa identidad era condición irrenunciable de todo panista. Entre 2000 y 2006 la fuente de división interna fue el desacuerdo a propósito de la relación entre el partido y la Presidencia de la República, y provocó la formación de dos corrientes antagónicas: foxistas y antifoxistas. En cierta forma este conflicto reproducía las diferencias entre aperturistas y doctrinarios del pasado.

Los objetivos de transformación del partido fueron difíciles de alcanzar a la sombra de la falla que fue abriéndose paso en su interior, y que se impuso incluso a aquélla entre el centro y la periferia que dictó

Díaz de Rivera, Guillermo Velasco Arzac, entre otros. Muchos de ellos son militantes notables de organizaciones de extrema derecha: Frente Universitario Anticomunista, FUA, Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana, DHIAC, Asociación Nacional Cívica Femenina, Ancifem. Según este mismo periodista, El Yunque inició la penetración del PAN desde 1979. Véase Álvaro Delgado, *El Yunque: la ultraderecha en el poder*, México, Plaza & Janés, 2003. Según uno de sus fundadores en Puebla, Manuel Díaz Cid, El Yunque es una asociación que “busca instaurar ‘el reino de dios’ en la tierra y evangelizar las instituciones públicas mediante la infiltración de todos sus miembros en las más altas esferas del poder político”. Mónica Azcárate, “Hasta hace cinco años, Díaz Cid fue de El Yunque; ‘hoy no tiene razón de ser’, dice”, *La Jornada de Oriente*, 25 de agosto de 2003, <www.lajornadadeoriente.com.mx>, consulta del 6 de diciembre de 2007. En agosto de 2007, el ex senador por Chihuahua Javier Corral afirmó ante los medios que los miembros de esta organización habían asaltado al PAN “hace muchos años, se metieron, conquistaron posiciones muy importantes”, <www.dossierpolitico.com>, 18/08/2007, consulta del 6 de diciembre de 2007.

la lógica interna del partido durante los años ochenta.³³ Según Bravo Mena, al iniciarse el gobierno eran más serios los conflictos internos que las tensiones que se habían desarrollado en la relación con el presidente.³⁴ Durante el sexenio, el PAN renovó dos veces su Consejo Nacional, en 2001 y en 2004; en 2002 Luis Felipe Bravo Mena fue reelegido presidente del partido, y en 2005 Manuel Espino alcanzó esa posición con el decidido apoyo de Vicente Fox. En cada caso, el eje de la alineación de fuerzas en el interior del partido fue la relación con el presidente y la relación entre el gobierno y el partido; entonces se formaron dos grandes constelaciones: los foxistas y los “doctrinarios”, por llamarlos de algún modo. Las relaciones entre ambos grupos adquirieron un tono ríspido conforme avanzaba el tiempo.

Las dudas a propósito de la lealtad de Vicente Fox a los principios y las normas del partido venían de muy atrás, desde su ingreso al PAN como parte de la corriente empresarial que hizo del partido un vehículo de protesta y de participación en los años ochenta, a raíz de la expropiación de la banca. Por una parte, para muchos, al iniciarse los años 2000 los neopanistas seguían siendo unos advenedizos cuya presencia en el partido estaba marcada por el signo de la oportunidad; por otra, Vicente Fox se veía a sí mismo como una víctima de las “concertaciones”, de las componendas a que eran propensos los partidos, como la que habían concluido el presidente Carlos Salinas y la dirigencia

³³ Tania Hernández Vicencio, “Paradojas, acuerdos y contradicciones: el Partido Acción Nacional”, en Reveles Vázquez (coord.), *op. cit.*, pp. 165-186.

³⁴ En una entrevista otorgada al órgano del partido en abril del 2001, es decir, después de la tormenta que había provocado la estrategia en relación con el conflicto en Chiapas, el presidente del PAN, Bravo Mena declaró: “El partido está en un intensísimo proceso de cambio [...] las dinámicas de la vida interna están impactadas fuertemente por el fenómeno del poder [...] El Partido ahora es una instancia en donde se disputa el poder y eso transforma mucho lo que era la convivencia interna del Partido. En muchos lados existe el talento, la voluntad para ir articulando la vida interna junto con este fenómeno de poder, pero en otros se les complica mucho, entonces se provocan conflictos que parecen insuperables”. Silvino Silva Lozano, “Sí a municipios autónomos indígenas”, entrevista con Luis Felipe Bravo Mena, 28 de marzo, *La Nación*, 18 de abril de 2001, año LIX, núm. 1251, pp. 23-28.

panista en 1991 en relación con la gubernatura de Guanajuato, a la que se ha hecho alusión. La campaña electoral del año 2000 también propició la desconfianza entre Fox y el PAN, en vista de la preeminencia de Amigos de Fox. La distancia entre los miembros de esta organización y el partido nunca fue realmente superada. Por estas mismas razones, el principal instrumento de los defensores del partido frente al ascenso del foxismo fue esgrimir la doctrina y apelar a la legitimidad derivada de la identidad partidista, atributo del que carecían casi todos los miembros del círculo cercano al presidente.

La distancia entre el presidente Fox y su partido también se hizo pública en las declaraciones de algunos miembros del partido relativas a la existencia de un ala extrema aglutinada en torno al Yunque, organización a la que pertenecían muchos de los flamantes funcionarios foxistas. Los doctrinarios que se asumían como demócratas, defensores de las instituciones políticas del liberalismo y del pluralismo, así como de los principios de la democracia cristiana, rechazaban las posiciones clericales y abiertamente antiliberales de los yunquistas.

La conquista de la Presidencia de la República impulsó el crecimiento del partido y fue para Luis Felipe Bravo Mena la oportunidad de lanzar en 2001 lo que se convirtió en un agitado proceso de reforma integral. Su objetivo era que el partido fuera “una estructura de participación ciudadana mucho más efectiva [...] no se trata de ser sólo una maquinaria electoral, necesitamos hacer una mejor organización política que canalice entre la base ciudadana, hacia el gobierno, la población, como también ser un buen canal, a través del cual la información y la orientación del gobierno y del Partido se conozcan con mayor facilidad entre los ciudadanos”.³⁵

Estas propuestas y su implementación efectiva durante los primeros tres años del gobierno, demuestran que contrariamente a la percepción generalizada de que Acción Nacional no sabía ser partido en el poder, al inicio del “gobierno del cambio”, el partido diseñó planes muy ambiciosos de expansión y se preparó para lo que preveía como un periodo de acelerado crecimiento. En diciembre de 2001 tuvo lu-

³⁵ Silva Lozano, “Bravo Mena...”, art. cit., p. 7.

gar en Querétaro la XIII Asamblea Nacional Extraordinaria, en la que se votaron modificaciones en la organización del partido que impulsaron la reforma estatutaria más amplia que había experimentado el PAN. Entre ellas destaca la creación de una Dirección de Acción Gubernamental que organizaría “un sistema de trabajo con los comités estatales del PAN para recibir y canalizar a la Secretaría de Gobernación y a otras dependencias las propuestas para delegados federales”.³⁶ De esta manera el partido buscaba responder a las preocupaciones de Bravo Mena, quien había insistido en que el partido había adquirido responsabilidades de gobierno que lo obligaban a ser “el eje de conducción política que nos corresponde junto con el gobierno [...] pasar a una cultura de responsabilidad de gobierno y saber que somos los responsables del gobierno, y que así nos ve la ciudadanía y así nos premiará o nos castigará”.³⁷

Entre 2001 y 2005 se modificaron los estatutos, los principios de doctrina y los reglamentos internos; se modernizó el registro nacional de miembros y se sentaron las bases para la creación de representaciones del partido en el extranjero, léase en Estados Unidos; además, el partido amplió y fortaleció su presencia internacional y consolidó sus vínculos con la Democracia Cristiana Internacional. También se lanzó una amplia campaña de proselitismo y de afiliación,³⁸ se reestructuraron las áreas involucradas en procesos electorales, se puso en pie un ambicioso programa de capacitación “con el fin de que la persona conozca

³⁶ Armando Reyes Viguera, “Asumamos con entereza la nueva realidad”, *La Nación*, 23 de enero de 2002, año LX, núm. 2171, pp. 11-14, p. 11.

³⁷ Silva Lozano, “Bravo Mena...”, art. cit., p. 7.

³⁸ En enero del 2002 la presidencia del PAN reportaba 185 mil miembros activos y 223 mil adherentes; un total de 408 mil. Sin embargo, en 2005 en plena campaña por la candidatura presidencial del PAN, un crítico de Felipe Calderón, Martín Enrique Mendiál, cuestionaba la efectividad y la seriedad de estos esfuerzos. “¿Cuántas campañas de integración se hicieron con esa nueva masa de mexicanos decididos a hacerse panistas? ¿Cuántas llamadas por teléfono; cuántas charlas promovidas y dictadas a fondo; cuántas invitaciones por televisión y radio para abrir realmente al partido de cara a la sociedad nacional toda? Muy pocas”. “Vuelta y revuelta panista: golpe a la militancia”, *Reforma*, 23 de octubre de 2005, <www.reforma.com.mx>, consulta del 6 de febrero de 2008.

la visión y los valores del Partido; se prepara un nuevo cuaderno de trabajo, para los miembros adherentes y se busca que la inclusión de miembros activos al PAN se realice con base en su preparación ética”.³⁹

Durante décadas de oposición el partido estuvo a salvo de las tentaciones del poder y supo mantenerse como un referente de compromiso desinteresado frente a las reiteradas denuncias de corrupción que pesaban sobre el PRI. Acceder al poder sometía a dura prueba la fuerza moral del PAN. Desde que se declaró el triunfo del 2 de julio de 2000 muchos panistas expresaron su preocupación por los efectos corruptores del poder. En abril del 2001, se dio a conocer el “Código de ética” para los funcionarios del PAN, a quienes el presidente del partido llamó a ser “la primera fuerza moral del país”.⁴⁰

Muchos de los cambios que se introdujeron en el partido apuntaban hacia el reconocimiento de la identidad partidista como un factor central de legitimidad en el seno de la organización, aunque su primera intención fuera paliar el temor a que la Presidencia de la República sometiera al partido, y a que éste sufriera el destino del PRI. Cabe señalar que los temores se habrían planteado independientemente de quién fuera presidente, al igual que la preocupación por la pérdida del capital moral que los panistas reclamaban como un componente central de su identidad.

CAMBIOS EN LA DOCTRINA Y EN LA ORGANIZACIÓN

Públicamente los disensos en el interior del PAN fueron presentados como producto del antagonismo entre doctrinarios y pragmáticos; en

³⁹ Reyes Vigueras, “Asumamos con entereza...”, art. cit.

⁴⁰ En la quinta reunión de alcaldes panistas se discutió el “Código de ética” en el que se exigía a militantes y funcionarios del partido un modo honesto de vivir y conductas apegadas a la moral y a las buenas costumbres, que en todo momento se conduzcan con honradez, integridad, imparcialidad, congruencia, probidad, lealtad, civilidad, eficiencia, tolerancia, responsabilidad, respeto y espíritu de servicio. Jorge Rodríguez Bañuelos, “Seamos la primera fuerza moral de México”, *La Nación*, 2 de mayo de 2001, año LXI, núm. 2152, pp. 6-10.

términos ideológicos había algunas diferencias entre ambos grupos o corrientes. Compartían la defensa de valores sociales como la familia y la tradición católica, pero los foxistas eran más antiestadistas y más proempresariales que los doctrinarios, y la actitud de aquéllos ante Estados Unidos mucho más confiada y complaciente que la de éstos. Sin embargo, estas diferencias no levantaron tanta polémica —y tampoco las modificaciones a la “Proyección de principios”— como las relativas a los cambios en la organización del partido, en particular, al modo de selección de los candidatos a cargos de elección popular.

Aparentemente, los grupos coincidían en que era necesario hacer modificaciones para precisar y afianzar una identidad partidista, pero las motivaciones eran radicalmente diferentes. Los antifoxistas veían en la identidad doctrinaria un antídoto contra la corrupción en la que había incurrido ya varios funcionarios y cuya sombra alcanzaba incluso a la esposa del presidente —Martha Sahagún— y a su familia así como una respuesta a la inestabilidad y a los desacuerdos que había generado el foxismo, y a la estrategia de puertas abiertas, o de partido electorero, que lo había llevado al poder. Los foxistas, en cambio, creían que la doctrina les aseguraba la continuidad, porque la extendían hasta incorporar el programa de gobierno del presidente. Sus adversarios se identificaban como los herederos de Carlos Castillo Peraza, que había dejado una huella profunda en la doctrina del PAN, inspirada en la doctrina social de la Iglesia. De Castillo Peraza los panistas doctrinarios retomaron las ideas de un capitalismo con rostro humano, del necesario intervencionismo estatal y de los valores de la moral tradicional vinculados con la santidad de la familia y el rechazo al aborto. En virtud de la importancia de estos temas, el partido quedó situado en la corriente más conservadora de la Internacional de Centro Democrático, la agrupación de partidos demócrata cristianos cuyo ánimo es más liberal y laico que el de la Democracia Cristiana Internacional, a la que sustituyó en 1999 y en la cual el PAN ha desempeñado una labor muy activa.

En la “Proyección de principios” de 2002 resurge el antiliberalismo tradicional del PAN que sitúa a la persona en el corazón de sus preocupaciones, vinculada a la comunidad natural por excelencia, la familia,

que es la piedra angular de la sociedad y el marco de referencia cultural de la persona, es decir, el contrapeso al individualismo liberal. El documento introduce algunos temas nuevos, por ejemplo, la equidad de género que ocupa el lugar de la igualdad social, a la cual no hay ninguna referencia; en cambio, propone la autosustentabilidad, y la mundialización.⁴¹ Castillo Peraza desarrolló este concepto como una alternativa al de globalización, que consideraba un fenómeno “deshumanizado”, exclusivamente económico. La mundialización es una protección contra “el renacimiento de los nacionalismos estatistas y populistas”; según Castillo Peraza es una apertura al mundo que “acompaña” la formación de un mercado global, y que está “protagonizada por personas, comunidades y naciones que se relacionan entre ellas con libertad y dignidad”.⁴²

Sin embargo, la transformación más notable de la doctrina del PAN se refiere a las funciones que le atribuye al Estado, aunque no le merezcan un tratamiento aparte en el documento, como ocurre con la persona o con la nación. A diferencia del antiestatismo del pasado, sobre todo en el terreno de la educación y de la cultura, el capítulo IV de la “Proyección de principios” de 2002 afirma que en esa materia el Estado tiene la responsabilidad, “compartida con la sociedad, [de] proveer a la población de servicios educativos de alta calidad para lograr ciudadanos plenos”.⁴³ Asimismo, se refiere a la necesaria intervención estatal para regular los medios de comunicación y para garantizar el “respeto permanente a la libertad de expresión y al bien común”. “El Estado acompaña y regula esta función”, con el propósito de “detonar” una “solidaridad activa”. Es probable que este cambio, que es

⁴¹ Partido Acción Nacional, “Proyección de principios de doctrina del Partido Acción Nacional 2002”, aprobada en la XLV Convención Nacional con fecha 14 de septiembre de 2002, <www.pan.org.mx>, consulta del 18 de diciembre de 2007. Entre los miembros de la comisión redactora de este documento destacan César Nava y Rogelio Carvajal.

⁴² Carlos Castillo Peraza, *El porvenir posible*, estudio introductorio de Alonso Lujambio y Germán Martínez Cázares, México, Fondo de Cultura Económica-Fundación Rafael Preciado Hernández, 2006, pp. 528-537.

⁴³ Partido Acción Nacional, *Proyección de principios... doc. cit.*, p. 7.

casi revolucionario en términos de la doctrina panista, haya sido inducido por el papel prioritario que el papa Juan Pablo II acordó a la defensa de los valores en la misión de la Iglesia, y como escudo de protección de la familia y de la persona. Así, en adición a la salvaguarda de la libertad de expresión y de la propiedad privada, y más en general de los derechos de la persona o de la corrección de las fallas de mercado, el PAN se compromete con sostener la acción positiva del Estado en educación y cultura, siempre y cuando asuma su deber de respetar la preeminencia de la familia en un terreno en el que de todas formas le toca un papel subsidiario.

Ahora bien, para los panistas de principios del siglo XXI la educación no es un medio de redención individual, como lo es para los liberales, sino que es en primer lugar un transmisor de valores, una vía de integración y, por consiguiente, de reproducción antes que de transformación social.

La huella de la doctrina de la Iglesia en la “Proyección de principios” está presente también en el compromiso del partido con el “respeto a la vida”. El capítulo I estipula: “La vida y la dignidad del ser humano deben protegerse y respetarse desde el momento de su concepción hasta su muerte natural”, y el capítulo XI reitera que el PAN está comprometido con el “valor de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural y el derecho de cada persona a que su vida sea respetada de manera total”.

Más allá de la ideología, los panistas buscaron afianzar la lealtad al partido mediante normas estatutarias precisas que incluían sanciones, como si se tratara de forjar la identidad partidista no sólo con ideas, sino también con disciplina institucional. En la XIV Asamblea Nacional Extraordinaria, que se celebró en Querétaro el 1 de mayo del 2004, se reformó y adicionó casi la tercera parte de los artículos del estatuto para responder a dos grandes preocupaciones: la disciplina partidista y los métodos de selección de candidatos a cargos de elección popular. Ambas revelan las tensiones derivadas del ascenso del foxismo cuya fuerza se atribuye a una política de puertas abiertas que desfiguraba al partido porque desdeñaba la doctrina. Los debates y el realineamiento interno de los grupos sugieren que las opciones eran:

el pragmatismo inmediateista de Fox o una identidad partidista *integral* —según Germán Martínez Cázares— que se sostiene en la doctrina y en la lealtad a la organización. Este debate proyectaba la falla que separaba a foxistas de doctrinarios.

En la XIV Asamblea los cambios estatutarios más discutidos fueron los referentes a los requisitos para ingresar al partido y a la elección de candidatos. Los mediocres resultados de los comicios de 2003 fueron utilizados como prueba de que “no son postulados candidatos ganadores comprometidos con nuestra doctrina”; pero identificarlos planteaba en apariencia un dilema porque eran raros los individuos que combinaban lealtad partidista y capacidad de movilización. Sin miedo a contradecir su postura respecto a la importancia de la doctrina, los foxistas proponían que la elección de candidatos estuviera abierta a toda la ciudadanía; en cambio, los doctrinarios insistían en que las candidaturas tenían que ser decisión exclusivamente de la militancia. Germán Martínez Cázares, quien en ese momento fungía como vicecoordinador de la bancada en la Cámara y director de Estudios del PAN, defendió la elección cerrada con el argumento de que abrirla representaba el riesgo de que los adversarios eligieran a los candidatos del PAN, y añadió: “no puede valer lo mismo un voto de Luis H. Álvarez que el de Roberto Madrazo”.⁴⁴ Los doctrinarios lograron mantener las elecciones primarias cerradas.⁴⁵ Éste fue el primer tanto que se anotó Felipe Calderón en la competencia por la candidatura presidencial.

Para reforzar la identidad partidista, los estatutos premian la lealtad doctrinaria y la disciplina. Por ejemplo, para ingresar al partido es preciso dar prueba de conocimiento y fidelidad a la doctrina, y un

⁴⁴ Citado en Armando Reyes Vigueras, “Reforma de estatutos. Las nuevas reglas del juego”, *La Nación*, 10 de mayo de 2004, núm. 2223, pp. 14-15, p. 15.

⁴⁵ Se introdujo un sistema doble de elección de candidatos: por convenciones de delegados y por asamblea. Los candidatos a diputados votan en convenciones y participan en el proceso sólo los militantes activos; en cambio, toda la militancia, es decir, miembros activos y adherentes, votan en asamblea en la elección de candidato a la Presidencia de la República; y las candidaturas a gobernadores y senadores son votadas sólo por los miembros activos en asamblea.

requisito de elegibilidad al Consejo Nacional es “haberse significado por la lealtad a la doctrina y a la observancia de estos estatutos y demás disposiciones reglamentarias”.⁴⁶ La Comisión de Doctrina tiene la responsabilidad de velar por su observancia y resuelve las posibles contradicciones entre los postulados doctrinarios y los programas de gobierno.

LA DISPUTA POR EL PARTIDO

En los procesos de renovación de la presidencia del partido en 2002 y en 2005 cristalizaron las tensiones acumuladas en la relación entre el presidente Fox y los legisladores, así como el sentimiento creciente en la militancia de que las políticas gubernamentales le eran ajenas, al igual que muchas de las acciones presidenciales. El protagonismo de Martha Sahagún y su abierta injerencia en asuntos públicos contribuyeron a minar el apoyo de los panistas a Vicente Fox, que le reprochaban la ciega defensa que hacía de su esposa y la debilidad que mostraba hacia ella. El proceso de renovación interna en 2005 fue más divisivo que el anterior por la inminencia de la elección presidencial, prueba de que las querellas entre foxistas y doctrinarios no se habían resuelto, sólo se habían acumulado. En esta lucha la principal arma de los antifoxistas fueron nuevamente la doctrina y la identidad partidista.

En la elección interna de marzo del 2002, el tema central fue la relación entre el gobierno y el partido. Luis Felipe Bravo Mena, quien buscaba la reelección con el apoyo, apenas disimulado, del presidente Fox,⁴⁷ sostenía que la relación entre el presidente y el partido “[es] un problema coyuntural”, mientras que su adversario, Carlos Medina Plascencia, señalaba que el partido no se había beneficiado de la victoria

⁴⁶ Capítulo v, artículo 45, fracción b. El capítulo ii, artículo 13, contiene una larga lista de obligaciones y de sanciones en caso de indisciplina.

⁴⁷ La candidatura de Bravo Mena para reelegirse en la presidencia del partido fue presentada por Juan de Dios Castro, quien era un viejo panista, en ese momento fungía como consejero jurídico de la Presidencia de la República. Francisco Barrio, un neopanista emblemático, introdujo la candidatura de Carlos Medina Plascencia.

del 2000, y que había “desajustes en la relación entre el gobierno y el presidente”. Según él la desvinculación entre ambos explicaba la significativa caída electoral del PAN en los comicios locales que se habían celebrado desde entonces. Proponía, en cambio, “una gestión compartida”, o una “relación de acompañamiento” que suponía que el gobierno no discutiera con el partido sus estrategias antes de hacerlas públicas, para hacerlo partícipe de sus definiciones, y no que el gabinete, “sin consultar, dé por hecho que contará con el apoyo panista”.⁴⁸

Estas posiciones reflejaban distintas nociones acerca de cuál debía ser la función del partido en el poder: Bravo Mena le asignaba sobre todo tareas académicas, pensaba que el PAN debía ser fundamentalmente una entidad generadora de identidad que contribuyera a crear una cultura democrática, mientras que Medina Plascencia reivindicaba el papel del partido en el diseño de políticas públicas;⁴⁹ no hacía a un lado la doctrina, pero consideraba que el PAN enfrentaba el reto de vivir la “doctrina hacia adentro” y de ser identificado como el partido del bien común y de la justicia social. La derrota de Medina Plascencia en esa elección interna fue un triunfo para el foxismo, pero no estabilizó las relaciones entre el presidente y su partido.

Los resultados de los comicios de 2003 profundizaron el desacuerdo, pues mientras unos atribuyeron a los errores del gobierno y a Vicente Fox el retroceso del partido, los foxistas responsabilizaron a Medina Plascencia que había coordinado la campaña.

La “reforma integral” del PAN que emprendió Bravo Mena no resolvió las tensiones internas, y es probable que haya agravado la falla que se abrió con la llegada de Vicente Fox a la Presidencia de la República. La sombra de esta fractura condicionó las elecciones internas de marzo de 2005 para la renovación de la dirigencia, que se desarrolló en el contexto de la puja por la candidatura presidencial del PAN

⁴⁸ Citado en Sandra Rodríguez Nieto, “En juego, la relación con Fox”, *Proceso*, 3 de abril de 2002, <www.proceso.com.mx>, consulta del 17 de diciembre de 2007.

⁴⁹ Bravo Mena propone tres ejes de acción durante un mandato renovado: Revitalizar la política, consolidar el sistema democrático y fortalecer la cultura democrática. Armando Reyes Viguera, “Contienda democrática”, *La Nación*, 14 de marzo de 2002, año LX, núm. 2174, pp. 23-26.

de 2006. Nuevamente se presentó Carlos Medina Plascencia, pero como muestra de los continuos reacomodos internos que generaban las tensiones no resueltas, en esta ocasión el grueso de su apoyo provenía de los autodenominados doctrinarios, cuya presencia como corriente diferenciada en el interior del partido se había fortalecido a raíz del inicio de la precampaña de Felipe Calderón en mayo del 2004; la fuerza de su contrincante, Manuel Espino, era el apoyo del presidente Fox.⁵⁰

La elección se resolvió con el triunfo de Espino, quien en una segunda vuelta de votación obtuvo 196 votos de consejeros, frente a 175 de Medina Plascencia. Para los doctrinarios, ésta había sido la victoria de una minoría organizada —el Yunque— que recurría al secreto y a estrategias ajenas a las normas y mecanismos internos del partido. La integración del Comité Ejecutivo Nacional confirmó los peores temores de los doctrinarios. Según los estatutos, el presidente del partido tiene una participación privilegiada en este proceso, de manera que a nadie sorprendió el predominio en el nuevo CEN de antiguos militantes del DHIAC, de Ancifem y del Yunque. Las reacciones críticas confirmaron la información a propósito de la existencia de la corriente de ultraderecha.⁵¹ Según Juan Ignacio Zavala: “La elección del nuevo presidente del PAN marca, sin duda, un giro a la dere-

⁵⁰ La candidatura de Medina Plascencia fue introducida por Felipe de Jesús Vicencio Álvarez, miembro del panismo tradicional; en cambio, Manuel Espino fue presentado por la neopanista yucateca Ana Rosa Payán, aparentemente miembro de El Yunque. Según Aguilar y Castañeda: “Fox dice que siempre mantuvo una relación lejana con la dirigencia; que nunca le interesó el control del partido, o buscar que lo encabezara un presidente a modo que apoyara de manera incondicional a su gobierno. No obstante, de nuevo, parece difícil creer que Manuel Espino no fue el candidato de Fox para el liderazo del PAN en 2005”. Aguilar y Castañeda, *op. cit.*, p. 331.

⁵¹ Según Juan Ignacio Zavala, ex secretario de Comunicación del CEN del PAN: “Con el triunfo de una burocracia ligada o identificada con grupos de la derecha radical, el PAN se equivocó y perdió”. Citado en Álvaro Delgado, “La toma del PAN”, *Proceso*, núm. 1480, 13 de marzo de 2005, <www.proceso.com.mx>, consulta del 8 de diciembre de 2007. Según esta misma nota, Manuel Espino confirmó tanto la existencia del Yunque como los lazos de amistad que lo unían a miembros de esa organización “de los que me siento muy orgulloso”. *Idem*.

cha”,⁵² aunque dejaba el significado de esta afirmación a la imaginación de sus lectores.

La actitud de Manuel Espino, su relación con el presidente Fox y con su esposa, Martha Sahagún, y el indiscutible apoyo que ambos le brindaron indicaban que su intención era establecer la disciplina dentro del PAN, y superar el tibio apoyo al gobierno —cuando no las críticas— de muchos líderes y legisladores panistas. Esta intención, más o menos evidente, explica que una de las primeras expresiones de Espino después de su elección haya sido: “Yo soy el que manda”.⁵³ Los doctrinarios temían que el nuevo presidente se lanzara en una política de purgas y persecución, dado que muchos de ellos se habían sumado a la precampaña de Felipe Calderón. Las aspiraciones presidenciales de Martha Sahagún y de Santiago Creel, ambos apoyados por Vicente Fox, podían estar detrás de estas medidas. En esta lucha por el partido, los doctrinarios le reprochaban a Espino que fuera el jefe de una facción que actuaba como una logia masónica promoviendo a sus miembros a todas las posiciones de poder y perpetuando con ello la división interna, no obstante los exhortos a la unidad.⁵⁴ Señalaban también que esta estrategia, típica de minorías organizadas, era muy ajena a los principios y a la ética del PAN, y lo asemejaba peligrosamente al PRI.

Sin embargo, a ojos de los doctrinarios el principal pecado de Espino era su lealtad al presidente de la República: “Cuentas con el pre-

⁵² Juan Ignacio Zavala, “Vuelta a la derecha”, *Milenio*, 9 de marzo de 2005, <www.milenio.com>, consulta del 8 de diciembre de 2007.

⁵³ Citado en Delgado, “La toma del PAN”, art. cit. Esta advertencia de Espino motivó la renuncia de la diputada Tatiana Clouthier, quien ante la prensa caracterizó al nuevo dirigente como “un hombre represor, vengativo, chiquito, peligroso [...] Llegó a regañar, a amenazar y a decir ‘Aquí mando yo, se callan. Y no sale nada pa’ fuera, porque lo que salga puede ser castigado’”. Citado en Delgado, art. cit.

⁵⁴ Según el entonces senador Felipe de Jesús Vicencio Álvarez, “No hay precedente histórico de que un proceso de sucesión de nuestro jefe nacional hubiera estado en tal forma condicionado por la lógica de un grupo [...] en función de ciertas afinidades, se desplegaron las alianza como nunca en la historia partidista”. Y añadía “el partido está en el riesgo real de convertirse, en el mejor de los casos, en un partido de facciones, y, en el peor de los escenarios, en un partido sectario. Y ni Acción Nacional merece ni el pueblo de México necesita un partido de facciones ni un partido sectario”. Citado en Delgado, “La toma del PAN”, art. cit.

sidente de Acción Nacional, en las buenas, en las malas y en las peores”⁵⁵ prometió el día que tomó protesta al frente del partido. En el contexto de los primeros escarceos de la batalla por la candidatura presidencial, esta fidelidad acrecentaba el riesgo de que el peso de la Presidencia de la República, inclinada a favor de Sahagún o de Creel, se impusiera y que la inequidad desfigurara el funcionamiento de los mecanismos internos de selección —como había ocurrido seis años antes. Las consecuencias para el partido eran de sobra conocidas.

A diferencia de lo que ocurrió en 2002, la reconciliación interna postelectoral no ocurrió. Los perdedores aceptaron la derrota, pero no con el tono respetuoso de la elección anterior, sino que expresaron públicamente su desacuerdo: el líder histórico del PAN, Luis H. Álvarez, declaró a los medios que la elección del nuevo dirigente había sido un “proceso viciado”.⁵⁶ Se presentaron algunas renunciaciones, pero los doctrinarios —muchos de los cuales ya eran entonces “calderonistas”— se negaron a dejar la organización en manos de la nueva dirigencia, y apostaron a recuperarla apoyados en los recursos que ofrecía el mismo partido y movilizándolo a la opinión fuera del partido.

LA BATALLA POR LA CANDIDATURA PRESIDENCIAL

Unas semanas después de la clausura de la XLVI Convención Nacional, el 28 de mayo de 2004, el secretario de Energía, Felipe Calderón, fue “destapado” por el entonces gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, en un acto de apoyo multitudinario que el presidente Fox

⁵⁵ Citado en Georgina Saldierna y Blanche Petrich, “En contienda cerrada, Espino se impone y queda al frente de Acción Nacional”, <www.jornada.unam.mx>, 6 de marzo de 2005, consulta del 19 de diciembre de 2007.

⁵⁶ Luis H. Álvarez declaró: “Observé en el ámbito interno actitudes sesgadas y comportamientos subrepticios que en nada corresponden con las normas de transparencia que han caracterizado a Acción Nacional a lo largo de su historia”. Citado en Georgina Saldierna, Andrea Becerril, Víctor Ballinas *et al.*, “La elección de Espino, viciada: Luis H. Álvarez”, *La Jornada*, 16 de marzo de 2005, <www.jornada.unam.mx>, consulta del 19 de diciembre de 2005.

consideró un desafío a su autoridad.⁵⁷ En una rueda de prensa celebrada con motivo de la visita del presidente Álvaro Uribe, de Colombia, afirmó que la reunión había sido “más que imprudente” y que había estado “fuera de lugar y de tiempo”.

La consecuencia de esta reprimenda fue la inmediata renuncia del secretario Calderón al gabinete, con el argumento de que el presidente lo había descalificado como interlocutor y lo había convertido en “franco contendiente”. Su decisión estuvo también motivada por un “sentimiento de injusticia”: Calderón consideraba que se limitaba su presencia pública mientras la señora Martha Sahagún disponía libremente de los recursos de la Presidencia de la República para promover sus ambiciones presidenciales, o Santiago Creel podía utilizar la influencia política de la Secretaría de Gobernación con el mismo fin.⁵⁸ Calderón temía que la competencia por la candidatura del partido fuera desigual: “Hay una condición muy dispareja en términos de presencia pública, de utilización de recursos, con respecto al secretario de Gobernación, pero a final de cuentas es una situación que el par-

⁵⁷ La reconstrucción de estos hechos que refiere Felipe Calderón es distinta de la que ofrecen Aguilar y Castañeda. Según éstos, el presidente Fox se habría reunido con los aspirantes presidenciales de su gabinete desde “finales del 2004 y principios del 2005” para comunicarles las reglas del juego, entre ellas la de que “no podía haber mítines públicos”. Aguilar y Castañeda, *op. cit.*, pp. 327-328. De haber sido así, el presidente fijó las reglas demasiado tarde porque la comida organizada por el gobernador de Jalisco tuvo lugar el 28 de mayo de 2004, es decir casi seis meses antes de que supuestamente se reuniera con los interesados para tratar el asunto. Calderón, en cambio, sostiene que antes de la comida sólo habló con Ramón Muñoz, colaborador del presidente Fox en Los Pinos, quien “me deseó que todo saliera muy bien, pidiéndome que después nos reuniéramos para ir platicando cómo abordar el tema de la sucesión presidencial”. Calderón, *op. cit.*, p. 25. Según él, la reunión del presidente Fox con su gabinete en la que se trató este asunto se había realizado esa semana, y él no había sido invitado a asistir.

⁵⁸ Dice Calderón: “una de las noticias relevantes ese fin de semana había sido la de las reuniones de la señora Martha Sahagún con diversos líderes de opinión, mujeres y organizaciones civiles, en las que se había difundido profusamente encuestas que la ubicaban como la mujer con mayor liderazgo y probabilidades de ser candidata a la presidencia”. Calderón, *op. cit.*, p. 29.

tido deberá corregir a sabiendas de que va en prenda la unidad del partido”.⁵⁹

Es muy probable que Calderón también haya calculado que, de permanecer en el gabinete, tenía menos posibilidades de darse a conocer en todo el país por la disciplina que le imponía su función, de mucho menor alcance nacional y peso político que la del secretario de Gobernación, e incluso de la esposa del presidente que contaba con el efecto amplificador de Los Pinos.

La descalificación que hizo el presidente Fox de Calderón galvanizó a sus adversarios en el partido y reavivó las tensiones, porque para muchos de ellos el jefe del Ejecutivo se había inmiscuido en un proceso —la elección del candidato presidencial— que competía exclusivamente al partido. Varios gobernadores y miembros del gabinete reprocharon a Fox su actitud. El secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo, aclaró que “en el PAN la elección de candidatos a la presidencia es asunto del partido, no del presidente”. Así, de la misma manera que en la Legislatura LVIII, Felipe Calderón se había erigido en el defensor del Congreso frente a los excesos del presidencialismo, y al acercarse la sucesión presidencial se convirtió en el baluarte de la institucionalidad y de la identidad del PAN. Éste sería el tema de su campaña para las primarias del partido y el eje de su estrategia.

En la disputa por la candidatura presidencial, que era también la batalla por el partido, el principal ariete de los antifoxistas fue la “identidad partidista”. En las páginas de *Proceso*, Germán Martínez Cázares, entonces diputado y director de Estudios del PAN, escribió virulentos ataques al oportunismo de los foxistas y a la dirigencia encabezada todavía por Bravo Mena. Su estrategia había llevado al partido a establecer alianzas “sin ton ni son” con el PRI, Convergencia y el PRD. También le atribuía la “omisión” de la Secretaría de Salud que no defendía de manera decidida el derecho a la vida. Para Martínez, la ausencia de un verdadero compromiso doctrinario era la

⁵⁹ Georgina Saldierna, “Descarta Calderón que Sahagún sea candidata”, *La Jornada*, 28 de marzo de 2005, <www.jornada.unam.mx>, consulta del 19 de diciembre de 2007.

causa de las derrotas electorales que se habían multiplicado desde 2001.⁶⁰

A partir de la elección de Espino a la presidencia del partido, Martínez Cázares elevó el tono de sus críticas y la exigencia de recuperar la identidad del panismo. Sostenía que había llegado a su fin el partido electorero, el PAN debía hacer valer su diferencia cualitativa en relación con los demás partidos: “Los partidos que esconden su diferencia son una tramoya falsa desde donde se descuelgan intereses ajenos a los de robustecer al ciudadano [...] El Partido Acción Nacional no debe practicar ese disimulo. No debe perder su identidad [...] No es bueno que cambie la identidad que lo distingue”. Peor aún estos arreglos no habían resultado en un verdadero triunfo: “El partido se abre —¿prostituye?— de par en par a oportunistas y se cierra a ciudadanos con compromiso y liderazgo sociales”.⁶¹

La estrategia de Calderón para lograr la candidatura presidencial consistió en subrayar la distancia que lo separaba a él, que era el “candidato de casa”,⁶² de los foxistas que, en cierta forma, habían dejado de ser o no habían sido nunca panistas. Cuando se registró como precandidato, el 10 de julio de 2005, se presentó como un panista “de pura cepa”, que se proponía reivindicar los “viejos principios” del PAN, y retomó una frase que había acuñado en los años noventa, el reto era: “ganar el gobierno sin perder el partido”. No eran pocos los que al escucharlo pensaron que ya era demasiado tarde.

Conforme lo establecen los estatutos del PAN, el proceso electoral interno estuvo a cargo de una comisión de elecciones que en este caso retomó una propuesta que había sido acordada entre los dos principales pre candidatos, Creel y Calderón, a quienes se sumó el ex gobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas. Se llevarían a cabo votaciones en tres zonas en que se había dividido el país: el norte, los estados del Gol-

⁶⁰ Germán Martínez Cázares, “Acción Nacional, sin complejos”, <www.proceso.com.mx>, núm. 1467, 12 de noviembre de 2004, consulta del 17 de diciembre de 2007.

⁶¹ Germán Martínez Cázares, “¿Qué defendemos los panistas?”, <www.proceso.com.mx>, núm. 1461, 31 de octubre de 2004, consulta del 8 de diciembre de 2007.

⁶² Aguilar y Castañeda, *op. cit.*, p. 329.

fo y del sur, y los del occidente. Además, habría por lo menos dos debates. Sólo tuvo lugar uno de ellos, el 8 de septiembre, en un programa organizado por una televisora privada; ante el riesgo de que las fracturas internas avanzaran con la misma celeridad que la inminencia de la victoria de Calderón.

La estrategia calderonista consistió en centrar su mensaje en los militantes y adherentes activos (en ese momento el partido contaba con cerca de 408 000 miembros adherentes y activos registrados), mientras que Creel se dirigía a la ciudadanía en general, como lo había hecho Fox seis años antes.⁶³ No obstante, a diferencia de lo que ocurrió entonces, cuando el precandidato se le impuso al partido, en 2005 el partido se impondría a Vicente Fox. Calderón logró movilizar el apoyo de la militancia, a pesar incluso de la dirigencia partidista con la que mantuvo una relación relativamente hostil hasta la primera votación, en la que obtuvo un triunfo contundente aunque la tasa de abstencionismo fue de 70 por ciento.⁶⁴

⁶³ Según Juan Camilo Mouriño, el equipo calderonista concluyó que en estas elecciones primarias votarían los miembros activos del partido, por consiguiente “tu mensaje tenía que ser tradicional, de los valores, y de los principios panistas, y de los antecesores, y de la lucha que ha representado el PAN, aunque hacia afuera no ganarás en ese momento votos. Era totalmente hacia adentro. Y eso hacia fuera no era comprendido e incluso cuestionado”. Citado en Camarena y Zepeda, *op. cit.*, 85. No eran pocos los panistas que criticaban la estrategia de los calderonistas: “saben perfectamente que [su] triunfo [...] significaría que, en aras de aferrarse fetichistamente a cierta visión manipulada de la ‘doctrina’ y con ese asunto de dizque no querer perder al partido como tal por la obtención del poder (nunca se han enterado que lo consiguieron en el 2000), el panismo se enconcharía mayoritariamente en sí mismo”. Martín Enrique Mendivil, “Vuelta y revuelta panista: golpe a la militancia”, *Reforma*, 23 de octubre de 2005, <www.reforma.com.mx>, consulta del 6 de febrero de 2008.

⁶⁴ Según Manuel Espino, el grupo calderonista nunca tuvo confianza en la dirigencia del partido y sólo recurrió a ella en junio del 2006: “Felipe con su equipo trabajó su propio plan y cuando lo tuvieron listo nos invitaron a una reunión de planeación que realmente era para darnos a conocer lo que ya habían planeado. Ahí fue muy clara la visión de ellos de decir ‘éste es el equipo. No queremos a la gente del CEN, ni a la gente del Gobierno’. Ése es muy el estilo de trabajo de Felipe”. En esa misma entrevista, Espino insiste en subrayar su propia independencia en relación con el candidato que pretendía modificar la composición de la dirigencia porque

Los creelistas contaban con el apoyo de los adherentes, que podían identificarse con su precandidato de reciente ingreso al partido (1997), no obstante, en conjunto los resultados de las tres jornadas de votación mostraron que Calderón había podido efectivamente congrega el apoyo de la base del partido —los liderazgos locales—, incluso a pesar de la dirigencia. En cambio, los panistas no pudieron olvidar que Creel era el “candidato oficial”;⁶⁵ no es de sorprender que haya triunfado en los estados en los que la presencia de Acción Nacional era reciente: Oaxaca, Durango, Hidalgo, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas y Tabasco; mientras que Calderón triunfó en los estados de tradición panista: Yucatán, Michoacán, Nuevo León, Distrito Federal y Chihuahua.⁶⁶ En algunos casos el triunfo se atribuyó al descontento del panismo local con decisiones de la dirigencia del partido —así ocurrió en el Estado de México, en Nuevo León y en Guanajuato.

La batalla por la candidatura profundizó la fractura entre el foxismo y el partido, entre otras razones porque no estuvo exenta de acusaciones de irregularidades; por ejemplo, los creelistas cuestionaron la limpieza de las primarias en Yucatán, donde Calderón se impuso con 71% del voto, y denunciaron suplantación de votantes, pero ellos a su vez fueron acusados de acarreo.⁶⁷ No obstante, estas acusaciones fue-

no confiaba en los colaboradores cercanos de Espino: “Yo tenía claro que el partido tiene que respaldar totalmente a su candidato. Eso es una cosa, pero otra es que el candidato se quiera arrogar la facultad de modificar la estructura del partido, colocando a su propia gente”. Citado en Camarena y Zepeda, *op. cit.*, pp. 170-171.

⁶⁵ Aguilar y Castañeda sostienen que Calderón “no era su [de Fox] candidato. No tenía con él una relación como lo que había construido con Creel”. Aguilar y Castañeda, *op. cit.*, p. 332.

⁶⁶ También ganó en el Estado de México, Veracruz, Puebla, Colima, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Aguascalientes, Chiapas, Morelos, Guanajuato, Querétaro, Guerrero, Campeche, Baja California, Coahuila, Nayarit, Quintana Roo y Baja California Sur. Alberto Cárdenas sólo ganó en Jalisco, su estado natal.

⁶⁷ Ante el riesgo de que el intercambio de denuncias entre los equipos de los precandidatos produjera heridas irremediables en el partido, los panistas decidieron apresurar el proceso, sobre todo una vez que había creciente certeza de que Calderón tenía una ventaja firme y clara frente a sus contrincantes. Así se explica que el segundo debate se haya suspendido, aunque Espino declaró a los medios que había habido un debate privado, “acalorado” y “sabrosísimo”, ante las comisiones Política y

ron minimizadas. En la jornada del 23 de octubre ya no había duda respecto de quién sería el ganador: Calderón tenía 54% de las preferencias de los panistas, frente a 29% de Creel y 17% de Cárdenas.⁶⁸ Al término del proceso de elección interna, Calderón acumuló 51.5% del total de votos y pudo declararse victorioso en 24 entidades. Estos resultados dieron la razón a Felipe Calderón, quien unos cuantos días después de renunciar al gabinete, en junio de 2004, declaró a la prensa que el presidente ya no era el “factor determinante” en la sucesión, como antes: “afortunadamente, esos tiempos en que el presidente decidía [quién era] su sucesor los dejamos atrás [...] los panistas no admitimos instrucciones ni dedazos”.⁶⁹

CONCLUSIONES

La experiencia del primer gobierno federal panista ilustra los desajustes institucionales que acarrearán las elecciones entre los ganadores. El alcance y la duración de estos desequilibrios dependen de la capacidad de adaptación y de recuperación de los actores involucrados. Aquí se han examinado los efectos de la victoria en la vida interna de Acción Nacional, y se ha destacado el impacto divisivo de la llegada de Vicente Fox al poder.

Los conflictos en el seno del PAN en los años 2000-2006 deben ser vistos en el contexto de una transición caracterizada por el ocaso del presidencialismo y el ascenso de los partidos al centro de la arena política. El efecto disruptivo del triunfo se explica, primero, por las carac-

de Elecciones, en el que los precandidatos habían ventilado sus diferencias. Véase *Reforma*, “Catafixia Espino ‘round’ por debate reglamentario”, 14 de octubre de 2005. Para el deterioro de las relaciones entre los precandidatos, véase *Reforma*, entrevista, Adrián Fernández, “Felipe está obsesionado”, *Reforma*, 9 de octubre de 2005, <www.reforma.com.mx>, consulta del 6 de febrero de 2008.

⁶⁸ *Reforma*, “Encuesta. Acaricia Calderón candidatura del PAN”, 19 de octubre de 2005, <www.reforma.com.mx>, consulta del 6 de febrero de 2008.

⁶⁹ Citado en la Redacción, “Dimite Calderón: *injusta descalificación* de Fox, dice”, *La Jornada*, 1 de junio de 2004, <www.jornada.unam.mx>, consulta del 19 de diciembre de 2007.

terísticas del régimen presidencial, que tiende a subordinar a otras fuerzas políticas, así como por la trayectoria de Vicente Fox, por su estrategia y por sus objetivos. En relación con su carrera personal habría que recordar que no provenía de la militancia, y que su relación con las estructuras partidistas fue siempre superficial; pero su intento de restablecer un presidencialismo plebiscitario fue el origen de las mayores dificultades que tuvo con Acción Nacional, una parte central de cuya historia gira en torno al antipresidencialismo y al compromiso con la tradición parlamentaria. De ahí que la defensa de la autonomía del partido fuera también una defensa del equilibrio de poderes y de la competencia del Congreso.

Segundo, las tensiones que dificultaron las relaciones entre el presidente y su partido, y entre el jefe del Ejecutivo y el Legislativo, derivaron justamente de este necesario reacomodo, en el que los partidos se convirtieron en protagonistas centrales del proceso político, que luchaban por mantener su autonomía frente al peso amenazante del presidencialismo.

VII

EL ESTILO PERSONAL DE VICENTE FOX Y LOS LÍMITES DE LA AUTORIDAD PRESIDENCIAL*

Vicente Fox lanzó su candidatura a la Presidencia de la República a mediados de 1997, tres años antes de la elección, cuando aún era gobernador de Guanajuato. Su propósito era construir un respaldo de opinión anticipado que trascendiera al electorado del Partido Acción Nacional (PAN). La organización extrapartidista, formada por un grupo diverso de simpatizantes, Amigos de Fox,¹ logró movilizar a millones de seguidores en apoyo a su nominación y, por primera vez en la historia del partido, se canceló el proceso estatutario de designación del candidato. En noviembre de 1999 la convención nacional panista declaró candidato presidencial a Vicente Fox por aclamación. En el transcurso de la campaña Fox intentó aglutinar a todos los opositores al Partido Revolucionario Institucional (PRI), en una coalición heterogénea no partidista, y convertir la elección presidencial en un plebiscito antiPRI. Su objetivo era encabezar un frente de oposición similar a los que provocaron la caída de los regímenes autoritarios en América del Sur y Europa del Este en los años ochenta. Aunque este proyecto fracasó, una vez elegido, Fox trató de construir una presidencia plebiscitaria.

Para los foxistas, la personalidad de su líder era la piedra angular de su capital político. La mayoría de las contiendas presidenciales se concentra en la figura de los candidatos, destaca aspectos de su vida privada y de su personalidad por encima de plataformas de partido y

* Nueva versión del artículo "Vicente Fox: the new Mexican Presidency", *Mexican Studies/Estudios Mexicanos*, vol. 22, núm. 1, invierno de 2006.

¹ Esa organización estuvo administrada por un grupo heterogéneo de asesores que incluía amigos personales cuya carrera también se había desarrollado en el sector privado, por ejemplo, Lino Korrodi; antiguos miembros del gobierno de Guanajuato, como Carlos Rojas y Ramón Muñoz; ex miembros del Partido Revolucionario Institucional, PRI, y de la izquierda, como Adolfo Aguilar Zinser y Jorge Castañeda, quien había sido integrante del Partido Comunista Mexicano, PCM. Todos ellos se ufanan de no ser miembros del PAN y creían que una afiliación partidista imponía restricciones innecesarias.

de temas específicamente políticos. En el caso de Fox, la campaña se apoyó además en una interpretación tradicional de la política mexicana, según la cual el estilo personal del presidente es un factor determinante de sus políticas y de sus decisiones. En un proceso de democratización como el que culminó en México con la elección de 2000, el siguiente paso tendría que haber sido la reinstitucionalización de la Presidencia de la República, de acuerdo con el contexto político e institucional postautoritario. No obstante, el proyecto de presidencia plebiscitaria que pusieron en pie los foxistas contrariaba este desarrollo, de manera que un episodio que debió de haber contribuido a la consolidación democrática más bien retrasó este proceso.

El énfasis en la personalidad de Vicente Fox como núcleo generador de una nueva presidencia se mantuvo a lo largo del sexenio, aun cuando muy pronto fue evidente que no tenía el efecto deseado de imponerse a las diferencias partidistas. Se prolongó incluso después de que en las elecciones federales de julio de 2003 el PAN obtuviera resultados mediocres. La estrategia fue motivo de múltiples incidentes que irritaron a la opinión pública y contribuyó a crispar las relaciones políticas. Este efecto alcanzó un punto crítico cuando la esposa del presidente, Marta Sahagún, hizo públicas sus intenciones de participar como candidata en la campaña presidencial de 2006. Todos los partidos políticos —incluido el PAN—, observadores, y sectores amplios de la opinión pública repudiaron sus pretensiones, de manera que se vio obligada a renunciar a ellas.²

La ausencia de una mayoría panista en el Congreso ha sido la explicación más socorrida de las dificultades que tuvo Vicente Fox para ejercer la jefatura del Poder Ejecutivo. Aquí, en cambio, sostengo que el fracaso de esta presidencia fue, en buena parte, resultado de las estrategias de los foxistas, que se basaban en percepciones prejuiciadas del sistema político: primero, los nuevos funcionarios desconocían el funcionamiento real de los mecanismos de la institución presiden-

² Hizo pública su decisión después de que el periódico inglés, *Financial Times*, exhibió la falta de transparencia y fiscalización de la fundación Vamos México, creada por la propia Sahagún para financiar sus obras asistenciales.

cial y creían que el presidente actuaba con absoluta arbitrariedad y sin restricciones; segundo, su interpretación del resultado electoral del año 2000 como un mandato antipriista era equivocada, y tercero, nunca lograron resolver la contradicción básica que oponía la presidencia plebiscitaria a un contexto institucional relativamente inestable, resultado del ascenso de los partidos al primer plano del escenario político.

En la primera sección de este artículo se analiza la fórmula de la presidencia plebiscitaria. En la segunda se describe el tipo de presidente que quiso ser Vicente Fox. La tercera parte examina algunas de las restricciones del contexto que pesaron sobre el proyecto plebiscitario. Una cuarta sección analiza las percepciones aparentemente contradictorias de la opinión pública del presidente Fox. La última parte evalúa el impacto potencial de esta experiencia sobre la institución presidencial.

LA PRESIDENCIA PLEBISCITARIA

Durante años el estilo personal de los presidentes sirvió para explicar sus políticas; este enfoque minimizaba el peso de las instituciones en el proceso de toma de decisiones³ y se basaba en la premisa de que la estructura centralizada de poder, característica del autoritarismo, acentuaba la personalización inherente a los regímenes presidenciales y daba efectividad al voluntarismo presidencial. No obstante, incluso en el autoritarismo, el gobernante tiene que acomodarse a la historia y al marco institucional que pueden promover o impedir sus decisiones. Así ocurría también en el caso mexicano, donde ambos tipos de variables pueden ser identificadas en el ejercicio de la autoridad presidencial. Por ejemplo, el contexto de crisis económica mundial—sobre el cual el gobierno mexicano no tenía control—condicionó decisiones del presidente López Portillo entre 1981 y 1982,

³ Daniel Cosío Villegas, *El estilo personal de gobernar*, México, Cuadernos de Joaquín Mortiz, 1974.

que desembocaron en la expropiación bancaria que decretó el 1 de septiembre de ese último año. Pudo tomar esta trascendente medida porque la Constitución atribuye al presidente facultades expropiatorias en caso de “interés público”; no obstante, algunos rasgos de su personalidad, sus preocupaciones intelectuales por la trascendencia del Estado y su gusto por la retórica ampulosa y teatral, profundizaron el tono autoritario de la medida.⁴ A pesar de antecedentes como éste, la estrategia de Vicente Fox y de su grupo cercano tendía a retomar el voluntarismo presidencialista y a ignorar las restricciones que pesaban sobre sus promesas de cambio.

Durante la contienda el vigor con que se promovió el estilo personal de Fox fue tal que eclipsó a su partido. La estrategia tendía a restar importancia a las instituciones, al mismo tiempo que exageraba la efectividad política de la personalidad del candidato y desembocaba en una fórmula plebiscitaria de ejercicio de gobierno. Esta propuesta adolecía de contradicciones y ambigüedades que, aparentemente, escaparon a las consideraciones de los estrategas políticos del candidato, aun cuando muchas de ellas derivaban de sus propios planteamientos. Por ejemplo, las presidencias plebiscitarias se caracterizan por un liderazgo fuerte y por la centralización del poder, ambos rasgos distintivos de las presidencias priistas que Fox había ofrecido dismantelar porque formaban parte esencial del estatismo autoritario que denunciaba el PAN.

La competencia presidencial del 2000 era la prueba de fuego del proceso de democratización. Los foxistas creyeron que la derrota del PRI habría de provocar un colapso institucional que sería el punto de partida de un cambio radical y de la construcción de un sistema político completamente nuevo, sobre la base de un consenso forjado en torno a la personalidad de Vicente Fox. Cifraron las probabilidades de que todo esto ocurriera en una ambiciosa operación mediática, confiados en que los medios de comunicación de masas habrían de construir un liderazgo popular que encontraría fuertes resonancias en la opinión

⁴ Soledad Loaeza, *Las consecuencias políticas de la expropiación bancaria*, México, El Colegio de México, 2008.

pública.⁵ Se propusieron promover en la campaña electoral un voto plebiscitario y, luego, quisieron extender este objetivo más allá de la elección para erigir una presidencia plebiscitaria.⁶

Este tipo de presidencia se caracteriza por el fomento de un vínculo directo entre el jefe del Ejecutivo y la opinión pública, que pasa por encima de instituciones intermedias, como pueden ser los partidos y el Congreso. Reconoce dos fuentes de legitimidad: por un lado, el prestigio moral del individuo que ocupa el cargo, y por otro, las vías institucionales por las que accedió al poder.⁷ El componente personal está en el corazón del ejercicio gubernamental; asimismo, la aptitud de liderazgo político prima sobre las habilidades administrativas. Las presidencias plebiscitarias pueden desarrollarse en sistemas democráticos, con la salvedad de que en este caso el ejercicio de la autoridad presidencial está sujeto a restricciones institucionales que frenan los potenciales abusos; en cambio, tales restricciones son más débiles en sistemas políticos antidemocráticos, proclives también a la concentración del poder.

Paradójicamente, el modelo de presidencia plebiscitaria que guiaba el empeño de los foxistas, recreaba los rasgos acusadamente personales de la presidencia de los tiempos de la hegemonía del PRI, cuando el jefe del Ejecutivo estaba investido de una autoridad mayúscula que podía imponerse a las instituciones, propiciando con ello el abuso y

⁵ A finales del siglo xx se desarrollaron presidencias plebiscitarias en muchos países. La experiencia de Vicente Fox ilustra un fenómeno que se presentó en Estados Unidos desde los años setenta, donde “la elección de los candidatos presidenciales se transfirió de la convención partidista a campañas primarias centradas en el candidato; organizaciones independientes construidas en torno al candidato, lo eligen candidato por el partido”. Gracias a las tecnologías de comunicación de masas, los políticos pueden cultivar relaciones directas con los votantes. Como se verá más adelante, la influencia política de los medios adquiere una dimensión diferente en un marco institucional en transición.

⁶ Stephen Skowronek, *The politics presidents make. Leadership from John Adams to Bill Clinton*, Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press, 1997, pp. 54-55.

⁷ Maurice Duverger, *La monarchie republicaine ou comment les democraties se donnent des rois*. París, Robert Laffont, pp. 22-27.

la aplicación arbitraria de la ley. Sin embargo los foxistas privilegiaban un enfoque extrainstitucional, cuyo eje era la personalidad de Fox, a la que acordaban la capacidad de convertirse en pilar de un nuevo consenso nacional, a partir del cual podrían emprenderse reformas efectivas. Confiaban en sortear obstáculos administrativos y legales, y en llevar a cabo cambios de largo alcance con apoyo de la opinión pública. Para gobernar, Fox se basaría más en sus recursos personales que en las instituciones.⁸ Este conjunto de supuestos llevó a una presidencia dominada por la imagen que se tradujo, a su vez, en un estilo presidencial a merced de los cambios de humor y de las circunstancias personales del jefe del Ejecutivo.

El punto de partida de este proyecto fue un cálculo equivocado de las determinantes institucionales y políticas que imponía el contexto en que Fox llegó a la presidencia. La característica central de la democratización mexicana en los noventa fue el desmantelamiento de la hegemonía del PRI y la formación de un robusto sistema pluripartidista. Esta situación se mantuvo después de la elección presidencial, en la que triunfó Vicente Fox aunque ni él ni su partido lograron una mayoría absoluta, de manera que asumió la Presidencia de la República en un clima dominado por la política partidista y por la creciente politización y pluralización de la opinión pública. Ambos factores obstaculizaban la realización del proyecto plebiscitario.

UN PRESIDENTE DIFERENTE

La prematura irrupción de Fox en la competencia por la presidencia se acompañaba de dos actitudes: avidez y urgencia. Ambas apoyaban

⁸ Véase, por ejemplo, Roberto Mangabeira Unger, "A letter to president Vicente Fox of Mexico", 30 de julio de 2001, <www.law.harvard.edu>, consultado el 23 de marzo de 2004. En este artículo Unger urgía a Vicente Fox a que siguiera el ejemplo de Madero "PARA APARECER ANTE EL PAIS COMO UN HOMBRE POSEÍDO POR UN SENTIDO DE MISIÓN Y POR UNA VISION" (mayúsculas en el original). Para el distinguido profesor de Harvard, ésta era una de las principales condiciones para la transformación del país.

la imagen del ranchero que tercamente se empeñó en proyectar ataviado con botas y sombrero vaqueros y una enorme hebilla labrada en el cinturón. Este atuendo de fuertes resonancias machistas buscaba evocar coraje, energía, voluntad, determinación y audacia. La campaña de Fox lo representaba como un líder que desde el Poder Ejecutivo inspiraría los corazones y las mentes de los mexicanos para dirigir una transformación acelerada y profunda del país. Los mensajes de su campaña concentraron atención y recursos en su persona y relegaron la plataforma del PAN a un segundo plano. La organización Amigos de Fox incluso marginó a la dirigencia partidista y a los candidatos al Congreso, y al hacerlo estableció una creciente distancia entre foxistas —muchos de ellos no eran miembros de PAN— y panistas, que se amplió cuando, una vez en la presidencia, Fox formó un gabinete en el que los afiliados al partido eran una minoría. No obstante, a ojos de la opinión pública, Acción Nacional sería el principal responsable de las acciones gubernamentales.

Por el solo hecho de haber derrotado al candidato del PRI, Vicente Fox ocupa una posición singular en la historia de la presidencia mexicana. Como todos sus predecesores, llegó al cargo con sus propios prejuicios acerca de la tarea que le esperaba, así como con compromisos y obligaciones específicos. Sin embargo, diferencias muy importantes lo distinguían de sus antecesores: su origen familiar, profesional y político rompió la norma de los presidentes priistas. En primer lugar su madre era española, una condición que hubiera impedido su candidatura antes de la reforma constitucional que se introdujo en 1992 y que eliminó el requisito según el cual los presidentes tenían que ser mexicanos por nacimiento, hijos de mexicanos también de nacimiento; en segundo lugar se educó en una universidad jesuita,⁹ y, luego, su carrera profesional previa a su actividad política se había desarrollado en el sector privado en el estado de Guanajuato. Desde los años cuarenta, todos los presidentes, y buena parte del personal polí-

⁹ La biografía oficial de Vicente Fox, que lo describe como un hombre común y corriente, trata de minimizar la connotación de clase que supone haber estudiado en una universidad privada, y con ese fin afirma que en la Universidad Iberoamericana parecía un “*ranchhand*” (en inglés en el original).

tico y administrativo, se formaron en instituciones públicas, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o el Instituto Politécnico Nacional (IPN), y eran políticos de profesión o funcionarios públicos en el gobierno federal

En la construcción de su imagen pública, Fox destacó de manera insistente las diferencias con respecto a sus predecesores; gustaba de presentarse como un mexicano común, cercano a la mayoría —a pesar de la contradicción que oponía esta imagen a la del individuo excepcional que es capaz de inspirar a otros a seguirlo—, y reiteraba los logros de su carrera como empresario. Según la versión oficial, Vicente Fox era político por accidente.

Un hombre común y corriente

Desde el comienzo de la campaña para la nominación del PAN, Fox se obstinó en demostrar que era lo contrario del burócrata rígido y distante que, a sus ojos, caracterizaba a los presidentes priistas. En los actos proselitistas se describía a sí mismo como un ranchero de lenguaje llano, un católico devoto, un hombre de familia y un empresario de éxito. Una vez en el cargo, mantuvo un estilo casual. Por ejemplo, en el discurso que pronunció en la toma de posesión, el 1 de diciembre de 2000, se dirigió en primer lugar a sus hijos: “¡Hola, Ana Cristina! ¡Hola, Paulina! ¡Vicente y Rodrigo!”; sólo después invocó la fórmula ritual “Honorables miembros del Congreso”, y añadió una novedad: “Mexicanas y mexicanos”.

Fox apelaba repetidamente al contexto rural de su infancia para construir su imagen pública. Le gustaba presentarse a la luz de los lugares comunes relativos al campo como una tierra de hombres “amistosos, respetuosos, directos y honrados”,¹⁰ en oposición implícita a la gente de la ciudad, desconfiable y mañosa. En este punto, la biografía oficial retomaba un tema de la tradición populista: la suspicacia del

¹⁰ Oficina de la Presidencia, Gobierno de México, *Biografía de Vicente Fox Quesada*, <www.presidencia.gob.mx> 2004.

provinciano hacia la capital, asociada a todos los males de la centralización política y a un gobierno federal monstruoso, al derroche del gasto público y, en general, a todos los símbolos de explotación de la “gente buena” de provincia: la corrupción del PRI y su desvergonzada avaricia.¹¹

Al hacer hincapié en el medio de agricultores en el que había crecido, e incluso trabajado, el presidente buscaba identificarse con la experiencia de muchos mexicanos en el campo, que estaban también entre los más pobres. En la ceremonia oficial del 1 de diciembre de 2000 afirmó: “Como muchos de ustedes en este recinto y en todo nuestro país, yo crecí en un rancho, en un ejido”. En adelante, se referiría en sus discursos y apariciones públicas a las mujeres y a los niños entre los débiles y los desamparados. En la fotografía oficial, Vicente Fox aparecía vestido informalmente y rodeado de muchos niños, imagen que era casi una evocación de la de Jesús invitando a los niños a acercarse a él. La información oficial acerca del presidente enfatizaba su “lado humano”, por ejemplo, lo describía como un “padre amoroso”, una persona compasiva capaz de compartir las penas y alegrías de cualquier familia.

El presidente Fox también trató de sustituir los símbolos tradicionales de la presidencia con otras imágenes y rituales, muchos de ellos cargados de significado religioso.¹² Ostentaba obstinadamente su fe católica en público, creyendo que al identificarse como miembro de esa extensa comunidad de creyentes, se acercaba al ciudadano común. Por citar un caso, nuevamente en la toma de posesión, una de sus hijas le presentó de manera “espontánea” un crucifijo y él lo blandió. Ese mis-

¹¹ Para las opiniones de Vicente Fox sobre la Ciudad de México, véase Lázaro Ríos y Marta Treviño, “Entrevista con Vicente Fox: se va todo el IVA al 15%”, *Reforma*, 8 de enero de 2001.

¹² Muchos de estos desplantes llevaban la huella de la infancia de Fox en la ciudad de León, bastión del ultraconservadurismo católico, cuna de la Unión Nacional Sinarquista, UNS. Con el paso de los años, la ciudad de León mantuvo de manera más o menos abierta su resentimiento hacia el Estado revolucionario, y aún se enorgullece de su pasado, de sus héroes y símbolos cristeros. En la presidencia Fox utilizó repetidamente fórmulas cristeras en sus discursos.

mo día, antes de la ceremonia cívica que corona la sucesión presidencial (un ritual político laico *par excellence*), el presidente Fox había acudido a la basílica de Guadalupe a un “acto privado de devoción” al que sólo invitó a su familia y a las cadenas de televisión. Estas posturas eran casi una provocación que desafiaba la tradición laica del Estado mexicano. La reacción de la oposición fue inmediata: el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se unió al PRI para protestar por lo que consideraba una insolencia; el gesto también tuvo un efecto divisivo que contrariaba la intención original, pues muchos católicos criticaron el uso político de símbolos religiosos

Para justificar el recurso a su identidad católica, el presidente Fox insistía en que no era como los presidentes priistas, que “escondían” sus creencias y prácticas religiosas. Sin embargo, más que disimular su fe religiosa, estos presidentes argumentaban que reconocían en la separación de la Iglesia y del Estado uno de los más caros legados de la lucha histórica de México por la modernidad. Por esa razón, evitaban participar públicamente en ceremonias religiosas.

Vicente Fox no fue el primer presidente que buscó beneficiarse del sentimiento religioso popular. En 1973, el presidente Luis Echeverría hizo una visita privada al papa Pablo VI en el Vaticano; el acontecimiento se divulgó ampliamente, en un periodo en que las iglesias no tenían un estatus legal en México. En 1979, el presidente José López Portillo dio la bienvenida al papa Juan Pablo II en la capital de la República, pero lo saludó en el aeropuerto diciendo que lo dejaba con los miembros de “su Iglesia”, aunque después en la residencia oficial se realizó en privado una ceremonia religiosa. Pero el presidente Fox fue el primer jefe del Ejecutivo mexicano que se arrodilló humildemente ante el papa, y causó un escándalo entre muchos que rechazaron la imagen de la cabeza del jefe del Estado mexicano inclinada ante otro jefe de Estado.

Para un católico devoto, que promovía cotidianamente los valores de la familia, Vicente Fox era muy liberal en su conducta personal o, simplemente, un católico más con debilidades y contradicciones. Fue el primer divorciado en llegar a la Presidencia de la República, y contrajo matrimonio con otra divorciada, a pesar de la postura de la

Iglesia católica acerca de las segundas nupcias. En términos del análisis del impacto del personaje sobre la institución presidencial, lo relevante de este comportamiento fue que asuntos personales como éste podían repercutir en las relaciones entre los actores políticos. Así, por ejemplo, la capacidad de influencia de los obispos mexicanos aumentó dado el interés del presidente en obtener la anulación de los respectivos matrimonios previos y la bendición papal. La actitud de la Iglesia en relación con este tema fue ambigua, muchos consideraron que pasaba por alto la situación irregular de la pareja Fox a cambio de una mayor cercanía con la presidencia.

Durante meses, la historia de la relación amorosa del presidente Fox con su vocera, la señora Sahagún, fue objeto de rumores —que en gran parte procedían de la oficina de esta última— en la prensa, radio y televisión. Su boda fue una ceremonia “privada” que tuvo lugar el 2 de julio de 2001, es decir en el aniversario de la victoria electoral de Fox, que casualmente es día de su cumpleaños.¹³ En los tres primeros años de gobierno, la opinión pública fue regular y oficialmente informada de diferentes temas de la vida personal del presidente, a tal grado que las historias de la familia tendían a desplazar de la atención del público los temas de la vida política y económica del país. Casi siempre las habladurías sobre el presidente Fox, su esposa, sus hijas e hijos procedían de la misma Oficina de la Presidencia, que utilizaba la prensa como vehículo de divulgación.¹⁴ Martha Sahagún de Fox se convirtió en una prominente figura política, que ejerció su in-

¹³ Ese mismo día, el jefe de Gobierno español, José María Aznar, inició una visita oficial a México, que la boda relegó a un segundo plano. Tanto así, que la cena oficial en honor de la delegación española se convirtió en un banquete de bodas en el que los invitados, haciendo a un lado el decoro diplomático, se apresuraban a felicitar a los recién casados, olvidándose de los huéspedes extranjeros.

¹⁴ La Oficina de la Presidencia utilizó otros sucesos familiares para inspirar la simpatía de la opinión pública. A principios de 2003, la primera plana de los periódicos publicó una imagen de resonancia magnética del nieto en gestación del presidente. Semanas después, el nacimiento del bebé fue motivo para que los medios se vieran inundados con historias y fotografías de la familia. La presencia continua en los medios de los acontecimientos de la vida privada del presidente, instigados por la misma Oficina de la Presidencia, no tenía precedente.

fluencia sin tapujos, participó de manera regular en distintas áreas de decisión del gobierno y llegó incluso a opacar la presencia de su marido en los medios.

Una diferencia notable entre el presidente Fox y sus antecesores priistas fue la indiferencia que mantuvo hacia el mundo de las ideas y la cultura. Los presidentes priistas en cambio se enorgullecían de expresar respeto y admiración por las artes, se sentían comprometidos a apoyar la investigación y la educación superior, se envanecían de sus relaciones con los intelectuales y, en ocasiones, hacían alarde de su propia cultura y de sus logros académicos. Los tecnócratas Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, por ejemplo, presumían sus diplomas de doctorado de Harvard y Yale. A Vicente Fox no le interesaba este tipo de imagen.

El empresario

Los antecedentes de Vicente Fox en la empresa privada fueron uno de los grandes temas de la campaña presidencial. Su experiencia como administrador regional de Coca-Cola era una prueba de talento administrativo, el cual valoraba más que su gestión al frente de la gubernatura de Guanajuato (1993-1999);¹⁵ incluso buscaba revestirse con el aura de prestigio y poder de la corporación internacional. En consecuencia, Fox prometió despolitizar la función pública y poner fin al patrimonialismo, y ofreció eficiencia y “gobierno de calidad” mediante la aplicación de técnicas empresariales.

Con ese propósito introdujo un modelo de administración pública en el nivel federal, el cual había puesto en práctica antes en Guanajuato, con métodos, “conceptos, valores y prácticas que orientan el

¹⁵ La biografía oficial de Vicente Fox, ya como presidente, se refiere a su experiencia en Coca Cola. Durante la campaña se insistía en ella como prueba de su competencia profesional. Vicente Fox fue gerente regional de la transnacional para México y Centro América durante menos de dos años. Al término de su contrato en la transnacional, ingresó a la empresa familiar y después inició su carrera política. La página web de su campaña afirmaba que había obtenido un certificado de la Harvard Business School. Esta información fue desmentida.

servicio exclusivamente en beneficio del ‘cliente’ [usuarios, contribuyentes o ciudadanos]”.¹⁶ Estableció un régimen de coordinadores, dependiente de la Oficina de la Presidencia, que, organizado de acuerdo con áreas de responsabilidad supervisaría el desempeño de las secretarías. En la administración federal, estos cambios produjeron confusión y conflictos severos entre secretarios de Estado y coordinadores. El estatus de estos últimos en el organigrama del gobierno era ambiguo, al igual que el alcance de su responsabilidad y de su autoridad. En menos de dos años la mayoría de los coordinadores renunció. Este tropiezo fue un serio revés para la credibilidad del presidente Fox, en tanto que administrador eficaz.¹⁷

El primer gabinete fue misceláneo: estuvo integrado por personas de origen político y profesional diverso, pues incluía a personas de izquierda y de derecha, algunas no tenían antecedentes en la función pública y hubo hasta jubilados del sector privado, por ejemplo, en la Secretaría de Energía y en Pemex. Además, en los niveles intermedios, designó antiguos funcionarios de administraciones panistas en estados y municipios. A pesar del efecto positivo de rostros nuevos, la falta de experiencia y de conocimiento de los procedimientos administrativos y de las exigencias y reglas del servicio público federal obstaculizó la toma de decisiones del gobierno. Inconsistencias, contradicciones internas y retrasos fueron la norma del gabinete. Fox se negó a asumir el liderazgo administrativo que habría dado sentido de dirección al gobierno con el argumento —por cierto débil— de que en las democracias los presidentes no interfieren en las áreas de competencia de cada miembro de su gabinete.

¹⁶ Guadalupe Valencia García, “The PAN in Guanajuato: Elections and political change in the 1990s”, en Kevin J. Middlebrook (ed.), *Party politics and the struggle for democracy in Mexico. National and State-level analyses of the Partido Acción Nacional*. La Jolla, Center for U.S.-Mexican Studies, University of California, San Diego, 2001, pp. 209-258, p. 250.

¹⁷ Roberto Mangabeira Unger criticó severamente esta reforma; en su carta a Vicente Fox escribió: “el régimen de ‘comisionados’ claramente no funciona, representa la importación de métodos de administración de negocios a la administración mexicana”. Unger, *op. cit.*, p. 22.

El político por accidente

En 1999 la biografía política de Fox era breve. Pertenecía a la generación de pequeños y medianos empresarios locales que ingresó a la oposición panista a comienzos de los años ochenta en reacción a la nacionalización de la banca. Fue elegido a la Cámara de Diputados en 1988, y participó de manera activa en los desordenados alegatos en torno al fraude electoral que presuntamente se cometió en la elección presidencial de ese año, un periodo que describe como los treinta días más felices de su vida.¹⁸ En los tres años siguientes no hay registro de su participación en los debates del Congreso.

Contrariamente a lo que se esperaba, una vez en la presidencia Fox no mostró pragmatismo y tampoco capacidad de persuasión con el Congreso, los líderes partidistas o los gobernadores. Estas dificultades pueden explicarse por la distancia que separaba el intento de ejercer la presidencia en forma plebiscitaria, en una realidad plural y partidizada. El fracaso de las reformas importantes que propuso como la ley sobre cultura y derechos indígenas, la reforma fiscal y la energética evidenció la poca disposición del presidente a discutir y negociar sus propuestas con los legisladores, así como su inexperiencia parlamentaria.

Muchos creyeron que durante sus años como gobernador, Vicente Fox había adquirido experiencia suficiente para asumir responsabilidades públicas, y que sólo tendría que ajustarse a las dimensiones del gobierno federal. Así que la inexperiencia que mostró con respecto a los quehaceres administrativos fue una sorpresa, pero el contraste entre su desempeño en los dos niveles de gobierno puede ser visto como prueba de las diferencias que existen entre el ámbito nacional y el local, y de los variados efectos de la intervención de actores políticos como organizaciones empresariales y partidos sobre las distintas dinámicas gubernamentales.

¹⁸ Vicente Fox, *A Los Pinos. Recuento autobiográfico y político*, México, Editorial Océano, 1999, p. 69.

La presidencia foxista

Parafraseando a Richard E. Neustadt, en México, como en Estados Unidos, todo el mundo espera que el hombre en Los Pinos haga todo.¹⁹ No obstante, y en contraste con las apariencias, el presidente Fox asumió una actitud más bien pasiva en relación con las actividades gubernamentales, mientras que dedicaba una atención exagerada a las ceremonias y giras que eran ocasión para explayarse como un presidente cercano al pueblo. Desde el inicio de su mandato anunció que delegaría responsabilidades y autoridad a su gabinete; esta decisión tuvo efectos negativos sobre la coherencia gubernamental, pues la administración no estaba preparada para un ejercicio descentralizado del Poder Ejecutivo, y fue muy difícil definir objetivos y prioridades consistentes. El resultado fue conflictos burocráticos constantes y un proceso errático de toma de decisiones.

La noción que tenía Vicente Fox de la presidencia también lo distingue de sus antecesores que entendían sus responsabilidades gubernamentales como una faceta del *dirigisme* estatal. A principios de 2003 el presidente Fox desató una tormenta política cuando respondió “¿Y yo por qué?” a quienes exigían la intervención del gobierno en un conflicto entre dos televisoras. En principio se trataba de un litigio comercial que involucraba a empresas privadas, pero se esperaba que el gobierno asumiera por lo menos el papel de árbitro. Había argumentos sólidos para sostener su intervención: primero, en México la televisión es una concesión, en segundo lugar, la empresa más fuerte de las dos que estaban en conflicto, TV Azteca, había tomado la ley en sus manos y enviado seguridad privada a ocupar las instalaciones de Canal 40, como represalia por una violación de contrato. Cuando el personal de esta última televisora se acercó al presidente Fox para pedirle que interviniera, la situación irregular de las instalaciones llevaba más de un mes sin que hasta entonces se hubieran manifestado de alguna manera la Secretaría de Gobernación o la Secretaría de Comunicaciones. Esta

¹⁹ Richard E. Neustadt, *Presidential power and the modern presidents. The politics of leadership from Roosevelt to Reagan*, Nueva York, The Free Press, 1990.

actitud provocó malestar en la opinión pública y críticas a la pasividad de las autoridades que evadían su responsabilidad de aplicar la ley.

Para muchos, el gobierno se mostraba débil, temeroso o, peor todavía, complaciente frente a la televisora, y no fueron pocas las suspicacias a propósito del tipo de compromisos que podía haber adquirido con las empresas de televisión. El fundamento de estas sospechas era la importancia preponderante que habían adquirido para el gobierno, que contaba con su apoyo para movilizar las simpatías de la opinión pública.

Visto este incidente desde la perspectiva de la idea que tenía Fox de la presidencia democrática y de la autoridad del Estado, aparece el sustento ideológico de la respuesta “¿Y yo por qué?”, que aclaró unos meses después.²⁰ Según él, con esa pregunta quiso superar la presidencia autoritaria, y añadió: “¿Por qué se espera que el presidente sea el único que saque adelante el país? ¿Qué no somos cien millones de mexicanos?”. Para Vicente Fox, un presidente democrático era simplemente uno más en un grupo armónico de personas, el miembro de un gran equipo —una metáfora que le gustaba utilizar para referirse a todos los mexicanos— que trabajaba hacia un mismo objetivo: su interés y su bienestar personal. Al inicio de su sexenio, hablaba de los cien millones de presidentes para subrayar su compromiso con la defensa de la iniciativa individual y su repudio a quienes esperan que el gobierno les resuelva sus problemas. Según él, sólo los presidentes autoritarios asumían responsabilidades extensas, y consideraba que el Estado debía desempeñar un papel limitado, pues su intervención únicamente empeoraba la distribución del ingreso o cualquier tipo de conflicto.

El presidente Fox no perdía ocasión de expresar su credo individualista en mensajes de autoayuda o llamados al espíritu emprendedor de cada mexicano. Incluso se felicitaba por el crecimiento de la economía informal, aun cuando este fenómeno incrementara dificultades para la introducción de una reforma fiscal, planteara problemas de aplicación de la ley y contribuyera a la baja productividad y al subempleo.

²⁰ Juan Manuel Venegas, “Yo por qué, insiste Fox: ¿Qué no somos 100 millones de mexicanos”, *La Jornada*, 2 de agosto de 2003.

Las expresiones antiestadistas de Fox estaban arraigadas en una profunda desconfianza hacia el gobierno. En este caso probablemente hablara desde su experiencia con las prácticas corruptas del sistema autoritario. Ésta puede ser una de las razones por las cuales su gobierno fracasó en su intento de introducir una reforma fiscal. La opinión pública percibió la postura ambigua del presidente al respecto y no apoyó los cambios.

“Gobernar es comunicar”, Vicente Fox, 2001

Los medios de comunicación fueron protagonistas centrales del proceso de democratización. En los años noventa, televisión, radio y prensa se expandieron y diversificaron notablemente, como un reflejo de la diversidad de la opinión pública mexicana que además reforzaba el pluralismo político.

Desde el comienzo de su campaña presidencial, Fox reconoció el potencial movilizador de los medios que participaron activamente en la difusión del mensaje antiautoritario del candidato y en construir su imagen pública. Creyó que el trato favorable que la mayoría de ellos le había concedido durante la campaña electoral continuaría tras su elección; además, percibía a los medios de comunicación como un instrumento idóneo para mantener el entusiasmo de la campaña electoral. Por consiguiente, desde el principio, le atribuyó a los medios un papel central en su gobierno. Había, al menos dos razones para justificar esta estrategia: primero, la idea que tenía Vicente Fox de gobierno democrático, y, segundo, la ausencia de una mayoría panista en el Congreso.

En un inicio el estilo presidencial de Fox fue una prolongación de su estilo como candidato, lo cual se tradujo en el empeño del gobierno en orientar la atención del público a la personalidad del presidente. Este enfoque explica muchas de las contradicciones y de las inconsistencias que plagaron al gobierno, porque condujo a una presidencia dominada por la imagen, en la que para mantener su popularidad, el jefe del Ejecutivo tendió a darle al público lo que quería a

costa de los asuntos sustantivos.²¹ En enero de 2001, Vicente Fox describió el gobierno democrático como aquel que sostiene un diálogo permanente entre “el ciudadano individual y el presidente”. Añadió que él no sería un presidente encerrado en su oficina, sino que estaría continuamente en contacto con la gente, que si era posible estaría a diario en el radio para que los ciudadanos le dieran sus ideas y sus propuestas para gobernar con base en ellas.²²

Los medios eran la clave para que Vicente Fox pudiera extender la estrategia de comunicación de la campaña al ejercicio de gobierno. Además, ya como presidente creía que los medios le proporcionarían “momentos democráticos” que, en su opinión, eran excepcionales en tiempos normales de gobierno. De manera que se apoyó en un uso extenso del radio y la televisión para comunicarse directamente con el “pueblo”; este recurso también acentuaba el tono informal que fue el sello de su sexenio.

²¹ La dependencia del gobierno de Fox de los medios exacerbó su sensibilidad a las presiones de la opinión pública. Por ejemplo, en 2002, el gobierno canceló un gran proyecto de construcción de un aeropuerto para la Ciudad de México en San Salvador Atenco, Estado de México. Esta decisión fue vista por las compañías que ya habían sido contratadas, como una prueba de la falta de compromiso real con la inversión privada y tuvo un impacto muy negativo en la percepción de la capacidad de liderazgo del presidente.

²² Ríos y Treviño, entrevista citada con Vicente Fox. La campaña presidencial de Vicente Fox muestra la influencia de Dick Morris, un consultor político que fue el principal estratega de su campaña. Véase Dick Morris, *Power plays: win or lose—How history's great political players play the game*, Nueva York, Harper Collins Publishers, 2002. Véase también, Barber and Associates, <www.barberusa.com>. A lo largo de su sexenio, el presidente mantuvo un programa semanal que conducía cada sábado, una actividad que disfrutaba. En su *Letter to president Vicente Fox*, Unger le da a escoger entre ser Herbert Hoover y soportar “estoicamente” el estancamiento económico, o adoptar el modelo de Franklin Roosevelt. La “americanización” de las campañas políticas en América Latina empezó a ser vista con preocupación, pero eso no detuvo a a los políticos latinoamericanos que contrataron a consultores como Morris para profesionalizar sus campañas. Véase Roberto Espíndola, “Electoral campaigning and the consolidation of democracy in Latin America: the Southern Cone”, artículo presentado en el Workshop on Political Communication, the Mass Media and the Consolidation of New Democracies in ECPR, Turín, Italia, 27 de marzo de 2002.

El énfasis en la comunicación perdía de vista un punto fundamental: el éxito de un presidente no reside exclusivamente en la capacidad para comunicar, el contenido del mensaje es crucial y, en el caso de Fox, la imagen se impuso al mensaje. Posiblemente ésta fue la razón por la que la relación entre el gobierno y la prensa escrita fue muy difícil, en comparación con los medios masivos, y estuvo plagada de malentendidos y mutuas acusaciones de mala fe, pues, en principio, la materia de los periódicos es la sustancia de la política, mientras que la televisión se sostiene en imágenes, entre más efectistas, mejor.

Para que los medios fueran instrumento de la política presidencial —que era lo que Vicente Fox esperaba—, hubiera tenido que controlarlos; sin embargo, ni siquiera hubiera podido intentarlo. Durante el proceso de democratización, el radio, la televisión y la prensa escrita experimentaron una notable transformación. Crecieron, pero también se politizaron y se diversificaron; los periódicos, en particular, dieron más espacio a la información política, abrieron sus páginas al comentario editorial y llegaron a ejercer una amplia influencia en la formación de la opinión pública.

A finales del siglo xx, el periodismo mexicano había evolucionado en parte bajo la influencia de los medios estadounidenses y, en parte, bajo la presión de la competencia en un mercado en expansión de lectores, de televidentes y de radioescuchas. Siguiendo la tendencia del periodismo contemporáneo de personalizar las noticias, los medios mexicanos se concentraban en los individuos, creaban celebridades, y parecían guiados por la convicción de que su responsabilidad consistía en ofrecer una visión crítica de las noticias que reportaban, como si la neutralidad fuera indeseable. La mayor parte de los periodistas parecía creer que su deber era desenmascarar a los políticos y refutar sus afirmaciones. Así, el sesgo opositorista que con mucho éxito desarrollaron durante el proceso de transición se mantuvo incluso después de la elección presidencial.

Desde el principio de su mandato, el presidente Fox y su gobierno fueron objeto de críticas constantes y severas. Los reporteros, periodistas, escritores y editorialistas demostraron que mantendrían y tratarían de ampliar su capacidad de influencia política independien-

te. En este contexto, el énfasis de la estrategia de comunicación oficial en la vida privada del presidente, lo expuso a ataques igualmente personalizados porque lo convirtió en blanco fácil de escándalo.

Hacia 2003, el presidente expresaba la frustración que le inspiraba la prensa escrita a una mujer que lo saludó con mucho entusiasmo durante una gira, le dijo “¡Ah! Seguramente no lees los periódicos”, la mujer respondió, “no sé leer, pero lo veo en televisión todos los días”. El presidente la felicitó, “eso es mejor, serás más feliz”.²³

La ausencia de una mayoría sólida en el Congreso era una segunda razón para que el presidente Fox recurriera a los medios para comunicarse directamente con la gente. Quiso utilizar la misma estrategia que le había valido la candidatura del partido en 1999: los utilizaría para movilizar a la opinión en apoyo a sus propuestas, y después el Congreso se vería obligado a aceptarlas bajo la presión de la opinión pública.

La reacción negativa del Congreso a la estrategia de la presidencia de movilización de la opinión, acentuó la hostilidad de Vicente Fox hacia el Poder Legislativo, solamente agravada por la desconfianza que le inspiraban las burocracias partidistas. En este caso puede pensarse que la actitud personal del presidente influyó sobre las accidentadas relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, que sufrieron los efectos de la difícil experiencia que vivió Fox en los noventa con el entonces líder del PAN, Carlos Castillo Peraza. Una de las razones de esta antipatía era la relación cercana y amigable de este último con el presidente Salinas, y el apoyo a sus reformas.²⁴

Las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo se convirtieron en fuente constante de desacuerdo y de crispación política, sobre todo cuando el gobierno buscaba impulsar sus políticas apelando directamente a la opinión pública. Esta estrategia ofendía e irritaba a los legisladores, y agravaba para el presidente los costos de la ausencia de una mayoría panista. Por ejemplo, la oposición en la Cámara de Dipu-

²³ Juan Manuel Venegas, “Gira de Fox con sabor a acto de campaña”, *La Jornada*, 12 de enero de 2003.

²⁴ Soledad Loaeza, *El Partido Acción Nacional: la larga marcha, 1939-1994. Oposición leal y partido de protesta*, México, Fondo de Cultura Económica, 1999.

tados bloqueó las iniciativas del Ejecutivo de reforma fiscal, pese a que era ampliamente reconocida la necesidad de aumentar la recaudación tributaria, y el incremento al impuesto al valor agregado (IVA). Al comienzo de su gobierno, el presidente tampoco logró apoyo de la opinión pública ni del Legislativo para la propuesta que consistía en los Acuerdos de San Andrés, una controvertida iniciativa del gobierno del presidente Ernesto Zedillo (1994-2000), formulada por funcionarios de gobierno y expertos simpatizantes con las reivindicaciones de autonomía indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Esta iniciativa presidencial ignoró la propuesta que había elaborado el PAN, y fue motivo de fricciones importantes con su partido. Fox también fracasó en su intento de formar una coalición legislativa que respaldara su propuesta de reforma energética, asociada con la apertura a la inversión privada de empresas vitales del estado, Pemex y la Compañía Federal de Electricidad.

Los fracasos en este ámbito del presidente Fox pueden atribuirse en parte a la estrategia de bloqueo que adoptaron los partidos de oposición, la cual les permitía acusar al gobierno de incompetencia e ineficacia. Ante los ojos de la opinión pública, la aparente parálisis en que se resolvían los desacuerdos Ejecutivo-Legislativo podía ser efecto del comportamiento egoísta de la oposición, pero también era prueba de la incapacidad del gobierno para persuadir a los legisladores de la conveniencia de sus propuestas y de las ventajas de una negociación.²⁵

²⁵ Ésta no era la primera vez que un presidente mexicano se enfrentaba a una situación de gobierno dividido. En 1988, aun cuando el PRI alcanzó con dificultad una mayoría del 50.5%, Carlos Salinas tuvo que negociar con el PAN cada reforma que impulsó porque las reformas constitucionales requieren una mayoría calificada para ser aprobadas. En las elecciones de 1997 para la LVII Legislatura, el PRI obtuvo menos de 50% del voto, resultado que le dio la mayoría a los dos principales partidos de la oposición en aquel entonces, el PAN y el PRD. Sin embargo, aun cuando Salinas y Zedillo tuvieron que lidiar con dos partidos de oposición que eran relativamente iguales, compartiendo el 50% de los asientos en el Congreso, Fox enfrentó un partido de oposición que tenía cerca de 40% de la Cámara de Diputados.

Integridad personal y desempeño presidencial

La característica distintiva del estilo del presidente Fox con respecto a sus predecesores priistas fue el empeño constante en borrar la frontera entre la persona pública y la privada. Esta insistencia se fundaba, por un lado, en el presupuesto de que la personalidad del líder es un factor decisivo en la evaluación de la opinión pública de su desempeño, y por otro, como ya se ha dicho, en la creencia de que era su principal capital político.

Con base en esos supuestos, la integridad moral de Vicente Fox fue un tema central de la campaña electoral. La estrategia fue exitosa porque a ojos de la opinión pública la deshonestidad y la corrupción eran un común denominador de los presidentes priistas. Una vez en la presidencia, además de su honestidad como funcionario público, en los mensajes oficiales la integridad de Fox incluía su compromiso con los valores de la familia, la devoción por sus hijos y después por su esposa, y su fe religiosa.

A pesar de los esfuerzos por eliminar la distinción entre el hombre público y el privado, la opinión pública mantuvo la separación. De ahí que entre las percepciones públicas de los atributos de personalidad del presidente y las de cualidades relacionadas con su desempeño, hubiera una discrepancia que aumentó con el tiempo. Por ejemplo, el cuadro 1 y el cuadro 2 muestran esta distancia. Entre 2000 y 2006 las calificaciones de los atributos de personalidad del presidente variaron relativamente poco, se mantuvieron en un porcentaje alto de 48.8 a 44.5%. En cambio, en el cuadro 2, puede observarse que la calificación de las cualidades de desempeño de Vicente Fox mantuvo una tendencia constante a la baja entre 2000 y 2004. Por ejemplo, en el año 2000, 68.8% de los encuestados consideraba que su capacidad de liderazgo era buena. Para 2004, el porcentaje se había derrumbado a 20.7%; registró un repunte en 2005 a 24.9% y en el último año de su gobierno, 27% consideraba que tenía capacidad de liderazgo. Una proporción muy inferior a 44.5% que, en cambio, consideraba que tenía cercanía con la gente y toleraba la crítica.

CUADRO 1. Atributos de personalidad del presidente,
noviembre de 2001-noviembre de 2006
%

<i>Atributos de personalidad</i>	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Cerca de la gente	48.8	41.1	37.1	35.5	41.7	44.5
Tolerancia a la crítica	46.1	41.3	33.6	42.8	42.6	44.5
Honradez	46.7	33.6	30.8	31.3	34.8	39.8
Preocupación por los pobres	33.4	31.3	29.8	28.9	34	32

FUENTE: Consulta Mitofsky, "Evaluación final de gobierno. Presidente Vicente Fox", noviembre de 2006, consultado en <www.consulta.com.mx>.

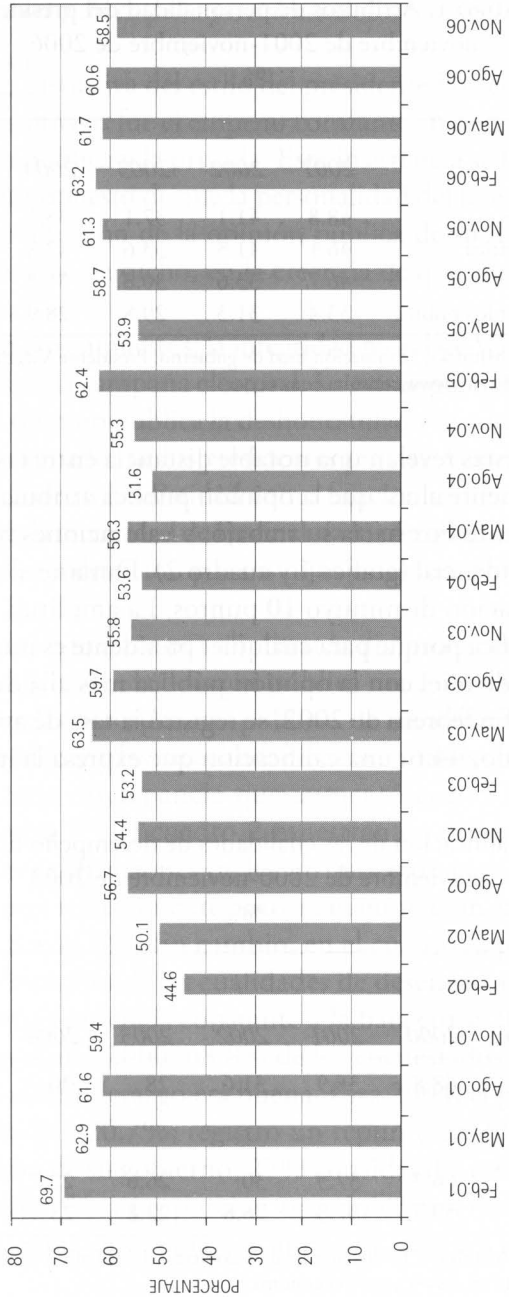
Las encuestas revelan una notable distancia entre tasas de aprobación relativamente altas, que la opinión pública atribuía a la forma en que el presidente Fox hacía su trabajo, y valoraciones bajas de su desempeño presidencial (gráfica 1 y cuadro 2). Durante el primer año, la tasa de aprobación disminuyó 10 puntos. La amplitud de este movimiento se explica porque para cualquier presidente es muy difícil mantener la luna de miel con la opinión pública más allá del primer mes de gobierno. En febrero de 2002, se registró la tasa de aprobación más baja del sexenio, 44.6, una calificación que expresa la irritación de la

CUADRO 2. Calificación de las cualidades de desempeño de Vicente Fox,
noviembre de 2000-noviembre de 2003
%

<i>Cualidades relacionadas con el desempeño</i>	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Liderazgo	68.8	38.9	31.6	28	20.7	24.9	27
Habilidad para resolver problemas	66.3	37.5	30	26.6	22.7	27.6	27
Experiencia	59.7	37.3	26.8	22.8	23	26.5	35.3

FUENTE: Consulta Mitofsky, "Evaluación final de gobierno. Presidente Vicente Fox", noviembre de 2006, consultado en <www.consulta.com.mx>.

GRÁFICA I. Tasas de aprobación presidencial de Vicente Fox, febrero de 2001-noviembre de 2006



FUENTE: Consulta Mitofsky, “Evaluación final de gobierno. Presidente Vicente Fox”, noviembre de 2006, consultado en <www.consulta.com.mx>.

opinión pública ante la aparente incapacidad del presidente de mantener una relación estable y positiva con el Poder Legislativo, tal como lo demostraron las dificultades para aprobar el presupuesto federal en el último trimestre del año anterior.

Para resolver la aparente contradicción entre estos resultados, habría que considerar que cuando se solicita un juicio general sobre la presidencia, dado que se hace la pregunta: “En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma en que Vicente Fox está haciendo su trabajo como presidente?”, las respuestas tienden a ser más benévolas que cuando se trata de calificar las diferentes dimensiones del ejercicio presidencial, las cuales se prestan a evaluaciones concretas (gráfica 1).

Las evaluaciones de la integridad y desempeño presidenciales muestran que, a ojos de la opinión pública, había una discontinuidad entre el individuo y el funcionario. Este resultado confirma conclusiones semejantes de análisis del ejercicio presidencial en Estados Unidos, según las cuales las evaluaciones de integridad personal afectan la calificación del desempeño presidencial, pero no de manera unidireccional. La integridad personal está lejos de ser el único factor, ni siquiera el más importante, de los que intervienen en la aprobación pública, y se debilita cuando el público distingue entre el hombre y el político. Esto quiere decir que, mientras que las calificaciones atribuidas al individuo pueden ser favorables, la valoración del público de su desempeño puede no serlo; de esta forma, la calificación que recibe el presidente por su manejo de la economía o de las relaciones exteriores puede tener mayor peso sobre el conjunto.²⁶ La evolución de la valoración de la opinión pública sobre Vicente Fox demuestra que la distinción entre el hombre y el presidente pudo mantenerse durante mucho tiempo,

²⁶ Así, la experiencia de Fox muestra similitudes con la reacción del público norteamericano al escándalo en torno a la relación del presidente Clinton y Mónica Lewinsky, pues incluso en la atmósfera de críticas que provocó, el presidente estadounidense mantuvo calificaciones elevadas de aprobación: “para la mayoría, el escándalo era un asunto privado porque distinguían entre, por una parte, Clinton el hombre, y, por la otra, Clinton el presidente”. Brian Newman, “Integrity and presidential approval, 1980-2000”, *Public Opinion Quarterly*, 67, 2003, p. 354.

y que las evaluaciones positivas de su personalidad no compensaron las negativas referidas al desempeño.

Las encuestas de opinión indican que durante el sexenio 2000-2006 se mantuvo relativamente constante la valoración de los atributos asociados a la personalidad del presidente (cuadro 1). A lo largo del sexenio la distancia entre este tipo de valoración y la referida a su desempeño (cuadro 2), tendió a ampliarse. La observación que podemos hacer de estos resultados es que a ojos de la opinión pública la personalidad de Vicente Fox resultaba por completo inadecuada para ejercer la responsabilidad presidencial.

La experiencia de Fox pone de relieve los riesgos de la exagerada personalización del funcionario, y demuestra que el vínculo que establece la opinión pública entre la integridad y el desempeño del presidente y sus tasas de aprobación, es relativamente compleja. Así, cuando las percepciones sobre la integridad personal y el desempeño son positivas, se refuerzan unas a otras, y redundan en aprobación; cuando la integridad personal es negativa, pero el desempeño es positivo (como fue el caso del presidente Bill Clinton),²⁷ la primera tiene menor peso en la aprobación pública. No obstante, los niveles de aprobación de Fox sugieren que una valoración positiva de su integridad personal también es irrelevante cuando la que se atribuye al desempeño es consistentemente negativa.

Entorno institucional, contexto político y estilo presidencial

El análisis de la presidencia mexicana ha tendido a privilegiar el papel del individuo frente a las instituciones y las circunstancias en que actúa, como si las decisiones presidenciales ocurrieran en un vacío contextual. Esta perspectiva atribuye una importancia exagerada a las actitudes idiosincrásicas de quienes han llegado a ocupar la presidencia para explicar sus políticas. La limitación más severa de esta perspectiva es que no pondera las transformaciones del sistema político

²⁷ Newman, *op. cit.*, p. 342.

en el tiempo y ofrece una observación ahistórica, según la cual desde la estabilización posrevolucionaria todos los presidentes tuvieron el mismo poder. Más todavía, si queremos ir más allá de la anécdota, es preciso mirar a los presidentes como actores políticos cuyas decisiones fueron diseñadas bajo la influencia o dentro de las restricciones que imponía, en su momento, el contexto interno y externo. Esto no significa que debamos descartar por completo al individuo en el examen del ejercicio presidencial, sino que el análisis debe hacerse a la luz de la interacción entre idiosincrasias personales y contexto, que incluye las instituciones.²⁸

Todos los presidentes mexicanos han estado sujetos a un conjunto “de patrones y estructuras que son los límites dentro de los cuales los presidentes concluyen sus acuerdos y manejan su sentido del poder personal”.²⁹ Estos patrones y estructuras también dan forma al estilo del liderazgo presidencial, porque la manera como cada uno de los presidentes ha entendido y se ha ajustado a esas restricciones para ejercer el poder, ha definido el sello distintivo de su gobierno. Así, puede pensarse que el ejercicio presidencial de Vicente Fox se caracterizó por la tensión que generaba el choque entre el estilo desenfadado del presidente y las normas establecidas de la jerarquía administrativa, el protocolo diplomático, las formas y normas jurídicas o la solemnidad del ceremonial en torno a la jefatura del Estado.

De manera inevitable, este tipo de restricciones también pesó sobre la viabilidad de las promesas de campaña del presidente Fox. Por un tiempo, las limitaciones fueron disimuladas por las exageradas expectativas que despertaron la campaña electoral y la derrota priista. No obstante, muy pronto el flamante presidente tuvo que enfrentarse a las realidades del cargo: en primer lugar, la enorme diferencia entre las

²⁸ Lo que Peterson llama “el enfoque probabilista” en Mark A. Peterson, “Presidential power and the potential for leadership”, en Robert Y. Shapiro, Martha Joynt Kumar, Lawrence R. Jacobs (eds.), *Presidential power. Forging the presidency of the twenty-first century*, Nueva York, Columbia University Press, 2000, p. 366.

²⁹ Lyn Ragsdale, “Personal power and Presidents”, en Shapiro, Kumar y Jacobs (eds.), *op. cit.*, p. 39.

dimensiones de las promesas del candidato y los recursos de que dispone el presidente.

La ausencia de una mayoría panista en el Congreso, como ya se ha dicho, fue una de las primeras dificultades con que se enfrentó el gobierno de Fox. El peso de este obstáculo aumentó porque se combinó con una interpretación equivocada de la elección de julio de 2000. Según los estrategias de Fox, el voto había sido un plebiscito antiPRI, a pesar de que durante la elección, el candidato panista sólo había logrado el apoyo del PVEM. El principal partido de izquierda, PRD, se negó a retirar la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Así, Fox no fue un polo aglutinador del voto de rechazo, fue elegido con 43% de los sufragios, mientras que los candidatos panistas al Congreso obtuvieron una estrecha mayoría de 41%; es decir, 206 de un total de 500 escaños. El candidato del PRI, Francisco Labastida, perdió pero su partido no se colapsó, obtuvo 42% de la representación en la Cámara y 47% en el Senado. De manera que el PRI era una poderosa oposición que podía limitar efectivamente al gobierno. Por otro lado, la política económica y la política exterior ahondaron las diferencias ideológicas entre el PRD y el PAN. A la diversidad partidista se sumaron los efectos divisivos de muchas de las actitudes y posturas del presidente, en particular todo lo relacionado con sus alardes religiosos o el uso político que hacía de su vida familiar, y destruyeron las aspiraciones de los foxistas de construir un nuevo consenso nacional.

La capacidad de influencia del presidente sobre el Legislativo no mejoró en las elecciones federales de 2003, en las que el PAN pasó de 38 a 30% del voto, lo cual significó una pérdida de 55 escaños. No obstante, las encuestas de opinión no indican una relación entre el desempeño electoral del partido y las tasas de aprobación de Vicente Fox, pues en mayo de 2003, el presidente registró la tasa más elevada de aprobación del sexenio, 63.6. El contraste entre estos resultados reforzaba la inclinación de Fox a desentenderse del PAN y a personalizar su gobierno. A pesar de lo anterior, la percepción negativa de la capacidad del presidente para gobernar el país empezó a extenderse prácticamente desde 2002. En junio de ese año, a la pregunta: "¿Cree que el presidente Vicente Fox tiene las riendas del país o las cosas se están saliendo

de su control?”, 61% de los encuestados contestó que estaba perdiendo el control.³⁰

Una encuesta sobre calidad de liderazgo nacional entre 500 líderes de seis países de América Latina (realizada en octubre de 2003 por la Universidad de Miami, School of Business Administration) confirmó la erosión de la imagen del presidente Fox: sólo 6% de los líderes latinoamericanos consultados lo eligió como modelo ideal de liderazgo en la región, en comparación con 31% del año anterior; 34% dijo que México había progresado hacia la democracia gracias a Fox, pero incluso aquí hubo una reducción, pues en 2002, 77% lo veía como el líder que más impacto positivo había tenido sobre la democracia.³¹

Las percepciones negativas del trabajo del presidente se pueden atribuir al desempeño mediocre de la economía y al creciente desempleo. El gobierno mantuvo la austeridad fiscal inflexible y una política monetaria restrictiva, que le había legado su predecesor priista, limitando con ello las probabilidades de reactivar la economía. Entre 2001 y el verano de 2004, la economía mexicana resintió un declive asociado con la recesión de la economía de Estados Unidos. Este proceso ocasionó tasas de crecimiento mediocres, por ejemplo en 2002 el PIB creció en promedio 0.8%, y en todo el sexenio nunca alcanzó el 6.6% del último año del gobierno del PRI, 2000. Asimismo, en seis años la tasa de desempleo nacional aumentó constantemente, y pasó de 2.71 en enero de 2001 a 4.2 en 2005.

En consecuencia, mientras en 2002, 13.8% de los encuestados consideraba que el desempleo era el principal problema del país; al año siguiente, este porcentaje había aumentado 7 puntos, a 20.8. La economía no fue la única fuente de desencanto con el gobierno de Fox. En 2006 25% de los mexicanos consideraba que la inseguridad era el problema más importante; si bien la crisis económica y el desempleo, conjuntamente, eran el tema de mayor preocupación para 37% (cua-

³⁰ Consulta Mitofsky, “Evaluación del gobierno de Vicente Fox, 12a. medición”, 2003, consultado en <www.consulta.com.mx>.

³¹ University of Miami School of Business Administration/Zogby International “Latin America Elite Poll II”, 2003, consultado en <www.zogby.com>.

CUADRO 3. Evolución de las prioridades de la opinión
Noviembre de 2001-noviembre de 2006

Según usted ¿cuál es el principal problema del país?
%

<i>Problema/año</i>	<i>2001</i>	<i>2002</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>
Inseguridad	19.7	21.4	16	17.5	21.1	25
Crisis económica	31.5	25.6	23.3	24.9	19.2	20.8
Desempleo	17	13.8	20.8	20	19.3	16.9
Pobreza	13	14.7	11.7	12.2	15	14
Corrupción	4.9	6.3	8	9.9	11.1	5.2

FUENTE: Consulta Mitofsky, "Evaluación final de gobierno. Presidente Vicente Fox", 2006, consultado en <www.consulta.com.mx>.

dro 3). Estas respuestas ponían en cuestión justamente la capacidad de liderazgo del presidente, cuyo ejercicio debería ser un catalizador del cumplimiento de las funciones básicas del Estado: la seguridad pública y, en la tradición mexicana, la promoción de la actividad económica.

Las preocupaciones acerca de la corrupción gubernamental aumentaron constantemente en 2005, cuando 11% pensaba que era el principal problema del país. Habría que recordar el peso que en 2000 tuvo sobre los votantes la creencia de que la corrupción era una característica de los priistas; sin embargo, hay que señalar que la percepción de la deshonestidad del gobierno no alcanzó a dañar la imagen de honradez que a pesar de todo pudo mantener el presidente Fox en lo personal. El cuadro 1 muestra que, no obstante algunos movimientos negativos, al concluir su gobierno, 40% consideraba que el presidente era honrado.

Además de falta de mayoría legislativa, otros problemas contribuyeron a obstaculizar el potencial de una presidencia plebiscitaria, incluyendo los que se derivan de leyes que impidieron propuestas específicas de Fox,³² el pobre desempeño económico y las restricciones

³² Así, por ejemplo, al inicio de su gobierno Vicente Fox anunció que, en cumplimiento de su propuesta de formar un gobierno empresarial, había designado miembros del consejo de Pemex a un grupo de poderosos empresarios. Sin embargo, la decisión tuvo que ser anulada porque violaba la ley.

impuestas por un entorno internacional en el que la guerra de Estados Unidos contra el terrorismo puso la nota dominante.

En política exterior, el presidente criticó la defensa nacionalista tradicional, habló de una diplomacia resuelta, más acorde con la globalización, y lanzó una política exterior proactiva, cuya piedra angular era la promoción de los derechos humanos en todo el mundo. Estaba convencido de que así correspondía a un líder antiautoritario victorioso; sin embargo, esta línea también era consistente con una diplomacia *de prestige* en su beneficio personal, con la presidencia plebiscitaria y con el propósito de formar un nuevo consenso en torno a los valores democráticos que encarnaba su triunfo electoral. Esta estrategia relativamente injerencista en la política interna de otros países, que implicaba una colaboración más estrecha con Washington, no fue bienvenida por la mayoría de la opinión pública.

Incluso este proyecto fue víctima de la inexperiencia de los funcionarios bisoños. En marzo de 2002, el presidente Fox provocó un incidente con el presidente cubano, Fidel Castro, durante la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, convocada por Naciones Unidas, que se celebró en Monterrey en esa fecha. El presidente mexicano invitó a su homólogo cubano a retirarse para evitar un encuentro enojoso con el presidente de Estados Unidos, George Bush. En una conversación telefónica privada, que posteriormente el gobierno cubano hizo pública, Vicente Fox dijo a Fidel Castro: “Comes y te vas”. La frase causó un enorme escándalo en la opinión pública, no sólo porque era un gesto de descortesía inaceptable por parte del gobierno mexicano, que era el anfitrión de la reunión, sino porque desde el triunfo de la Revolución cubana en 1959, México había mantenido relaciones relativamente amistosas con Cuba, no obstante las presiones de Washington.

El unilateralismo de la política exterior estadounidense y las complejidades derivadas de la guerra contra el terrorismo que desencadenaron los ataques de septiembre de 2001, también fueron un obstáculo para que se materializara la nueva política exterior que promovía el presidente Fox. Tampoco fueron propicios a relaciones más cercanas y menos conflictivas con Estados Unidos, que serían el sello del con-

senso democrático. El punto culminante de esta nueva relación entre dos democracias (México y Estados Unidos) habría de ser un ambicioso acuerdo migratorio bilateral que permitiría el libre tránsito entre los dos países. Desde el principio, las posibilidades de que esta propuesta se concretara eran mínimas, sin embargo fueron totalmente destruidas por los ataques del 11 de septiembre.

La política exterior mexicana no estaba preparada para responder a la demanda de Estados Unidos de apoyo incondicional de parte de sus aliados. El gobierno del presidente Fox no pudo encontrar un equilibrio adecuado entre las expectativas de apoyo de Washington y la sensibilidad nacionalista de la opinión pública mexicana. Abandonó la prudencia tradicional de solidaridad moral con su vecino y aliado, y la política hacia Estados Unidos se vio plagada de contradicciones, porque oscilaba entre el “apoyo incondicional” en septiembre de 2001 y la oposición a la guerra de Estados Unidos en Irak en 2003. El gobierno justificaba esos vaivenes con el argumento de que estaba defendiendo los principios de autodeterminación y la soberanía nacional; no obstante, esta explicación resultaba insuficiente para una opinión pública que consideraba que el acercamiento con Estados Unidos tenía más costos que beneficios.

VICENTE FOX Y LOS LÍMITES DE LA AUTORIDAD PRESIDENCIAL

En diciembre de 2000, Vicente Fox fue investido con los mismos poderes formales que sus predecesores. Sin embargo, los cambios que había experimentado el sistema político en el último cuarto de siglo, en particular el surgimiento del pluripartidismo, demandaban una manera diferente de hacer política, así como una transformación de la presidencia, la institución que había sido pilar del autoritarismo.

Los abusos de autoridad que caracterizaron los gobiernos de Luis Echeverría (1970-1976), José López Portillo (1976-1982) y Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) dañaron profundamente el prestigio del cargo presidencial. El ejercicio despersonalizado de la autoridad se convirtió en demanda pública al final de esos sexenios. Carlos Salinas

y Ernesto Zedillo tuvieron que encontrar un arreglo en el entorno de una política cada vez más compleja, en el que el Congreso ya ejercía algunos límites a la autoridad del presidente, pues el pluralismo y la competencia electoral habían desplazado la hegemonía del PRI. A pesar de todo, Vicente Fox y su equipo de asesores eligieron basar su proyecto de gobierno sobre uno de los mecanismos esenciales del autoritarismo: la concentración en la personalidad del presidente.

Aquí se ha examinado el intento de Vicente Fox y de sus allegados de construir una presidencia plebiscitaria, que era el sentido que daban a la noción de presidencia democrática, pero como se ha tratado de demostrar se apoyaron en un recurso inapropiado: la confianza excesiva en su personalidad. El plan de Fox tenía por lo menos tres fallas: primero, no se basó en un proyecto institucional positivo; segundo, partió de representaciones distorsionadas de las presidencias del PRI, y tercero, sobrestimó el poder del individuo en el marco de una compleja estructura institucional (de manera análoga, se podría afirmar que menospreció la evolución de las instituciones).

La tercera de estas debilidades, la confianza excesiva en el poder de las características personales de Vicente Fox, lo condujo a él y a sus estrategias a concentrarse en la construcción de su figura pública sobre la base de su estilo, exclusivamente, relegando la institución presidencial a un segundo plano. Esto supuso el rechazo de recursos institucionales y simbólicos del ejercicio del poder. Los resultados negativos de esta estrategia plantean interrogantes acerca de la influencia del individuo sobre las presidencias postautoritarias, dada la fragilidad de un proyecto político basado en una personalidad.

La personalización dejó al presidente Fox desprotegido ante decisiones complejas, la tensión política creciente y la desilusión de la opinión pública. De modo que los resultados negativos y las frustraciones que sufrió modificaron su actitud ante el cargo. Quien fuera un candidato vehemente se convirtió en un presidente renuente, que evadía tomar decisiones difíciles y se presentaba vacilante y aun incapaz de disimular la ansiedad que le causaban las responsabilidades presidenciales y las dificultades y restricciones con que se topaban sus proyectos e iniciativas. El presidente Fox parecía abrumado por la magnitud del

gobierno federal y por el ritmo de los acontecimientos. El agudo contraste entre candidato y presidente ilustra, en el contexto mexicano, la conclusión de Richard Rose que afirma que el problema más arduo del presidente posmoderno proviene de este dilema: “lo que hace falta para convertirse en presidente no tiene nada que ver con lo que hace falta para ser presidente”.³³

Las dificultades que enfrentó el presidente Fox para llevar a cabo sus políticas produjeron que de manera gradual se basara más en su “lado humano”, con el fin de mantener credibilidad y apoyo entre el público, con menoscabo de cuestiones de competencia profesional. La estrategia de hacer de la vida privada y aun íntima del presidente la sustancia de su desempeño público, tenía la intención de relegar los fracasos del presidente a un segundo plano en la atención de la opinión pública. El agudo sesgo personal de este estilo impuso a la autoridad presidencial un tono compasivo más que ejecutivo, ajeno a la noción de liderazgo político.

El propósito de dirigir la atención de la opinión pública al carácter del presidente era inspirar una predisposición positiva hacia su persona, con vistas a formar un capital de buena voluntad y confianza hacia las decisiones presidenciales. El resultado de esta estrategia fue una presidencia intensamente personalizada.

Es de notar que el estilo centrado en la personalidad del presidente Vicente Fox no acarrió una concentración de poder equivalente, como cabría esperar de atender al lugar común asociado con el caudillismo y caciquismo mexicanos. Tampoco resultó en un populismo de la índole de Hugo Chávez. En cambio, se tradujo en la marginalización paulatina de la presidencia del centro de la política nacional. La concentración en los aspectos personales del presidente llevó a una presidencia disminuida por los fracasos del individuo.

El estilo personal del presidente impone un sello a la institución presidencial, pues repercute sobre la dotación de autoridad moral y/o política del cargo. Esto sugiere que la fuerza del individuo influye sobre la legitimidad de la institución. Es decir, que la institución presiden-

³³ Peterson, *op. cit.*, p. 369.

cial puede verse perjudicada por el estilo individual. En todo caso, la institución y el individuo se influyen mutuamente.

Tan pronto como el “lado humano” del presidente Fox se apoderó del cargo presidencial, las debilidades inherentes de la institución —como las describió Juan J. Linz al comienzo de la década de 1990— quedaron a la vista: la tensión entre los elementos plebiscitarios de un régimen presidencial y un sistema multipartidista; la ambigüedad entre un cargo que mezcla los atributos de una cabeza de Estado con los compromisos de partido de un presidente de gobierno, y las restricciones que impone la separación de poderes sobre el presidente, contradiciendo el sentido de poder y misión derivados del mandato popular.³⁴ Una de las consecuencias de esta evolución de la autoridad presidencial fue la influencia sin precedentes de los partidos sobre el proceso político, la participación incesante de líderes de partido en la política cotidiana y el gobierno fragmentado que el público percibió como desorientado e incoherente.

Se pueden anticipar los efectos de la personalidad del individuo sobre la institución, concretamente en el ámbito de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, donde la relevancia adquirida por este último pareciera haberse convertido en un rasgo perdurable del sistema político del México postautoritario. Paradójicamente, el fracaso de la presidencia plebiscitaria aportó un cambio profundo a la institución presidencial que no era parte de las intenciones originales de los foxistas. Sin embargo, los efectos derivados del estilo presidencial de Vicente Fox sobre la institución de la presidencia se podrán medir tan sólo cuando otro presidente asuma el cargo en diciembre del año 2006.

³⁴ Juan J. Linz, “Presidential or parliamentary democracy: Does it make a difference?”, en Juan J. Linz y Arturo Valenzuela (eds.), *The failure of presidential democracy. Comparative perspectives*, Baltimore y Londres, The Johns Hopkins University Press, 1994.

VIII

EL SURGIMIENTO DE UN ELECTORADO DE DERECHA*

Durante buena parte del siglo xx en México la derecha fue considerada una alternativa política ilegítima. Se asociaba con la contrarrevolución, con intereses antipopulares o antinacionales, o, cuando menos, con los enemigos del cambio y del progreso. La derecha era una “fuerza del mal”, una identidad política negativa. En las percepciones públicas los rasgos de la derecha estaban definidos no tanto por programas partidistas específicos como por episodios históricos de enfrentamiento entre liberales y conservadores en el siglo xix, o de revolucionarios y contrarrevolucionarios en las primeras décadas del xx.

Dados estos antecedentes resulta casi incomprensible que en la elección de 2000, cuando estaba en juego la derrota de la añosa hegemonía del Partido Revolucionario Institucional, PRI, haya resultado victorioso Vicente Fox, el candidato del Partido Acción Nacional, PAN. Por décadas este partido ha sido casi el único depositario de los estereotipos que forman la imagen pública de la derecha mexicana; su asociación con el cambio político empezó a construirse a partir de la insurrección electoral que encabezó en los años ochenta, gracias a la cual a fines de siglo el partido conquistó un número creciente de municipios en el norte del país. Aun así, en 2008 Acción Nacional sigue siendo visto como un partido afín a los ricos y cercano a la Iglesia católica.¹

En su momento e incluso después, las implicaciones ideológicas de la victoria del PAN en la elección presidencial en 2000 fueron minimizadas; fue interpretada, primero, como un triunfo de la personalidad y de la capacidad de movilización del candidato Fox, y luego, como resultado de las exigencias de cambio del electorado. El triunfo del pa-

* Publicado con el título: “AN en el poder: el triunfo de un electorado de derecha”, en Roger Bartra (comp.), *Gobierno, derecha moderna y democracia en México*, México, Editorial Herder-Konrad Adenauer Stiftung, 2009, pp. 75-90.

¹ Según datos de la Encuesta Nacional Buendía & Laredo/*El Universal*, levantada del 24 al 28 de julio de 2008.

nista fue entendido como la culminación de la transición mexicana o, cuando menos, como un paso firme hacia la democratización política.

En la elección presidencial de 2006 entraron en juego objetivos y variables distintos a la derrota del autoritarismo. La campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición de partidos, la Coalición por el Bien de Todos, CPBT, que encabezó el Partido de la Revolución Democrática, PRD, impuso un decidido tono ideológico a la competencia, cuando fincó su ofensiva en la oposición entre ricos y pobres, misma que se tradujo en forma casi automática en el antagonismo entre izquierda y derecha. Esta estrategia estaba fundada en el presupuesto de que el número de pobres en el país garantizaba la mayoría de votos al candidato que adoptara sus causas. Sin embargo, los resultados de la elección desmintieron esta premisa. Más allá de las disputas en torno al estrechísimo margen de votos entre los principales contendientes (menos de 0.5 %), López Obrador y Felipe Calderón, el candidato del PAN, lo cierto es que en esos meses este último logró movilizar a amplias franjas del electorado que incluían a ricos y a pobres.

En el contexto polarizado en que se desarrollaron primero la campaña presidencial y después la movilización de protesta postelectoral que puso en pie López Obrador para rechazar los resultados oficiales de la elección, la preferencia por Felipe Calderón aparece como una reacción negativa al candidato de la CPBT. Sin embargo, los votos por Acción Nacional también expresaban el deseo de continuidad en el gobierno o la identificación del votante con el candidato panista y con su programa. En todo caso, lo cierto es que la victoria de Acción Nacional en 2006 ilustra la paulatina consolidación de identidades partidistas en el electorado mexicano. Esta tendencia había sido apuntada en el periodo 1994-2000, de suerte que los resultados posteriores hablarían de una estabilización de las fracturas ideológicas del electorado mexicano.²

² Esta observación confirma la tendencia que apuntan desde 1994 Fernanda Somuano y Reynaldo Ortega de que la identidad partidista define el comportamiento electoral. Véase Fernanda Somuano y Reynaldo Yunuen Ortega Ortiz, "La identificación partidista de los mexicanos y el cambio electoral, 1994-2000", *Foro Internacional*, vol. XLIII, enero-marzo de 2003, núm. 1, pp. 10-38. Este artículo también

Este artículo se propone responder algunas preguntas que provoca el nuevo triunfo de Acción Nacional en la elección presidencial, “¿Por qué ganan?”³ ¿Por qué un partido que es identificado con la defensa de los ricos, del privilegio y del conservadurismo social puede triunfar en una sociedad mayoritariamente pobre, que se ufana de sus orígenes revolucionarios y que ostenta valores modernos, por ejemplo, en relación con la planificación familiar o el papel de la mujer?⁴

La hipótesis que aquí se examina sostiene que Acción Nacional logró retener la Presidencia de la República gracias a un electorado que se identificaba con las posturas y las estrategias del PAN, que se formó en buena medida como reacción a las posiciones y políticas de la izquierda. Los resultados de encuestas levantadas entre 2005 y 2006 indican que la victoria panista se debió a la estabilización de la identidad partidista de un sector del electorado, estimulada por la competencia electoral, y por las estrategias que adoptaron los partidos políticos durante la campaña presidencial y la movilización postelectoral. Como es obvio, la formación de un electorado de derecha con estas características no es un fenómeno aislado, sino que se inscribe dentro de un proceso más amplio de partidización de la vida política.

La primera parte de este artículo revisa las percepciones públicas de la identidad ideológica de los tres principales partidos, PAN, PRI y PRD; la segunda está dedicada a la autoidentificación ideológica de los votantes mexicanos en 2007; por último, se analizan las diferencias entre las elecciones presidenciales de 2000 y de 2006 como efecto de la decantación ideológica de los partidos y del electorado.

ofrece un análisis de los diferentes modelos de explicación de la relación entre identidad partidista y comportamiento electoral.

³ Luis Salazar Carrión, “¿Por qué ganan?”, *Nexos*, vol. xxix, núm. 355, julio de 2007, pp. 29-32.

⁴ A este respecto véase por ejemplo, Soledad Loaeza, “Cultural change in Mexico at the turn of the century: the secularization of women’s identity and the erosion of the authority of the Catholic Church”, en Frances Hagopian (ed.), *Contemporary Catholicism in Latin America*, Notre Dame, University of Notre Dame Press, 2009.

LAS PERCEPCIONES PÚBLICAS DE LA IDENTIDAD IDEOLÓGICA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

La distinción entre izquierda y derecha es en sí misma un tema de debate. Algunos consideran que se trata únicamente de una referencia artificial carente de contenido real, y no falta quien afirme que la opinión pública mexicana desconoce el significado de esos conceptos, entre otras razones porque el comportamiento de los partidos no corresponde a paradigmas internacionales. Todo esto pudo haber sido cierto durante la hegemonía priista que, tras el disimulo de una representatividad nacional que se imponía a las diferencias ideológicas, reducía el *continuum* izquierda-derecha. Sin embargo, el arribo del pluripartidismo amplió los alcances del espectro ideológico mexicano, en buena medida porque para obtener votos en la competencia electoral los partidos se ven obligados a diferenciarse unos de otros, pues uno de los motores de la participación es la creencia de que al cruzar su boleta el ciudadano está efectivamente eligiendo entre opciones diversas. En estas condiciones los términos izquierda y derecha ayudan a organizar el universo simbólico y la información política; aunque esas nociones sean sólo etiquetas relativamente vagas son una especie de taquigrafía en la que se apoya la opinión para orientar su comprensión del acontecer político. Así, en 2005, el periódico *Reforma* levantó una encuesta nacional en la que preguntaba acerca de la utilidad de los términos izquierda y derecha para distinguir a los partidos políticos. La mitad de los encuestados respondió que le eran útiles (cuadro 1); tales nociones carecían de significado para el 13% que respondió “no sabe”; en cambio, del 37% que respondió que no eran útiles, es probable que muchos tuvieran una idea de lo que significaban esas categorías, pero estuvieran insatisfechos con la forma como estaban representadas en los partidos mexicanos, y por esa razón afirmaron que no servían para distinguirlos.

Datos de 2006 y de 2007 muestran que la utilidad de la oposición izquierda/derecha como eje ordenador de la realidad política fue duradera y que incluso aumentó. En junio de 2007, Consulta Mitofsky dio a conocer los resultados de una encuesta en la que más de 70% de

CUADRO 1. ¿Los términos de “izquierda” y “derecha” le son útiles o no para distinguir a los partidos políticos?

Sí le son útiles	50%
No le son útiles	37%
No sabe	13%

FUENTE: Alejandro Moreno, “La izquierda y la derecha existen”, *Reforma* <www.reforma.com>, 27 de noviembre de 2005.

las respuestas identificó al PAN como un partido de derecha o de centro-derecha, y más de 71% al PRD como un partido de izquierda o de centro-izquierda (cuadro 2). Estos datos sugieren que la polarización de las fuerzas políticas que se produjo durante la campaña presidencial y la movilización postelectoral del verano de 2006, contribuyó a afianzar en las percepciones públicas la identidad ideológica de los dos principales partidos en la contienda, PAN y PRD, así como la imagen de que protagonizaban un conflicto ideológico. La oposición PAN/PRD traducida en oposición izquierda/derecha fue la referencia central del electorado. A partir de ahí se abrió una creciente fractura en la sociedad,

CUADRO 2. Ubicación de los partidos en el espectro izquierda-derecha

	<i>Izquierda</i>	<i>Centro-izquierda</i>	<i>Centro</i>	<i>Centro-derecha</i>	<i>Derecha</i>
PAN	13.1%	5.2%	10.8%	14.5%	56.4%
PRI	23.9%	8.9%	16.4%	11.2%	39.6%
PVEM	26.1%	13.5%	28.4%	15.7%	16.3%
Convergencia	32.4%	20.2%	26.7%	9.5%	11.2%
Panal	33.2%	16.4%	27.0%	11.0%	12.4%
PAS	37.7%	15.7%	27.1%	8.5%	11.0%
PT	38.6%	23.2%	21.2%	8.2%	8.8%
PRD	57.7%	13.6%	11.5%	5.7%	11.5%
Votante	12.3%	4.8%	16.9%	20.2%	43.1%

FUENTE: Consulta Mitofsky, “La geometría y los partidos políticos en México; la moda es la derecha”, junio de 2007, <www.consulta.com.mx>, consulta del 2 de febrero de 2008.

la cual era más un reflejo de los conflictos partidistas y de la competencia por el poder, que la expresión sólo de diferencias socioeconómicas o de antagonismos de clase.

Es posible, como sostienen algunos, que la opinión pública tenga ideas equivocadas o de plano no sepa qué es la izquierda y qué es la derecha. Sin embargo, este desconocimiento lo han suplido ampliamente las estrategias partidistas y la competencia electoral, pues su experiencia alimenta las percepciones públicas del tipo de opción que representa cada partido. Así por ejemplo, los temas de campaña del candidato López Obrador en 2006: la defensa de los pobres contra el abuso de los ricos, la rebeldía contra la injusticia del statu quo, la denuncia del privilegio y de la codicia extranjera, el recurso retórico al pueblo soberano y a los mecanismos de la democracia directa y del liderazgo plebiscitario proyectaron una imagen de la izquierda, que fue complementada por las estrategias de movilización extraparlamentaria que pusieron en marcha sus defensores durante la protesta postelectoral, cuando rechazaron los resultados oficiales de la elección presidencial. Los elementos que integraban la imagen pública del PRD también contribuyeron si no a formar la imagen del PAN, al menos a precisarla, pues en el juego de espejos que propició la polarización entre ambos partidos, uno pasó a ser el reflejo negativo del otro. El “fundamentalismo democrático”⁵ del candidato López Obrador, le dio la oportunidad al PAN y a su candidato, Felipe Calderón, de identificarse con la democracia constitucional y representativa.

Los resultados del cuadro 2 indican que en 2007 la identificación ideológica del PAN y del PRD no causaba grandes discrepancias en la opinión, a diferencia de lo que ocurría con el PRI. En ese caso una mayoría cercana a 51% lo ubicaba en la derecha o en el centro-derecha, pero 32% consideraba que era un partido de izquierda o de centro-izquierda. Este desacuerdo en cuanto a la identidad ideológica de ese partido se explica, primero, porque la imprecisión ideológica había sido una de las tradiciones del PRI, un recurso que le había permitido

⁵ Piero Meaglia y Ermanno Vitale, “La revuelta antipolítica”, *Nexos*, vol. xxix, núm. 355, julio de 2007, pp. 19-22.

ser muchas cosas para muchos: progresista, modernizador y al mismo tiempo conservador de las más “caras tradiciones nacionales”. No obstante, a seis años de su primera derrota en elecciones presidenciales, el antiguo partido hegemónico había perdido la brújula que en el pasado le aseguraba el presidente de la República. Tampoco tenía una idea clara de su propia posición en el espectro ideológico partidista, en el que el PRD le había arrebatado las banderas de las tradiciones de la Revolución, mientras que la retórica panista se había impuesto como la opción del cambio y no sólo de la alternancia en el poder, sino de la transformación del país y de la defensa de instituciones tradicionales como la familia. Los titubeos y las inseguridades del PRI entre 2000 y 2006 no pasaron inadvertidos para la opinión pública que se percató de las ambigüedades del partido que oscilaba entre el apoyo al PRD y el acercamiento al PAN. De ahí que mientras para algunos el PRI era de derecha, para otros era de izquierda.

Por último, es de llamar la atención que más de 50% de los encuestados ubicó a la mayoría de los partidos pequeños (Partido de Convergencia, PC, Partido Nueva Alianza, Panal, Partido Alternativa Socialdemócrata, PAS, y Partido del Trabajo, PT) a la izquierda o al centro-izquierda, y estas mismas organizaciones, junto con el Partido Verde Ecologista de México, PVEM, fueron identificadas por más de 25% de los encuestados como partidos de centro —a excepción del PT—, una clasificación que sugiere que esa posición queda reservada a organizaciones cuya identidad es percibida como imprecisa o ambivalente.

LA AUTOIDENTIFICACIÓN DE LOS VOTANTES

Esta división ideológica tuvo un impacto duradero en el electorado mexicano y todavía en 2007 —un año después de la elección— se mantenía como eje de organización de la opinión, como se desprende de la autoidentificación partidista de los encuestados en la citada encuesta de Mitofksy de junio de 2007. Más todavía, la serie de mayo de 2003 a julio de 2007 que aparece en el cuadro 3 muestra el proceso de partidización del electorado. Por ejemplo, en mayo de 2003, 41.8% de

CUADRO 3. Identidad partidista

	<i>Panista</i>	<i>Priista</i>	<i>Perredista</i>	<i>Ninguno</i>
Mayo de 2003	21.9%	22.9%	9.4%	41.8%
Agosto de 2003	24.8%	23.3%	9.6%	37.5%
Mayo-julio de 2004	22.2%	26.7%	10.7%	36.9%
Mayo-julio de 2005	16.4%	29.2%	12.5%	38.2%
Mayo-julio de 2006	21.7%	18.4%	18.4%	38.4%
Octubre-diciembre de 2006	29.1%	17.1%	16.9%	33.8%
Febrero-abril de 2007	26.9%	21.0%	13.4%	34.3%
Mayo-Julio de 2007	26.0%	23.4%	13.5%	33.4%

FUENTE: Consulta Mitofsky, "Posicionamiento y fortaleza de los partidos políticos", julio de 2007, <www.consulta.com.mx>, consulta del 2 de febrero de 2008.

los encuestados afirmaba no tener identidad partidista; cuatro años después este porcentaje había caído a 33.4 por ciento.⁶

Como podemos ver en ese cuadro, el proceso de partidización favoreció al PAN. En mayo de 2003 21.9% de los encuestados se autoidentificaba como panista. Tres años después, inmediatamente antes de la elección, esta proporción era prácticamente la misma, 21.7%. Pero entre octubre y diciembre de 2006 el porcentaje era de casi 29%, es decir, el bloqueo de la avenida Reforma de la Ciudad de México, que sostuvieron los lopezobradoristas para rechazar los resultados oficiales de la elección, incrementó la proporción de panistas. En el primer semestre de 2007 el porcentaje de panistas se mantuvo casi igual.⁷ En cambio, la identidad perredista se duplicó de 9.4% en mayo de 2003 a 18.4% en mayo-julio de 2006, pero disminuyó a casi 17% en las semanas posteriores a la movilización postelectoral, al igual que la identidad

⁶ Sin embargo, en la encuesta de julio de 2008 de Buendía & Laredo antes citada, el número de personas que dijeron no tener identidad partidista había aumentado nuevamente a 41 por ciento.

⁷ Según una encuesta posterior de Mitofsky, la identidad panista mostró una sostenida tendencia a la baja en el segundo semestre de 2007, para llegar a 23.3% en febrero de 2008. Véase Consulta Mitofsky, "Los partidos políticos. La búsqueda del Congreso", <www.consulta.com.mx>, febrero de 2008, consulta del 23 de julio de 2008.

priista. Tal vez en este caso el dato más notable es la disminución del porcentaje de personas que no se identificaban con alguno de los partidos que pasó de 38% antes de la elección a un poco menos de 34% después de la movilización postelectoral. Más todavía, la campaña electoral tuvo un efecto muy negativo sobre la identidad priista que pasó de 29% en julio de 2005, a 18% tres años después. Esta disminución puede atribuirse al candidato del PRI, Roberto Madrazo, pero sobre todo a la polarización que protagonizaron el PAN y el PRD.

La información sugiere que la radicalización del perredismo y de su líder López Obrador, las movilizaciones y, en general, la estrategia de confrontación que adoptó en las semanas posteriores a la elección presidencial le significaron al PRD una pérdida de apoyo de menos de dos puntos porcentuales. En cambio, y como lo indican los datos ya citados, esa estrategia parece haber sido muy favorable a Acción Nacional.

La autoubicación del electorado en relación con los partidos ordenados a lo largo del *continuum* izquierda-derecha confirma el avance sostenido de Acción Nacional en la opinión pública. Los resultados del cuadro 2 muestran que en junio de 2007, 43.1% del electorado se decía de derecha; sin embargo, si a ese porcentaje sumamos el poco más de 20% que se autoidentificó como de centro-derecha, el total del electorado que se ve a sí mismo como más cercano al PAN que a ningún otro partido alcanza un impresionante 63%; mientras que solamente 12% se autoidentificó como de izquierda y 4.8% como de centro-izquierda, un total apenas inferior al 17 por ciento.

El acercamiento de la opinión pública al PAN puede explicarse en primer lugar porque es el partido del presidente, y la prominencia de esa institución y el respeto que comanda ejercen una influencia espontánea. Sin embargo, pueden apuntarse otras razones. Por ejemplo, al tener en sus manos las riendas del gobierno federal, los panistas disponen de amplios recursos para promover sus posturas y sus líderes, así como sus decisiones. Además, normalmente, todo partido en el poder atrae apoyo como si fuera un imán. Ciertamente, este respaldo no es constante y está sujeto a los vaivenes de la coyuntura; sin embargo, en el caso de Acción Nacional es muy posible que el partido se haya bene-

ficiado también de la estrategia de Andrés Manuel López Obrador que todavía en 2007 buscó mantener vivo el conflicto postelectoral. Los datos aquí examinados indican que el electorado nunca ha estado partido en dos mitades más o menos equiparables, pero en términos ideológicos las percepciones públicas tendían a aglutinar a las fuerzas políticas en torno al eje derecha/izquierda, y una distribución de esa naturaleza favorece más al PAN que al PRD. Este movimiento indica que la defensa del statu quo se impone ante fuerzas que son percibidas como desestabilizadoras.⁸

LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS ELECCIONES DE 2000 Y DE 2006

El impacto de la afiliación ideológica —o partidista— del gobierno sobre el electorado puede ser una de las explicaciones del corrimiento hacia la derecha; es decir, la opinión pública recibió la influencia del primer gobierno panista en la Presidencia de la República, el cual promovía la empresa privada, el acercamiento con Estados Unidos y la imagen de México como un país católico. De ahí que el significado del voto en la elección de 2000 sea distinto del que tuvo en 2006. En el primer caso, un porcentaje importante de electores estuvo dispuesto a hacer a un lado su propia identidad ideológica para lograr la derrota del PRI, esto es, emitió un “voto estratégico”, votó por el candidato que tenía más probabilidades de vencer al contrincante priista. En cambio, seis años después, este tipo de voto fue desplazado por el “voto partidista”, o voto ideológico, lo cual significó que en la coyuntura de julio de 2006 las preferencias ideológicas guiaron el comportamiento electoral.

El cuadro 4 compara la autoidentificación ideológica de los votantes en ambas elecciones y su preferencia electoral. De esta información

⁸ Este movimiento de la opinión es congruente con desarrollos posteriores. En junio de 2008, 43% de la opinión consideraba que el conflicto de 2006 no estaba resuelto; sin embargo, el porcentaje que consideraba que Felipe Calderón había obtenido el mayor número de votos en la elección había aumentado en un año de 50 a 57%. Consulta Mitfoks, “Dos años después de la elección presidencial” <www.consulta.com.mx>, junio de 2008, consulta del 24 de julio de 2008.

resulta que Felipe Calderón obtuvo menos de la mitad (19%) del apoyo que recibió Vicente Fox de votantes de izquierda (40%), y López Obrador casi el doble de votos de izquierda (62%) que Cuauhtémoc Cárdenas seis años antes (35%). Asimismo, Fox tuvo más apoyo de electores de centro que Calderón, pero éste movilizó a más votantes que se autoidentificaban con la derecha. Estos datos también indican que entre los votantes de Calderón había mayor homogeneidad ideológica que entre quienes en 2000 votaron por Fox; en cambio, la mayor parte del voto que ese año recibió Cárdenas era de izquierda. Seis años después, la diversidad ideológica fue característica de los votantes por el candidato de la CPBT, López Obrador: a una clara mayoría de izquierda, 62%, se sumó 37% de centro y 26% de derecha, frente a los respectivos 12 y 11% que habían votado por Cárdenas.

CUADRO 4. Si hoy hubiera elecciones para presidente de la República, ¿por quién votaría usted?

Elección presidencial de 2000

	<i>Cuauhtémoc Cárdenas (PRD)</i>	<i>Francisco Labastida (PRI)</i>	<i>Vicente Fox (PAN)</i>
Izquierda	35%	18%	40%
Centro	12%	31%	51%
Derecha	11%	50%	38%

Elección presidencial de 2006

	<i>López Obrador (PRD)</i>	<i>Roberto Madrazo (PRI)</i>	<i>Felipe Calderón (PAN)</i>
Izquierda	62%	13%	19%
Centro	37%	21%	36%
Derecha	26%	29%	42%

FUENTE: Alejandro Moreno, "La izquierda y la derecha sí existen", *Reforma*, 27 de noviembre 2005, <www.reforma.com.mx>, consulta del 11 de agosto de 2008; Alejandro Moreno *et al.*, "Polarizan votos punteros", *Reforma*, 23 de junio de 2006, <www.reforma.com.mx>, consulta del 11 de agosto de 2008.

¿Cómo puede explicarse esta evolución del partidismo y lo que parece ser la emergencia de orientaciones ideológicas más claras para el electorado? Esta fractura ideológica es la proyección de transformaciones experimentadas por el sistema político de la hegemonía a un sistema pluripartidista competitivo en el que los partidos políticos tienen que diferenciarse para ganar votos. Obligados como están a movilizar el voto, los candidatos de los distintos partidos tienen que demostrar que no es lo mismo votar por uno que por otro, y que es preciso elegir. Muy probablemente durante la campaña electoral exageran las diferencias que los separan, como queda demostrado después, una vez que están en el poder; sin embargo, durante la competencia por los votos es importante que subrayen las diferencias entre ellos porque la percepción de éstas alienta la participación electoral. La fractura ideológica que se abrió en el electorado era entonces un reflejo de las estrategias de confrontación de los candidatos durante la campaña presidencial, en particular de la estrategia del PRD.

En la evolución de los partidos políticos hacia el reforzamiento de sus diferencias ideológicas influyeron otros factores. Por ejemplo, en los conflictos en el interior del PAN y del PRD la ideología, o la “doctrina”, también fue un instrumento de lucha entre corrientes rivales, de suerte que el desenvolvimiento de estas disputas internas propició la profundización de la definición ideológica de estas organizaciones.

En Acción Nacional la ideologización fue también una secuela de las tensiones entre el presidente Fox y los legisladores y la dirigencia panista, sobre todo en el periodo 2000-2003, que abrió una polémica entre “doctrinarios” y “foxistas”. La lucha por el control del partido condujo al recurso a la ideología, a la “identidad doctrinaria”, como instrumento de lucha por el poder en el seno del partido. La lealtad a los “principios del partido” fue la primera prueba de legitimidad, contrariamente a lo que había ocurrido seis años antes, cuando la popularidad del candidato Vicente Fox rebasó las fronteras del partido y legitimó su candidatura entre los panistas. Así, si la ideología partidista fue inicialmente un arma de los “doctrinarios” entonces encabezados por Felipe Calderón, en contra de los arribistas, como Fox y sus allegados, entre 2005 y 2006 se sumó al efecto de la campaña electoral para pre-

cisar la ideología panista, pero sobre todo, para convertir al partido en una organización en la que la ideología desempeña un papel central. En este proceso llegó a su fin el partido de protesta, el *catch-all party* de los años ochenta.

CONCLUSIONES

La mayor parte de las explicaciones de la elección de 2006 han subestimado las preferencias políticas del electorado. Las instituciones y las autoridades electorales han sido el centro de atención, mientras que la evolución de los votantes ha pasado a segundo plano. No obstante, el surgimiento y el desarrollo de identidades políticas relativamente definidas y estables, fundamentadas en la afiliación ideológica dentro del espectro izquierda-derecha, ofrecen una poderosa explicación de los acontecimientos de aquel año. Durante la campaña presidencial de 2006 los seguidores de Felipe Calderón eran tan vehementes y estaban tan comprometidos como podían estarlo los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador.

Los resultados de las encuestas aquí examinadas muestran las limitaciones del enfoque sociodemográfico en la explicación de las preferencias políticas o de las afiliaciones partidistas, como ocurre en Brasil “el patrón de apoyo político no es el que podría predecirse con base en un modelo de fracturas simples en el que los candidatos conservadores obtienen mejores resultados entre los ricos y los candidatos de izquierda entre los pobres”,⁹ sino que responde a ideas, valores y actitudes que constituyen identidades ideológicas. Este proceso de formación de electorados ideologizados también indica que, una vez terminada la transición, también disminuye el voto estratégico y se agota la utilidad de los *catch-all party*, los partidos de protesta cuya ideología es imprecisa porque su objetivo es movilizar a un electorado diverso.

⁹ Scott Mainwaring, *Rethinking party systems in the third wave of democratization. The case of Brazil*, Stanford, Stanford University Press, 1999, p. 45.

En 2008, en México la derecha es una fuerza política que se identifica mayoritariamente con el PAN. Las estrategias y acciones del partido han alimentado preferencias electorales y éstas, a su vez, han tendido a generar patrones que son la base de una identidad política firme. Este desarrollo es el apoyo de los gobernadores de Baja California, que desde 1989 es gobernada por el PAN, y de otros estados como Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Morelos, donde Acción Nacional ha estado en el poder más de seis años sin interrupción, para no mencionar a diputados y senadores federales, presidentes municipales y diputados locales cuyas palabras, comportamientos y decisiones forman la identidad de la derecha.

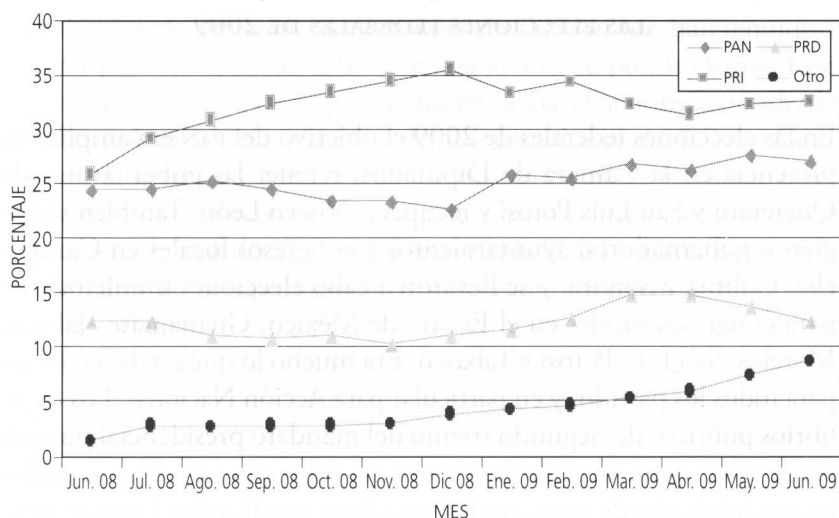
IX

LA DERROTA A MEDIO CAMINO: LAS ELECCIONES FEDERALES DE 2009

En las elecciones federales de 2009 el objetivo del PAN era ampliar su presencia en la Cámara de Diputados, retener las gubernaturas de Querétaro y San Luis Potosí y recuperar Nuevo León. También se eligieron gobernadores, ayuntamientos y congresos locales en Campeche, Colima y Sonora, y se llevaron a cabo elecciones municipales y para congresos locales en el Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, San Luis Potosí y Tabasco. Era mucho lo que estaba en juego para todos los partidos y en particular para Acción Nacional. Los equilibrios políticos del segundo trienio del mandato presidencial pueden ser decisivos para una conclusión exitosa del segundo gobierno panista. Los resultados de estos comicios también condicionan la competencia por la Presidencia de la República en 2012.

La dirigencia panista sabía que la coyuntura no le favorecía. Los comicios se llevaron a cabo en medio de un grave deterioro de la economía que se vio arrastrada por la crisis financiera de Estados Unidos; la violencia de la lucha contra el narcotráfico enrarecía el clima político y generaba crecientes dudas sobre la efectividad de la estrategia gubernamental. En este contexto era previsible que el partido en el gobierno perdiera apoyo. Desde enero, diferentes encuestas prelectorales indicaban una preferencia constante por el PRI, mientras el PRD se desmoronaba víctima de sus conflictos internos (gráfica 1). Aun así, la magnitud de la derrota que sufrió el gobierno fue una amarga sorpresa, de 13.7 millones de votos que recibió en 2006 pasó a 9.5 millones. En consecuencia, perdió curules en la Cámara, gubernaturas y municipios. Igualmente perturbador fue el éxito del PRI que obtuvo más de 12.5 millones de votos; el antiguo partido oficial conquistó las gubernaturas que perdió el PAN, y registró avances muy importantes en el nivel municipal. Todo ello gracias al voto de quienes estaban insatisfechos con los gobiernos panistas y con el desempeño del PRD.

GRÁFICA 1. Preferencia electoral para diputados federales, junio de 2008-junio de 2009



FUENTE: Consulta Mitofsky, *Así van en... junio. Rumbo al 5 de julio de 2009*, <<http://72.52.156.225/Estudio.aspx?Estudio=asivan-dipfed>>, junio de 2009, consulta del 20 de julio de 2009.

El PAN dio el paso de la oposición al poder en 2000. La transición no fue sencilla porque durante décadas había estado sujeto a una lógica opositora que, una vez en el poder, se tradujo, en algunos casos, en desconcierto ante lo que significaba la responsabilidad de gobernar, y, en otros, en sometimiento a los mismos límites que en el pasado acotaban a los gobiernos priistas. En 2009 el PAN había asumido plenamente su condición de partido gobernante: ejercía la Presidencia de la República por segunda ocasión, varios gobiernos estatales y numerosos municipios ricos y poblados. Muchos de los problemas que enfrentaba tenían que ver con su responsabilidad gubernamental, por ejemplo, ¿cómo llevar a cabo reformas económicas o políticas de fondo y cumplir con las promesas de dos campañas electorales, sin alterar los equilibrios básicos del sistema político y, además, ganar elecciones?, ¿cuál debe ser su relación con el presidente de la República cuando éste es uno de los suyos: la *sana distancia* o el apoyo incondicional?

Para Acción Nacional, la elección del 5 de julio de 2009 fue una evaluación del compromiso de los gobiernos panistas con el cambio y de su capacidad de gobernar; pero sus resultados también pusieron sobre la mesa un tema plagado de riesgos: la relación entre el gobierno y su partido. La primera parte de este artículo es una rápida revisión del PAN en los comicios para la renovación de la Cámara de Diputados, y la segunda analiza las tensiones que se han presentado entre el partido y los gobiernos panistas en los últimos nueve años.

EL PARTIDO EN EL PODER Y LA ELECCIÓN FEDERAL

Todos los partidos enfrentan los mismos desafíos generales en una elección: identificar las demandas y las preferencias del electorado, diseñar campañas atractivas, lanzar candidatos convincentes, derrotar a sus adversarios y conquistar el mayor número posible de posiciones. A su vez cada partido encara retos particulares según el papel que tiene en el sistema político. Así, en 2009, mientras algunas organizaciones minoritarias como el PVEM, el PT, Convergencia, el Panal y el PSD luchaban por mantener el registro como partido político nacional, los objetivos del PRI eran reconstruir su presencia nacional y su fuerza en el Poder Legislativo, preservar la unidad y un equilibrio estable entre gobernadores, legisladores y dirigencia nacional. El PRD, por su parte, tenía que resolver las tensiones entre las diferentes corrientes internas y, en particular, atender los efectos disruptivos del liderazgo paralelo de Andrés Manuel López Obrador.

La condición de partido en el gobierno brindaba ventajas obvias a Acción Nacional en la competencia por los votos. Gracias a su asociación con la Presidencia de la República, el partido y sus candidatos gozaban de mayor visibilidad que otros, o podían atribuirse logros del gobierno federal, cuando no recursos adicionales a los que recibían los demás candidatos, no obstante las restricciones que impuso la reforma electoral de 2007.¹ La contraparte de esta situación de privilegio

¹ Para reducir la asimetría entre los partidos de oposición y los partidos de gobierno el artículo 2.2 del Cofipe estipula que “durante las campañas electorales fede-

es que el partido que gobierna compromete todos los días el capital político que lo llevó al poder. Así, a los candidatos del PAN en 2009 les tocaba pagar la factura de acontecimientos adversos del primer semestre del año: la crisis financiera que se desencadenó en Estados Unidos el año anterior, cuyos efectos en México fueron muy severos; la epidemia de fiebre porcina, A H1N1, a la cual el gobierno respondió con prontitud, pero contribuyó a la caída de la actividad económica, y el agravamiento de la violencia vinculada con la delincuencia organizada y, en particular, con el narcotráfico en estados como Chihuahua y Michoacán. Nueve años de gobierno federal panista han desgastado la imagen y la organización del partido, así como su fuerza política real y su coherencia interna.

Para Acción Nacional, los costos concretos del ejercicio de gobierno pueden expresarse de la siguiente manera: a diferencia de las campañas del año 2000 cuando los candidatos panistas podían apostar a la imaginación del elector que estaba dispuesto a escuchar sus promesas, en 2009, el telón de fondo de los candidatos de Acción Nacional era la realidad del gobierno de un presidente panista y un contexto poco propicio de creciente incertidumbre, un clima de opinión en el que se multiplicaban las críticas, proliferaban los desacuerdos y crecían la desilusión y el pesimismo en relación con el futuro.

Esta atmósfera portaba malos augurios para el partido en el gobierno y también para la elección; de hecho, muchos pronosticaban una tasa de abstencionismo superior a 60%. Esta predicción se fundaba en el ánimo negativo que se había apoderado de amplios sectores de opinión ante las dificultades de la coyuntura. No obstante, si bien encuestas recientes muestran que los mexicanos desconfían de los partidos políticos, también reconocen que sin partidos no hay democracia. Es decir, que las percepciones críticas pueden haber afectado a todos los partidos existentes, pero no han minado la valoración positiva de la

rales y locales y hasta la conclusión de la jornada comicial, se suspenderá la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda de los tres ámbitos de gobierno”, Instituto Federal Electoral, *Análisis comparativo de la reforma electoral, constitucional y legal 2007-2008. Documento de difusión con fines informativos*, México, Instituto Federal Electoral, noviembre de 2008, p. 119.

CUADRO 1. Participación electoral, 2000-2009

<i>Elección</i>	<i>Total</i>	<i>%</i>
2000	37 601 618	63.97
2003	26 968 371	41.68
2006	41 791 322	58.55
2009	34 126 794	44.68

FUENTE: Instituto Federal Electoral, <http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Estadisticas_y_Resultados_Electorales/>; Instituto Federal Electoral/ Programa de Resultados Electorales Preliminares, <<http://www.ife.org.mx/prep2009/info.html>>, consulta del 20 de julio de 2009.

mecánica democrática. En 2006 se levantó una encuesta sobre cultura política, cuyos resultados indicaban la existencia de una cultura democrática “estable y robusta”, aunque los encuestados expresaron su desconfianza hacia las instituciones de procuración de justicia, que no resolvían los problemas de corrupción e inseguridad.²

Los resultados de la elección de 2009 son consistentes con esta apreciación. Pese a las predicciones en contrario, la participación en términos absolutos fue de más de 34 millones de votos, una cantidad muy superior a los 26.7 millones emitidos en 2003, aunque en términos relativos el incremento es menos importante, de 41.7 a 45% (cuadro 1). De hecho, la campaña de 2009 logró despertar un interés inusitado para este tipo de competencias, que tradicionalmente carecen de atractivo. Esta novedad puede explicarse por la presencia que han adquirido el Poder Legislativo y los partidos, sus dirigencias y los liderazgos de las respectivas bancadas en el debate público; también indica la *despresidencialización* del sistema político. Más todavía, habría que destacar como un logro de los votantes mexicanos la estabilización de la actividad electoral y el buen desempeño del Instituto Federal Electoral, IFE, en vista de que la jornada se llevó a cabo normalmente y sin mayores contratiempos, no obstante el rudo golpe que le propinó el conflicto postelectoral de 2006.

² Pablo Parás y Carlos López, “Auditoría de la democracia: México 2006”, *Política y Gobierno*, vol. xiv, núm. 2, 2° semestre de 2007, pp. 491-512.

El aumento de la participación del voto por el PRI —casi el doble de la cantidad que recibió en 2003— y del voto nulo, sugiere que en 2009 la mayoría de los electores quiso castigar a los partidos (cuadro 2). Así puede interpretarse buena parte de los sufragios por el antiguo partido oficial que es el adversario común del PAN y del PRD. Este último sufrió un auténtico colapso, pues los 11.9 millones de sufragios que recibieron los candidatos perredistas en 2006, tres años después se vieron reducidos a 4.1 millones.

CUADRO 2. Votos por diputados federales de mayoría relativa, 2000-2009

	2000		2003		2006		2009	
	<i>Millones de votos</i>	%	<i>Millones de votos</i>	%	<i>Millones de votos</i>	%	<i>Millones de votos</i>	%
PAN	14 212 032	38.2	8 273 012	30.8	13 753 633	33.39	9 549 798	27.98
PRI	13 722 188	36.9	6 228 066	23.2			12 520 418	36.68
PRI+PVEM			3 650 721	13.6	11 619 679	28.21	142 874	0.41
PRD	6 942 844	18.7	4 734 612	17.6			4 164 393	12.2
PRD+PT+CDPPN					11 941 842	28.99		
PT			643 473	2.4			1 216 237	3.56
PT+CDPPN							84 207	0.24
PVEM			1 076 728	4.0			2 219 861	6.5
CDPPN			605 811	2.3			808 674	2.36
PARM	271 781	0.7						
PAS			198 692	0.7				
PCD	427 233	1.1						
PDS	698 904	1.9						
PFC			124 240	0.5				
PLM			108 937	0.4				
PMP			243 419	0.9				
PSN			72 511	0.3				
PNA					1 872 283	4.54	1 164 999	3.41
PASC-PSD					845 749	2.05	353 261	1.03
Candidatos no registrados	27 526	0.1	16 452	0.1			62 101	0.1
Anulados	862 885	2.3	903 361	3.4			1 839 971	5.3

FUENTE: Instituto Federal Electoral, <http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Estadisticas_y_Resultados_Electorales/>; Instituto Federal Electoral/Programa de Resultados Electorales Preliminares, <<http://www.ife.org.mx/prep2009/info.html>>, consulta del 20 de julio de 2009.

Durante la campaña electoral, por primera vez se planteó una discusión pública amplia sobre la anulación del voto, el voto en blanco o el voto por candidatos no registrados, como una estrategia válida de los electores que deseaban expresar su rechazo a todos los partidos existentes, pero respetando las reglas del juego democrático. En el curso del primer semestre del año surgió un movimiento espontáneo en diferentes ciudades del país que promovía esta forma de protesta; su medio fundamental de difusión fueron las nuevas tecnologías de comunicación: teléfonos celulares y redes sociales en internet como twitter y facebook. Esta movilización fue muy mal recibida por los partidos y el gobierno, que incluso trataron de frenarla con el argumento de que obedecía a una inspiración antidemocrática.

No obstante, esta forma de protesta tuvo eco en 221 distritos donde la cantidad de votos anulados fue superior a la que se registró tres años antes; por ejemplo, en el distrito xv del Distrito Federal y en el ix de Michoacán representó 13% del total de votos emitidos.³ El porcentaje nacional de votos anulados fue cercano a 6%, en comparación con 2.5% en 2006; y en la capital de la República alcanzó 11%. En once entidades superó el porcentaje de votación del PRD: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán.⁴ Los anulistas emitieron un voto de castigo, al igual que muchos de los que votaron por el PRI.

La derrota del PAN colocó al partido como segunda fuerza en la Cámara con 143 diputados frente a 237 del PRI (cuadro 3). Además, sus candidatos a gobernador en San Luis Potosí y en Querétaro fueron derrotados, y no logró recuperar Nuevo León. En el Estado de México el partido se dejó arrebatar 21 municipios, la mayoría de los cuales gobernaba desde 1996. Entre ellos destacan algunos de los más poblados del estado, que formaban el llamado *corredor azul*: Atizapán de

³ José Merino, <<http://eldefe.com/2009/07/10/voto-nulo-2009/>>, consulta del 20 de julio de 2009.

⁴ Propuesta Cívica, A.C., “El voto nulo se consolidó como una opción de protesta válida, legal y legítima”, <<http://emarchita.wordpress.com/2009/07/07/cifras-del-voto-nulo/>>, consulta del 20 de julio de 2009.

CUADRO 3. Curules por partido en 2009

	<i>Totales</i>	<i>Mayoría</i>	<i>Plurinominales</i>
PRI	237	184	53
PAN	143	70	73
PRD	71	39	32
PVEM	21	4	17
PT	13	3	10
PNA	9	0	9
CD	6	0	6

FUENTE: Elaboración propia con base en información del Instituto Federal Electoral, <http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Detalle_Procesos_Electorales/?vgnextoid=4b5c8fd75e92210VgnVCM1000000c68000aRCRD>, consulta del 28 de agosto de 2009.

Zaragoza, Cuatitlán Izcalli, Naucalpan, Tecámac, Tlalnepantla y Toluca. Cabe hacer notar que el Estado de México es el eje de las ambiciones presidenciales del PRI, dado que el gobernador de la entidad, Enrique Peña Nieto, es a mediados de 2009, el precandidato más fuerte. Acción Nacional también perdió ciudades importantes como Guadalajara y Zapopan, Cuernavaca, Manzanillo, Guanajuato y San Juan del Río.

Acción Nacional: ¿el partido incómodo del presidente?

Como ocurre siempre, la derrota del verano de 2009 dejó al descubierto las tensiones en el seno del panismo. Los resultados adversos tienen muchas explicaciones: las críticas a la respuesta del gobierno a la crisis económica, las dudas crecientes acerca de la eficacia de la estrategia que ha adoptado para combatir el narcotráfico y para enfrentar en general los problemas de seguridad pública. Pero más allá de todo esto, para muchos dentro de Acción Nacional, las pérdidas dieron la medida del fracaso de una relación de subordinación del partido a la autoridad presidencial. Según Manuel Espino, el predecesor de Germán Martínez Cázares en la presidencia del PAN, la derrota fue consecuencia de “la indebida injerencia del gobierno en los procesos de selección de can-

didatos y el sometimiento de nuestra dirigencia nacional a las decisiones emanadas del poder y no de los órganos internos”.⁵ Efectivamente, en estos comicios un alto porcentaje de los candidatos fue designado por la dirigencia, bajo estrecha supervisión del presidente Calderón, para quien la filiación partidista es una garantía de afinidad ideológica, pero sobre todo, de lealtad personal.

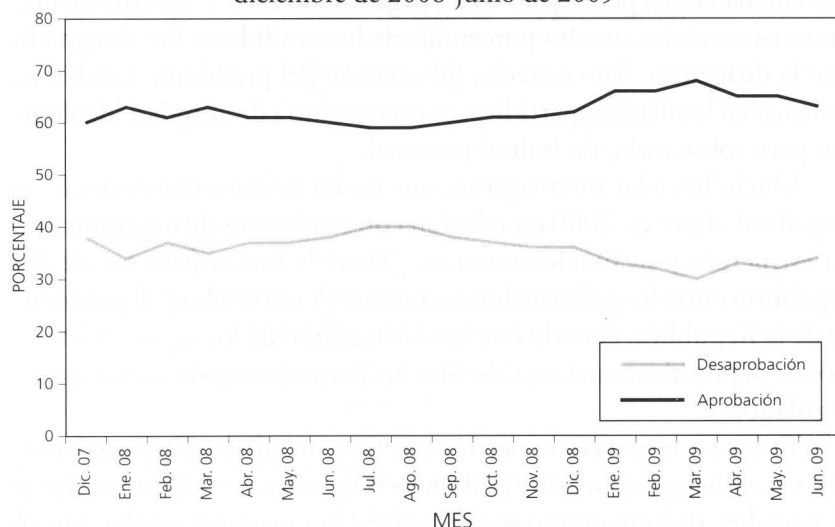
Muchas son las interrogantes que no ha resuelto el PAN desde su llegada al poder en 2000 en relación con sus formas de organización, su estructura y su funcionamiento. ¿Tiene la fuerza para ser eje del equilibrio entre los gobernadores panistas? ¿Y entre ellos y el presidente de la República, cuando éste también es uno de los suyos? ¿Corresponde al presidente del partido fijar los lineamientos de acción de los legisladores?

Todos estos temas son pertinentes para una discusión postelectoral; sin embargo, es urgente definir las relaciones entre el presidente y el partido: ¿qué tan cercanas deben ser? Las encuestas señalan que el presidente Calderón ha logrado mantener un nivel alto y estable de aprobación; estas evaluaciones indicarían la conveniencia de una estrecha identificación entre el PAN y el presidente, para que el primero se beneficiara del prestigio del segundo. No obstante, las señales que emitió la elección sobre este tema son equívocas, porque el partido perdió, a pesar de que el jefe del Ejecutivo recibía una aprobación de más de 60% (gráfica 2).

¿Cómo se explican estos resultados contradictorios? ¿Qué tanto identifica el votante al presidente Calderón con el PAN? Responder a estas preguntas requiere un análisis detenido de las actitudes de la opinión pública en relación con la institución presidencial. A manera de hipótesis puede adelantarse que las calificaciones altas de aprobación que recibe el presidente Calderón se explican por el respeto a la Presidencia de la República como autoridad e institución central del Estado, antes que por las virtudes del individuo que la ejerce. De hecho, durante el gobierno de Vicente Fox se presentó una situación similar.

⁵ Citado en Ernesto Núñez, “El partido está enfermo”, *Enfoque*, 19 de julio de 2009, pp. 4-7, p. 5.

GRÁFICA 2. Aprobación presidencial,
diciembre de 2008-junio de 2009



FUENTE: Consulta Mitofsky, <<http://72.52.156.225/Default.aspx>>, consulta del 20 de julio de 2009.

Esto implica que, a ojos de la opinión pública, la institución presidencial sigue concitando más respeto que otras instituciones políticas. Este fenómeno añade complejidad al tema de las relaciones entre el partido y el presidente. ¿Hasta qué punto está comprometido el PAN con las acciones de gobierno del presidente? ¿Y el presidente Calderón con el PAN?

Los tres pilares del sistema autoritario eran el Estado intervencionista, el presidente de la República y el partido hegemónico. No obstante las apariencias, desde su fundación el PRI fue un instrumento de gobierno del presidente en turno. Esta relación de subordinación se expresaba de muchas maneras, por ejemplo, el jefe del Ejecutivo designaba al presidente del partido, al igual que a las dirigencias de los sectores, y también participaba en la definición de las candidaturas a cargos de elección popular, y su decisión era determinante. En consecuencia, los gobernadores, los legisladores y hasta los presidentes municipales eran responsables, en primer lugar, ante el presidente de

la República; luego, quizá, ante sus electores. La inmensa mayoría —si no es que la totalidad— de las iniciativas legislativas provenían del Ejecutivo, y los diputados y senadores debatían su contenido —en algunos casos introducían cambios menores—, pero las más de las veces aprobaban las propuestas presidenciales que en no pocos casos eran una imposición. Las decisiones gubernamentales estaban tenuemente vinculadas con las plataformas electorales priistas. De hecho, el partido era un mecanismo de control político sujeto a los intereses y propuestas del presidente de la República. Una prueba patente del papel secundario que desempeñaba el PRI es que el nombre de la mayoría de sus presidentes ha caído en el olvido.

Esta relación de subordinación a la autoridad presidencial tuvo implicaciones muy profundas para la plena institucionalización del partido, es decir, para que se afanzara como una organización autónoma atenta a su propia lógica e intereses. Más bien, estaba sujeto a las necesidades y exigencias del presidente de la República. En los años cuarenta y cincuenta, el PRI creció en un contexto de prosperidad económica, el vínculo de dependencia que lo ataba al presidente de la República fue clave para su extensión por todo el territorio nacional y para la construcción de su hegemonía electoral. No obstante, a partir de los ochenta los costos de esta relación superaron con mucho sus beneficios, pues al partido le tocaba pagar el precio de errores de gobierno, así como de políticas antipopulares en cuyo diseño no había intervenido, como recortes presupuestales o privatizaciones.

Cuando Acción Nacional conquistó la Presidencia de la República se propuso evitar la reproducción del modelo anterior de relación entre el jefe del Ejecutivo y su partido. Este objetivo también se justificaba con base en la desconfianza que inspiraba a los panistas el presidencialismo, uno de cuyos soportes había sido la sumisión del PRI a la autoridad del jefe del Ejecutivo. Desde el inicio de su gobierno en diciembre de 2000, Vicente Fox buscó definir su autonomía de decisión en relación con el PAN, porque creía que los compromisos partidistas eran una restricción a su propuesta de cambio. Esta renuencia no se limitaba a la plataforma de gobierno, sino que se extendió a la formación de su gabinete del cual estuvieron ausentes los panistas; en

cambio, recurrió a personas que consideraba expertos que provenían del sector privado.

Los años 2000-2006 fueron frustrantes para el partido porque no logró establecer relaciones armoniosas con el presidente Fox quien, además, no dejaba de expresar su insatisfacción con las exigencias de sus correligionarios y con la labor de los legisladores. A su vez, los panistas en el Congreso reprochaban al presidente la falta de comunicación o su preferencia por propuestas de asesores ajenos al partido. Esta inclinación lo llevó a enfrentarse con la bancada panista, por ejemplo, en los primeros meses de 2001 cuando sometió como iniciativa de ley los Acuerdos de San Andrés, referidos a la solución del conflicto que había surgido en Chiapas en 1994, protagonizado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Al tomar esta decisión, el presidente Fox descartó sin mayores explicaciones, la iniciativa de ley de derechos indígenas elaborada por Acción Nacional; también hizo caso omiso de las objeciones de los legisladores panistas a que los miembros del EZLN hicieran uso de la tribuna en la sala de plenos de la Cámara de Diputados.

La determinación del presidente de evadir al partido provocó casi una rebelión entre los legisladores y militantes que intentaban recordarle que gracias al PAN había llegado al poder; así, la autonomía del partido y su derecho a participar de manera efectiva en las acciones de gobierno se convirtió en bandera de una corriente que empezó a identificarse como antifoxista y que era violentamente crítica de las acciones gubernamentales. En consecuencia, estos años fueron un periodo de divisiones internas y desacuerdos en el seno de Acción Nacional, que entorpecieron las relaciones con el gobierno. Los desfavorables resultados de las elecciones federales de 2003, en los que el voto por el PAN sufrió un retroceso, dieron prueba de que la fórmula del distanciamiento era costosa para el presidente y para el partido.

Las fracturas que se produjeron en el interior del panismo a partir de la discusión a propósito de los límites de la autoridad presidencial en relación con el partido salieron a la luz pública cuando se inició la competencia por la candidatura presidencial. El presidente Fox y sus más cercanos colaboradores optaron, sin disimulo, por apoyar al en-

tonces secretario de Gobernación Santiago Creel, que se inscribió en Acción Nacional después de su ingreso al gobierno. Los defensores de los derechos del partido a gobernar también respondieron promoviendo a otro candidato, Felipe Calderón, en nombre de la autonomía de la organización. La selección del contendiente panista por la Presidencia de la República en 2005 se llevó a cabo de acuerdo con los estatutos. El resultado favorable a Calderón representó el triunfo del partido sobre el presidente de la República y sobre el propio presidente del partido entonces, Manuel Espino, quien era un miembro distinguido de la corriente foxista. Aun así, la competencia no provocó un desgarramiento interno irreparable, pero el conflicto entre las corrientes adversarias se mantuvo latente. La elección de Germán Martínez Cázares a la presidencia del partido en diciembre de 2007 fue un paso importante en la estrategia del presidente Calderón decidido a gobernar con Acción Nacional, porque significó el arribo de un militante comprometido con el partido, un connotado antifoxista que mantenía una relación muy cercana con quien sería el sucesor del presidente Fox. La elección tuvo implicaciones importantes para la autonomía de la organización, que se vio comprometida por el peso de la autoridad presidencial.

Felipe Calderón llegó a la Presidencia de la República en las conflictivas circunstancias que provocó un triunfo cerradísimo sobre Andrés Manuel López Obrador, quien no aceptó su derrota y anunció que impediría la toma de posesión. En estas condiciones, el firme respaldo de la militancia partidista era crucial para que el proceso institucional se desarrollara sin contratiempos. En diciembre de 2006, los panistas hicieron a un lado las diferencias internas y formaron un muro para defender a su candidato, mismo que se disolvió pasada la coyuntura. En los primeros tres años de gobierno, la fractura entre foxistas y antifoxistas reapareció, y a ella se sumó una creciente crítica contra la alianza que estableció el gobierno calderonista con la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, Elba Esther Gordillo. Igualmente divisivo fue que mantuviera la benevolente política de su antecesor hacia las televisoras. Entre las reflexiones, o recriminaciones, que provocó la derrota del verano de 2009, destacó la

acusación del senador Santiago Creel, para quien el partido no había sabido “combatir, con inteligencia, al viejo régimen [...] con el que, paradójicamente, seguimos gobernando”.⁶

Al asumir el control del partido, el presidente Calderón lo sometió a su autoridad, no de militante *primus inter pares*, sino de jefe del Poder Ejecutivo que espera la lealtad de sus correligionarios. En cierta forma, se ha reproducido justamente aquello que los panistas querían evitar: la dependencia del partido de la autoridad y los recursos del presidente de la República.

En los niveles medios y altos de la administración pública, la lealtad personal y la afinidad ideológica han cobrado precedencia frente al profesionalismo o al conocimiento. Muchos de los miembros del gabinete tienen como única credencial profesional una trayectoria de militancia. No todos los secretarios de Estado y directores de empresas descentralizadas son panistas. Sin embargo, el ingreso de una persona a un cargo público se facilita si pertenece al PAN. Desde una perspectiva estrecha, esta política debía satisfacer las expectativas de los panistas; sin embargo, a partir de un punto de vista más general, por una parte, el impacto de la partidización del gobierno tiende a empobrecer sus opciones y a favorecer intereses particulares, y por otra, también plantea riesgos de patrimonialismo y clientelismo, y propicia una visión parcial de los problemas que hay que atender.

Una relación fluida entre el presidente y su partido es una condición de estabilidad para el gobierno. Sin embargo, satisfacer esta condición plantea un dilema: la cercanía con la Presidencia de la República acarrea costos elevados para la autonomía de la organización, mientras que una relación distante, como la que privó entre el gobierno y el PAN en los años 2000-2006, le resta relevancia al partido.

La reflexión a propósito de este tema, crucial para un buen funcionamiento del sistema político, tendría que tomar en cuenta las estrategias que han puesto en práctica los presidentes de extracción panista: gobernar sin el partido, como lo hizo Fox, o con el partido, como lo ha hecho Felipe Calderón.

⁶ Citado en Núñez, art. cit., p. 5.

Cabe preguntar si acaso otro partido en el poder no enfrentaría los mismos problemas, en virtud del peso inherente a la institución presidencial. De ser así, el origen de los dilemas entre subordinación y confrontación partido-gobierno que ha vivido Acción Nacional desde 2000, no está en las personas, ni siquiera en el partido mismo, sino en un régimen político que no ha logrado asimilar la pluralización del poder.

CONCLUSIONES

Los resultados de los comicios del verano de 2009 fueron una dura lección para el PAN y para el presidente Calderón. Ciertamente, el contexto general no era favorable al gobierno. Los panistas tuvieron que admitir su responsabilidad en la derrota. Por una parte, la campaña negativa que hicieron, que se concentró en denunciar los pecados del pasado del PRI y en blandir su posible regreso como una amenaza a la democracia, tuvo un efecto contraproducente como lo prueban los resultados electorales. Por otra parte, reconocieron la debilidad de sus candidatos. La renuncia de Martínez Cázares a la presidencia del partido, al día siguiente de la elección, fue un reconocimiento del fracaso de la estrategia antipriista y del método de elección de candidatos. No obstante, la elección de un nuevo presidente del PAN no garantiza que habrán de remediarse las limitaciones del partido que contribuyeron a los malos resultados ni resuelve el tema de la relación con el presidente de la República.

La falta de claridad y de acuerdos internos sobre el tema generó tensiones entre Acción Nacional y el presidente Vicente Fox, quien trató de gobernar sin el partido. Su sucesor, Felipe Calderón, buscó una nueva fórmula consistente en una estrecha cercanía con su partido, que también resultó insatisfactoria, pues muchos atribuyeron a esa relación los malos resultados que obtuvo en la elección.

¿Cuál es el origen de las dificultades que impiden el establecimiento de una relación funcional entre el PAN y un presidente de la República panista? La respuesta a esta pregunta será difícil de encontrar en

el periodo postelectoral inmediato porque la derrota reanimó las tensiones en el interior del partido y reavivó la fractura entre foxistas y antifoxistas. La sucesión presidencial de 2012 exigiría la reconciliación interna, porque las divisiones acarrearán debilidad; no obstante, la reconciliación entre las diferentes corrientes panistas parece lejana.

La experiencia de los nueve últimos años indica que el tema no resuelto de la presidencia democrática no es exclusivo de Acción Nacional, sino que es un capítulo central de la reforma del Estado y su importancia supera las contingencias de la relación entre el presidente Calderón y su partido, porque en términos abstractos nos refiere al equilibrio de poderes, que es central en toda democracia, y debería ser visto como uno de los pilares de la consolidación democrática.

Acción Nacional, el apetito y las responsabilidades del triunfo
se terminó de imprimir en enero de 2010

en los talleres de Ediciones del Lirio, S.A. de C.V.,
Azucenas 10, Col. San Juan Xalpa, 09850 México, D.F.

Portada: Irma Eugenia Alva Valencia.

Tipografía y formación: Federico Mozo, en Redacta, S.A. de C.V.

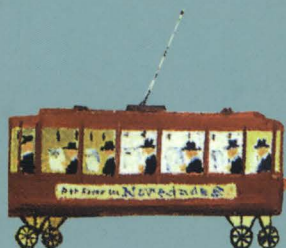
Cuidó la edición la autora.



Después de más de medio siglo en la oposición, el PAN alcanzó la presidencia de la República en el año 2000. ¿Cómo le afectó el triunfo? La colección de artículos que contiene este volumen busca responder a esta pregunta desde diferentes aspectos;

de suerte que los lectores podrán mirar a la organización que derrotó al otrora invencible PRI a la luz de la transformación de la cultura política, de las luchas en el seno de la organización o del surgimiento de un nuevo presidencialismo. Este libro es una continuación de *El Partido Acción Nacional: la larga marcha* que Soledad Loaeza publicó en 1999. Desde entonces el PAN ha conquistado numerosas curules y presidencias municipales, gubernaturas, y dos veces la presidencia de la República.

Como aquí lo analiza la autora, los objetivos, la lógica y la dinámica internas de este partido están inscritas en el proceso más amplio del cambio político. En 2009 el partido tiene más que otros la responsabilidad de consolidar la democracia en México. De ahí la importancia de entenderlo. Más aún, el tránsito del PAN de la oposición al poder refleja tanto la evolución del sistema político como las mudanzas de la sociedad. Al concluir la primera década del siglo XXI, Acción Nacional es un actor político vivo y complejo, que enfrenta todos los días desde el poder los retos del poder.



ISBN: 978-607-462-077-1



9 786074 162077